CONGRESO DE LA REPUBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
17 FEB. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 9:42 h.

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

DICTAMEN CONJUNTO

COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA

Señor Presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado el Proyecto de Ley 3941/2022-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado con estándares adecuados de idoneidad y meritocracia en la Administración Pública".

Luego de la exposición y debate en la Sesión Conjunta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 15 de febrero de 2023, se acordó por **MAYORÍA** de ambas Comisiones la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"; con la siguiente votación:

- Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, catorce (14) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Waldemar José Cerrón Rojas, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Alejandro Enrique Cavero Alva, Isabel Cortez Aguirre, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez; dos (02) votos en contra, de los señores congresistas Bernardo Jaime Quito

Sarmiento y Betssy Betzabet Chávez Chino; y tres (03) abstenciones, de los señores congresistas Álex Antonio Paredes Gonzales, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Guido Bellido Ugarte.

- Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, doce (12) votos a favor de los congresistas María del Pilar Cordero Jon Tay, Alejandro Aguinaga Recuenco, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Raúl Huamán Coronado, Auristela Ana Obando Morgan, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, Nelcy Lidia Heindinger Ballestereos, Noelia Rossvith Herrera Medina, Norma Martina Yarrow Lumbreras, José Bernardo Pazo Nunura, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Diana Carolina Gonzales Delgado; dos (02) votos en contra, de los congresistas Alfredo Pariona Sinche y Hamlet Echeverría Rodríguez; y cuatro (04) abstenciones de los congresistas: Wilson Rusbel Quispe Mamani, María Elizabeth Taipe Coronado, Germán Tacuri Valdivia y Lucinda Vasquez Vela.

En la misma sesión ambas comisiones aprobaron por unanimidad autorizar la ejecución de los acuerdos sin esperar la aprobación del acta.

I. SITUACION PROCESAL DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 3941/2022-PE ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 9 de enero de 2023. Ha sido enviado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera Comisión Dictaminadora y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda Comisión Dictaminadora el 11 de enero de 2023.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 3941/2022-PE tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de noventa (90) días calendario en materia de impulso económico para la reactivación económica y modernización de la gestión del Estado, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos a que se hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú, artículos 101, 104.

3.2 Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, Ley N° 30327.

3.3 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658.

3.4 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, Ley N° 29230.

3.5 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.

3.6 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley N° 29151.

3.7 Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, Ley N° 31335.

3.8 Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, Ley N° 27157.

3.9 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N° 30364.

3.10 Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N° 30862.

3.11 Decreto Legislativo N° 1362 que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos.

3.12 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3.13 Decreto Legislativo N° 1436 Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

3.14 Decreto Legislativo N° 1435 que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial — FIDT

3.15 Decreto Legislativo N° 1448 que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria.

3.16 Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.

3.17 Decreto Legislativo N° 1535 que regula la calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones administradas y/o recaudadas por la SUNAT, conforme a un perfil de cumplimiento, así como los efectos de dicha calificación.

3.18 Decreto Legislativo N° 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

3.19 Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.20 Decreto Legislativo N° 1211 que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas.

3.21 Decreto de Urgencia N° 021-2020 que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones.

3.22 Decreto de Urgencia N° 018-2019 que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

3.23 Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

3.24 Decreto Supremo N° 238-2019-EF que aprueba el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

3.25 Decreto Supremo N° 242-2022-EF que aprueba el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025.

3.26 Decreto Supremo Nº 081-2022-EF que aprueba Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

3.27 Decreto Supremo N° 210-2022-EF que aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

3.28 Decreto Supremo N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

3.29 Decreto Supremo N° 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.

3.30 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.31 Decreto Supremo Nº 055-99-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

3.32 Decreto Supremo N° 059-2010-MTC que aprueba la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

IV. OPINIONES SOLICITADAS

4.1 Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.)

Mediante Oficio 1158-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de enero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.2 Contraloría General de la República (CGR)

Mediante Oficio 704-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1163-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.3 Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Mediante Oficio 1127-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.4 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Mediante Oficio 1129-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.5 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Mediante Oficio 1154-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.6 Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Mediante Oficio 1126-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Sociedad Nacional de Industrias sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.7 Asociación de Exportadores (ADEX)

Mediante Oficio 1128-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Exportadores sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.8 Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Mediante Oficio 1153-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Cámara de Comercio de Lima sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.9 Sociedad Peruana de PYMES del Perú (PYMES)

Mediante Oficio 1169-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Sociedad Peruana de PYMES del Perú sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.10 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Mediante Oficio 714-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1164-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de enero de 2023, se solicitó opinión al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.11 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)

Mediante Oficio 717-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1165-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.12 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN)

Mediante Oficio 715-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1166-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de enero de 2023, se solicitó opinión al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.13 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)

Mediante Oficio 718-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1167-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de enero de 2023, se solicitó opinión al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.14 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)

Mediante Oficio 3941/2022-PE de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1168-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de enero de 2023, se solicitó opinión al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.15 Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

Mediante Oficio 705-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

Mediante Oficio 1161-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.16 Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)

Mediante Oficio 1162-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Municipalidades del Perú sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.17 Municipalidad Provincial de Arequipa

Mediante Oficio 706-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.18 Municipalidad Provincial de Huancayo

Mediante Oficio 707-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Municipalidad Provincial de Huancayo sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.19 Municipalidad Provincial de Lambayeque

Mediante Oficio 708-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Municipalidad Provincial de Lambayeque sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.20 Municipalidad Provincial de Piura

Mediante Oficio 709-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Municipalidad Provincial de Piura sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

4.21 Municipalidad Provincial de Trujillo

Mediante Oficio 711-2022-2023/CDRGLMGE-CR de fecha 24 de enero de 2023, se solicitó opinión a la Municipalidad Provincial de Trujillo sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE.

V. OPINIONES RECIBIDAS

5.1 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Mediante Oficio Nº 188-2023-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Memorando N° 0036 -2023-EF/63.06 y Anexo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y el Memorando N° 010-2023-EF/60.05 y Anexo de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante los cuales se adjunta el Informe Nº 0005-2023-EF/52.06 elaborado por la Dirección General del Tesoro Público y el Informe Nº 0009 -2023-EF/61.01 elaborado por la Dirección General Política de Ingresos Públicos.

El Informe Nº 0005-2023-EF/52.06 señala que la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias, establece la distribución de los recursos provenientes de nuevos procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional.

De conformidad con el literal b) de dicha disposición, el 30% de los recursos provenientes de nuevos procesos de privatización y concesiones realizados por el Gobierno Nacional, se destinaban al Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y eran transferidos por PROINVERSIÓN y el Gobierno Regional del Cusco, a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

Mediante la Ley N° 31369, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos Regionales a través del FONCOR, dispone, entre otros, que:

i. El FONCOR se constituye con el rendimiento del 2% de las operaciones afectas al IGV; y,
ii. Deroga el literal b) de la antes citada Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 27783, sin señalar el destino del mencionado 30% de los recursos obtenidos de los procesos de privatización y concesiones.

Asimismo, con posterioridad a la referida derogatoria del literal b) de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 27783, PROINVERSIÓN y el Gobierno Regional del Cusco han continuado transfiriendo los indicados fondos a la CUT, en concordancia con lo establecido por el Art. 19 del Decreto Legislativo N°

1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, pues en la CUT se comprende a todos los fondos públicos.

En ese sentido, dado que no existe un marco legal que disponga sobre el uso o destino de dichos recursos, a la fecha se ha acumulado en la CUT un total de S/ 19 868 770,75, que deberían poder ser asignados al financiamiento del gasto público.

En consecuencia, a efectos de regular el vacío legal generado por la derogatoria antes señalada, se propone facultar al Poder Ejecutivo a precisar el destino de los recursos provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional que anteriormente eran parte del FONCOR.

El Informe Nº 0009-2023-EF/61.01 señala por su parte lo siguiente:

Consideraciones respecto a la Ley Nº 31335

2.1 Mediante la Ley Nº 313351, Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias (en adelante, la Ley), se dictaron las normas que regulan a las cooperativas agrarias, con el objeto de desarrollar el marco normativo que permita el fortalecimiento organizacional, fomento y promoción de las cooperativas agrarias de usuarios y de sus organismos de integración, dotándolas a su vez de un régimen tributario que responda a su naturaleza y al tipo de actos que desarrollan con sus socios2.

2.2 El Título II de la Ley establece el Régimen Tributario de las cooperativas agrarias, regulando principalmente el Impuesto a la Renta para la cooperativa agraria de usuarios, el Impuesto General a las Ventas para la cooperativa agraria de usuarios, la responsabilidad de la cooperativa agraria de usuarios por el cumplimiento de obligaciones tributarias generadas por actos cooperativos con sus socios, otras disposiciones para las cooperativas agrarias de usuarios, el régimen tributario de los socios productores agrarios; así como las obligaciones formales a cargo de las cooperativas agrarias de usuarios y a cargo de los socios.

2.3 Conforme con lo dispuesto en la Norma XIV del Título Preliminar del Código Tributario3 el Poder Ejecutivo al proponer, promulgar y reglamentar las leyes tributarias lo hará exclusivamente por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4 Bajo dicho marco normativo, este ministerio, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), a razón del artículo 83 del Código Tributario, que dispone que los órganos de la Administración Tributaria tendrán a su cargo la función de preparar los proyectos de reglamentos de las leyes tributarias de su

competencia, evaluó la propuesta de reglamentación de la Ley en lo relativo a materia tributaria.

2.5 *En lo que respecta a las disposiciones de la Ley vinculadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, de la evaluación realizada junto con la SUNAT se han detectado imprecisiones, inconsistencias y vacíos en la Ley que impiden efectuar su reglamentación. Dichos aspectos involucran elementos sustanciales de la determinación, declaración y pago del IGV, sistema de detracciones, uso de medios de pago, entre otros.*

2.6 *Al respecto, este ministerio ha venido sosteniendo reuniones con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego4 y la SUNAT a fin de evaluar y coordinar las medidas que resulten necesarias para que se logren los objetivos propuestos con la dación de la Ley, concordando que las deficiencias y vacíos detectados en la Ley que impiden su reglamentación corresponden ser subsanados a través de una norma con rango de ley.*

2.7 *En ese sentido, a través del Proyecto de Ley N° 3941/2022-PE, el Poder Ejecutivo ha solicitado delegación de facultades normativas para modificar la Ley N° 31335 e incorporar las disposiciones que resulten necesarias para regular el tratamiento del IGV y las obligaciones tributarias formales a cargo de las cooperativas agrarias, para lo cual en el marco de lo regulado por el Código Tributario y respetando la técnica del IGV, dichas modificaciones se realizarán sin afectar la naturaleza de las cooperativas y los actos que desarrollan con sus socios mencionados en la Ley.*

De la regulación de los aspectos vinculados con el IGV y obligaciones formales que impiden la reglamentación de la Ley

2.8 *En lo que respecta al IGV y las obligaciones tributarias formales, las imprecisiones, inconsistencias y vacíos detectadas en la Ley que impiden proponer su reglamentación, se circunscriben principalmente a lo siguiente:*

- ***Del Impuesto General a las Ventas***

La Ley N° 31335 no modifica el contribuyente ni la determinación del IGV, por lo tanto, la cooperativa no es contribuyente del IGV ni sustituye al socio como contribuyente de este impuesto; así cuando la cooperativa actúe en representación de una pluralidad de socios habrá tantas operaciones como socios participen, los cuales serán los vendedores y compradores.

Asimismo, siendo que la Ley del IGV prevé una determinación y una declaración mensual por cada contribuyente por todas las operaciones que realice y considerando el crédito fiscal y saldo a favor del exportador (SFE) de las adquisiciones que efectúe, la cooperativa tendrá que determinar el

impuesto y presentar tantas declaraciones del IGV como socios estuviere representando.

i. Declaración y pago del IGV (artículo 33 de la Ley)

No es claro el rol de la cooperativa respecto de la declaración y pago del IGV que grava las operaciones que realiza en representación de sus socios, cuando estos también realizan operaciones que no califican como acto cooperativo. ¿Debe realizar dos declaraciones por cada socio o solo una? Ambos supuestos generan complejidades que requieren precisiones normativas para no incumplir el artículo 33 que atribuye responsabilidad a las cooperativas por el pago del IGV que corresponda a sus socios.

No se ha tomado en cuenta que el IGV a pagar se determina mensualmente; por lo que podría darse una determinación mensual de la cooperativa y a su vez una por cada socio. No resulta claro que la opción sea una determinación consolidada de las operaciones de todos los socios. Y un mismo contribuyente puede tener operaciones de acto cooperativo y otras que no se enmarquen en tal concepto, ¿cómo se determina en estos casos? y ¿en aquellos casos que el socio sea socio de más de una cooperativa?

ii. Utilización del crédito fiscal y saldo a favor (artículo 33 de la Ley)

De acuerdo a la regulación establecida en el artículo 33 de la Ley, se presentan problemas para la aplicación del crédito fiscal originado en adquisiciones realizadas por la cooperativa agraria en representación de sus socios enmarcadas en actos cooperativos; ello considerando que los socios mantienen su condición de contribuyentes del IGV por las operaciones realizadas, por lo que son ellos quienes ostentan derecho a usar crédito fiscal.

Asimismo, respecto al crédito fiscal correspondiente a las adquisiciones de la cooperativa, ¿se va a considerar de forma separada por cada socio o se hará alguna consolidación? Las normas del IGV no contemplan reglas de consolidación.

iii. Responsabilidad de la cooperativa por el IGV que grava las operaciones realizadas en representación de sus socios (artículo 33 de la Ley)

No es claro el tipo de responsabilidad que la Ley atribuye a la cooperativa agraria, ni respecto de qué socios aplica, pues puede tratarse de socios que no realicen actos cooperativos o que dejan de realizar actividad agraria.

iv. Devolución del IGV por crédito fiscal y saldo a favor del exportador (SFE) (artículos 34 y 36 de la Ley)

La Ley no establece el orden de prelación de estos procedimientos cuando un mismo socio tenga en un periodo IGV trasladado en

adquisiciones no deducible como crédito fiscal y en uno posterior SFE. Tampoco ha establecido obligaciones de reembolso de la cooperativa a los socios, ni restringido su aplicación respecto de socios productores agrarios, considerando que la cooperativa puede realizar adquisiciones de cualquier tipo de socio (no agrario, por ejemplo). Tampoco es claro cuáles son las operaciones respecto de las cuales opera la devolución.

v. ***Sistema de detracciones y secreto bancario (artículo 35 de la Ley)***
No es claro si en virtud del mandato con representación la cooperativa puede acceder y manejar las cuentas de detracciones de sus socios. Ello no es compatible con el secreto bancario, que impide que los bancos proporcionen a terceros información sobre las cuentas bancarias.

vi. ***Retenciones, percepciones y detracciones (artículo 35 de la Ley)***
Se entendería que lo regulado en el artículo 35 de la Ley se refiere a las percepciones, retenciones y detracciones que se efectúen respecto de las operaciones que la cooperativa agraria realiza en representación de sus socios (actos cooperativos). En ese sentido, el uso y operatividad de tales conceptos se rigen por las normas generales que regulan las percepciones, retenciones y detracciones.

En ese contexto surgen, entre otras, las siguientes interrogantes de cómo se debe proceder cuando se efectúen las mismas: ¿debe identificarse al momento de efectuar la retención o percepción al socio por el cual se realizan estas precisando el monto de la retención o percepción que le corresponde? Si no hay tal identificación y precisión ¿cómo se determina lo que corresponde a cada socio? En el caso de la detracción ¿el monto detraído irá a la cuenta bancaria de la cooperativa?, ¿cómo se utiliza para el pago de los conceptos a que se refiere el artículo 2 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940? ¿qué ocurre si el socio tiene conceptos distintos por pagar a los que se hubieren generado por las operaciones que realiza a través de su cooperativa agraria?

➢ ***Aspectos relativos a obligaciones tributarias***

vii. Excepción de la obligación de inscribirse en el RUC
Según el artículo 44 de la Ley, los socios de la cooperativa agraria están exceptuados de inscribirse en el RUC cuando no generen impuesto a la renta e IGV por pagar. La Ley solo ha establecido lo que debe entenderse por "socios que no generan impuesto a la renta por pagar", pero no ha señalado nada respecto a que debe entenderse por "socios que no generen IGV por pagar".

viii. Emisión de comprobantes de pago por las compras que realice la cooperativa agraria en nombre de sus socios -Uso del Documento de Acto Cooperativo (DAC)- para la atribución de costo o gasto

Los proveedores de la cooperativa agraria por las compras que realice ésta en nombre de sus socios ejerciendo su mandato con representación, deberán emitir un Comprobantes de pago (CdP) identificando a los socios, pues estos son los reales adquirentes, o en todo caso emitir tantos CdP como socios hayan participado en la operación. En ese sentido cual sería el objeto de la emisión del DAC para la atribución de costos y gastos, a que se refiere el numeral 2 del artículo 28 de la Ley.

ix. Excepción de la obligación de llevar libros y registros vinculados a asuntos tributarios

Teniendo en cuenta que la cooperativa agraria es un ente trasparente, pues actúa en representación de sus socios, las operaciones que ésta realice con los clientes, en realidad es como si la estuviera realizando el socio y el cliente, operación que se encontrará gravada con el IGV, salvo que exista una exoneración o inafectación para la operación que realizan. En ese sentido no queda claro a que supuesto se estaría refiriendo el inciso a) del párrafo 44.2 del artículo 44 de la Ley, que exceptúa a los socios de llevar libros y registros cuando se encuentren inafectos de IGV. Además de ello la Ley no ha contemplado dónde se anotarán las operaciones realizadas por los socios por las operaciones que no se encuentren inafectas. Recuérdese que para efectos de determinar el IGV la normativa del impuesto en lo que respecta al crédito fiscal establece como requisito formal para su ejercicio la anotación de los CdP en el Registro de Compras. La Ley no establece que la cooperativa deba llevar el registro de cada socio.

x. Uso de medios de pago

La Ley no define cómo identificar a los socios a quienes corresponde la compra realizada con medio de pago por la cooperativa ni cómo determinar qué socio habría cumplido con la obligación de bancarizar.

xi. Factoring

La Ley no define quién debe brindar la conformidad a la factura, si es el socio o la cooperativa. Dado que la regulación de la conformidad de la factura está en una norma con rango de ley, no queda claro si este tema puede ser regulado en una norma reglamentaria.

xii. De la restitución de derechos arancelarios y del saldo a favor del exportador

El artículo 34 de la Ley también establece que la cooperativa agraria tiene derecho a solicitar la devolución del saldo a favor del exportador y de la restitución simplificada de los derechos arancelarios, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. De una lectura literal del citado artículo pareciera que lo que se estaría permitiendo es que la

cooperativa agraria utilice a su favor los montos devueltos por saldo a favor del exportador y restitución simplificada de derechos arancelarios de los socios. Sin embargo, la Ley no ha modificado la titularidad sobre el monto devuelto o restituido, por lo que se debería entender que la intención del legislador es evitar que los socios realicen el trámite de devolución o restitución, siendo que dicho trámite será realizado por la cooperativa agraria en nombre de los socios, lo cual debería generar una obligación de reembolso de aquella en favor de estos, no obstante, la Ley no contempla reglas para dicho reembolso.

xiii. Prima fairtrade, bonificación o premio

Sobre lo regulado en el artículo 39 de la Ley se plantean, entre otras, las siguientes interrogantes: i) ¿Qué es lo que la asamblea general de la cooperativa agraria debe acordar y aprobar?, ii) ¿De quién son los ingresos que se perciben por este concepto: de la cooperativa agraria o del fondo?

De la modificación a la definición del acto cooperativo

2.9 De conformidad con la definición del acto cooperativo contemplado en el artículo 4 de la Ley, son aquellos realizados entre las cooperativas agrarias de usuarios y sus socios, en cumplimiento de su objeto social, cual es, brindar servicios relacionados con la actividad agrícola y/o forestal y/o ganadera que sus socios realizan.

2.10 Una de las características del acto cooperativo es que es un mandato con representación (inciso c) del artículo 4 de la Ley), esto es, que las cooperativas actúan en representación de sus socios. Por lo que, no puede considerarse incluidos los actos cooperativos entre las cooperativas agrarias y los terceros con los cuales estas se relacionan cuando actúan en representación de sus socios.

2.11 Si bien en virtud del segundo párrafo del artículo 6 de la Ley puede interpretarse que las centrales cooperativas podrían realizar actos cooperativos en relación a sus socios que son las cooperativas, ello solo sería aplicable en la medida que los reales vendedores o compradores sean las cooperativas de segundo grado o las cooperativas en mención, más no así en aquellos casos en que lo sean los socios de las cooperativas, pues no hay una relación directa de mandato con representación entre la central de cooperativas, de grado superior o de segundo grado, y los socios de la cooperativa que a su vez es socia de las centrales cooperativas.

Según lo informado por el MIDAGRI, las cooperativas agrarias o comunales y las cooperativas de segundo grado no son las reales vendedoras o compradoras, pues lo que se vende o compra es de cuenta de los socios. No cabe entender que existen actos cooperativos entre centrales cooperativas de segundo grado y las cooperativas

agrarias o comunales; o, entre las centrales cooperativas de grado superior y las cooperativas de segundo grado; por lo que, no corresponde considerar a las centrales o centrales cooperativas como sujetos del tratamiento tributario de la Ley.

2.12 Asimismo, si bien el artículo 58 de la Ley señala que las centrales cooperativas se constituyen para realizar servicios de las cooperativas que se integren, de los socios de estas y/o del publico realizando diversas actividades. Esta regulación en mención no habilita extender los efectos del acto cooperativo los cuales como se ha señalado se encuentran regulados expresamente en la Ley y el artículo 1 de la Ley 29683, disponiéndose que los actos cooperativos se definen como los que se realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en cumplimiento de su objeto social, siendo estos actos propios de su mandato con representación, sin fines de lucro.

2.13 En efecto, el acto cooperativo implica una relación directa o inmediata entre los sujetos entre quienes se da. No una relación indirecta o mediata. Por lo que, los socios de las cooperativas que son socias de las centrales cooperativas vendrían a ser terceros y no hay acto cooperativo con terceros, tal como está redactada la Ley.

2.14 Lo anterior resulta relevante pues, el artículo 29 de la Ley prevé que los ingresos netos obtenidos por la cooperativa agraria de usuarios, derivados de la realización de actos cooperativos, están inafectos del impuesto a la renta; por lo que, el admitir que las centrales cooperativas también realizan actos cooperativos, permitiría que, a la luz de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley, a tales centrales cooperativas -de grado superior o de segundo grado-, les alcance la inafectación en mención; lo cual va en contra de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que establece que en vía de interpretación no puede crearse ni concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley.

2.15 Por todo lo expuesto, es que se plantea modificar la definición de los actos cooperativos, a fin de contemplar los actos que realizan entre centrales cooperativas de segundo grado y las cooperativas agrarias o comunales; o, entre las centrales cooperativas de grado superior y las cooperativas de segundo grado.

III. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones antes señaladas, en lo que respecta a los aspectos relativos al inciso g) del numeral 2.1.3 del artículo 2 del Proyecto de Ley N° 3941/2022-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado con

estándares adecuados de idoneidad y meritocracia en la administración pública, se remite la información solicitada.

5.2 Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Mediante Carta Nº 24-2023/GG/COMEXPERU, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú considera, con relación al Proyecto de Ley Nº 3941/2022-PE, adecuada la aprobación de la delegación de facultades propuesta, dada la urgente necesidad de disponer medidas que permitan la reactivación económica del país y el fortalecimiento de la gestión pública, sobre todo a nivel de autoridades subnacionales.

5.3 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Mediante Oficio Nº 000013-2023-PRE/INDECOPI, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual adjunta el Informe Nº 000095-2023- OAJ/INDECOPI emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual considera que, con respecto a las medidas en materia de impulso económico para la reactivación económica, en las normas que se vayan a emitir en ejercicio de la delegación de facultades, se consideren las competencias del INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, para declarar como barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad aquellas medidas adoptadas por las entidades de la Administración Pública que pudieran obstaculizar el desarrollo de los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de licencias y autorizaciones a las que se refiere dicho punto del proyecto[1].

Asimismo, respecto a las medidas en materia de modernización de la gestión del Estado,

> *(...) si bien las acciones que realiza el INDECOPI tienen un impacto directo en los intereses de los ciudadanos, empresas y del Estado en su conjunto, debemos tener en cuenta que nuestra actual estructura orgánica fue aprobada con el propósito de adecuar la misma a los compromisos asumidos por el Estado peruano mediante el TLC con los Estados Unidos de América y, de este modo, facilitar el cumplimiento de aquellos relacionados con las materias de nuestra competencia. En este sentido, somos de la opinión que, en el caso del INDECOPI, no es necesaria la aprobación de normas sobre esta materia, siendo necesario, en todo caso, un mayor estudio y discusión, a fin de asegurar la marcha normal de la entidad y garantizar el cumplimiento de nuestro mandato normativo.*

[1] A modo de ejemplo, ver el artículo 2, numeral 2.1, acápite 2.1.1, literal a) del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, así como el acápite 2.1.2, literal a) esta misma propuesta legislativa.

5.4 Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Mediante Carta Nº P/ 024.02.2023/GL, la Cámara de Comercio de Lima considera que, si bien es el Congreso el escenario recomendable para la elaboración y el debate público que corresponde a las leyes que regulan ámbitos tan importantes como los solicitados mediante el Proyecto de Ley 3941/2022-PE,

> *también es cierto que, en determinadas circunstancias, por el grado de tecnicismo y especialidad requerido, se justifica la delegación de las facultades legislativas, a favor del Poder Ejecutivo.*
>
> *No obstante, la delegación de facultades legislativas, no puede significar el otorgamiento de carta libre para legislar sin la participación y opinión de los diferentes sectores de la sociedad involucrados en los temas materia de regulación. En ese sentido, sugerimos que la propia Ley de delegación especifique de manera expresa que, para efectos de la elaboración y publicación de las normas sobre las cuales se les ha autorizado legislar, el Ejecutivo debe cumplir con la obligación de aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex — Ante, de acuerdo con lo dispuesto mediante el Decreto Legislativo N°1310, modificado por el Decreto Legislativo N°1448, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo N°063 2021-PCM, que aprueba el reglamento que desarrolla el Marco institucional que rige el Procesos de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.*

En consecuencia, la Cámara de Comercio de Lima expresa su opinión favorable respecto del Proyecto de Ley 3941-2022-PE.

VI. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

6.1 Marco Normativo

Constitución Política

Artículo 101. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
(...)
4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.

No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

Artículo 125. Son atribuciones del Consejo de Ministros: (...)

2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.

Reglamento del Congreso

Función del Control Político
Artículo 5. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, **el ejercicio de la delegación de facultades legislativas**, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Requisitos especiales
Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales:
(...)
d) Las proposiciones de ley autoritativa de legislación delegada deben precisar la materia específica de la delegación y el plazo de la autorización. No puede proponerse ley autoritativa de legislación delegada en materias relativas a reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la Ley de Presupuesto ni de la Cuenta General de la República.

Procedimiento de control sobre la legislación delegada

Artículo 90. El Congreso ejerce control sobre los Decretos Legislativos que expide el Presidente de la República en uso de las facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de las facultades legislativas, dentro de los tres días posteriores a su publicación.

b) Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto legislativo y a más tardar el primer día útil siguiente, el Presidente del Congreso envía el expediente a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso o a la que señale la ley autoritativa, para su estudio.

c) La Comisión informante presenta dictamen, obligatoriamente, en un plazo no mayor de 10 días. En el caso que el o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros.

6.2 Antecedentes históricos

<u>De los orígenes de la delegación de la potestad de legislar[2]</u>

John Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil escrito en 1689, consideraba que el poder legislativo era un poder delegado y, por esta razón, afirmaba que el Cuerpo Legislador no podría delegar en otra autoridad o persona la potestad que le ha sido delegada, aplicando así el principio *Delegata potestas non potest delegari*[3]. Además, Locke comentaba que "cuando el pueblo ha dicho *nos someteremos a las reglas, y seremos gobernados por las leyes que hagan estos hombres de esta manera, nadie podrá ya decir que serán otros los hombres que hagan leyes y tampoco estará el pueblo obligado por ley alguna, excepto por aquellas que hayan sido dictadas por quienes tienen su autorización para legislar*"[4].

---

[2] Tomado del Dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 58312021-pe, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales aprobado en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución el 15 de diciembre de 2021. p. 55.

[3] Quintero, Carlos, El concepto de Delegación en cuanto a la función legislativa. Anuario de Derecho. Año N°1, 156, p. 15-21.

[4] Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid: Alianza Editorial, 2006. p. 141.

Ahora bien, durante el siglo XIX se vio el crecimiento del régimen parlamentarista en Europa y, con ello, el poder para la elaboración de leyes se mantuvo en las Asambleas Legislativas o Parlamentos; no obstante, el monopolio legiferante del Parlamento comenzó a diluirse conforme se concedían autorizaciones a los gobiernos para dictar normas con rango de ley en momentos de crisis política o económica y en tiempos de receso de las Cámaras.

Estas autorizaciones dieron lugar a lo que hoy se conoce como legislación delegada; eso es, aquella que el Ejecutivo realiza por habilitación del Legislativo. De manera paralela, a inicios del siglo XX, se le otorgó la potestad al Ejecutivo para legislar de manera extraordinaria con los decretos transitorios de modificación de leyes en la Constitución de Austria de 1920 y los decretos-leyes en la Constitución de la Segunda República Española de 1931[5].

Ambas instituciones, según lo refiere el constitucionalista Pedro Planas, fueron establecidas para que los gobiernos emitan medidas transitorias o provisionales en situaciones con características excepcionales, con límites normativos y con la obligatoriedad de ser convalidadas por el Legislativo[6].

La legislación delegada en el constitucionalismo contemporáneo[7]

Debido a la evolución experimentada en la teoría constitucional, se acepta que el Parlamento comparta con el Ejecutivo la atribución de dar leyes. Casi todas las constituciones modernas contienen dispositivos que señalan los requisitos, modos, plazos, materias y procedimientos que permiten al Parlamento delegar temporalmente su atribución de dar la ley. El Parlamento es, por antonomasia, el órgano que expide leyes; su origen histórico y su organización institucional están ligados a esta actividad: ejerce la iniciativa sobre las materias a legislar, las debate y aprueba. No obstante, un dato de la realidad – habida cuenta de la exigencia de especificidad, urgencia y naturaleza temática – es la necesidad de delegar esta función en el Ejecutivo. No obstante, la delegación deberá siempre otorgarse con estricta sujeción a los requisitos establecidos en la Constitución[8].

---

[5] Tomado del Dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 58312021-pe, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales aprobado en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución el 15 de diciembre de 2021. p. 57.

[6] Planas, Pedro. Decreto de urgencia y "medidas extraordinarias"; Notas para una tipificación. IUS ET VERITAS, Año 4 N° 7, 1999. p. 133-158.

[7] Tomado del Dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 58312021-pe, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales aprobado en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución el 15 de diciembre de 2021. p. 59.

[8] Bernales, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Editora RAO. Quinta Edición. Lima, 1999. p. 496-504.

La legislación delegada en el constitucionalismo peruano[9]

a. Constitución de 1979

El artículo 104 de la Constitución de 1993 es copia casi textual del primer párrafo del artículo 188 de la Constitución de 1979. Anteriormente a las dos últimas constituciones, el constitucionalismo peruano casi no se ocupó del tema, aun cuando la Ley Fundamental de 1933 en sus artículos 40 y 549 permitía al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para abaratar las subsistencias y limitar el comercio y la industria en caso de emergencias, lo que casi no se puso en práctica.

Cabe indicar en este punto que la Constitución de 1979 no señalaba limitaciones específicas respecto a la delegación, permitiendo, incluso, la aprobación de leyes orgánicas mediante ese mecanismo, siempre y cuando la votación autoritativa cumpla con el requisito de la mayoría legal.

b. Constitución de 1993

En ese orden de ideas, podemos afirmar que la Constitución de 1993 ubica mejor el tema, al establecer – precisamente en el artículo 104 – que no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Estas son, a tenor del artículo 101, numeral 4 de la Carta Política; las Leyes de reforma constitucional, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, la Ley de Presupuesto y la Ley de Cuenta General de la República.

Sobre el particular, Francisco Eguiguren formula algunos comentarios con respecto a la función legislativa en el modelo constitucional peruano en el marco de la Carta de 1979 pero que por su vigencia merecen ser tomados en consideración[10].

Así, el constitucionalista considera que a partir de la práctica legislativa del gobierno y del Parlamento se percibe, en primer término, un claro dominio del Ejecutivo en cuanto elaboración de leyes, lo que marca una notoria debilidad parlamentaria, agravado el hecho por la falta de delimitación del ámbito material reservado a la ley y a la competencia parlamentaria, así como por el tratamiento asistémico de la institución delegativa de facultades[11]. Por esta razón, el profesor Eguiguren se inclina por lo que denomina una *"redefinición global de la función legislativa en el*

[9] Tomado del Dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 58312021-pe, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales aprobado en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución el 15 de diciembre de 2021. p. 62.

[10] Eguiguren, Francisco. Funciones Legislativas del Poder Ejecutivo. En: La Constitución peruana de 1979 y sus problemas de aplicación. Cultural Cuzco. Lima, 1987.

[11] Eguiguren, Francisco. El Modelo Constitucional y sus Problemas de Aplicación. En: Los retos de una Democracia Insuficiente. Comisión Andina de Juristas. Lima, 1999. p. 170-174.

sentido de formular una delimitación constitucional expresa acerca del reparto y la competencia legislativa tanto del Parlamento como del Ejecutivo, tal como lo señala – por ejemplo – el artículo 34 de la Constitución francesa de 1958". Ahora bien, como lo apunta el profesor Bernales, la Constitución de 1993 solucionó en parte el problema, aunque la naturaleza material de la delegación de facultades sigue siendo confusa (Bernales, Enrique: 1999).

6.3 Características especiales de la legislación delegada[12]

Por lo anteriormente expuesto, podemos señalar que la delegación de facultades legislativas en nuestro ordenamiento constitucional, siguiendo lo expuesto por el profesor Enrique Bernales en su libro "Parlamento y Democracia"[13], presenta las siguientes características especiales:

a) Es otorgada por el Congreso vía una ley autoritativa.
b) La ley precisa materia y plazo.
c) Es una figura que contiene un carácter excepcional.
d) Siendo una vía excepcional, la delegación debe otorgarse a solicitud expresa del Ejecutivo y no de forma voluntaria y espontánea por parte del Legislativo.
e) Es una institución que debe entrar en funcionamiento cuando así lo requieran las circunstancias, ya que su propia naturaleza jurídica rechaza el uso abusivo de esta delegación.
f) Un decreto legislativo no es una fuente para otros decretos legislativos. Promulgado un decreto legislativo, el Ejecutivo no puede ni siquiera derogarlo, porque desde el momento de su promulgación y publicación es el Parlamento el que reasume su competencia para mantenerlo, modificarlo o derogarlo.
g) Es elemento consustancial a la delegación de facultades la dación de cuenta. A través de ella, el Ejecutivo queda obligado a un uso prudente de la delegación que ha recibido y, a su vez, el Parlamento retiene la facultad de evaluar y controlar el cumplimiento de la delegación que ha concedido, demandando la responsabilidad política del Ejecutivo por cualquier abuso o exceso.

6.4 Procedimiento parlamentario referido a la legislación delegada[14]

---

[12] Tomado del Dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 58312021-pe, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales aprobado en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución el 15 de diciembre de 2021. p. 63.

[13] Bernales, Enrique. Parlamento y Democracia. Instituto Constitución y Sociedad. Editorial Hipatia S.A. Lima, 1990. p. 139-140

[14] Tomado del Dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 58312021-pe, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir

a. Debate y aprobación parlamentaria

El Poder Ejecutivo formula el pedido, el Legislativo debate la aprobación de dicho requerimiento, desde la lógica que la facultad otorgada por el Legislativo es un derecho que le asiste y que el Ejecutivo dispondrá de una facultad momentánea y específica, bajo condición de excepcional (Bermúdez, Manuel: 2013).

b. Materia especifica

Al respecto, es preciso mencionar que el artículo 104° de la Constitución Política establece lo siguiente:

> *Artículo 104°. - El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decreto legislativos,* ***sobre materia específica*** *y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.*
>
> *No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.*
>
> *El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.*

De lo expuesto, se tiene que uno de los requisitos que deben cumplirse para que se apruebe la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo es que esta verse sobre "materia específica".

Debido a que no existe una definición normativa a nivel constitucional que defina con certeza el grado de precisión que debe exigirse para determinar si nos encontramos ante un pedido u otorgamiento de facultades legislativas "específico" o, por el contrario, genérico o indeterminado, el grado de precisión que se deba requerir o establecer a nivel del Congreso de la República al evaluar un pedido de facultades legislativas o de otorgarla se encuentra dentro de un amplio margen de discrecionalidad de este Poder del Estado.

---

al cierre de brechas sociales aprobado en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución el 15 de diciembre de 2021. p. 67-84.

c. Plazo determinado

El artículo 104° de la Constitución Política exige que la ley autoritativa establezca de manera expresa un plazo en el cual el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos, sin embargo, no considera parámetros, esto es, no prevé un mínimo ni un máximo de días, calendario o hábiles, por el cual debe otorgarse la delegación de facultades, quedando dicho ámbito, al igual como ocurre con el requisito de la "materia específica", en el ámbito de discrecionalidad del Congreso de la República.

Al respecto, dado que la atribución de crear leyes corresponde al Congreso de la República (artículo 102°, numeral 1, de la Constitución Política del Perú), en atención a los principios de soberanía y de representatividad, el establecimiento del plazo determinado en el cual se podrán ejercer dichas facultades delegadas, debe atender a dos elementos: a) la urgencia en la regulación normativa de la materia; y b) el carácter eminentemente técnico de la materia delegada.

Con relación al primero de los elementos mencionados, este se sustenta en el hecho de que, si no reviste urgencia efectuar la modificación o establecimiento de un nuevo régimen normativo, no resultaría necesario siquiera otorgar facultades al Poder Ejecutivo, pues la iniciativa legislativa podría tramitarse de manera convencional a través del Congreso de la República. Por el contrario, si se trata de una materia urgente, no se justifica que se otorgue un plazo amplio para que el Poder Ejecutivo haga ejercicio de las facultades delegadas y, vía decreto legislativo, regule la situación o problema que urge afrontar.

Por su parte, con relación al segundo de los elementos, esto se justifica debido al conocimiento especializado y técnico que se puede requerir para la regulación de materias específicas, para lo cual, son los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo quienes poseen los conocimientos y la información necesaria para proponer y adoptar los cambios normativos que sean necesarios en sus respectivos sectores.

d. Materias Indelegables

Si bien el artículo 104 no desarrolla de manera expresa y taxativa las materias que no son pasibles de ser delegadas al Poder Ejecutivo, establece que no pueden delegarse materias que, a su vez, no resultan pasibles de delegación a la Comisión Permanente, por lo que corresponde remitirse a lo dispuesto en el artículo 101° de la Constitución Política del Perú, que establece lo siguiente:

> *Artículo 101°. - (...). No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados*

internacionales, leyes orgánicas, Leyes de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

e. La facultad legislativa exclusiva

Finalmente, estando a que la facultad legislativa está relacionada con una situación excepcional, es importante reiterar que el Parlamento no cede sus funciones naturales representativas, garantizándose para sí misma un límite constitucional, el cual es desarrollado por la Constitución en el segundo párrafo del artículo 104 cuando establece que "no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente".

De ese modo, y por ser facultad exclusiva del Parlamento, los actos legislativos del Ejecutivo son sometidos a evaluación constitucional, la cual incluye un análisis inclusive político de pertinencia, respecto de los objetivos de su promulgación[15].

6.5 Sobre la viabilidad de las materias solicitadas en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE

Artículo 2.- Materias de la delegación de facultades legislativas

En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes materias:

2.1 En materia de impulso económico para la reactivación económica:

2.1.1 En materia de inversión pública:

a) Establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación o aprobación de procedimientos vinculados con licencias, autorizaciones, en especial en temas de habilitación urbana y certificación ambiental, así como autorizar la ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM.

El literal a) del ítem 2.1.1 del numeral 2.1 del Proyecto de Ley 3941/2022-PE se ha dividido en tres acápites:

a.1) Obtención de licencias de habilitación urbana y de edificación.

[15] Montero, José. El control parlamentario. Tecnos, Madrid, 1984. p. 109.

La experiencia de inversión en el país ha permitido ir identificando puntos críticos durante los procesos de formulación, evaluación y ejecución de los proyectos de manera que puedan plantearse propuestas de mejora sobre las materias identificadas. Es así que, uno de las principales problemas es el retraso en el inicio de la ejecución de obras, ello se encuentra relacionado con la demora en la obtención de la licencia de habilitación urbana o de edificación, establecida en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones para el inicio de obras, debido a que las entidades públicas a cargo de su emisión, frecuentemente exceden los plazos legales de los procedimientos y/o trámites previstos generando trabas en el inicio de la ejecución física de las inversiones[16].

Desde el 2019 el Poder Ejecutivo viene planteando normas que buscan agilizar la obtención de licencia de habilitación urbana, edificación, conformidad de obra y declaratoria de fábrica. Es así que, en noviembre del 2019, el Decreto de Urgencia 018 – 2019 exceptuó de licencias de habilitación urbana o de edificación a los proyectos PNIC y sus complementarios. En la misma línea, el Decreto de Urgencia 021 – 2020 exceptuó de las mismas licencias a los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP).

Durante el 2020, en el marco del COVID-19 y la consecuente necesidad de acelerar la inversión, el Decreto Legislativo 1486 facultó a las entidades públicas Gobierno Nacional y Gobierno Regional a aplicar lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 021-2020. Asimismo, el Decreto Legislativo 1500 amplió la vigencia temporal por un año más de diversas autorizaciones que culminaban el 31 de diciembre de 2020. En el 2022, fue promulgado el Decreto Legislativo 1538 permitiendo que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan iniciar la ejecución de las obras, con el cargo de recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación. Este último Decreto en mención estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

En este sentido, el Poder Ejecutivo solicita facultades para establecer como permanente la medida establecida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1538, el cual establece que las entidades de los tres niveles de gobierno pueden iniciar la ejecución de las obras con el cargo de recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación, debidamente firmado y sellado por la unidad de recepción documental o a quien le corresponda, en la Modalidad A, para los supuestos establecidos en el literal h) del numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones; sin perjuicio que la municipalidad emita la licencia correspondiente y la notifique en el plazo previsto en el literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29090.

[16] Recuperado de Oficio N 188-2023-EF/10.01.

Asimismo, de igual forma a los antecedentes normativos mencionados, se debería precisar que cuando los proyectos se encuentren vinculados a bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación, corresponde que el Ministerio de Cultura emita la autorización sectorial correspondiente.

Según la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Oficio N 188-2023-EF, en el marco del Decreto Legislativo 1538, las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno reportaron que utilizaron la disposición establecida en el artículo 3 del citado Decreto, para un total de cincuenta (50) inversiones desde marzo a diciembre del 2022. Estas inversiones representan S/ 1 798 millones, de los cuales se viene devengando 28%. La función que mayor monto de inversión concentra es educación con S/ 767 millones y 22 proyectos, seguido de salud con S/ 521 millones y 3 proyectos y cultura con S/ 441 millones y 5 proyecto. En el Anexo 1 se muestra el listado detallado de las inversiones en mención:

Inversiones que aplicaron el artículo 3 del Decreto Legislativo 1538

Nivel de Gobierno	Cantidad de Inversiones	Costo actualizado (S/)	Devengado acumulado (S/)	Avance (%)
Gobiernos Locales	30	93,166,289	76,605,902	82%
Gobierno Nacional	17	1,589,402,755	415,488,315	26%
Gobiernos Regionales	3	114,972,917	13,828,204	12%
Total	**50**	**1,797,541,961**	**505,922,421**	**28%**

Fuente: MEF, Información remitida por los sectores mediante correo electrónico_ Banco de Inversiones.

Por otro lado, en la información remitida muestran que se han identificado 2 327 proyectos de inversión a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local que cuentan con un costo actualizado total de S/ 10 217 millones que a la fecha no han iniciado ejecución física de sus inversiones debido al exceso de trámites que se deben cumplir de manera previa al inicio de la ejecución. El monto por ejecutar de estos proyectos se encuentra concentrado en los Gobiernos Locales (66%), Gobierno Nacional (22%) y Gobierno Regional (12%). A continuación, se muestra las inversiones mencionadas por nivel de gobierno.

Cantidad de inversiones con PIM 2023 en los tres niveles de gobierno que no han iniciado aún ejecución física de sus inversiones

Nivel de gobierno	Cantidad de proyectos	Costo actualizado (Millones de S/)	PIM 2023 (Millones de S/)
GL	1,808	6,791	129
GN	439	2,277	11
GR	80	1,149	6
Total	2,327	10,217	146

Fuente: MEF, SIAF al 28.01.2023 con información al 27.01.2023 y Banco de Inversiones al 28.01.2022.

Nota: Para el cálculo se ha considerado a los proyectos de inversión de la naturaleza de creación que a la fecha presentan un avance acumulado de su ejecución financiera (respecto al costo actualizado) menor al 5%, en la medida que se estima que dicho porcentaje está vinculado a la elaboración de expediente técnico o documento equivalente.

La solicitud de esta delegación no implica riesgo mientras se mantenga lo previsto en las normativas anteriores en dos puntos fundamentales:

1. Sin perjuicio de la aplicación de la medida, la municipalidad emita la licencia correspondiente y la notifique en el plazo previsto en el literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA. De no ser así, se estaría trasgrediendo las competencias y funciones de las autoridades municipales de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2. Las disposiciones no son de aplicación para las obras de edificación y habilitación urbana en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura.

Si bien esta medida se viene aplicando desde el 2019 y que, según la información remitida por el MEF, ello ha permitido agilizar el inicio de ejecución. Es necesario que se realice una evaluación con mayor profundidad sobre los impactos positivos de esta medida para poder volverla permanente. Asimismo, es importante resaltar que no debe existir perjuicio de las municipalidades y la no aplicación para las obras de edificación y habilitación urbana en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia. En conclusión, extender de forma temporal esta medida no resulta un riesgo.

Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable.

En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas sobre este extremo.

a.2) Certificación ambiental e información para elaboración de estudios ambientales

El Decreto Legislativo 1538, Decreto Legislativo que establece disposiciones especiales para la ejecución de las inversiones públicas, publicado el 26 de marzo de 2022 planteaba en su artículo 4 lo siguiente:

> *"En los proyectos de inversión pública del Gobierno Nacional que cuenten con declaración de viabilidad a la vigencia del presente Decreto Legislativo, que de acuerdo con la normativa aplicable, prevean iniciar la ejecución de la obra con la aprobación parcial del expediente técnico de obra o con los estudios de ingeniería aprobados por tramos, etapas, componentes o sectores de obra, para ambos casos, de naturaleza funcionalmente independiente; se elabora el Estudio Ambiental, Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) o su modificación, conforme a sus respectivos términos de referencia y sobre la base de la información aprobada del expediente técnico parcial de obra o estudios de ingeniería mencionados. El titular debe obtener, según corresponda, la certificación ambiental o la aprobación del IGA o su modificación de manera previa a la ejecución física o de obras, de acuerdo con lo previsto en los principios y disposiciones establecidas en la normativa del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y en la normativa ambiental sectorial vigente".*

De esta manera se autorizaba la obtención parcial de las certificaciones ambientales bajo la modalidad "fast track" para los proyectos del Gobierno Nacional. Este modelo tiene una ventaja sobre el modelo secuencial (diseño – construcción) de ejecución tradicional, debido a que permite ir avanzando la obra, sin contar con el ET culminado, sino que el mismo, se concluye cuando la ejecución ya ha iniciado, lo cual permite poner en funcionamiento, los servicios al ciudadano en menor tiempo. Durante los nueve meses de la aplicación de esta medida se ejecutaron 37 inversiones por un monto de inversión de S/ 6 594 296. En el Anexo 2 se muestra el listado detallado de las inversiones en mención. A continuación, se muestra mayor detalle.

ANEXO 2

Aplicación del artículo 4 del Decreto Legislativo 1538

Sector	Cantidad de inversiones	Monto actualizado (S/)	Devengado acumulado al 2022 (S/)	PIM 2023	Devengado 2023 (S/)
Educación (Universidades	4	109,823,909	20,258,111	23,000,525	0
Produce	4	124,455,882	99,537,817	17,044,435	2,040
Mincetur	3	38,037,115	20,503,750	5,351,840	0
Minsa	11	1,083,008,930	44,185,505	298,597,134	0
MVCS	15	5,238,970,565	598,979,115	368,573,912	2,042,104
Total	37	6,594,296,401	783,464,298	712,567,846	2,044,144

Fuente: MEF, Oficio N 188-2023-EF/10.01

La solicitud de esta facultad se encuentra justificada en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1538. El Poder Ejecutivo solicita facultades para autorizar a las entidades de los tres niveles de gobierno para que opten por iniciar la ejecución física de sus proyectos de inversión de manera paralela a la elaboración parcial de sus expedientes técnicos o con los estudios de ingeniería aprobados por tramos, etapas, componentes o sectores de obra, para que puedan elaborar el Estudio Ambiental, Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) o su modificación, conforme a sus respectivos términos de referencia y sobre la base del estudio de preinversión a nivel de perfil con estudios de ingeniería básica como mínimo o documento similar.

Según información remitida por el MEF, la aplicación de esta medida para los proyectos del Gobierno Nacional ha permitido optar por iniciar la ejecución física de sus inversiones de manera paralela a la elaboración parcial de sus ET, con el fin de reducir los tiempos de ejecución y con ello prestar los servicios públicos a la población de manera más acelerada. Sin embargo, esto no ha significado el inicio de ejecución implementación o construcción de un proyecto de inversión por tramos, etapas, componente o sector sin contar anticipadamente con la certificación ambiental correspondiente. Ello dado que, según las normas que regulan el SEIA, la no obtención de la certificación ambiental o aprobación de su modificación implica la imposibilidad de iniciar obras y ejecutar el proyecto de inversión, debido a que no se asegura la protección del ambiente, por no contar con las medidas de manejo ambiental para prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan ser generados por el proyecto.

Dado que es la primera vez que esta medida se autorizaría para los Gobiernos Regionales y Locales, es conveniente evaluar su aplicación y resultados. En ese sentido, la Comisión considera que sólo podría brindarse esta autorización de manera temporal a la espera de evaluación de resultados.

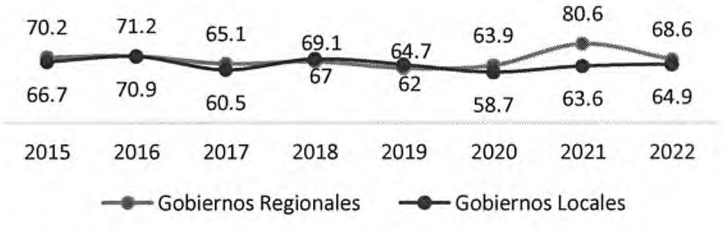
Debido al contexto de necesidad de reactivación económica, puntualmente inversión pública, es importante tomar de forma positiva la solicitud sobre esta facultad; sin embargo, dado que la propuesta apunta a extender el beneficio hacia los Gobiernos Regionales y Locales, es conveniente adoptar de manera temporal la medida sugerida.

Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. Es decir, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. **En consecuencia, resulta razonable y viable que se otorgue las facultades solicitadas sobre la materia en cuestión.**

a.3) Ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM

Actualmente, la normativa que regula los usos del canon, sobrecanon, regalías mineras y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) dispone que los recursos que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales reciban por dichos conceptos sean utilizados sólo para el financiamiento y/o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional o local. Entre el año 2015 y 2022 la ejecución de recursos de esta fuente de financiamiento en el caso de los Gobiernos Regionales fue en promedio 69% y los Gobiernos Locales 65%, dejando así aún recursos sin uso en beneficio de la población.

Presupuesto ejecutado por canon, sobrecanon y regalías (%)



Fuente: MEF, Transparencia Económica
Elaboración propia

En el contexto de la pandemia del COVID-19, durante los años 2020 y 2021 se promulgaron Decretos de Urgencia que autorizaron a los Gobiernos Regionales y Locales de manera excepcional, a utilizar los recursos que recibieron por canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), una vez descontado el monto total acumulado de las obligaciones o compromisos de pago previamente contraídos y que deban ser atendidos con dichos recursos, para el financiamiento o cofinanciamiento de la ejecución de IOARR. El Decreto de Urgencia 070-2020 publicado el 19 de junio del 2020 autorizaba esta medida hasta el 31 de diciembre del 2020, el Decreto de Urgencia 137-2020 publicado el 21 de diciembre del 2020 ampliaba la medida hasta el 30 de abril del 2021, finalmente, el Decreto de Urgencia 024-2021 publicado el 4 de marzo del 2021 amplió la medida hasta el 31 de julio del 2021. Durante este periodo se han podido ejecutar 8 570 IOARR por S/ 5 182 millones. El monto superior fue devengado en el 2021 por S/ 832 millones.

IOARR ejecutadas en el marco de los Decretos de Urgencia

	2020			2021		
Nivel	Inversiones (número)	Costo actualizado (S/)	Devengado (S/)	Inversiones (número)	Costo actualizado (S/)	Devengado (S/)
GL	3,228	1,370,679,816	330,638,145	4,616	2,104,463,003	618,801,658
GR	296	612,322,201	140,431,041	430	1,094,978,387	213,001,465
Total	**3,524**	**1,983,002,017**	**471,069,186**	**5,046**	**3,199,441,390**	**831,803,123**

Fuente: MEF, Banco de Inversiones

Estas inversiones en IOARR permitieron que las unidades productoras de servicios públicos continúen brindando los bienes y servicios para cubrir las brechas de acceso de la población en infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros. A continuación, se muestra la relación entre tipo de inversión, naturaleza e ítem comprendidas en el marco de las IOARR.

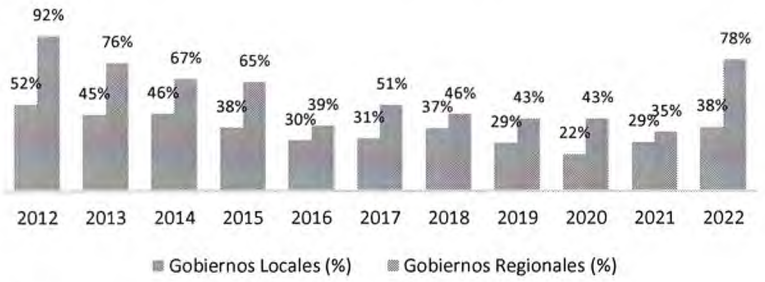
Tipologías de inversión, naturaleza e ítem

	Naturaleza	Ítem
Optimización	**Caso 1:** ^ Adquisición ^ Saneamiento técnico legal	^ Terrenos
	Caso 2: ^ Adquisición ^ Construcción ^ Remodelación ^ Capacitación	^ Infraestructura ^ Equipamiento ^ Mobiliario ^ Vehículos ^ Intangibles
Rehabilitación	^ Reparación ^ Renovación	^ Infraestructura ^ Equipamiento ^ Mobiliario ^ Vehículos
Reposición	^ Adquisición	^ Equipamiento ^ Mobiliario ^ Vehículos
Ampliación marginal	**Caso 1:** ^ Adquisición ^ Construcción ^ Remodelación ^ Saneamiento técnico legal	^ Infraestructura ^ Equipamiento ^ Mobiliario ^ Vehículos ^ Terrenos
	Caso 2: ^ Adquisición ^ Construcción ^ Remodelación	^ Infraestructura ^ Equipamiento ^ Mobiliario ^ Vehículos

Fuente: MEF

En los últimos diez años, el canon, sobrecanon, regalía minera viene representando una gran proporción del presupuesto transferido a los Gobiernos Regionales y Locales. Es así que, en el periodo en mención en promedio, el 58% del presupuesto de los Gobiernos Regionales proviene de las fuentes mencionadas y ha sido anualmente en promedio S/ 3 314 millones. Asimismo, en el caso de los Gobiernos Locales representa el 36% y ha sido anualmente en promedio S/ 7 955 millones. La transferencia de dichos recursos implica que aún existe una gran magnitud de recursos que pueden ser utilizados para ejecutar las IOARR.

Recursos transferidos a Gobiernos Regionales y Locales por canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones (%)



Fuente: MEF
Elaboración propia

Además, en los últimos años, los recursos mencionados han sido fuente importante de la inversión en proyectos de inversión regional y local, especialmente en las zonas de explotación de recursos naturales lo cual también ha permitido el acelerado desarrollo de estas zonas y reducir los niveles de conflictividad en algunos casos. Es así que como resultado de las inversiones realizadas se han acumulado activos que demandan inversiones adicionales en rehabilitación de infraestructura, ampliación de los activos, reposición, y optimización para su mantenimiento según sea el caso.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo solicita facultades para autorizar a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar los recursos que reciban por conceptos de canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), una vez descontado el monto total acumulado de las obligaciones o compromisos de pago previamente contraídos y que deban ser atendidos con dichos recursos, para el financiamiento o cofinanciamiento de la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación (IOARR), en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

La medida propuesta espera beneficiar a los Gobiernos Regionales y Locales que perciben recursos provenientes del canon y regalías. Así, dichas entidades podrán contar con recursos para ejecutar intervenciones de baja complejidad técnica y cuya necesidad resulta evidente, para alcanzar las capacidades óptimas de servicios o recuperar la capacidad de respuesta y niveles de servicio a la población. Asimismo, se espera que las entidades eviten la interrupción de servicios o reducir los tiempos en los que éstos se hayan paralizado.

Según información del MEF recibida en la Comisión de Economía, de acuerdo con información registrada en el Banco de Inversiones al 11 de enero del 2023, se cuenta con 29,614 IOARR de las cuales 25,606 pertenecen a los Gobiernos Locales y 4,008 de los Gobiernos Regionales aprobadas y activas, que representan un costo actualizado de S/53 878 millones, y que no cuentan con presupuesto[17]. A través de la delegación de facultades sobre esta materia, estas posibles inversiones podrían materializarse, impulsar la inversión pública y ayudar a reducir los indicadores de brechas existentes en el país. A continuación, se muestran las IOARR identificadas sin PIM 2023 a nivel de Gobierno Regional y Local.

Inversiones IOARR activas sin PIM 2023 a nivel de GR y GL

Nivel de gobierno	N° de inversiones	Costo actualizado (Millones de S/)	Devengado acumulado (Millones de S/)	% Avance
GR	4,008	41,564	1,317	3%
GL	25,606	12,315	3,585	29%
Total general	**29,614**	**53,878**	**4,902**	**9%**

Fuente: MEF, Banco de Inversiones 11.01.2023

La medida no afecta la cartera de inversiones prevista en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 debido a que, como se indica en la propuesta, se autoriza al uso de los recursos del canon, sobrecanon, regalías y FOCAM para el financiamiento o cofinanciamiento de IOARR *"una vez descontado el monto total acumulado de las obligaciones o compromisos de pago previamente contraídos y que deban ser atendidos con dichos recursos"*. De este modo, se garantiza la ejecución de proyectos financiados con los recursos antes indicados, presupuestados durante el 2023, existiendo la posibilidad de que los Gobiernos Regionales y Locales destinen recursos no comprometidos durante el presente año al financiamiento de IOARR.

Asimismo, la Comisión considera que, en algunos casos, los Gobiernos Regionales y Locales podrían tender a priorizar la ejecución en IOARR sobre proyectos de inversión pública, dado que la atomización de proyectos de inversión pública de menor monto es un problema que ya ha sido identificado por instituciones como la Contraloría General de la República (CGR)[18]. Como muestra la siguiente tabla, el 63% de los proyectos de inversión viables entre el 2017 – 2021 tiene un monto viable menor a un millón de soles.

[17] Recuperado de Oficio N 188-2023-EF/10.01.
[18] Contraloría General de la República, Análisis de la inversión pública desde la perspectiva del control gubernamental (2017-2021), 2022, p. 81.

Inversiones con ejecución entre el 2017 – 2021 del total de municipalidades distritales según rango del monto viable de la inversión

Rango del monto viable de inversión S/	Inversiones en municipalidades distritales	
	N°	%
De 0 a 100 mil	8,478	12%
De 100 mil a 500 mil	24,132	35%
De 500 mil a 1 millón	11,139	16%
De 1 millón a 2 millones	9,114	13%
De 2 millones a 5 millones	9,993	14%
De 5 millones a 10 millones	4,948	7%
De 10 millones a más	1,633	2%
Total	**69,437**	**100%**

Fuente: Contraloría General de la República, Análisis de la inversión pública desde la perspectiva del control gubernamental (2017-2021).

Asimismo, el mismo documento realiza un análisis sobre las 21 municipalidades con mayor canon en el país y demuestra que estas mayormente (48%) aprueba proyectos entre S/ 1 y 5 millones de soles. Sin embargo, consideramos que la muestra de análisis puede estar sesgada para nuestros fines, por lo cual no podríamos concluir que este comportamiento se extrapolará al resto de municipalidades que perciben las fuentes de financiamiento en estudio.

En base a lo analizado, se ha podido verificar la importancia de ejecución de las IOARR y cómo estas pueden seguir dinamizando la economía a través de la inversión pública, así como el cierre de brechas a nivel nacional. Por otro lado, se ha podido verificar que durante la promulgación de diversos Decretos de Urgencia[19] se han ejecutado 8 570 IOARR por S/ 5 182 millones. Asimismo, también se ha podido verificar que, generalmente, las municipalidades tienden a aprobar proyectos de inversión de montos menores a un millón de soles, por lo que podrían tener un incentivo a ejecutar más IOARR en reemplazo de proyectos de inversión pública. En este sentido, es recomendable en el marco de reactivación económica necesaria para el país delegar facultades en esta materia de forma temporal durante el 2023 y 2024. De esta manera se podría generar mayor evidencia sobre el uso de esta medida de parte de los Gobiernos Regionales y Locales y en base a ello tomar la decisión de aplicarlo de manera permanente.

[19] Decreto de Urgencia 070-2020, Decreto de Urgencia 137-2020 y Decreto de Urgencia 024-2021.

Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta razonable y viable que se otorgue las facultades solicitadas sobre la materia en cuestión.**

Por lo expuesto, resulta viable otorgar facultades legislativas, con el siguiente texto sustitutorio:

a) **Establecer disposiciones especiales hasta diciembre del 2024 para: i) autorizar disposiciones sobre licencias de habilitación urbana y edificación; ii) autorizar medidas relativas a la certificación ambiental e información para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública; iii) autorizar la ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM.**

b) **Autorizar la aprobación de metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de diciembre de 2024.**

De acuerdo a lo establecido en el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1252, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones tiene la facultad para aprobar las metodologías generales teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los proyectos. Por su lado, las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de los Sectores, están encargados de elaborar y aprobar las metodologías específicas de acuerdo a sus competencias.

Según información remitida a la Comisión por el MEF, desde la publicación del Decreto Legislativo 1252 hasta la fecha, sólo se han aprobado 21 metodologías de un total de 190 metodologías que se estiman necesarias[20]. Las metodologías aprobadas son las siguientes.

[20] Recuperado de Oficio N 188-2023-EF/10.01.

Metodologías específicas aprobadas a la fecha

N°	Metodologías aprobadas
1	Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en las tipologías de ecosistemas, especies y apoyo al uso sostenible de la biodiversidad.
2	Lineamientos para la incorporación de la Gestión del Riesgo en un Contexto de Cambio Climático en los proyectos de inversión de agua para riego.
3	Lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua
4	Contenidos Mínimos Específicos para estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública para el mejoramiento y/o ampliación del servicio de tráfico marítimo Resolución Ministerial de aprobación
5	"Matriz de Complejidad para proyectos de inversión del Sector Transportes y Comunicaciones
6	Metodología Específica "CME 02 – MTC Contenidos Mínimos Específicos para la formulación de Proyectos de Inversión de acceso a internet fijo"
7	Ficha Técnica Estándar para el mejoramiento, ampliación y/o recuperación de los servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria del Sector Educación
8	Ficha Técnica Estándar para mejoramiento y ampliación de servicios policiales en comisarías
9	Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de saneamiento en el ámbito rural.
10	Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de saneamiento en el ámbito urbano.
11	Ficha Técnica Estándar Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras Interurbanas
12	Ficha Técnica Estándar para Embarcaderos Fluviales
13	Ficha Técnica Estándar para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios en establecimientos de salud sin internamiento
14	Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de establecimientos de salud en zona rural
15	Ficha Técnica Estándar para proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Es válida también como Ficha Técnica Simplificada.
16	Ficha Técnica Estándar para proyectos de recuperación de ecosistemas andinos. Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.
17	Ficha Técnica Estándar para proyectos de mejoramiento, ampliación, mejoramiento y ampliación, y recuperación del servicio de limpieza pública. Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.
18	Ficha Técnica Estándar para proyectos de "creación o recuperación de servicio de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro de inundación/socavación" versión 1.2
19	Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de Mejoramiento de Infraestructura de Riego
20	Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo agropecuario y apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible
21	Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Parques Culturales Bicentenarios

Fuente: MEF

En estos seis años de vigencia de la norma, sólo se han podido obtener las 22 metodologías mencionadas, lo cual tiene impacto directo en la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública dado que se formulan proyectos

de baja calidad o incompletos por la falta de lineamientos estandarizados para su realización. Asimismo, dado que la formulación se da de forma defectuosa, se puede esperar que, como resultado de la realización del expediente técnico, existan incrementos sustanciales en el monto de inversión o cambios importantes en la tecnología del proyecto, pudiendo devenir en altas variaciones en montos de inversión o suspensión de la continuación de la ejecución del proyecto.

Autorizar a la DGPMI del MEF la elaboración y aprobación de Metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en coordinación con las OPMI de los Sectores, esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Esta medida busca que los operadores de las Unidades Formuladoras puedan incrementar la calidad de los proyectos declarados viables, de esta manera las estimaciones de costos, plazos y metas físicas se acerquen más a lo que se obtiene en los expedientes técnicos correspondientes de acuerdo a la complejidad de los proyectos de inversión.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería a la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública, mejorando así la calidad de los proyectos y su correspondiente ejecución. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable.

En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas en este extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

b) Autorizar la aprobación de metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de diciembre de 2024.

c) Autorizar el desarrollo de acciones para brindar acompañamiento especializado y permanente en gestión de inversiones con estándares internacionales de dirección de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

La experiencia de inversión pública en el país se viene llevando a cabo a través de diversos mecanismos públicos y privados con la finalidad de acelerar y mejorar la ejecución de este. A pesar de que los niveles de ejecución han mejorado ligeramente en los últimos años, no se puede afirmar que estas intervenciones han permitido cerrar brechas sociales, mejorar la calidad, tiempo o eficiencia del proceso de inversión pública. Es así como, según información del MEF, más del

90% de los locales escolares presentan inadecuada capacidad instalada, más del 50% de los establecimientos de salud del primer nivel presentan las mismas dificultades y más del 50% de la infraestructura vial vecinal no está pavimentada, igual que el acceso a servicios de movilidad urbana.

Indicadores de Brechas (PMI 2019-2021)

Indicador de brecha	Línea Base
Educación	**2018**
% de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada (2018)	89.73%
% de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada (2018)	94.92%
% de locales educativos con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada (2018)	89.87%
% de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada inadecuada (2018)	87.03%
% de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada inadecuada (2018)	91.64%
Salud	**2018**
% de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	55.00%
% de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de atención (nuevos)	20.70%
% de hospitales con capacidad instalada inadecuada	78.90%
% de nuevos hospitales requeridos	56.80%
Agua potable y saneamiento	**2017**
% de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública	6%
% de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas	11%
% de volumen de aguas residuales no tratadas	21%
%de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red o pileta públicas	28%
% de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	76%
Pistas y veredas	**2018**
% de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas	52%
% de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial	98%
Transporte	
% de la Red Vial Nacional por Pavimentar (2018)	21%
% de la Red Vial Departamental por Pavimentar (2019)	82%
% de la Red Vial Vecinal por Pavimentar (2019)	50%

Fuente: MEF-DGPMI-PMI 2019-2021

Adicional al bajo cierre de brechas y otros problemas mencionados, existe un gran número de obras paralizadas. Según el último reporte de la Contraloría General de

la República (2022)[21], existen 2 346 obras paralizadas a nivel nacional con un saldo por ejecutar de S/ 14 653 millones. El mayor número de obras paralizadas se encuentra aglomerado en los Gobiernos Locales (74%); sin embargo, el mayor saldo por ejecutar está en los Gobiernos Regionales por S/ 6 784 millones. En ese sentido, es imprescindible que se formulen y ejecuten de mejor manera los proyectos de inversión con la finalidad de agilizar el cierre de brecha de infraestructura y acceso a servicios públicos.

Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Costo actualizado de la inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar* S/
	S/	%	N°	%	S/
Gobierno Nacional	9,893,971,783	33%	368	16%	5,066,931,041
Gobierno Regional	12,854,410,978	43%	274	12%	6,784,819,519
Gobierno Local	6,983,825,072	23%	1,704	73%	2,801,946,307
Total	**29,732,207,833**	**100%**	**2,346**	**100%**	**14,653,696,867**

Fuente: CGR, Infobras

*El cálculo del estimado de saldo de inversión por ejecutar se toma de referencia de los devengados efectuados a la inversión

Según información remitida por el MEF a la Comisión de Economía, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) no cuenta con estándares de dirección de proyectos. Como consecuencia, no tiene sistematizada la información relativa al desarrollo de las inversiones, particularmente de las experiencias exitosas, para su aplicación en la gestión de las fases del Ciclo del Inversión. De esta forma, no han podido generar conocimiento en dicha materia que pueda ser transferido a las entidades del Estado. En este sentido, es importante que la DGPMI pueda sistematizar los conocimientos sobre dirección de proyectos y lo ponga a disposición de las entidades para su aplicación, así como acompañe a las entidades en el proceso correspondiente.

El Poder Ejecutivo solicita facultades para autorizar el desarrollo de acciones para brindar acompañamiento especializado y permanente en gestión de inversiones con estándares internacionales de dirección de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

[21] Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3720744/Reporte%20obras%20paralizadas.pdf.pdf?v=1664908231

En consecuencia, una manera de mejorar la gestión de las inversiones públicas es mediante la introducción de estándares de dirección de proyectos en el SNPMGI, esto es, desarrollar un cuerpo de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que permitan establecer un modelo general de desarrollo de proyectos, predecible, escalable y con una adecuada gobernanza.

A través de la solicitud de delegación de facultades en esta materia, el MEF busca desarrollar acciones para brindar acompañamiento especializado y permanente en gestión de inversiones con estándares internacionales de dirección de proyectos en el marco del SNPMGI; las cuales estarán a cargo de la DGPMI, encargada de desarrollar modelos de gestión integral de proyectos con estándares internacionales para su aplicación en carteras de proyectos seleccionadas, con el fin de mejorar los resultados de la ejecución e impulsar el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios. Asimismo, implementar estrategias y prácticas modernas de gestión de proyectos, brindando acompañamiento a las entidades en la ejecución de sus inversiones públicas[22].

La medida busca mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de la inversión pública, asegurando una mejor gestión de los activos generados con la ejecución de las inversiones, así como la adecuada provisión de los servicios que se brindan a los ciudadanos. Asimismo, el acompañamiento permitirá identificar riesgos que permitan orientar a las entidades en la toma de decisiones para una mejora en la ejecución de sus inversiones.

Brindar facultades en la materia solicitada no implica riesgos en la medida que las funciones y mejoras incorporadas permitan mejorar y optimizar las inversiones a través de estándares internacionales de dirección de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería a la calidad, eficiencia y transparencia de la inversión pública, mejorando así la adecuada provisión de servicios públicos. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas en este extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

[22] Recuperado del Proyecto de Ley 03941/2022-PE.

c) Autorizar el desarrollo de acciones para brindar acompañamiento especializado y permanente en gestión de inversiones con estándares internacionales de dirección de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta diciembre del 2024.

No obstante, durante el debate en la sesión conjunta, se acordó delegar dicha materia de manera permanente por lo que se retira la frase "hasta diciembre del 2024".

d) Modificar el Decreto Legislativo N° 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial — FIDT, con la finalidad que la Secretaría Técnica brinde asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales beneficiarios de los concursos en el marco del FIDT, así como modificar la finalidad de los recursos de dicho Fondo.

El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT), es un fondo concursable creado mediante el Decreto Legislativo 1435, que tiene como finalidad reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos, con mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país y que generen un aumento de la productividad con un enfoque territorial, mediante el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones y de estudios de pre inversión a nivel de perfil y fichas técnicas, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales[23]. Los recursos del FIDT se destinan a las inversiones en materia de: salud básica, desnutrición infantil y/o anemia, educación básica, infraestructura vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo.

Los criterios de calificación y las líneas de evaluación del FIDT establecen como criterio de asignación de recursos el mapa de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, así como, la necesidad de cierre de brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos. En consecuencia, se prioriza el otorgamiento de recursos a las propuestas presentadas por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ubicados en los territorios de mayor pobreza del país, los cuales, en su gran mayoría, presentan dificultades para disponer del equipo técnico que realice las acciones necesarias para que la ejecución de las inversiones y/o elaboración de estudios de preinversión. Asimismo, se producen otros problemas como retrasos en las convocatorias de los procesos de selección, paralizaciones durante la ejecución física de las inversiones debido a la limitada gestión de riesgos técnicos y

[23] Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=102593&lang=es-ES&view=article&id=5896

legales, dilación en la obtención de licencias y factibilidades, conflictos entre la entidad y el contratista, resoluciones de contrato y su posterior revisión en procesos arbitrales, extendiendo así el plazo de ejecución en promedio de dos a tres años, impactando negativamente en el avance de la ejecución presupuestal de los recursos transferidos y cierre de brechas, manteniéndose sin utilizarse recursos que podrían ser asignados en favor de nuevos convenios. Todas estas razones en conjunto no permiten el avance óptimo en la utilización de los recursos y, por ende, en el cierre de brechas para los cuales son destinados estos recursos. En ese sentido, resulta importante brindar acompañamiento especializado y permanente en gestión de inversiones[24].

Con la finalidad de fortalecer las funciones de la Secretaría Técnica del FIDT, el Poder Ejecutivo solicita dotar de manera permanente la función de asistencia técnica orientada a diversas materias como: identificación y gestión de riesgos técnicos y legales en la formulación y/o ejecución de los objetos de los convenios, monitoreo in situ del avance de la ejecución física de las inversiones, orientación legal para el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios en el marco de los convenios, soporte informático para operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el manejo de aplicativos vinculados, medición de indicadores de avance físico y financiero de la cartera de convenios y retroalimentación de estrategias para la mejora de la gestión, entre otras.

Respecto al gasto que representará la inclusión de estas funciones en el marco del FIDT, será incorporado como parte del presupuesto actual destinado a los concursos. Es decir, no se demandará mayores recursos. Asimismo, a través del Decreto de Urgencia 002-2023 se ha autorizado a la Secretaría Técnica del FIDT S/ 2 940 600 para brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales ganadores del concurso para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones y estudios de preinversión a nivel de perfil y fichas técnicas para el 2023. Lo cual representa alrededor del 1%[25] del FIDT destinado para el año 2023. Asimismo, en las reuniones técnicas sostenidas con funcionarios del MEF se les consultó sobre cuánto sería el monto promedio que se destinaría, dado que la solicitud es de forma permanente. A ello se respondió que el porcentaje destinado sería alrededor del 3%. En ese sentido, la Comisión de Economía acoge los datos mencionados y los incorpora en el texto sustitutorio.

La implementación de esta función permitirá mejorar los riesgos técnicos y legales, la dilación en la obtención de licencias, evitar resoluciones de contratos y su

[24] Recuperado de Oficio N 188-2023-EF/10.01.
[25] Sobre el presupuesto referencial ascendente a S/ 306 669 843 aprobado para el FIDT 2023 aprobado según Acuerdo de sesión N° 02-18-2022 del Consejo Directivo

posterior revisión en procesos arbitrales, en suma, reducir los plazos de ejecución de los proyectos.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería a la formulación y ejecución de proyectos en el marco del FIDT, con la finalidad de reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos, con mayor énfasis en las zonas con pobreza y pobreza extrema en el país. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas en este extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

d) Modificar el Decreto Legislativo 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial — FIDT, con la finalidad que la Secretaría Técnica brinde asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales beneficiarios de los concursos en el marco del FIDT destinando hasta 3% de los recursos asignados al FIDT para dicho fin, así como modificar la finalidad de los recursos de dicho Fondo.

No obstante, durante el debate en la sesión conjunta, se acordó elevar el porcentaje asignado a la asistencia técnica de la Secretaría Técnica del FIDT de 3% a 5%.

e) Autorizar, excepcionalmente para el Año Fiscal 2023, el uso de Recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) y las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) que se encuentren en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

La solicitud del Poder Ejecutivo consiste en autorizar excepcionalmente para el año fiscal 2023 el uso de Recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) para ejecutar las referidas intervenciones en el marco del PIRCC.

Para el 2023, se han asignado S/ 2 179 000 000 por la fuente de financiamiento ROOC para la ejecución de intervenciones incluidas en el PIRCC, dentro de las inversiones incluidas en el PIRCC, se contemplan proyectos de inversión e IRI. En ese sentido, con el objetivo de reactivar la economía a través de la ejecución de IRI, las cuales tienen un plazo menor de ejecución que un proyecto de inversión, visualizando su impacto en menor plazo, es necesario brindar las condiciones necesarias para que su ejecución se agilice durante el año fiscal 2023.

En el año 2019, esta autorización fue formulada y enviada por el Poder Ejecutivo como parte de la Ley de Endeudamiento. Como consecuencia del debate y aplicación del procedimiento legislativo dentro del Congreso de la República, esta autorización fue aprobada mediante la Ley 30881, Ley de Endeudamiento del Sector público para el año fiscal 2019. Asimismo, en el 2022 también se autorizaron las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) e Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) para ser financiadas con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

En ese sentido, la autorización sobre esta materia debió ser debatida en su momento a través del proceso correspondiente con la Comisión de Presupuesto para la aprobación de las Leyes de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el año fiscal 2023. Finalmente, según artículo 101 y 104 de la Constitución no se puede delegar facultades al Poder Ejecutivo en materias que son indelegables a la Comisión Permanente, en este caso específico, en materia presupuestal. En ese sentido, **NO resulta viable** otorgar facultades legislativas para autorizar, excepcionalmente para el Año Fiscal 2023, el uso de Recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) y las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) que se encuentren en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

f) Modificar el Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, a fin de habilitar a los gobiernos locales para que suscriban convenios con los PEIP para la ejecución de sus inversiones, así como simplificar procedimientos, criterios o requisitos que agilicen su implementación.

El Decreto de Urgencia 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) y dicta otras disposiciones, publicado el 23 de enero de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, tiene como objetivo dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población, a través de un modelo que facilite la ejecución de inversiones públicas.

Actualmente el marco legal sólo permite que las entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima puedan suscribir convenios con los PEIP. Sin embargo, el MEF se ha advertido la necesidad de permitir también a los Gobiernos Locales suscribir convenios con los PEIP, a fin de que estos se encarguen de la ejecución de sus inversiones, para lo

cual podrán utilizar las facilidades y facultades establecidas en el Decreto de Urgencia 021- 2020 y su Reglamento.

Es de amplio diagnóstico y conocimiento que los Gobiernos Locales carecen de capacidades para la gestión de inversiones, según el MEF entre los principales problemas se encuentra la falta de planificación estratégica a nivel regional, baja calidad en los estudios técnicos, deficiencia de capacidades técnicas, dando todo ello como resultado bajos niveles de ejecución y persistentes brechas en indicadores de infraestructura y social.

El Poder Ejecutivo solicita modificar el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de PEIP a fin de mejorar y flexibilizar las disposiciones aplicables a los PEIP, con especial énfasis, en la suscripción de convenios de los Gobiernos Locales con los PEIP, de modo que se encargue y facilite la ejecución de sus inversiones a través de dicho modelo de ejecución.

Esta medida podría beneficiar a los Gobiernos Locales que cuenten con los recursos para poder desarrollar un PEIP; sin embargo, en las reuniones sostenidas con el MEF no precisaron el número actual de Gobiernos Locales que podrían acceder a esta forma de inversión especializado. Asimismo, tampoco han sido precisadas cuáles serían los procedimientos, criterios o requisitos sobre los cuales solicitan facultades para que agilicen su implementación. Por lo cual no quedaría claro qué medidas ejecutarán en el sentido de esta materia.

Según lo mencionado por el MEF, la medida no implica un riesgo, al contrario beneficiaría a los Gobiernos Locales que pudieran acceder a los PEIP dado los instrumentos, facultades y facilidades que agilizan su ejecución, como, por ejemplo, contratar Asistencia Técnica Especializada (ATE), contar con una Oficina en Gestión de Inversiones (PMO), la aplicación de altos estándares de seguimiento y control, el uso de metodologías colaborativas (BIM) y Contratos Estándar Internacionales (FIDIC, NEC), la posibilidad de usar "Fast Track" para la ejecución, entre otros.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería a la formulación y ejecución de PEIP en los Gobiernos Locales que pudieran optar por esta modalidad de inversión, permitiendo así reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura de mayor alcance. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegables. En consecuencia, no existe impedimento constitucionalidad para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas en este extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

f) Modificar el Decreto de Urgencia 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, a fin de habilitar a los gobiernos locales para que suscriban convenios con los PEIP para la ejecución de sus inversiones.

g) Modificar la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres naturales y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de flexibilizar los plazos dispuestos en la normativa vigente para la expropiación de bienes inmuebles y liberación de interferencias necesarias para la ejecución de intervenciones que se encuentren en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

Actualmente las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) que están en proceso de ejecución a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, tienen como uno de los principales hitos de ejecución el saneamiento de predios y la liberación de interferencias. En ese sentido, la aplicación del numeral 8.6 del artículo 8 de la Ley 30556, respecto a los procedimientos de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la implementación del PIRCC, ha permitido analizar y evaluar que los plazos establecidos son reducidos y es necesaria la ampliación en lo referido al literal d) y a los literales b) y c) correspondientes al procedimiento de Trato Directo[26].

Estas limitaciones de tiempo no permiten obtener los documentos previos necesarios para realizar los procedimientos mencionados, acciones como gestionar la disponibilidad presupuestal, el Certificado Registral Inmobiliario (CRI) o la copia de la partida registral del predio, debiendo contar con la evaluación del estado de títulos pendientes de inscripción. En el caso específico de los literales b) y c) del numeral 8.6 del artículo 8 de la Ley 30556 los tiempos también son cortos en el sentido de que una vez que el Sujeto Pasivo acepte el valor de la tasación, se deben elaborar los documentos técnicos y legales que sustentarán la emisión de la Resolución que aprueba el valor de tasación y pago, y la suscripción del documento de transferencia y efectuar el pago, resultando insuficiente el plazo actualmente previsto en la norma para realizar dichas actuaciones administrativas[27].

Las modificaciones solicitadas para la mejor implementación de las intervenciones del PIRCC son necesarias para optimizar los procesos coadyuvando al cumplimiento de su finalidad, asimismo resulta viable su modificación a través de

[26] Información remitida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios el 31 de enero del 2023.
[27] Información remitida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios el 31 de enero del 2023.

una norma con rango legal y es oportuno, dado que desde la propia ARCC y otras Entidades Ejecutoras del PIRCC se viene ejecutando la adquisición y expropiación de inmuebles en aras de poder implementar las intervenciones a su cargo en los sectores Educación, Salud, Transportes, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el marco del pedido de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, ha remitido su propuesta de modificación en los siguientes términos:

Se modifica el artículo 8 de la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en los siguientes términos:

"Artículo 8. Competencias y facilidades administrativas extraordinarias y temporales

8.6 Autorízase la expropiación de los bienes inmuebles que resulten necesarios para la implementación de El Plan declarado de necesidad pública e interés nacional en el artículo 1 de la presente Ley.

La adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la implementación del El Plan se efectúa aplicando el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, se tiene en cuenta lo siguiente:

(…).

d) Recibida la tasación, la Entidad Ejecutora envía al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de hasta ***diez (10)*** *días hábiles la Carta de Intención de Adquisición.*

En el procedimiento de Trato Directo:

"(…).

b) Dentro de los ***diez (10)*** *días hábiles de recibida la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, mediante resolución del Titular de la Entidad Ejecutora se aprueba el valor total de la Tasación y el pago.*

c) Una vez aprobado el valor total de la Tasación, la Entidad Ejecutora tiene un plazo máximo de ***diez (10)*** *días hábiles para gestionar la suscripción del*

instrumento de transferencia a favor del Beneficiario y para efectuar el pago del valor total de la Tasación.

(...)."

En consecuencia, en base al análisis realizado sobre la información remitida y explicada de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se prevé que la propuesta genere un impacto inmediato en los procesos de ejecución de intervenciones del PIRCC pendientes y asegure el uso de los recursos programados para dicho fin.

Según el análisis expuesto, la ampliación de los plazos propuestos, favorecerían a la continuidad oportuna de la ejecución de intervenciones en el marco del PIRCC. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegables. En consecuencia, no existe impedimento constitucionalidad para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas en este extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

g) Modificar el artículo 8 de la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres naturales y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de flexibilizar los plazos dispuestos en la normativa vigente para la expropiación de bienes inmuebles y liberación de interferencias necesarias para la ejecución de intervenciones que se encuentren en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

Anexo 1: Detalle de inversiones que aplicaron el artículo 3 del Decreto Legislativo 1538 Medida sobre Habilitación Urbana y Licencia de Edificación

N°	Nombre de la entidad	Nivel de Gobierno	Función	Código Único de Inversiones (CUI)	Nombre de la Inversión	Costo actualizado (S/)	Devengado acumulado al 2022 (S/)	Avance (%)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2328946	EJECUCION DEL COMPONENTE: COMPONENTE CERCO PERIMETRICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	18,079,178	2,719,067	15%
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2087971	AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC	9,391,395	4,731,918	50%
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2149626	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION PRACTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA UNSAAC	23,047,495	545,101	2%
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2199844	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UNSAAC-CUSCO	115,820,428	14,275,517	12%

5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2413929	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO EN EL CENTRO AGRONOMICO DE KAYRA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	78,326,001	422,055	1%
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2132612	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC	18,494,224	13,571,180	73%
7	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2351878	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	22,861,291	5,953,147	26%
8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2432854	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; RENOVACIÓN DE AMBIENTES DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL (LA) ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,258,739	3,117,958	96%
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2352965	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA	9,391,736	3,975,623	42%
10	PRONIED	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2382929	COAR MOQUEGUA	98,152,573	6,982,623	7%
11	PRONIED	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2381345	COAR ANCASH	98,373,437	24,607,756	25%
12	PRONIED	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2331588	COAR TACNA	98,310,214	9,910,439	10%

13	MINISTERIO DE CULTURA	GOBIERNO NACIONAL	CULTURA	2233917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - SEDE PUEBLO LIBRE, DISTRITO PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	436,427,100	8,395,757	2%
14	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	GOBIERNO NACIONAL	EDUCACIÓN	2341738	CREACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	38,094,918	27,369,020	72%
15	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	GOBIERNO NACIONAL	SALUD	2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	348,191,245	202,288,819	58%
16	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	GOBIERNO NACIONAL	SALUD	2344420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	42,360,132	21,403,078	51%
17	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	GOBIERNO NACIONAL	SALUD	2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	130,822,649	65,219,259	50%
18	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL	EDUCACIÓN	2414956	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO DISTRITO DE ASCENSIÓN PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"	86,331,850	2,043,940	2%
19	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL	EDUCACIÓN	2329601	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - **COMPONENTE GERENCIA**	16,371,955	11,654,265	71%

20	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL	EDUCACIÓN	2308014	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"	12,269,112	129,998	1%
21	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	AGROPECUARIA	2128689	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO GANADERO EN LOS DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	2,186,367	2,181,368	100%
22	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	EDUCACIÓN	2193427	AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL MEJIA ALBERTO EN LA CC.NN. HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	3,733,162	3,717,054	100%
23	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	SANEAMIENTO	2193624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	17,338,788	16,290,391	94%
24	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	EDUCACIÓN	2196711	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. Nº 30643 JESUS SALVADOR EN EL CC.PP. SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,418,375	1,385,507	98%
25	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2198036	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA ROYA AMARILLA EN CAFE EN LOS DISTRITOS DE SATIPO, RIO NEGRO, COVIRIALI, PAMPA HERMOSA Y LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	3,503,287	3,383,670	97%
26	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	EDUCACIÓN	2202333	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	5,964,537	2,096,269	35%
27	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2212834	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AGRICULTURA CUADRA 08 Y JR. 28 DE JULIO CUADRAS 07, 08 Y 09 DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,177,132	1,168,338	99%

28	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	SANEAMIENTO	2243609	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL ANEXO VILLA SOL, DISTRITO COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,094,727	1,022,040	93%
29	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	EDUCACIÓN	2248833	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	5,088,070	4,505,252	89%
30	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2314426	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE L25 M SOBRE EL RIO ARPAYO-ANEXO DE TUPAC, DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	864,836	806,319	93%
31	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	SANEAMIENTO	2330275	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAMAÑARO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	950,943	948,243	100%
32	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2334313	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL CULTIVO DE CACAO Y CAFE, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	3,022,142	2,345,874	78%
33	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	EDUCACIÓN	2336854	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. Nº 31973 DEL ANEXO DE ALTO TZANCUVATZARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,111,489	1,094,553	98%
34	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2341788	CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE LONG. 12 M.L. EN EL SECTOR LOS ANGELES - ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE COVIRIALI - SATIPO - JUNIN	441,752	365,526	83%
35	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	SANEAMIENTO	2344335	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MIRAFLORES Y COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA, DISTRITO DE MAZAMARI - PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	8,205,937	7,889,254	96%

36	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	SANEAMIENTO	2344756	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CENTRO POBLADO RIO OSO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,414,122	1,379,877	98%
37	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2352111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD LA CARRETERA ANTIGUA TRAMO I CARRETERA MARGINAL SATIPO - MAZAMARI EMP. PE5S 121+560 KM - CC.PP. LA PAZ (SENATI) Y TRAMO II CC.PP. LA PAZ (SENATI) - CC.PP. RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,666,935	1,402,112	84%
38	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	AMBIENTE	2380704	CREACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA RECUPERACION DE FAUNA SILVESTRE SECTOR RIO BERTHA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	1,237,022	1,137,969	92%
39	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	CULTURA Y DEPORTE	2469786	CONSTRUCCION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD EL MILAGRO, LA COLMENA, VILLA VIRGINIA, ALAMEDA MALECON, CANAAN DEL NORTE, HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE LLAYLLA Y DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	1,740,070	1,533,254	88%
40	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	CULTURA Y DEPORTE	2469849	CONSTRUCCION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) I.E. N° 30635, I.E. 30658, I.E. N° 30645, I.E. N° 30166, I.E. SAN RAMON, I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN, I.E.I. AGROPECUARIO HUERTO EDEN, DISTRITO DE MAZAMARI, DISTRITO DE LLAYLLA, DISTRITO DE RIO TAMBO, DISTRITO DE SATIPO, DISTRITO DE PANGOA, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARATAMENTO JUNIN	1,699,382	1,621,141	95%
41	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	CULTURA Y DEPORTE	2470256	CONSTRUCCION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) I.E. INTEGRADO LA INMACULADA DE LA CC.NN. PUERTO OCOPA, I.E. MANUEL GONZALES PRADA DEL CC.PP. KIATARI, DISTRITO DE RIO TAMBO Y DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	610,880	543,533	89%

42	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	CULTURA Y DEPORTE	2470260	CONSTRUCCION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) I.E. INTEGRADO DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA, I.E. INICIAL N° 1709, DISTRITO DE COVIRIALI Y DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	610,585	595,858	98%
43	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2488944	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE ACUICULTURA (PECES TROPICALES) EN EL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,126,555	1,126,555	100%
44	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2492340	RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) URBANIZACION SATIPO EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	1,571,595	1,506,105	96%
45	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA	GOBIERNO LOCAL	EDUCACIÓN	2367088	MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA I.E. N° 11179 CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES - DISTRITO DE JAYANCA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN LAMBAYEQUE	3,162,693	214,068	7%
46	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA ICA ICA	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2205972	CREACION DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LAS CALLES LONDRES 5 A 8, LISBOA 5 A 8, ATENAS 5 A 8, VIENA 5 A 10, ROMA 5 A 10, BERNA 5 A 10, CUADRAS, ZONA C1, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA.	7,881,765	4,945,002	63%
47	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA ICA ICA	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2175076	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS, MANCO CAPAC, SEÑOR DE LUREN, BUENOS AIRES, SANTA BARBARA, FERNANDO LEON DE VIVERO, LAS MERCEDES, CHALET, FUNDICION BAJA, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA.	5,396,969	5,162,784	96%
48	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA ICA ICA	GOBIERNO LOCAL	TRANSPORTE	2528848	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SANTA ROSA EN EL CAMINO VECINAL IC 627 EN EL C.P SANTA ROSA DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA.	2,402,663	41,350	2%

49	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA	GOBIERNO LOCAL	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2467608	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PITUMARCA, DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	5,322,254	5,075,655	95%
50	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA	GOBIERNO LOCAL	PROTECCIÓN SOCIAL	2515877	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE ILAVE DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,221,258	1,120,981	92%
TOTAL						**1,797,541,962**	**505,922,421**	**28%**

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

Anexo 2: Detalle de inversiones que aplicaron el artículo 4 del Decreto Legislativo 1538
Medida sobre Certificación ambiental e información para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública

N°	Sector	Nombre de la entidad	Unidad Ejecutora de Inversiones	Código Único de Inversiones (CUI)	Nombre de la Inversión	MONTO INVERSIÓN	MONTO ACTUALIZADO	PIM 2023	DEVENGADO ACUMULADO	Incluido en el PNIC
1	MVCS	ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO-OTASS	UNIDAD EJECUTORA 002 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES	2454710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN TUMBES PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	19,257,030.72	21,465,055.97	10,739,818.00	0	No
2	MVCS	MVCS - DGPPCS	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO-DGPPCS.	2337107	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE AYAVIRI, MOHO, JULIACA, PUNO, ILAVE Y JULI, DEPARTAMENTO DE PUNO	1,183,522,646.00	1,203,233,902.09	838,820.00	15,425,439.14	Sí
3	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2331661	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO	708,956,179.00	1,507,973,305.85	164,770,777.00	25,710,562.81	No
4	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA / PTAR SULLANA	212,066,820.00	360,331,996.54	52,815,406.00	283,439,439.93	No
5	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2376184	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUEROCOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELÍCA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA / PTAP SULLANA	160,561,584.00	237,593,123.06	44,245,598.00	7,228,238.06	No

6	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2167692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	47,836,356.00	127,294,599.78	17,213,338.00	86,931,746.22	No
7	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC - II ETAPA	64,570,676.00	81,737,359.73	2,480,039.00	68,166,878.30	No
8	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2188775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL EN EL C.P. SUCASCO, ALMOZANCHE Y LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO (ETAPA II)	9,950,980.00	86,014,745.32	4,262,063.00	75,987,964.15	No
9	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2302373	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	356,734,774.00	628,442,296.30	42,220,269.00	13,228,458.50	No
10	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2319483	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	290,036,805.00	297,217,201.92	0	2,773,152.62	No
11	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2387679	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	279,445,951.40	282,610,466.18	1,025,143.00	8,194,352.98	No
12	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2309846	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA,	125,654,086.00	164,074,929.32	5,728,691.00	6,169,510.85	No

DEPARTAMENTO DE PIURA

13	MVCS	MVCS - PNSU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO-PNSU	2235574	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	42,010,074.00	64,090,960.29	16,517,669.00	5,968,305.03	No
14	MVCS	MVCS - PASLC	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO - PASLC	2412676	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA PACHACÚTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	98,893,332.31	100,273,000.88	2,477,938.00	1,797,170.29	No
15	MVCS	MVCS - PASLC	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO - PASLC	2510461	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 4TA. ETAPA EN LOS DISTRITOS DE PACHACAMAC, CIENEGUILLA Y VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	76,617,621.80	76,617,621.80	3,238,343.00	0	No
16	MINSA	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	144-1684 - DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	2251577	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA	3,209,752.00	8,577,621.36	0	1,701,920.99	No
17	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466824	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	49,315,526.47	66,591,484.03	29,467,218.00	708,575.16	No
18	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466074	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	52,138,285.03	69,162,748.07	39,474,695.00	1,673,206.08	No
19	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	83,764,850.74	122,969,213.89	54,054,624.00	975,120.02	Sí

20	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466354	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	60,902,639.64	61,435,302.30	0	434,361.06	No
21	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	53,476,383.16	55,517,309.65	35,067,033.00	416,357.05	No
22	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD VILLA EL SALVADOR, DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	65,337,262.00	66,030,835.22	45,851,398.00	141,862.77	No
23	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2430242	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD A NIVEL NACIONAL	240,075,530.68	262,414,172.35	0	0	No
24	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2430246	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA	249,064,217.61	233,308,252.36	48,039,289.00	38,034,601.52	No
25	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2430247	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	70,717,951.00	74,730,144.00	46,642,877.00	99,500.00	No
26	MINSA	PCRIS	49-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD (PCRIS)	2466660	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN	55,965,310.00	62,271,847.00	0	0	No

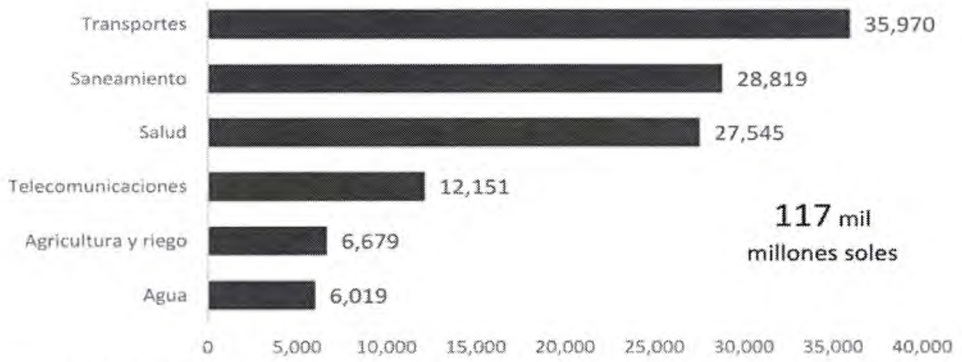
27	MINCETUR	MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL	PLAN COPESCO NACIONAL	2235746	Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el caso urbano de la localidad de Chivay - provincia de Caylloma - región Arequipa	4,202,059.00	13,434,437.63	1,306,830.00	10,314,210.09	No
28	MINCETUR	MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL	PLAN COPESCO NACIONAL	2300618	Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín	12,699,610.00	19,116,052.68	3,284,376.00	9,306,633.40	No
29	MINCETUR	MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL	PLAN COPESCO NACIONAL	2411303	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Conjunto Nik An del complejo arqueológico de Chan Chan, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	5,486,624.77	5,486,624.77	760,634.00	882,906.80	No
30	EDUCACIÓN (Universidades)	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	UEI - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	**2351878**	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	16,532,327.27	22,861,291.09	10,763,955.00	5,953,147.45	No
31	EDUCACIÓN (Universidades)	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	001-1549: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	**2506161**	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE POTRERO DEL DISTRITO DE SANTA ANA -PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	37,662,509.93	42,477,672.48	1,680,000.00	6,875,018.00	No
32	EDUCACIÓN (Universidades)	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	UEI - UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	**2438586**	CREACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS DE DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	12,979,372.73	16,926,886.50	3,470,000.00	2,442,197.25	No
33	EDUCACIÓN (Universidades)	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	UEI - UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	**2403872**	CREACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PRE GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE	19,461,214.74	27,558,058.89	7,086,570.00	4,987,748.23	No

					ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					
34	PRODUCE	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)	Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Auicola (DIGENIPAA)	**2234386**	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	19,112,029.00	39,173,339.30	450,000.00	36,948,104.74	No
35	PRODUCE	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)	Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Auicola (DIGENIPAA)	**2323633**	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA	11,817,198.00	20,189,267.97	16,283,315.00	2,989,155.61	No
36	PRODUCE	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)	Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Auicola (DIGENIPAA)	**2200458**	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	9,277,176.00	28,540,430.43	0	26,039,610.71	No
37	PRODUCE	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)	Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Auicola (DIGENIPAA)	**2195496**	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	20,195,899.00	36,552,844.26	311,120.00	33,123,439.47	No
TOTAL						4,829,508,645	6,594,296,401	712,567,846	785,068,895	

2.1.2 En materia de gestión económica:

En 2019, el PNIC 2019 concluyó que existe una brecha de infraestructura de acceso básico de S/ 117,183 millones en los sectores Transportes, Saneamiento, Salud, Telecomunicaciones, Agricultura y Riego y Agua. Es decir, se requiere este monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura que debería tener un país con nuestras características socioeconómicas y geográficas.

Brecha de infraestructura de corto plazo (millones de soles)

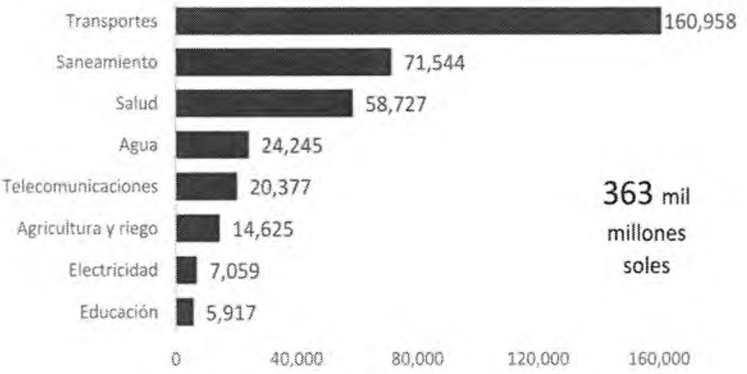


Fuente: PNIC 2019.

Brecha de infraestructura de acceso básico de largo plazo (veinte años)

Para el largo plazo, en 2019 se estimó una brecha de infraestructura de acceso básico de S/ 363,452 millones. Según señala el PNIC 2019, se requiere este monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de grupos de países más desarrollados, como la OCDE. El 44% de la brecha se concentra en el sector Transportes, seguido de los sectores Saneamiento (20%), Salud (16%) y Agua (7%).

Brecha de infraestructura de largo plazo (millones de soles

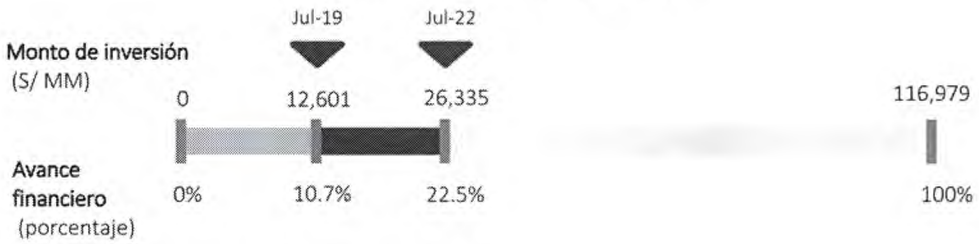


Fuente: PNIC 2019.

Reporte de avance del PNIC 2019 (por fase)

Desde la publicación del PNIC (julio de 2019) hasta julio de 2022, los proyectos en la etapa de ejecución pasaron de 24 a 36, los proyectos en la etapa de proceso se redujeron de 25 a 15 y los proyectos en la etapa de idea pasaron de 3 a solo 1. Además, durante el mismo periodo, la cartera logró un avance financiero de 11.74%, alcanzando un avance financiero acumulado de 22.51% (S/ 26,335 millones). Así, la cartera del PNIC 2019 tiene pendiente ejecutar S/ 90,644 millones, lo que equivale al 10.3% del PBI. Este resultado se obtiene a pesar de la pandemia del COVID-19.

Avance financiero del PNIC 2019



Fuente: Reporte de proyectos del PNIC 2019, actualizado a julio de 2022.

Asimismo, considerando la relevancia de los proyectos del PNIC 2019, desde su publicación se han establecido normas[28] para promover su implementación y mitigar el impacto del COVID-19. Sin embargo, a pesar de la priorización y de las medidas normativas aprobadas para facilitar la ejecución de los proyectos del PNIC 2019, aún se siguen presentando problemas para su desarrollo. Por ejemplo:

- El proyecto Hidrovía Amazónica se encuentra paralizado y con solicitud de caducidad del contrato[29].
- El proyecto PTAR Titicaca presenta riesgo de retraso para la ejecución del componente 1 y el inicio de la construcción de las obras del componente.
- El proyecto Tacna Vilavilani II se encuentra con solicitud de resolución de contrato[30].

[28] Decretos de Urgencia 018-2019 y 003-2020, Decretos Legislativos 1500 y 1543 y Decreto Supremo 080-2020-PCM.
[29] El 20 de mayo de 2021, el concesionario COHIDRO comunicó al MTC la intención de caducar el contrato de concesión por mutuo acuerdo.

- El proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 2 presenta obras paralizadas y problemas para la liberación de interferencias en zonas urbanas de Cutervo, Santo Domingo de la Capilla y Chiple[31].

Por otro lado, la practica internacional recomienda tener una lista corta de proyectos, el PNISC 2022 – 2025 ha priorizado 72 proyectos que cumplen con la evaluación de infraestructura sostenible. Esta cartera de proyectos tiene un monto de inversión de S/ 146,622 millones, de los cuales S/ 127,662 millones se encuentran pendientes de ejecutar, lo que representa 15% del PBI. La cartera priorizada permitirá impulsar la recuperación económica del Perú, de acuerdo al siguiente detalle:

Agrupación sectorial: Los proyectos se distribuyen en todos los sectores priorizados, siendo el sector Salud el que refleja un mayor número de proyectos priorizados, con el 31% de la cartera total. Sin embargo, el sector que tiene mayor monto de inversión acumulado es Transportes, con el 57% del monto total de inversión de la cartera total. Este sector presenta el mayor nivel de brecha de infraestructura en el corto y largo plazo tanto para acceso básico y calidad.

Distribución de proyectos priorizados por sector

Sector	Proyectos	Inversión (millones de soles)
Salud	22	7,470
Transportes	18	84,147
Agua y Saneamiento	12	6,800
Comunicaciones	9	11,135
Educación	4	7,650
Electricidad	2	1,944
Agricultura y Riego	2	5,169
Hidrocarburos	1	19,157
Producción	1	2,864
Ambiente	1	286
Total	**72**	**146,622**

Agrupación modalidad de ejecución: El PNISC 2022 – 2025 prioriza proyectos de todas las modalidades de ejecución (obra pública, OxI, APP y PA). La modalidad que más proyectos tiene son los de obra pública, seguido de los proyectos de APP autofinanciados.

[30] En abril de 2022 se acuerda no impugnar ni llevar a arbitraje resolución de contrato, se efectuó la constatación física e inventario materiales, con lo que se realizó la devolución del fideicomiso en cuenta temporal (S/ 21 millones aproximadamente).
[31] Obras paralizadas desde junio de 2019.

Distribución de proyectos priorizados por modalidad

Modalidad de ejecución		Proyectos	Inversión (millones de soles)
Asociaciones Público Privadas	Autofinanciado	6	15,254
	Cofinanciado	20	58,808
Obra pública[149]		37	58,617
Proyectos en Activos		9	13,943
Total		72	146,622

a) Establecer medidas especiales para facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 — 2025, aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2022- EF, y otros proyectos de inversión pública, privada y publico privada necesarios para promover la reactivación económica y el cierre de brechas en infraestructura.

La exposición de Motivos del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, precisa que de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público y Proyectos en Activos, y su Reglamento[32], el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), cada tres (3) años, propone para la aprobación del Consejo de Ministros el Plan Nacional de Infraestructura (PNI).

De igual manera detalla que el PNI es un instrumento que organiza, prioriza, consolida y articula la planificación de las distintas entidades públicas en materia de inversiones, contiene los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, la ruta estratégica y las prioridades que deben seguir los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para cerrar la brecha prioritaria de infraestructura existente acorde con una visión nacional de desarrollo. Asimismo, busca contribuir al cierre de brechas y destrabe de infraestructura de largo plazo, así como brindar acceso a servicios públicos, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo considera necesario dictar medidas extraordinarias para promover la implementación de los proyectos priorizados en el

[32] Aprobado mediante Decreto supremo 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 — 2025[33] (PNISC), las cuales abarcan aspectos y materias relacionadas con reglas, criterios, alcances, fuentes, funciones y procesos necesarios para promover la inversión pública, privada y público privada, tales como:

- Exceptuar de licencias y regularizar ante municipalidades, con cargo a regularización posterior.
- Establecer que las entidades compatibilicen y, de no ser posible, preferir la ejecución de los proyectos del PNISC.
- Establecer que las entidades den prioridad a los proyectos APP en la tramitación de procedimientos administrativos.
- Facultar a fijar de manera directa el valor de tasación de inmuebles y facultar a contratar peritos debidamente registrados.
- Facultar a gestionar directamente las actividades e intervenciones para la liberación, remoción o reubicación de interferencias.
- Facultar a imponer servidumbres en favor del Estado con carácter forzoso, perpetuo o a título oneroso o gratuito.
- Incorporar a los opinantes al acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea de base del EIA-D, SD o su modificación.
- Reducir los plazos para procedimientos de intervenciones arqueológicas (CIRA, PMA, PRA) y aplicación de silencio administrativo positivo.
- Establecer que las entidades deben reportar al EESI avances de los proyectos del PNISC.

De igual manera, estima que la facilitación y promoción del desarrollo de los proyectos priorizados en el PNISC permitirá el acceso de la población a infraestructura pública y/o servicios públicos con niveles mínimos de calidad.

Asimismo, considera que se requiere de proyectos complementarios que resulten indispensables para la adecuada implementación de los proyectos priorizados en el PNISC, podrían ser inversiones en pavimentación y/o refacción de vías, saneamiento y/o acondicionamiento de áreas de dominio público (como parques, canchas, terrenos eriazos), entre otros, cuya ejecución está a cargo de las entidades del gobierno nacional y subnacional.

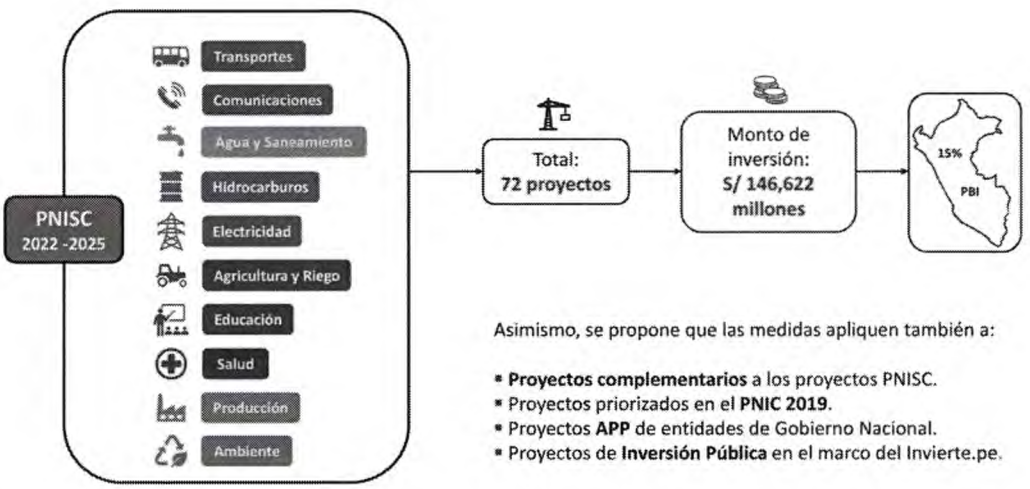
De otro lado, existen algunos proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad[34] (PNIC) que no han sido incorporados en el PNISC. En ese sentido, el Poder Ejecutivo considera importante salvaguardar también que ese conjunto de proyectos siga desarrollándose oportuna y

[33] Aprobado mediante Decreto Supremo 242-2022-EF. Constituye el PNI vigente y se encuentra disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv privada/planes/PNIC 2019.pdf

[34] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF. El plan se encuentra disponible en: https://www.mef.qob.pe/contenidos/inv privada/planes/PNIC 2019.pdf

adecuadamente, sin recortar las medidas y facilidades con las que contaron hasta el 29 de noviembre de 2022, en virtud de la aplicación del Decreto de Urgencia 018-2019, por lo que propone que a los proyectos que fueron priorizados en el PNIC, le sean aplicables las medidas que se establezcan para los proyectos priorizados en el PNISC.

Beneficios de las medidas de fomento PNISC



Por lo expuesto, se evidencia que existe la necesidad por parte del poder ejecutivo de establecer medidas especiales para facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022- 2025, aprobado mediante Decreto Supremo 242-2022-EF, y otros proyectos de inversión pública, privada y público privada necesarios para promover la reactivación económica y el cierre de brechas en infraestructura.

Medidas para promover el desarrollo del PNISC



- **Sobre exceptuar de licencias de habilitación urbana y edificación, con cargo a regularización posterior.**

  Entre las medidas aplicables a los proyectos priorizados en el PNI, se encuentra la de exceptuar de la obligación de obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación de manera previa a la ejecución de los proyectos priorizados en el PNI: siendo que la obtención de las referidas licencias deberán ser regularizadas ante las municipalidades correspondientes, de conformidad con el procedimiento previsto para tal fin en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA.

  Asimismo, cabe precisar que la presente medida señala expresamente que su aplicación no libera a los administrados de solicitar al Ministerio de Cultura (MINCUL) la autorización sectorial correspondiente, cuando los proyectos se encuentren vinculados a bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación.

  Es importante mencionar, la observancia estricta de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, las tasas que deban abonar los administrados para la obtención de las licencias comprendidas en esta medida se realizan a favor de las municipalidades.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 3 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas respecto a la medida de exceptuar de licencias de habilitación urbana y edificación, con cargo a regularización posterior.

- **Sobre establecer que las entidades públicas deben compatibilizar proyectos de inversión con los proyectos PNISC, de no ser posible, preferir la ejecución de estos.**

Es importante mencionar que diversas razones explican las demoras en la ejecución de proyectos, siendo una de las más recurrentes que sobre los mismos espacios que son necesarios para la ejecución de los proyectos exista interés para desarrollar otro tipo de proyectos afines a los intereses de las entidades públicas propietarias o competentes para otorgar derechos sobre de dichas áreas.

En ese sentido, para evitar la ocurrencia de situaciones similares el Poder Ejecutivo considera necesario establecer la obligación de las entidades públicas de compatibilizar y, de no ser posible, preferir la ejecución de los provectos de inversión priorizados en el PNISC frente a los demás provectos a su cargo o títulos habilitantes en trámite.

Finalmente, la normativa precisa que esta medida no limita o restringe la aplicación del artículo 41 del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo 015-2020- VIVIENDA, referido a la transferencia de inmuebles de propiedad del Estado u otorgamiento de otros derechos reales para las obras de infraestructura declaradas de necesidad publica e interés nacional.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 4 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas para establecer que las entidades públicas deben compatibilizar proyectos de inversión con los proyectos PNISC, de no ser posible, preferir la ejecución de estos.

- **Sobre establecer que las entidades den prioridad a los proyectos APP en la tramitación de procedimientos administrativos.**

Al respecto, con la finalidad de agilizar los procedimientos para la ejecución de las iniciativas de inversión privada, el artículo 10 del Decreto Legislativo 1362, establece que las entidades públicas pertenecientes al sector público no financiero, bajo responsabilidad, tienen la obligación de otorgar prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante APP, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones que se requieran para el inicio y continuación de obras.

Sin embargo, dicha disposición sólo resulta aplicable a los proyectos de inversión que se ejecuten bajo la modalidad de asociación público privada, mientras que el resto de los proyectos deben sujetarse al régimen regular.

En ese sentido, para viabilizar la priorización de los proyectos del PNI, la medida permite la atención prioritaria de los procedimientos vinculados a los proyectos del PNI, siendo necesario para ello, establecer una excepción a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Asimismo, debe entenderse que la prioridad en la atención y tramitación se aplica a cada una de las fases de los procedimientos administrativos en cada entidad, de manera que se garantice la emisión del pronunciamiento final, en el menor plazo posible.

Para tal efecto, el solicitante informa a la entidad pública respectiva y a la Contraloría General de la República, sobre el incumplimiento de lo previsto en este artículo, a fin de que, bajo responsabilidad del titular, se adopten las medidas correspondientes.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 5 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas de establecer que las entidades den prioridad a los proyectos APP en la tramitación de procedimientos administrativos.

- **Sobre determinar el valor de tasación de inmuebles y a contratar peritos debidamente registrados.**

En la actualidad, parte de la problemática identificada en los procesos de adquisición de bienes de conformidad con el TUO del Decreto Legislativo 1192, está relacionada con los plazos necesarios para la aprobación del valor de tasación.

La normativa actual determina que para la fijación del valor de tasación, las entidades públicas se encuentran facultadas a contratar a peritos debidamente

inscritos en el Registro de Peritos Valuadores (REPEV) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el Registro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, ya sean personas naturales o jurídicas; los cuales son responsables civil, penal y administrativamente por el alcance de sus respectivos informes, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la entidad pública titular del proyecto.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 6 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas para determinar el valor de tasación de inmuebles y a contratar peritos debidamente registrados.

- **Sobre la Facultar a gestionar directamente las actividades e intervenciones para la liberación, remoción o reubicación de interferencias.**

La ejecución de proyectos de infraestructura guarda estrecha relación con la capacidad existente para la identificación y liberación de las interferencias. No obstante, la normativa actual no contempla la obligación de contar con un registro previo de las interferencias existentes en el área de influencia de un determinado proyecto (ya sea que estén a cargo de empresas prestadoras de servicios públicos u otros titulares), motivo por el cual, el proceso de ejecución puede verse retrasado en caso se presenten interrupciones no previstas producto de la existencia de interferencias no advertidas.

La experiencia internacional muestra la realización de un trabajo previo a la ejecución de la obra, situación que mejora considerablemente el horizonte en el cumplimiento de los objetivos, línea en la cual se hace evidente la necesidad de contar con un registro de interferencias para cada uno de los proyectos contenidos en el PNI.

Con la finalidad de dotar de mayor eficiencia a los procesos de liberación de interferencias, la normativa actual faculta a las entidades titulares de los proyectos priorizados en el PNIC, para financiar o ejecutar directamente las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, remoción o reubicación de interferencias, así definidas en el marco normativo aplicable o en los respectivos contratos suscritos por el Estado Peruano.

De igual manera, menciona que las empresas estatales o entidades públicas supervisan o aprueban las actividades e intervenciones vinculadas a la liberación de interferencias a su cargo, conforme a los términos establecidos en los convenios que para tal efecto suscriban con las entidades públicas titulares de los proyectos priorizados en el PNIC.

Para el caso de las interferencias a cargo de empresas privadas, las entidades públicas titulares de los proyectos priorizados PNIC realizan las coordinaciones necesarias con las referidas empresas, pudiendo suscribir para tal fin, los acuerdos o convenios correspondientes.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 7 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas de la Facultar a gestionar directamente las actividades e intervenciones para la liberación, remoción o reubicación de interferencias.

- **Sobre imponer servidumbres en favor del Estado con carácter forzoso, perpetuo o a título oneroso o gratuito.**

La medida sobre la imposición de servidumbres el DU 018-2019 facultaba a las entidades públicas titulares de los proyectos priorizados en el PNIC, a imponer servidumbres en favor del Estado con carácter forzoso, perpetuo o a título oneroso o gratuito, según corresponda en la normativa aplicable, de los inmuebles requeridos para la implementación de los proyectos priorizados en el PNIC.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 12 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas para imponer servidumbres en favor del Estado con carácter forzoso, perpetuo o a título oneroso o gratuito.

- **Sobre incorporar a los opinantes al acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea de base del EIA-D, SD o su modificación.**

Incorporar a los opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes al acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental detallado, semidetallado o su modificación, tanto en visitas de campo como en la suscripción de las actas y elaboración de recomendaciones.

El DU 018-2019 estipulaba que la autoridad ambiental competente incorpora a los opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes en el acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental detallado, semidetallado o de su modificación, tanto en las visitas de campo como en la suscripción de las actas y elaboración de recomendaciones, considerando lo señalado en el Sub Capítulo IV del Título III, del "Reglamento

del Título II de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de la Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM. La información a ser levantada puede ser complementada con información secundaria que el titular presenta, en los casos que corresponda. El financiamiento de lo establecido en el presente párrafo se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego correspondiente a cada entidad conforme a lo señalado en el párrafo 14.1 del artículo 14 del presente Decreto de Urgencia.

Consideramos importante que se debe brindar acompañamiento y seguimiento en los procesos en materia ambiental, incorporando a los opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes al acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea de base del EIA-D, SD o su modificación. También establecer la obligación de que las entidades reporten periódicamente al EESI los avances en el desarrollo o ejecución de los proyectos priorizados en el PNISC.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 13 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas para incorporar a los opinantes al acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea de base del EIA-D, SD o su modificación.

- **Reducir los plazos para procedimientos de intervenciones arqueológicas (CIRA, PMA, PRA) y aplicación de silencio administrativo positivo.**

Al respecto El DU 018-2019 estipula que, tratándose de los proyectos priorizados en el PNIC, la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), se da en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, sujetos a las normas del silencio administrativo positivo.

Asimismo, para la ejecución de los proyectos priorizados en el PNIC, que impliquen remoción de suelos, una vez emitido el CIRA o en las excepciones establecidas en el Artículo 57 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2014-MC, se debe contar con el respectivo Plan de Monitoreo Arqueológico autorizado por la instancia competente del Ministerio de Cultura. En ningún caso la autorización es otorgada en vía de regularización.

La aprobación del informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico se da en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo.

Al respecto, con la finalidad de concretar la liberación oportuna de las áreas necesarias para la ejecución de los proyectos priorizados en el PNI, el DU 018-2019 reduce los plazos para que el MINCUL atienda las solicitudes de intervenciones arqueológicas con la finalidad de obtener en forma oportuna las autorizaciones y aprobaciones necesarias para la ejecución de las obras de los proyectos priorizados en el PNI.

La reducción total de los plazos con la propuesta es de cuarenta (40) días hábiles, conforme al siguiente detalle:

Gráfico - Procesos de intervenciones arqueológicas

PROCEDIMIENTOS		PLAZO DE ATENCIÓN (Días Hábiles/Dias Calendarios)	Nuevo Plazo
Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológico (CIRA)	Expedición	20/29	10/15
Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)	Autorización	10/15	10/15
	Aprobación del Informe Final	30/43	30/43
Proyecto de Evaluación Arqueológico (PEA)	Autorización	30/43	15/43
	Aprobación del Informe Final	30/43	30/43
Proyecto de Rescate Arqueológico (PARA)	Autorización	30/43	15/43
	Aprobación del Informe Final	30/43	30/43

Adicionalmente a la reducción de los plazos antes señalados, la medida extraordinaria contempla la aplicación del silencio administrativo positivo en los algunos trámites que se sigan para la obtención del CIRA, PMA, PEA y PRA.

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 15 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas para reducir los plazos para procedimientos de intervenciones arqueológicas (CIRA, PMA, PRA) y aplicación de silencio administrativo positivo.

- **Establecer que las entidades deben reportar al EESI avances de los proyectos del PNISC.**

La inclusión de la medida sobre los reportes mensuales de avance de los proyectos priorizados en el PNI prevista en el artículo 10 del DU N° 018-2019, tenía por finalidad cubrir el vacío de competencias en la regulación existente en dicho contexto respecto a la identificación de una entidad encargada de dar seguimiento a los proyectos priorizados en el PNI responsable de la administración de la información relacionada con el avance físico y financiero de su implementación.

Frente a dicha situación, considerando el mandato de planeamiento y actualización del PNI que recae en el MEF en virtud de la Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1362, y que la información vital para dar el seguimiento de cartera de los proyectos priorizados proviene de los sistemas administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas, el artículo 10 del referido 018-2019 establecía que las actividades de seguimiento del PNI sean asumidas por el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversiones (EESI) del MEF.

Complementariamente, el artículo 10 antes mencionado también disponía la obligación de las entidades públicas titulares de los proyectos priorizados en el PNI, bajo responsabilidad del titular, de reportar mensualmente al EESI, el avance de la implementación física y financiera de los proyectos priorizados en el PNI.

Asimismo, para el cumplimiento de la obligación antes señalada, el EESI debía aprobar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, y mediante resolución directoral de su Director(a) Ejecutivo(a), los formularios que utilizarían las entidades públicas para el envío de la información relacionada con el proyecto priorizado en el PNI. En ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 03-2019-EF/10.08 del 19 de diciembre de 2019, se aprobó la Directiva N° 002-2019-EF/10.08, "Lineamientos para el envío de información al Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte del titular de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC)[35]

Es importante precisar que esta medida estaba contenida en artículo 10 del DU 018-2019, que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2022.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería la reactivación económica y el cierre de brechas en infraestructura. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en

[35] Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/396789-03-2019-ef-10-08.

consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 — 2025, aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2022- EF, y otros proyectos de inversión pública, privada y publico privada necesarios para promover la reactivación económica y el cierre de brechas en infraestructura.

b) Modificar el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, con la finalidad de optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para el desarrollo de proyectos.

Al respecto, el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de APP implica que, independientemente de su clasificación o de su origen, el Estado asuma, por largos años, compromisos firmes y compromisos contingentes que lo obligarán a destinar recursos públicos para cumplir con sus obligaciones, con la finalidad de cautelar la sostenibilidad fiscal de acuerdo a lo dispuesto por el principio de Responsabilidad fiscal establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1362.

Asimismo, resulta relevante mencionar que dicho proceso de desarrollo se caracteriza por la implementación de un enfoque iterativo. Al respecto, la Guía de Referencia para Asociaciones Público Privadas 3.0 (BID, BasD y BM, 2017), señala que los gobiernos deben desarrollar proyectos en los que se justifique mediante un análisis costo beneficio, que las APP generen mayor valor por dinero que la contratación pública tradicional y que sean fiscalmente responsables. No obstante, determinar si un proyecto cumple con estos criterios, solo podrá hacerse cabalmente hasta que el mismo haya sido totalmente diseñado.

Frente a esta premisa, el análisis y formulación de un proyecto de APP se desglosa en varias etapas en las cuales se desarrolla y se realiza una evaluación de forma iterativa, es decir, de evaluaciones que, a lo largo de las sucesivas fases, se van haciendo cada vez más rigurosas conforme al nivel de información disponible, de modo tal que permita ir refinando más la estructura de las APP con la definición de sus detalles conforme se avance en las sucesivas fases[36].

Considerando lo señalado en los apartados anteriores tenemos que, por un lado, el desarrollo de proyectos de APP exige cautelar la sostenibilidad fiscal y los compromisos que asume el Estado de acuerdo a lo dispuesto por el principio de

[36] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y Banco Mundial (WB). (2017). Guía de Referencia para Asociaciones Público Privadas, versión 3.0. p.70. Recuperado de: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-reference-guide-3-0

Responsabilidad fiscal; y, la aplicación del enfoque iterativo es transversal y abarca todos las opiniones, decisiones, actuaciones y actos efectuados en las cinco fases del desarrollo de APP.

Ello permite poner de manifiesto el gran desafío que plantea la promoción de APP en materia de evaluación de proyectos y control de efectos fiscales, dado que la evaluación de la capacidad presupuestal del Estado también debe sujetarse a la aplicación del enfoque iterativo, conforme el nivel de información y desarrollo del diseño del proyecto.

Lo antes dispuesto contrasta con la evaluación de la capacidad presupuestal que se realiza actualmente en las fases de los proyectos de APP, dado que si bien se reconoce que la aplicación del enfoque iterativo es transversal; no obstante, el análisis de la referida capacidad presupuestal implica el cumplimiento de un estándar igual en todas las fases, indistintamente del nivel de evaluación con el que se cuenta.

En efecto, la evaluación de la Capacidad Presupuestal requerida por el marco normativo vigente no resulta consistente con la información disponible, dado que incluso desde las fases tempranas se requiere que la entidad sustente la sostenibilidad fiscal de los proyectos mediante conforme lo establecido en las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público (Ficha de Capacidad Presupuestal).

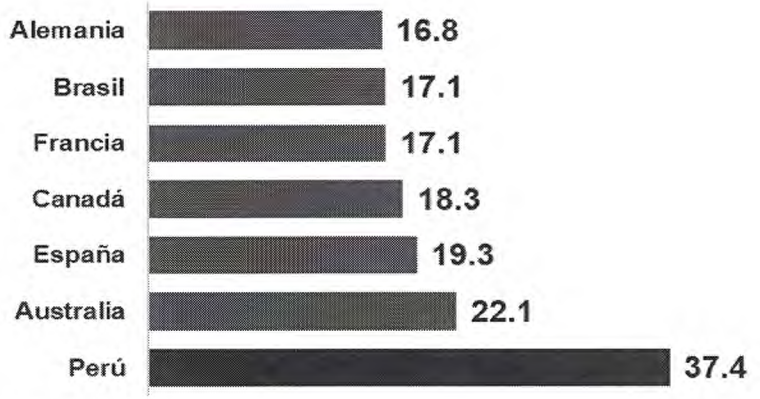
Para ello, el poder ejecutivo considera que se requiere realizar modificaciones al Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, con la finalidad de optimizar el procedimiento de sustento de capacidad presupuestal por parte de las entidades públicas titulares de proyectos de APP, y la correspondiente revisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en las fases respectivas, para generar eficiencias y un avance más dinámico de los proyectos de APP, así como promover la ampliación de la cartera de proyectos de inversión público privada por parte de las entidades públicas.

Por otro lado, la Comisión considera que la regulación genera una duplicidad en los procesos de APP que retrasan las inversiones[37]. El tiempo de adjudicación de contratos de APP en Perú supera los 3 años, el doble que países como Brasil y Canadá. Una de las razones de ello es la superposición y duplicidad de funciones a lo largo del proceso de adjudicación de las APP, para lo cual se detallan algunos ejemplos en el proceso de APP:

[37] Fuente: Banco Mundial (2020). PolicyNote onAttractingPrivateInvestment toInfrastructurein Peru; CPC (2021). Informe de Competitividad 2021

- Doble evaluación del IMIAPP (sector y MEF)
- Existe una duplicidad del más del 75% del contenido del estudio de perfil y el Informe de Evaluación en las APP cofinanciadas.
- Falta de especialización de las opiniones de los organismos reguladores: solo el 33% de sus opiniones en los informes previos en las APP son materia de sus competencias (temas tarifarios, facilidades esenciales y de calidad del servicio).

Tiempo de adjudicación de contratos APP (en meses)



Fuente: Banco Mundial, 2020

Por otro lado, el proceso de desarrollo de una APP se caracteriza por realizar evaluaciones que se van haciendo cada vez más rigurosas en cada fase. Así, la evaluación de la capacidad presupuestal (CP) se debe realizar conforme al nivel de información y desarrollo del diseño del proyecto.

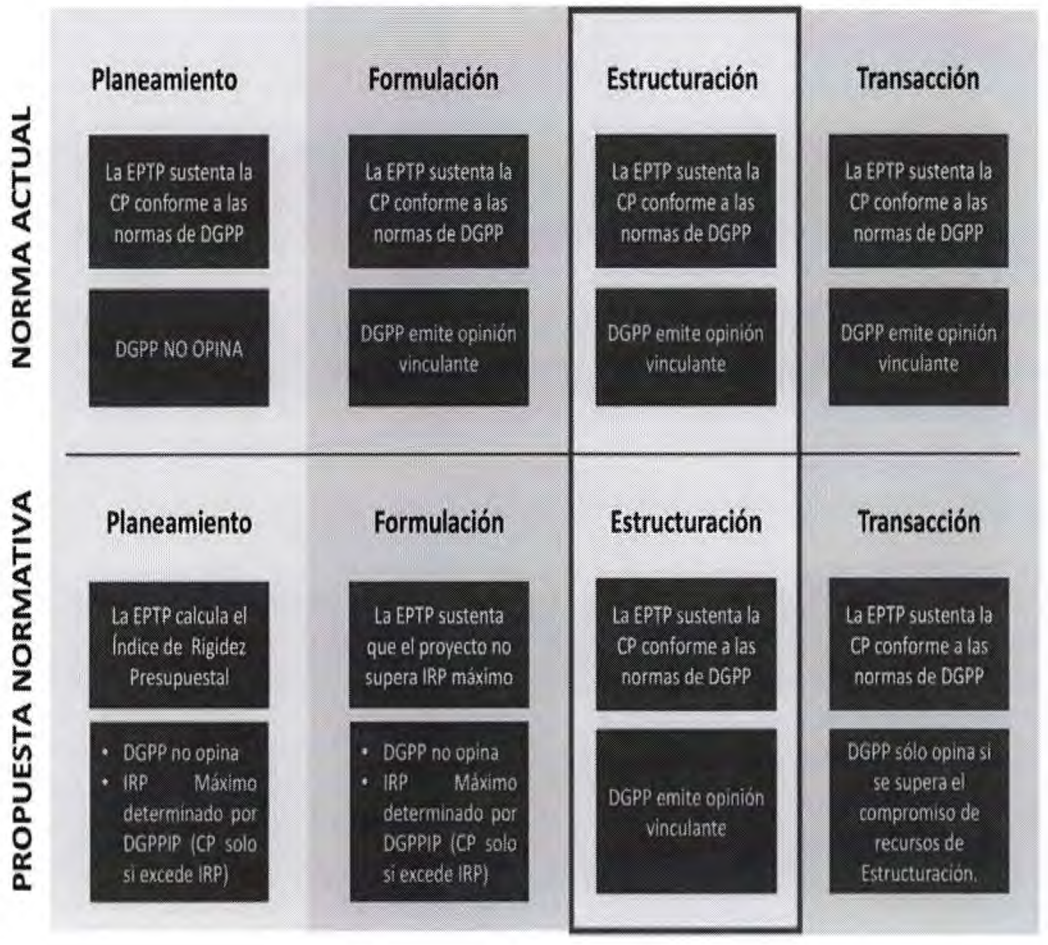
No obstante, la evaluación de CP es igual de rigurosa en todas las fases y exige acreditar la CP incluso sin haber determinado variables críticas del proyecto, tomando en promedio 9.2 meses, pero puede llegar hasta 18 meses en una misma fase.

El Poder ejecutivo considera que la modificación normativa referente al análisis y evaluación de la capacidad presupuestal un proyecto de APP se podría ahorrar hasta 7 meses en cada fase (formulación, estructuración y transacción), que se traduce en un ahorro de 21 meses hasta la adjudicación.

Po lo que propone incorporar el concepto de Índice de Rigidez Presupuestal (IRP) para las fases tempranas de APP. Solo se aplicaría la normativa de DGPP si se excede el IRP máximo que determine la DGPPIP.

De igual manera, el análisis de Capacidad Presupuestal (Ficha de CP) bajo las normas de DGPP, se reserva para las fases de Estructuración y Transacción.

Gráfico – Medidas para Agilizar la capacidad Presupuestal para APP



Cuadro - Beneficios de la modificación normativa de capacidad presupuestal en plazos y montos de inversión de proyectos

Con la modificación normativa referente al análisis y evaluación de la capacidad presupuestal un proyecto de APP se podría ahorrar hasta **7 meses en cada fase** (formulación, estructuración y transacción), que se traduce en un ahorro de **21 meses** hasta la adjudicación.



Fuente: MEF
Nota: (*) El proyecto no incluye componentes de inversión, pero si un componente de OyM S/ 325 MM

Según el análisis expuesto esta medida favorecería la optimización del procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para el desarrollo de proyectos. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para modificar el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, con la finalidad de optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para el desarrollo de proyectos.

c) Modificar la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, con la finalidad de establecer, de manera excepcional, reglas que permitan efectuar variaciones a los convenios de inversión desarrollados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, cuando se aprueben dispositivos normativos que tengan por

finalidad cuidar la salud, la seguridad o la vida humana, considerando lo dispuesto en los acuerdos de promoción comercial del Perú suscrito con otros países.

Actualmente, el marco normativo que regula el mecanismo de Obras por Impuestos (Oxl) se encuentra conformado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 2923011 (TUO de la Ley N° 29230) y su Reglamento.

Al respecto, la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final del TUO de la Ley N° 29230 establece reglas para la variación o modificaciones del monto del convenio de inversión, las cuales no deben exceder del: i) 30% del monto total de inversión del convenio de inversión inicial, en caso cuente con expediente técnico aprobado; y, ii) 50% del monto total de inversión del convenio de inversión inicial, en caso no cuente con expediente técnico aprobado.

En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, el reconocimiento de la inversión a la empresa privada incluye las variaciones aprobadas y convenidas con la entidad mediante adenda por Mayores Trabajos de Obra, debido a modificaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecución del proyecto de Oxl, siempre que éstas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del convenio de inversión correspondiente.

Sobre el particular, cabe señalar que en el caso de la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado", el contrato puede modificarse por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente (para lo cual requiere la aprobación de la Entidad), y dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. Así, según lo dispuesto por el artículo 34 del TUO de la LCE, la modificación del contrato puede ocurrir —entre otros supuestos— por la ejecución de prestaciones adicionales.

Por otro lado, la normativa vigente en el Perú con relación a la variación del monto original de inversión de los contratos o convenios está en concordancia con lo previsto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú con otros países de la región y del mundo. Así, por ejemplo, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos establece que la variación de los montos originales de los contratos de obra no podrá exceder del 50% del monto del contrato inicial, siendo que dicho umbral solo podrá ser superado cuando las variaciones tengan por finalidad proteger, entre otros, la seguridad, el orden público, la salud o la vida humana

En ese sentido, con la finalidad de adecuar el ordenamiento interno que regula el mecanismo de Oxl con la normativa aplicable a la obra pública, y verificando el cumplimiento de las obligaciones y excepciones contenidas en los Acuerdos

Comerciales suscritos por el Perú, se propone modificar la Ley N° 29230 con la finalidad de establecer, de manera excepcional, reglas que permitan efectuar variaciones a los convenios de inversión desarrollados bajo el mecanismo de Oxl.

Sobre esta normativa se ha recibido una autógrafa observada del Poder Ejecutivo que continuará el procedimiento legislativo correspondiente. En ese sentido, **NO resulta viable** otorgar las facultades legislativas en este extremo debido a que se estaría sobrerregulando sobre la materia.

d) Modificar el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, así como la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; con la finalidad de agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias e imposición de servidumbres para el desarrollo de proyectos de inversión pública, privada y público privada; a través del establecimiento de mejoras en el incentivo pagado para obtener la posesión anticipada de inmuebles, estableciendo disposiciones especiales para la contratación de servicios, consultorías y obras requeridos en el marco del citado Decreto Legislativo N° 1192 así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.

Con la finalidad de agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias e imposición de servidumbres, resulta necesario modificar el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. En atención ello, se propone:

- **Incremento del incentivo para la entrega anticipada**

  Consiste en autorizar el pago de un 30% adicional sobre el valor de tasación, en caso de entrega anticipada del predio. El otorgamiento del incentivo resulta aplicable a los proyectos que se incorporen en el PMI y en el IMIAPP y en todas las fases de inversión pública o público privada, siempre que el Sujeto Activo acredite contar con los recursos necesarios con cargo a su presupuesto institucional, es decir, cuente con disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Esta medida permite reducir hasta cuarenta (40) días hábiles, tratándose de predios libres, sesenta (60) días hábiles, tratándose de bienes ocupados o en uso, y ciento cincuenta (150) días

hábiles, tratándose de predios de uso comercial o industrial, conforme a la modificación realizada al inciso e) del artículo 20.4 inciso de la presente norma.

Al respecto, la propuesta del pago adicional del 30% sobre el valor de tasación, en caso de entrega anticipada del predio, Actualmente el incentivo es de solo 20% (solo ARCC paga el 30%). Por lo que se espera que, con el incremento del incentivo, el Sujeto Pasivo acepte la transferencia voluntaria en el marco del trato directo y se reduzcan los procedimientos de expropiaciones en caso de negativa.

De igual manera, se estima que esta medida va a permitir reducir los plazos entre 40 días hábiles (predios libres), 60 días hábiles (bienes ocupados o en uso) y 150 días hábiles (predios comerciales o industriales)

Al respecto, se propone la modificación del DL 1192, Art. 4.5, 20, 21 y la incorporación de la Vigésimo Novena DCF en DL 1192.

> *" **4.5. Incentivo:** Es el monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al 20% del valor comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte transferir la propiedad del inmueble en el marco del proceso de Adquisición."*

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas de incremento del incentivo para la entrega anticipada.

- **Establecer disposiciones especiales para la contratación de servicios, consultorías y obras requeridos en el marco del citado Decreto Legislativo 1192**

Consiste en autorizar a las entidades públicas titulares de proyectos priorizados en el PNISC a inaplicar la Ley 30225 para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192, así como las contrataciones de servicios de consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de Interferencias en la ejecución de inversiones públicas y público privadas a su cargo, hasta el 31 de diciembre de 2025. La inaplicación de la Ley 30225 para la contratación de obras se realiza hasta por un monto de 3600 UIT (16 MM aproximadamente). Con ello, se agilizarán las contrataciones de servicios, servicios de consultoría y obra y otros para obtener la libre disponibilidad de los terrenos. Asimismo, se podrá cumplir con los plazos comprendidos en los proyectos necesarios para la ejecución de estas obras.

Al respecto, la Décimo Séptima DCF del Decreto Legislativo 1192, autorizo, excepcionalmente y hasta el 28 de julio de 2021, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del presente Decreto Legislativo, así como las contrataciones de servicios de consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de Interferencias.

Las contrataciones a que se hace referencia en el presente artículo deben encontrarse acordes con los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Peruano; la inaplicación de la Ley 30225 para la contratación de obras se realiza hasta por un monto de tres mil seiscientas (3600) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La Contraloría General de la República realiza el control simultáneo de las contrataciones de obras antes señaladas, debiendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitir copia del contrato de la obra y los documentos que lo sustenten.

Con la medida de exonerar de la LCE las contrataciones de servicios y obras necesarias para la adquisición de predios y liberación de interferencias, hasta por 3600 UIT (16 MM aproximadamente), se agilizarán la contratación de servicios, servicios de consultoría de obra y otros para obtener la libre disponibilidad de los terrenos. Además, dicha medida permitirá el cumplimiento de plazos comprendidos en los proyectos necesarios para la ejecución de estas obras. al respecto propone la modificación de la Primera DCF en el DL 1192.

Por las consideraciones expuestas, **resulta viable** otorgar las facultades solicitadas de establecer disposiciones especiales para la contratación de servicios, consultorías y obras requeridos en el marco del citado Decreto Legislativo 1192.

- **Optimización y mejora de procesos**

Entre las principales medidas, tenemos:

- Establecer que del trato directo a la expropiación en caso el Sujeto Pasivo se niegue a recibir el pago y consecuentemente a firmar el formulario registral.
- Reducción en el plazo para cuestionar la propiedad de 10 a 5 días hábiles y aprobar normas que autorizan la expropiación en un plazo de 10 días hábiles.
- Precisiones a las inspecciones oculares en el marco de la fijación del valor de la tasación.
- Establecer plazo a las EPS para informar sobre interferencias y habilitación para liberación directa en caso de que no informen.
- Participación de jueces de paz en lugares sin notarios públicos.
- Incorporar reglas de elaboración del expediente técnico legal.
- Facilitar la consignación directa en procesos judiciales de mejor derecho de propiedad.

- Precisar reglas para los casos de duplicidad registral.
- Incorporar plazos para la desocupación de predios industriales y comerciales.
- Establecer reglas para el reconocimiento de mejoras.
- Precisiones en la transferencia de inmuebles de propiedad del Estado u otorgamiento de otros derechos reales.
- Incorporación de la definición de ocupante como actor del proceso de adquisición y expropiación de predios, diferente al propietario y al poseedor.
- Habilitación de la ATU como Sujeto Activo.

Certificación de formulario por jueces de paz, esta medida propone habilitar que la certificación del contenido y firmas del Sujeto Activo, Sujeto Pasivo y el Beneficiario puestas en el formulario registral de adquisición sea conferida al Juez de Paz. Solo será aplicable en aquellos lugares donde no exista notario público.

Esta propuesta beneficia a los Sujetos Pasivos que viven en las zonas más alejadas del país donde se ejecutan las obras de infraestructura vial Al respecto se propone la modificación del Artículo 4.6 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para la certificación de formulario registral por el Juez de Paz.

- **Precisiones para el Sujeto Pasivo en bienes inmuebles inscritos**, esta medida propone comunicar el inicio de expropiación cuando existe más de un propietario o cónyuge sobreviviente. Reducir el plazo para cuestionar la propiedad de 10 a 5 días hábiles.

También, establecer la entrega anticipada de la posesión del inmueble, precisándose el momento de entrega del bien, el cual iniciaría desde el momento de la aceptación del Sujeto Pasivo a la oferta de Adquisición.

De igual manera, establecer el endoso de la consignación por juez o árbitro a favor del legítimo propietario cuando se defina la propiedad del bien en la vía judicial o arbitral.

Esta propuesta estima brindar celeridad en el procedimiento de inscripción del inmueble. De igual manera, aclarar alcances de la norma y evitar una interpretación distinta entre los operadores jurisdiccionales. Al respecto se propone la modificación de los Artículos 6.1 y 6.4 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades de precisiones para el Sujeto Pasivo en bienes inmuebles inscritos

- **Elaboración de informe técnico in situ**, esta medida propone facultar al Sujeto Activo a elaborar el expediente técnico legal con la información que pueda obtener in situ, agotando fuentes de información municipal o registral, dejando constancia a través de un acta notarial o policial de la negativa del Sujeto Pasivo.

Esta propuesta busca evitar la invalidación del informe técnico de tasación o la continuación del proceso de adquisición ante la negatividad de los propietarios, poseedores y ocupantes de los inmuebles afectados. Al respecto se propone la modificación del Artículo 13.1 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para la elaboración de informe técnico in situ.

- **Constancia de comunero y acondicionamiento de área remanente**, esta medida considera, precisar la constancia de comunero como uno de los documentos que puede presentar el Sujeto Pasivo. Asimismo, precisar que, para la determinación del daño emergente, se debe considerar —entre otros— al acondicionamiento de área remanente.

Dicha medida va a permitir adecuar el término comunero a lo dispuesto en la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.

Asimismo, en el caso de predios afectados parcialmente, el acondicionamiento del área remanente se realiza a criterio del perito tasador; por ello, se debe establecer que el acondicionamiento sea en condiciones similares a las identificadas al momento de la inspección técnica. Al respecto se propone la modificación del Artículo 15. 2 y 15.3 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades sobre la Constancia de comunero y acondicionamiento de área remanente.

- **Precisiones al procedimiento**, esta medida propone establecer que, tratándose de inmuebles de uso industrial o comercial, el Sujeto Activo requerirá la desocupación y entrega de este dentro de un plazo máximo de 90 días hábiles de notificada.

Al respecto, en caso el Sujeto Pasivo se niegue a recibir el pago por el trato directo, y consecuentemente a firmar el Formulario Registral, se de inicio al proceso de expropiación.

Dicha medida ayuda a introducir optimizaciones en el desarrollo del procedimiento de adquisición de terrenos. De igual manera, evitar reprocesos

para ante negativas a suscripción del formulario registral. Al respecto se propone la modificación de los Artículos 20.4 y 20.5 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades sobre las precisiones al procedimiento.

- **Procedimiento de expropiación**, esta medida propone reducir el plazo de 15 a 10 días hábiles para que el Sujeto Activo expida la norma que aprueba la ejecución de Expropiación y el valor de la Tasación.

Dicha medida busca brindar celeridad al proceso expropiatorio y coadyuvará en la reducción del plazo para la obtención de la posesión. Al respecto se propone la modificación del Artículo 27 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades sobre modificar el procedimiento de expropiación.

- **Duplicidad de partidas**, esta medida va permitir que cuando exista duplicidad registral donde el titular de la partida registral más reciente sea el Estado, el registrador cierra, a solicitud del sujeto activo, la partida más reciente.

Dicha medida busca dar celeridad al proceso de adquisición de áreas, reduciendo los tiempos de trámites judiciales y administrativos. Al respecto se propone la modificación del Artículo 29.2 y 29.5 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para modificar la duplicidad de partidas

- **Transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,** esta medida propone establecer un plazo para que la entidad, empresa estatal o terceros ocupantes desocupen y entreguen la posesión de los inmuebles, a favor del sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el proyecto.

De igual manera, plantea reconocer a las personas jurídicas de derecho público, indistintamente, las mejoras realizadas y/o los gastos de traslado de los bienes muebles.

Esta medida va a permitir mejorar el procedimiento de entrega de los bienes que se encuentran ocupados, para el desarrollo de proyectos. Al respecto se propone la modificación del Artículo 41 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para modificar la transferencia de inmuebles de propiedad del Estado

- **Procedimiento y plazo para la liberación de interferencias**, esta medida propone establecer requerimientos técnicos e información necesaria que debe ser aportada por las EPS o titulares de las interferencias respecto del alcance, costo y tiempo, que permitan realizar las acciones que promuevan la suscripción de acuerdos que deriven en la ejecución de actividades para la liberación de interferencias.

Esta medida va a permitir reforzar el proceso de liberación de interferencias, incluyendo procedimientos sancionadores o la imposición de medidas correctivas. Al respecto se propone la modificación del Artículo 43 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para modificar el procedimiento y plazo para la liberación de interferencias.

- **Ejecución alternativa de la liberación de interferencias,** esta medida propone facultar a la entidad para realizar la liberación de interferencias dentro del área de derecho de vía o de ejecución de obras, cuando:

a) No se pueda identificar al titular de las instalaciones, infraestructura o bienes que se encuentren dentro del área.
b) El titular autoriza a la entidad a realizar su remoción al haberla declarado en abandono, mediante comunicación escrita.

Esta medida va a permitir generar soluciones frente a limitaciones materiales y formales que puedan presentarse durante el proceso de liberación de interferencias. Al respecto se propone la modificación del Artículo 45 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para modificar la ejecución alternativa de la liberación de interferencias.

- **Precisiones al reconocimiento de mejoras,** esta medida plantea precisar que el Sujeto Activo debe consignar el pago ante el Banco de la Nación. Así, ante la negativa del ocupante/poseedor en entregar de forma voluntaria el predio, se dará inicio al procedimiento de ejecución coactiva.

De igual manera, propone establecer que el valor por las mejoras encontradas en el inmueble y/o gastos de traslado sea determinado a través

de un Informe Técnico de Tasación, elaborado por perito tasador adscrito al MVCS.

Esta medida va a permitir mejorar el procedimiento de reconocimiento de mejoras y/o gastos de traslado, a través de la regulación de forma de pago y determinación del valor de las mejoras. Al respecto se propone la modificación de la Tercera DCF del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para modificar la ejecución alternativa de la liberación de interferencias.

- **Definición de "ocupante",** esta medida plantea incorporar formalmente la definición de "ocupante", como un actor del proceso de adquisición y expropiación de predios.

Esta medida va a permitir considerar en la norma a todos los actores que participan en el proceso de liberación de terrenos e interferencias, a fin de evitar contingencias en el desarrollo del proceso. Al respecto se propone la modificación del Artículo 4.15 del DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para modificar la definición de "ocupante".

- **Saneamiento físico legal para regularizar la titularidad del área a favor del Estado,** esta medida plantea establecer que el sujeto activo podrá efectuar el saneamiento físico legal, a efectos de regularizar la titularidad del área a favor del Estado. Para ello, deberá efectuar una publicación en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, y luego solicitar ante el Registro de Predios la Anotación Preventiva. Asimismo, podrá solicitar el levantamiento de todas las cargas y/o gravámenes que pudiera afectar el área de interés. Si luego del plazo de 30 días hábiles, no ha mediado oposición de terceros, se podrá solicitar la inscripción definitiva.

Esta medida va a permitir establecer alternativas para el saneamiento físico legal de las áreas en favor del Estado, a través de medios que garanticen la publicación y futura afectación de dichas áreas. Al respecto se propone la incorporación de la Vigésimo Séptima Disposición Complementaria Final en el Decreto Legislativo 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para la modificación del saneamiento físico legal para regularizar la titularidad del área a favor del Estado.

- **Habilitar a la ATU como Sujeto Activo**, esta medida propone que se constituya como Sujeto Activo.

Con esta propuesta se espera que la ATU cuente con autonomía para desarrollar las actividades requeridas por los proyectos como responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación.

Al respecto se propone la incorporación de Vigésimo Octava DCF en el DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para habilitar a la ATU como Sujeto Activo.

- **Adecuación de terminología,** esta propuesta considera necesario realizar modificaciones al DL 1192 para adecuarse a la terminología establecida en la normativa vigente (Decreto Legislativo 1439 y Ley 29151). En particular, resulta necesario uniformizar los términos de "predios" y "bienes inmuebles" que emplean los dos sistemas que actualmente coexisten para la gestión de la propiedad estatal: el SNBE y el SNA.

Esta medida va permitir brindar mayor certeza y predictibilidad a las entidades públicas y agentes privados que aplicarán las disposiciones de la norma. Al respecto se propone la incorporación de diversos artículos en el DL 1192.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para la adecuación de terminología

- **Aceptación de la valuación comercial y aprobación de la constitución del derecho de servidumbre**

De la información emitida por la Subdirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), se aprecia, que en el caso del Gobierno Regional de Arequipa, de un total de 75 expedientes (supervisados) remitidos por la SBN (calificados y con tasaciones de valorización) al citado Gobierno Regional, únicamente 34 expedientes cuentan con aprobación del derecho de servidumbre sobre predios del Estado requeridos para proyectos de inversión, pese a tratarse de expedientes que fueron remitidos por la SBN en el período que corre desde el 20 de agosto de 2014 al 02 de abril de 2022.

Esta situación evidencia el retardo y las dificultades presentadas para la continuidad de los proyectos de inversión privada, pese a las acciones de capacitación que la SBN viene brindando a las entidades que conforman el

Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE), así como de la asistencia técnica que además se otorga a los gobiernos regionales con funciones transferidas.

Ante ello resulta necesario adoptar alguna medida regulatoria que establezca plazos para la culminación del trámite y aprobación de los procedimientos de servidumbre sobre predios estatales requeridos para proyectos de inversión, y además se habilite a la SBN para culminar el procedimiento con la aprobación de la servidumbre a favor de los titulares de los proyectos de inversión, ante la inacción de las entidades titulares de los predios, sin variar la distribución de ingresos a favor de las respectivas entidades titulares de los predios estatales.

En ese sentido, actualmente de los casos presentados ante la SBN se aprecia algunos supuestos de terrenos requeridos para la ejecución de proyectos de inversión que se encuentran sobre bienes de dominio público, que cuentan con opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como entidad pública competente para bienes de dominio público hidráulico estratégico, en la cual manifiesta que el derecho de servidumbre en esos casos no presenta afectación alguna al área bajo su competencia, por lo que debería procederse a su otorgamiento de cumplirse los demás requisitos legales. Sin embargo, la SBN no puede otorgar la servidumbre debido a la restricción reglamentaria antes señalada.

Aceptación de valuación comercial y constitución del derecho de servidumbre, esta medida plantea establecer plazos para la culminación del trámite y aprobación de los procedimientos de servidumbre sobre predios estatales requeridos para proyectos de inversión.

De igual manera, la medida busca que la constitución de servidumbre no proceda sobre bienes de dominio público hidráulico considerados estratégicos por la ANA, con excepción de los casos en los que dicha entidad determina que no existe afectación.

Esta medida permitirá cumplir con los plazos establecidos para la culminación del trámite y aprobación de los procedimientos de servidumbre; y que, en caso de inacción de las entidades titulares, la SBN culmine el procedimiento con la aprobación de la servidumbre.

De igual manera, promover la constitución de las servidumbres para la ejecución de obras, considerando la opinión de la ANA.

Al respecto se propone la modificación del Artículo 21 de la Ley 30327.

Por lo expuesto, **resulta viable** otorgar las facultades para la aceptación de valuación comercial y constitución del derecho de servidumbre.

- **Asunción de titularidad de oficio de la SBN**

Con la descentralización, la administración de los predios eriazos y urbanos del Estado han venido pasando de forma progresiva a los Gobiernos Regionales que cuentan con funciones transferidas efectivizadas; no obstante, existen grandes proyectos de inversión pública y privada, los cuales dada su envergadura e importancia nacional, requieren que la SBN, como ente rector del Gobierno Nacional, continúe administrando dichos predios sobre los cuales recaen proyectos de inversión pública y privada para facilitar su ejecución, así como de otros predios estatales, con la finalidad de garantizar su entrega para la ejecución de proyectos de inversión que son considerados de importancia nacional.

No obstante, también es necesario facilitar la entrega de predios estatales para la ejecución de proyectos de inversión que son declarados de interés nacional, carácter o alcance nacional, dada su relevancia en el ámbito nacional. Por lo anterior, los proyectos que cuentan con dichas declaratorias por haber alcanzado dicha calificación justificada en el expediente técnico respectivo, deben continuar su respectivo trámite ante la SBN con la finalidad de alcanzar la aprobación de los actos de administración y disposición requeridos, y así no retrasar el impulso de los grandes proyectos de inversión pública o privada. Se sustenta que, en la medida que se trata de grandes proyectos de inversión, de interés público de nivel nacional, y no regional o local, se requiere que la SBN, como ente rector del Gobierno Nacional, sea la entidad que atienda dichos pedidos que son relevantes y urgentes para impulsar proyectos de inversión privada que beneficiarán a todo el país.
De la información que obra en SBN se aprecia que existen dificultades por parte de las entidades estatales para la culminación de procedimientos sobre predios del Estado derivados por la SBN, lo cual se agrava si se trata de proyectos de importancia nacional, quedando supeditada a la decisión de la entidad estatal titular del predio sobre el cual recae el proyecto de inversión, que en muchos casos no atiende o retarda los actos de administración o disposición de dichos predios, a pesar que son necesarios para la ejecución de proyectos de inversión requeridos.

En tal sentido, ante la urgencia del cumplimiento de compromisos del Estado en la ejecución de proyectos de inversión de importancia nacional, esta situación requiere de una medida regulatoria que habilite a la SBN como ente rector de nivel nacional a fin de que asuma la titularidad de dichos predios, en representación del Estado para una administración más célere y eficiente.

Asunción de titularidad de oficio de la SBN en los predios comprendidos en proyectos declarados de interés nacional, esta medida plantea establecer

que la SBN asuma competencia sobre los predios estatales que se encuentren comprendidos en proyectos declarados de interés nacional, carácter nacional o alcance nacional por resolución sectorial, para las acciones de asunción de titularidad de oficio, saneamiento físico legal, defensa y recuperación, así como para la aprobación de los actos de adquisición, administración y disposición requeridos para la ejecución de proyectos de inversión pública o privada.

Esta medida permitirá que, en los proyectos de inversión pública y privada de gran envergadura, la SBN continúe administrando dichos predios para facilitar su ejecución y dotar de mayor celeridad la entrega de predios para la ejecución de dicho proyecto. Al respecto se propone la modificación del Artículo 28-A de la Ley 29151.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería la agilización en la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias e imposición de servidumbres para el desarrollo de proyectos de inversión pública, privada y público privada; a través del establecimiento de mejoras en el incentivo pagado para obtener la posesión anticipada de inmuebles, estableciendo disposiciones especiales para la contratación de servicios, consultorías y obras requeridos en el marco del citado Decreto Legislativo N° 1192 así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para modificar el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, así como la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; con la finalidad de agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias e imposición de servidumbres para el desarrollo de proyectos de inversión pública, privada y público privada; a través del establecimiento de mejoras en el incentivo pagado para obtener la posesión anticipada de inmuebles, estableciendo disposiciones especiales para la contratación de servicios, consultorías y obras requeridos en el marco del citado Decreto Legislativo N° 1192 así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.

e) **Establecer medidas para la implementación de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura desarrollada en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en sectores sociales;**

incluyendo, la identificación de entidades competentes, modalidades de contratación, así como reglas y procesos aplicables.

A la fecha, el alcance de la intervención de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) incluye 15 intervenciones en infraestructura de salud ubicadas en 5 regiones, y 74 intervenciones en infraestructura educativa ubicadas en 8 regiones, por un monto de inversión actualizado de S/ 2,690 millones y de S/ 2,545 millones", respectivamente.

No obstante, cabe indicar que, según la Ley 30556, la ARCC no tiene habilitación legal ni competencias para desarrollar actividades de operación y mantenimiento sobre las intervenciones que ejecuta, luego de entregada la infraestructura.

En efecto, el potencial riesgo que enfrentan la infraestructura de salud y educativa desarrollada por la ARCC es que, dado que comprenden únicamente componentes de inversión, una vez culminada su ejecución y efectuada la entrega de dichas obras a los Gobiernos Regionales o a los Gobiernos Locales, estos no podrían entrar en servicio o estarían expuestos a un riesgo alto de deterioro acelerado debido a la falta de un mantenimiento oportuno e idóneo; todo lo cual, expone la inversión realizada por el Estado en importantes sectores sociales (salud y educación) a un retroceso que impactaría negativamente en la sostenibilidad de dicha infraestructura y, en consecuencia, la calidad en la atención de las necesidades de los ciudadanos.

En esa línea, cabe destacar que resulta indispensable que la infraestructura reconstruida y construida por la ARCC se mantenga en condiciones óptimas, que aseguren su adecuada operación y mantenimiento que permita afrontar las amenazas de nuevos retos climatológicos extremos, teniendo en cuenta la frecuencia y magnitud de los desastres asociados al cambio climático, la urbanización y el aumento de la exposición a peligros naturales que hacen indispensable buscar formas de mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades de recuperación post desastre.

Bajo dicho contexto, regular medidas para garantizar la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura desarrollada en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en sectores sociales; incluyendo, pero sin limitarse a la definición de entidades competentes y procesos aplicables.

- Existen intervenciones en infraestructura educativa y de salud desarrolladas por la ARCC, cuya ejecución está próxima a culminar.
- Existe el riesgo de que dicha infraestructura no entre en servicio de manera óptima o presente un deterioro acelerado, debido a la falta de mantenimiento oportuno e idóneo a cargo de los GR y GL respectivos. Ello

impedirá que los usuarios, y la población en general, se beneficien de la infraestructura desarrollada.

- A la fecha, la ARCC no tiene habilitación legal ni competencias para desarrollar O&M sobre las intervenciones que ejecuta, luego de entregada la infraestructura.
- Esta problemática fue planteada por PROINVERSIÓN, que tendría a su cargo la estructuración de un paquete de APP de O&M.
- Frente a ello, se tomó contacto con la ARCC, que reafirmó el riesgo de deterioro anticipado de los colegios y hospitales.
- Así, el MEF consideró como parte del plan de impulso económico, y luego como materia de delegación de facultades legislativas, medidas para garantizar la adecuada operación y mantenimiento de los colegios y hospitales ejecutados por la ARCC. La medida se concretaría a través de una norma con rango de ley.

Intervenciones en salud

- Se tienen **15 intervenciones** agrupadas en 7 paquetes.
- Más de **1.3 millones de beneficiarios**.
- Monto de **inversión de S/ 2,690 millones**[1/].
- Costo anual de **O&M alcanza S/ 572 millones**.
- Descripción de gasto en O&M: pago de servicios, operación de servicios de salud y mantenimiento.

Intervenciones en educación

- Costo anual de **O&M alcanza S/ 572 millones**.
- Se tienen **74 intervenciones** agrupadas en 9 paquetes.
- Más de **44 mil beneficiarios**.
- Monto de **inversión de S/ 2,545 millones**[1/].
- Costo anual de **O&M de S/ 34 millones**.
- Alcance y componentes de O&M: instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, sistemas de cómputo, sistema contraincendio, instalaciones mecánicas, arquitectura, estructuras.

Según el análisis expuesto esta medida favorecería la implementación de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura desarrollada en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios en sectores sociales. Además, según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a temas de inversión pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para establecer medidas para la implementación de actividades de operación y mantenimiento de la

infraestructura desarrollada en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en sectores sociales; incluyendo, la identificación de entidades competentes, modalidades de contratación, así como reglas y procesos aplicables.

Las medidas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente sección no deberán afectar el principio de transparencia, ni vulnerar el derecho de propiedad, ni el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, ni restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica.

2.1.3 En materia tributaria:

a) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado, suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario – RMT.

a.1 Objeto de la facultad legislativa solicitada

La solicitud de facultades propone crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye modificar la ley del nuevo régimen único simplificado, suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE tributario – RMT.

En ese sentido, en la exposición de motivos se expresa que *"resulta necesario crear un régimen simplificado para contribuyentes de menor tamaño que involucre un menor costo de cumplimiento y que: (i) permita la determinación de la base imponible de manera simple; para lo cual SUNAT proporciona las herramientas que permitan el llevado de libros y registros contables de manera electrónica, así como también la emisión de comprobantes de pago de manera electrónica; (ii) contemple reglas anti elusivas que eviten la fragmentación de actividades y por ende ingresos; (iii) establezca incentivos a la declaración de costos/gastos, mediante la deducción de gastos; (iv) prevea que la SUNAT facilite una declaración jurada del Impuesto a la Renta preliminar sobre la base de la información brindada por los contribuyentes; entre otros aspectos".*

La propuesta parte de un diagnóstico que sostiene que el Nuevo Régimen Único - Simplificado (NRUS), Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT) "*no han logrado formalizar a los contribuyentes, por el contrario, la existencia de varios regímenes tributarios ha conllevado, en algunos casos, al enanismo fiscal o a que las empresas manipulen sus ingresos para no transitar de los regímenes simplificados al Régimen General del Impuesto a la Renta*".

Se señala, asimismo, que "*lo anterior trae como consecuencia una distorsión del sistema tributario peruano otorgando tratamientos preferenciales a contribuyentes que no resultan siendo negocios de subsistencia, dejando de contribuir al Estado de acuerdo a su real capacidad contributiva y fomentando prácticas empresariales elusivas. En este sentido, con la delegación de facultades, también se definirán tamaños de empresa con propósitos tributarios, considerando las recomendaciones internacionales y las características de la economía nacional, a cuyo efecto resulta necesario modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado, y derogar el RER y el RMT*".

a.2. Análisis de la problemática y la materia a legislar

Hasta el año 2016 los regímenes especiales Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y RER ofrecían beneficios para empresas con ventas hasta 125 UIT; a partir del 2017 el Régimen MYPE Tributario (RMT) introdujo un trato preferencial para empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT. Bajo este régimen, la base del RMT se calcula de manera similar a la del Régimen General (RG), pero por las primeras 15 UIT de utilidad aplica la tasa del 10 por ciento. Por las utilidades que excedan 15 UIT se paga la tasa del régimen general del 29.5 por ciento. La otra ventaja para el contribuyente respecto del RG es que las exigencias de llevar libros contables son menores. Esta progresividad, se argumentó, serviría para abrir otro camino gradual a la formalización, evitando el choque de una tasa del 29.5 por ciento por el primer "sol" de utilidad. En concreto, el RMT es simplemente una concesión de tasa a quienes ya estaban en el régimen general, permitiéndoles una tasa marginal del 10 por ciento por las primeras 15 UIT de ingreso neto.

REGÍMENES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

	RUS	RER	RMT	RG
Tope de ventas	Hasta S/ 96 mil anual	Hasta S/ 525 mil anual	Hasta 1700 UIT	-
Tasa	S/ 0* (ventas hasta S/ 60 mil/año) S/ 20 (ventas hasta S/ 5 mil/mes) S/ 50 (ventas hasta S/ 8 mil/mes)	1,5% de las ventas	Hasta 15 UIT de utilidad neta: 10% Más de 15 UIT de utilidad neta: 29,5%	29,5% de la utilidad neta
IGV	No	Sí	Sí	Sí
Comprobantes que emiten	Solo boleta	Boleta y factura	Boleta y factura	Boleta y factura
Periodicidad de determinación	Mensual	Mensual	Anual con pagos a cuenta mensuales	Anual con pagos a cuenta mensuales
Sujetos comprendidos	Personas naturales que realizan ventas de mercaderías o servicios o que desarrollan un oficio	Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas que obtengan rentas de tercera categoría proveniente de actividades de comercio, industria y/o servicios	Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares	Personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades empresariales

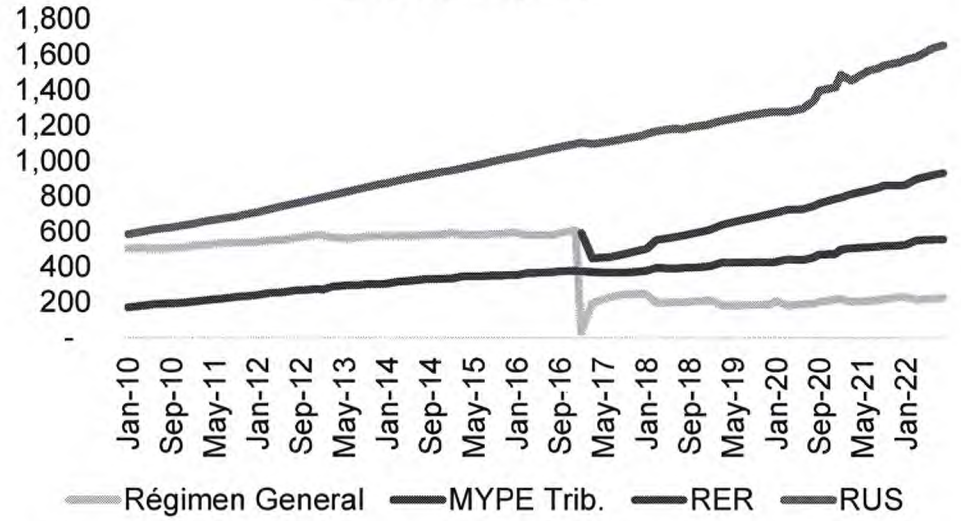
Fuente: Ley del Impuesto a la Renta, Régimen Único Simplificado (RUS), Régimen Especial Renta (RER) y Régimen MYPE Tributario (RMT)

En realidad, tal como señalan diversos estudiosos sobre la materia, entre los que se encuentra el Fondo Monetario Internacional[38], en el que se expresa que *la introducción del RMT ha provocado una migración de empresas del RG a uno más barato, sin conseguir atraer a personas del sector informal o del RER gracias a la supuesta ventaja de la gradualidad del impuesto. En consecuencia, actualmente el RG es el que menos contribuyentes activos tiene (8 por ciento del total). No se ha materializado la expectativa de que el RMT atraería empresas de los otros regímenes especiales (sobre todo desde RER) y especialmente del sector informal de la economía* (Gráfico 1). Se partió del supuesto que los nuevos contribuyentes de RMT pedirían factura, lo que ayudaría a compensar la pérdida de recaudación por adopción de la tasa de 10 por ciento sobre el primer tramo de utilidades. No obstante, cabe destacar que "*el 76 por ciento de los contribuyentes registrados en el RMT declaran ventas anuales inferiores a 50 UIT, lo cual indica que el gradualismo en la carga fiscal tampoco es efectivo para que los contribuyentes transiten a tramos de mayor carga impositiva.*

[38] Fondo Monetario Internacional. Perú: Informe Técnico - Régimen Tributario para contribuyentes menores y zonas económicas especiales. FMI, Informe de país No. 22/35.Febrero 2022.

CONTRIBUYENTES INSCRITOS SEGÚN RÉGIMEN TRIBUTARIODEL IMPUESTO A LA RENTA

(Miles de contribuyentes)



Fuente: SUNAT, MEF, FMI

De conformidad con lo expuesto, mantener diversos regímenes para el Impuesto a la Renta es insostenible. El RUS es un buen régimen para que los emprendedores tributen, pero no para formalizar la masa de contribuyentes que se encuentran en la informalidad. Sin embargo, incrementar la recaudación del impuesto a la renta no es un tema que pase solo por la simplificación del régimen, pues esto solo beneficia a los formales, tal como ha quedado evidenciado. "La informalidad es causa de múltiples factores. La literatura encuentra que otros factores como el ingreso, la educación, la política laboral, la institucionalidad, los niveles de productividad y confianza en los gobiernos son también determinantes y explican la informalidad. Por ello, las respuestas a la informalidad no deben abordarse exclusivamente desde la perspectiva del diseño tributario sino de manera holística, incluyendo aspectos laborales, administrativos e institucionales[39]."

Respecto a definir tamaños de empresa con fines tributarios, pues muchos negocios no son de subsistencia y se convierten en contribuyentes con tratamiento preferenciales. Para reducir ese aprovechamiento indebido de beneficios legales, resultará necesario definir bien la categoría de "negocios de subsistencia", *acorde a la realidad del Perú, con indicadores que reflejen que efectivamente son negocios de ese tipo.*

[39] Ibid., pág. 34.

De otro lado sería importante que el nuevo diseño para el pago del impuesto a la renta comprenda un sistema de topes y escalonado sería el adecuado, así, entre mayor sea el ingreso, mayor sería el monto a pagar por concepto de impuesto a la renta.

Asimismo, se considera factible la propuesta en lo relativo a que la declaración de costos y gastos así como las deducciones, se realice mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos, *toda vez que en la actualidad todas las facturas que se emiten en la mayor parte del país son electrónicas y los libros electrónicos se usan ampliamente, por lo que cualquier modificación que se haga y favorezca el uso de estas tecnologías será mucho más sencillo de implantar en la actualidad, que hace unos años atrás.*

El objeto de la solicitud de delegación de facultades es consistente con lo expuesto en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, en el que se señala que "*La política tributaria para el mediano plazo debe procurar el crecimiento sostenido de la presión tributaria, por medio de la reducción del incumplimiento tributario, y la lucha contra los mecanismos que permiten la evasión y elusión del pago de tributos. También se requiere continuar con la simplificación del sistema tributario, ya que la multiplicidad de tasas impositivas y los tratamientos tributarios preferenciales no solo incrementan los costos de cumplimiento y complejizan el sistema para los contribuyentes de menor tamaño, sino que también, crean oportunidades de planeamiento y elusión que son aprovechadas, principalmente, por contribuyentes más grandes*[40]*."*

En esa línea, el MMM 2023-2026 ha propuesto que *"en cuanto al impuesto a la renta (IR), a fin de ampliar la base tributaria, en el mediano plazo se debe modificar el régimen simplificado para empresas de menor tamaño, de tal manera que considere incentivos a la declaración de trabajadores, exigencia del uso de comprobantes de pago para sustentar sus gastos, entre otras medidas que permitan la reducción de incentivos a la informalidad y costos de cumplimiento tributario, así como que incidan en mejorar su nivel de competitividad y permanencia en el mercado. Asimismo, a fin de fortalecer la base tributaria, mejorar la progresividad del IR y combatir esquemas o prácticas elusivas, para finalmente alcanzar mayor neutralidad y equidad, se tomarán en cuenta los estándares*

[40] Ministerio de Economía y Finanzas "Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026". Agosto 2022, pág.20. En: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2023_2026.pdf?fbclid=IwAR0b7-BP2b0z2GaR_ox8lCtazL461YPhdlRkpNE78sYv_Zw0knjboaCVdI

internacionales y las recomendaciones del marco inclusivo del proyecto BEPS de la OCDE[41]*."*

No obstante lo expuesto y pese a que el problema está claramente identificado, en la exposición de motivos del proyecto de ley sobre solicitud de facultades legislativas, ni en información posterior remitida por el MEF, no se han señalado los criterios básicos o parámetros de las medidas a adoptar respecto a la modificación del Régimen Único Simplificado, sobre cómo se va a definir a los sujetos por su tamaño organizacional, nivel de ingresos y otras características para considerar a los negocios de subsistencia, y cuál será la metodología para determinar el umbral máximo de ingresos anualmente. De otro lado, tampoco se indican los criterios los fundamentos de la modificación de la lista de las actividades económicas excluidas de dicho régimen; o cuáles serán los supuestos que se incorporarán como medidas anti elusivas para evitar la fragmentación de actividades económicas.

Asimismo, no se ha sustentado lo relativo a que la declaración de costos y gastos así como las deducciones, se realice mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, implicando ello el uso de comprobantes de pago electrónicos, *toda vez que, si bien es cierto que en la actualidad las facturas que se emiten en la mayor parte del país son electrónicas y los libros electrónicos se usan ampliamente, el MEF no garantiza o indica el procedimiento a seguir para tratar al segmento de contribuyentes que aún no acceden a las tecnologías la información y que podrían ser excluidos, de hecho, de la reforma propuesta, si es que no se prevén los mecanismos para su inclusión.*

a.3. Conclusión y recomendación

En consecuencia, y en virtud del análisis desarrollado, se considera que **NO resulta viable** otorgar facultades legislativas para crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones, llevando a una reducción de la base imponible; mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado, suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario – RMT.

b) Modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre rentas por intereses presuntos.

b.1. Objeto de la facultad legislativa solicitada

El objeto de esta facultad es modificar el primer párrafo del artículo 26 de la ley del impuesto a la renta, sobre rentas por intereses presuntos.

---

[41] Ibid., pág. 20.

b.2. Análisis de la problemática y la materia a legislar

Se propone sustituir el uso de la tasa de la "London Inter Bank Offered Rate" (LIBOR) por una tasa de referencia del mercado nacional para la renta presunta que establezca la SUNAT, ello resulta necesario debido a que la tasa LIBOR solo será publicada hasta el 30 de junio de 2023 y debe ser sustituida para fines tributarios.

La eliminación de la tasa LIBOR fue anunciada en noviembre del año 2019, por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) del Reino Unido, entidad que anunció el futuro cese o la pérdida de representatividad para las tasas LIBOR, publicadas por el ICE Benchmark Administration (IBA) y, por tanto, ya se no forzaría u obligaría a los bancos a presentar los datos sobre los que se calcula dicha tasa de referencia.

Cabe poner de relieve que, en el ámbito nacional, la eliminación de la tasa LIBOR afectará diversas operaciones comerciales, financieras y tributarias. En razón de ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reconoce que esta situación plantea retos tanto al supervisor como a los sistemas supervisados — financiero, de seguros y privado de pensiones— por las dificultades que pueden surgir en la adecuación de los contratos vigentes a las nuevas tasas, entre otros.
En ese sentido y *"como parte de este proceso, la SBS en el mes de noviembre de 2021, envió un oficio recomendando a las empresas supervisadas, no utilizar la tasa LIBOR como tasa de referencia para los nuevos contratos que celebren con sus clientes y usuarios después del 31 de diciembre de 2021. Asimismo, el ente supervisor también recordó a las empresas supervisadas, que la continuación de algunos plazos clave de la USD LIBOR hasta el 30 de junio de 2023 tiene como único objetivo, permitir el vencimiento de los contratos heredados, mas no respaldar nuevas operaciones referenciadas a dicha tasa; debiendo utilizarse tasas de referencias alternativas robustas para los nuevos contratos que se celebren*[42]*."*

Según lo expuesto en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa bajo análisis, la eliminación de la tasa LIBOR haría inaplicable la presunción de intereses prevista en el primer párrafo del artículo 26° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) en los casos de préstamos en moneda extranjera. El texto de dicho artículo es el siguiente:

"*Artículo 26°. - Para los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un*

[42] Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N°03838/2022-PE, **Ley que modifica la ley del impuesto a la renta**, ingresado a la CEBFIF el 28/12/22.

interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros. Regirá dicha presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera estipulado que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido en el pago de un interés menor. Tratándose de préstamos en moneda extranjera se presume que devengan un interés no menor a la tasa promedio de depósitos a seis (6) meses del mercado intercambiario de Londres del último semestre calendario del año anterior (...)".

Por ello, se propone modificar el primer párrafo del precitado artículo 26° de la LIR, tanto para el caso de préstamos en moneda extranjera como en moneda nacional, en base a los siguientes criterios:

(i) Para préstamos en moneda extranjera: se presume que devengan un interés no inferior a la Tasa Activa de Mercado promedio mensual en Moneda Extranjera (TAMEX) que publique la SBS multiplicado por un factor de ajuste de 0,65; y

(ii) Para préstamos en moneda nacional: se presume que devengan un interés no inferior a la Tasa Activa de Mercado promedio mensual en Moneda Nacional (TAMN) que publique la SBS multiplicada por un factor de ajuste de 0,42.

b.3. Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia tributaria puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para modificar el primer párrafo del artículo 26° de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre rentas por intereses presuntos.

c) Prorrogar la vigencia de las exoneraciones previstas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta.

c.1. Objeto de la facultad legislativa solicitada

Se propone prorrogar la vigencia de las exoneraciones previstas en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta.

El artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF (en adelante LIR) establece exoneraciones a dicho impuesto, en los siguientes términos:

***"Artículo 19**.- Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2023. (Encabezado del artículo 19 modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 31106, Ley*

que prorroga la vigencia de las exoneraciones contenidas en el artículo 19 del Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, publicada el 31.12.2020, vigente a partir del 1.1.2021)

a) Las rentas que, las sociedades o instituciones religiosas, destinen a la realización de sus fines específicos en el país.

b) Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a estos o a aquellas, y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso".

El reglamento establecerá los supuestos en que se configura la vinculación, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

(i) Se considera que una o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas a una fundación o asociación sin fines de lucro cuando una de aquellas participa de manera directa o indirecta en la administración o control, o aporte significativamente al patrimonio de éstas; o cuando la misma persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección o control de varias personas, empresas o entidades, o aportan significativamente a su patrimonio.
(ii) La vinculación con los asociados considerará lo señalado en el acápite precedente y, en el caso de personas naturales, el parentesco.
(iii) También operará la vinculación en el caso de transacciones realizadas utilizando personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre partes vinculadas.

Se considera que las entidades a que se refiere este inciso distribuyen indirectamente rentas entre sus asociados o partes vinculadas a éstos o aquéllas, cuando sus costos y gastos:

i. No sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, entendiéndose como tales aquellos costos y gastos que no sean normales en relación con las actividades que generan la renta que se destina a sus fines o, en general, aquellos que no sean razonables en relación con sus ingresos.
ii. Resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado. Asimismo, se entiende por distribución indirecta de rentas:
i. La entrega de dinero o bienes no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas como costo o gasto, e

ingresos no declarados. El Reglamento establecerá los costos o gastos que serán considerados no susceptibles de posterior control tributario.

ii. La utilización de los bienes de la entidad o de aquellos que le fueran cedidos en uso bajo cualquier título, en actividades no comprendidas en sus fines, excepto cuando la renta generada por dicha utilización sea destinada a tales fines.

En los demás casos, la SUNAT deberá verificar si las rentas se han distribuido indirectamente entre los asociados o partes vinculadas. De verificarse que una entidad incurre en distribución directa o indirecta de rentas, la SUNAT le dará de baja en el Registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta y dejará sin efecto la resolución que la calificó como perceptora de donaciones. La fundación o asociación no gozará de la exoneración del Impuesto en el ejercicio gravable en que se le dio de baja en el referido registro ni en el siguiente, y podrá solicitar una nueva inscripción vencidos esos dos ejercicios. La disposición estatutaria a que se refiere este inciso no será exigible a las entidades e instituciones de cooperación técnica internacional (ENIEX) constituidas en el extranjero, las que deberán estar inscritas en el Registro de Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

c) Los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados directamente o mediante proveedores o intermediarios financieros por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras.

Se entenderá por créditos de fomento aquellas operaciones de endeudamiento que se destinen a financiar proyectos o programas para el desarrollo del país en obras públicas de infraestructura y en prestación de servicios públicos, así como los destinados a financiar los créditos a microempresas, según la definición establecida por la Resolución SBS núm. 11356- 2008 o norma que la sustituya.

d) Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales que les sirvan de sede.

e) Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y empleados considerados como tales dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios constitutivos así lo establezcan. Inciso sustituido por el artículo 12° de la Ley N.° 26731, publicada el 31 de diciembre de 1996.

f) Las rentas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24° de la presente ley.

Incisos g) y h) DEROGADOS

i) Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o extranjera, que se pague con ocasión de un depósito o imposición conforme con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N.° 26702, así como los incrementos de capital de dichos depósitos e imposiciones en moneda nacional o extranjera, excepto cuando dichos ingresos constituyan rentas de tercera categoría.

j) Los ingresos brutos que perciben las representaciones deportivas nacionales de países extranjeros por sus actuaciones en el país. Inciso sustituido por el numeral 4.2 del artículo 4° de la Ley N.° 27356, publicada el 18 de octubre de 2000.

k) Las regalías por asesoramiento técnico, económico, financiero, o de otra índole, prestados desde el exterior por entidades estatales u organismos internacionales.

Incisos l), ll) y m) DEROGADOS

n) Los ingresos brutos que perciben las representaciones de países extranjeros por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y folclor, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura, realizados en el país.

Inciso ñ) DEROGADO

o) Los intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro y crédito por las operaciones que realicen con sus socios.

p) Inciso derogado por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18.7.2012, vigente a partir del 1.1.2013.

q) Los intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos concedidos al Sector Público Nacional.

Las entidades comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo deberán solicitar su inscripción en la SUNAT, con arreglo al reglamento. La verificación del incumplimiento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneración establecidos en los incisos a), b) y m) del presente artículo dará lugar a gravar la totalidad de las rentas obtenidas por las entidades contempladas en los referidos incisos, en el ejercicio gravable materia de fiscalización, resultando de aplicación inclusive, de ser el caso, lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55° de esta ley. En los casos anteriormente mencionados son de aplicación las sanciones establecidas en el Código Tributario".

c.2. Análisis de la problemática y de la materia a legislar

Mediante Ley N.° 31106, publicada el 31 de diciembre de 2020, se estableció que las exoneraciones en cuestión rigen hasta el 31 de diciembre de 2023. Por dicha razón, estando próximo el vencimiento del plazo de vigencia de estas, el Poder Ejecutivo considera necesaria una ampliación del plazo.

En ese sentido, se argumenta en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, *"las exoneraciones tributarias contenidas en el artículo 19 de la LIR tienden a reducir las brechas y barreras de la desigualdad, a través del apoyo a los más necesitados, promoviendo fines vinculados al interés nacional, consideraciones sociales, apoyo a sectores productivos claves, entre otros".*

Sobre los beneficios de las exoneraciones se puede señalar lo siguiente:

Respecto a los incisos a) y b) del artículo 19 de la LIR:
Las rentas que las sociedades o instituciones religiosas destinen a la realización de sus fines específicos en el país. (inciso a) de la LIR).
Las rentas de las fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda. (inciso b) de la LIR)
Se opina por la prórroga de la exoneración a favor de las sociedades e instituciones religiosas, así como a las fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda, pues muchas veces sustituye la labor asistencial del Estado.

En cuanto al mencionado literal b), el Ministerio de Educación[43], en anterior oportunidad, señaló que las exoneraciones a las asociaciones con fines educativos facilitan el efectivo ejercicio del derecho constitucional a la educación, e incentivan la modernización y amplían la oferta y cobertura de dicho servicio. La eliminación de una exoneración de este tipo podría generar impactos negativos en el mantenimiento de la calidad del servicio educativo superior universitario. Por tanto, los beneficiarios resultan siendo los usuarios de tales servicios.

[43] Opinión contenida en los Informes N° 00067-2020-MINEDU-VMGP-DIGESU, N° 609-2020-SUNEDU-03-06 y N° 0224-2020-SUNEDU-02-13 remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 0223-2020-SUNEDU-03.

Asimismo, el Ministerio de Cultura[44], en la oportunidad de aprobarse la exoneración mediante Ley 31106, al pronunciarse sobre la exoneración a las asociaciones sin fines de lucro con fines culturales, señala que esta busca promover y mantener una política de amplio acceso a actividades culturales, siendo la generalidad de la sociedad, los sujetos beneficiados de esta.

Por las razones indicadas, se considera viable prorrogar las exoneraciones de los incisos a) y b) pues logran incentivar actividades culturales y educativas, gremiales, políticas, etc., toda vez que estas son complementarias a las funciones del Estado al ofrecer propuestas, recursos y conocimientos para la solución de problemas sociales mediante el suministro de servicios de carácter general, desde el ámbito privado y que benefician a la sociedad en general.

Respecto a los Incisos c y q del artículo 19 de la LIR:

La exoneración contenida en los incisos c) y q) de la LIR promueve los créditos de fomento para financiar la ejecución de proyectos o actividades económicas consideradas de interés para el país como son la construcción de obras públicas o la prestación de servicios públicos. Permiten el financiamiento y mejoran la administración de los recursos que conforman la Hacienda Pública.

"La Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en la oportunidad de aprobarse la exoneración mediante Ley 31106, respecto a dichos incisos, refiere que uno de los principios en lo que se basa el endeudamiento público, interno y externo, es cubrir parte de los requerimientos de financiamiento del sector público a los más bajos costos posibles, sujetos a un grado de riesgo prudente y en concordancia con la capacidad de pago del país. Considerando que una parte importante de la deuda pública del país está contratada mediante operaciones de endeudamiento externo, con organismos multilaterales (BID ,BIRF y CAF) y bilaterales (Club de París), las exoneraciones antes mencionadas están alineadas con el referido principio, dado que beneficia directamente a la República y permite contar con un menor costo de financiamiento[45]."

Si se grava tales operaciones con el impuesto a la renta podría afectar negativamente la concertación de nuevos créditos en lo referido a las condiciones financieras que podrían diferir de las que se obtienen actualmente.

---

[44] Opinión contenida en el Informe N° 00457-2020-DGIA/MC remitido al Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Oficio N° 000683-2020-SG/MC (Contenido en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 3941/2022-PE).

[45] Texto extraído del Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, recaído en el PL 06805, posteriormente la Ley 31106, "**Ley que prorroga la vigencia de las exoneraciones contenidas en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta**", vigente hasta diciembre del año 2023.

De la misma manera, y asumiendo que no se renueve la prórroga de estas exoneraciones, también se afectarían directamente a los créditos externos que están en proceso de concertación.

Respecto a Incisos d), e) y k) del artículo 19 de la LIR:

"De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, la exoneración del impuesto a la renta para los Organismos Internacionales y las remuneraciones de los funcionarios de los Gobiernos extranjeros, deben ser prorrogadas debido a que estas se sustentan en compromisos internacionales asumidos a través de diversos tratados celebrados por el Estado peruano, los cuales, al encontrarse en vigor para el Perú, forman parte del derecho nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55º de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, señala a noviembre del 2020 se registran un total de 98 Misiones acreditas (61 embajadas y 37 organismos internacionales) y 3 701 personas acreditadas.

Además, como puede verse en González (1997) las exenciones a los funcionarios diplomáticos de gobiernos extranjeros, funcionarios extranjeros de embajadas, consulados y oficinas oficiales y funcionarios de organismos internacionales son aplicadas por los países miembros del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias exigiendo la reciprocidad del tratamiento exentivo por parte de los países de los funcionarios[46]*."*

Respecto de Incisos f), i) y o) del artículo 19 de la LIR:

Respecto a la exoneración prevista en el inciso f) del artículo 19 de la LIR, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP indica[47] que, tiene los siguientes efectos: una mayor protección social a las familias, incentiva el ahorro interno, fomenta la inversión y genera un mayor dinamismo en los mercados de capitales. Asimismo, se incentiva un mayor desarrollo de los seguros de vida en el Perú.

Cabe precisar que, la penetración de seguros de vida en Perú, medido como la fracción que represente el total de las primas del PBI (0.90%) aún está por debajo de países como Chile, Brasil, Uruguay y México. Por lo tanto, se opina a favor de la prórroga de la exoneración indicada en el inciso f) del artículo 19 del TUO de la LIR.

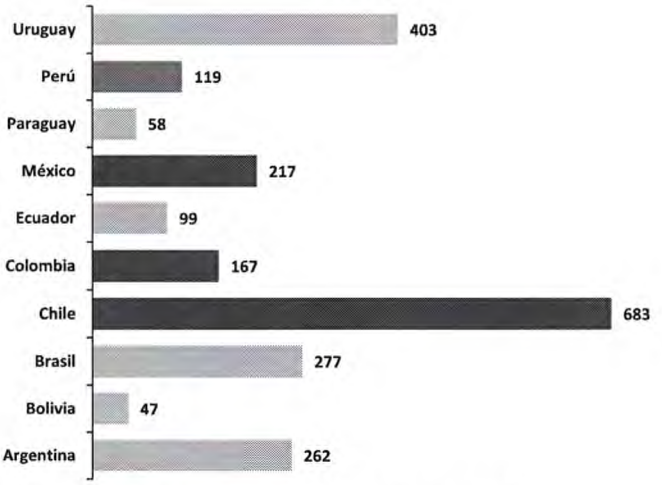
---

[46] Texto extraído del Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, recaído en el PL 06805, posteriormente la Ley 31106,"**Ley que prorroga la vigencia de las exoneraciones contenidas en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta**", vigente hasta diciembre del año 2023.

[47] En el Informe N° 260-2020-SAAJ/INFORME N° 029-2020-SACOOP/INFORME N° 031-2020-SAS/INFORME N° 018-2020-SAEE, remitido al Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 319134-2020-SBS

En efecto, todavía el mercado peruano es uno de los que presenta una menor profundización en la región, registrando el menor nivel de primas per cápita en el bloque de países que conforman la Alianza del pacífico, reflejando la importancia de seguir promoviendo el desarrollo de dicho sector, atendiendo a sus efectos positivos sobre el ahorro, la inversión, la diversificación del riesgo y el crecimiento económico del país.

Prima Directa Per Cápita
En USD



Nota: Paraguay con información a 2017.
Fuente: Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina.

Con relación a la exoneración a los depósitos en las empresas del sistema financiero, la exoneración del impuesto a la renta sobre los rendimientos y aumentos de capital de los depósitos, tiene un efecto positivo sobre los depositantes del sistema financiero, repercutiendo finalmente en la inclusión, estabilidad e integridad financiera, así como sobre la política pública de reducción de efectivo. Por lo tanto, se opina a favor de la exoneración indicada en el inciso i) del artículo 19° del TUO de la LIR.

Según la SBS[48], el número de cuentas de depósito se han incremento del 2014 al

[48] SBS (Diciembre 2019). Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financiero, de seguros y de pensiones. Recuperado de https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Diciembre/CIIF-0001-di2019.PDF

2019 en 70,5% pasando de 42,6 millones 72,7 millones de cuentas. Respecto a los niveles de intermediación financiera en los últimos 5 años, el ratio de depósitos sobre el PBI aumento de 37,9% a 40,6%. Además, señala que la mejora y el uso de servicios financieros ha sido por la inclusión de clientes de menores ingresos.

Tratándose de la exoneración contenida en el inciso o) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la renta, sostiene que la exoneración del impuesto a la renta a los intereses que ganan los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC) por sus depósitos, debería ser similar a lo que ocurre con los intereses que ganan por sus depósitos los clientes del sistema financiero y por la naturaleza no lucrativa de las COOPAC, con lo que se avanzaría en materia de inclusión, estabilidad e integridad financiera. Se considera importante no imponer un impuesto a la renta por los intereses percibidos y pagados por las operaciones que realizan las COOPAC con sus socios cooperativistas, dado que podría significar un desincentivo a la actividad cooperativa de ahorro y crédito en el país. Por lo expuesto, se opina a favor de la exoneración indicada en el inciso o) del artículo 19° del TUO de la LIR.

Finalmente, en opinión del Banco Central de Reserva[49], eliminar las exoneraciones a que se refieren los incisos i), f) y o) no tendría un impacto sustancial, pues su costo es de S/. 151 millones (S/. 109 millones a intereses bancarios; S/. 25 millones a intereses de cooperativas y S/. 17 millones por retornos de seguros de vida) lo que equivale a 0.02% del PBI.

Por el contrario, su eliminación podría generar efectos negativos sobre el ahorro, pues desincentiva el ahorro de las familias debido a la menor rentabilidad efectiva de los depósitos, sobre todo en el caso en que el costo de las comisiones sea más alto que los intereses que se perciben, asimismo, el incremento de costo de fondeo de las empresas por la menor disponibilidad de fondos, afecta a las tasas activas.

Respecto al Inciso j) del artículo 19° de la LIR:

Promueven el deporte y fomentan la realización de eventos en el país, lo cual crea mayor interés tanto en los deportistas extranjeros como nacionales. Al respecto, esta exoneración ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a que en nuestro país se han incrementado la cantidad de eventos deportivos internacionales gracias a la mejor infraestructura que se ha venido desarrollando, lo cual a su vez facilitará la posterior realización de futuros eventos. Además, este tipo de actividades contribuye de manera importante a fomentar el turismo extranjero en nuestro país.

Por ejemplo, en el caso de los juegos panamericanos celebrados en nuestro país

[49] Opinión vertida en la Carta N° 0010-2020-SEC000-N.

durante el año 2019, según información de MINCETUR[50], se recibió a más de 12 mil atletas provenientes de 41 países. Además, según estimaciones del mencionado ministerio, se estimó que llegarían 75 mil turistas al evento, los cuales generarían ingresos a nuestro país por alrededor de US$ 125 millones.

Respecto al inciso n) del artículo 19° de la LIR:

Respecto a la exoneración contenida en los incisos b) y n) del artículo 19 de la LIR, según el Ministerio de Cultura[51] ha tenido un impacto positivo en la oferta de productos culturales, porque pone a disposición de los ciudadanos boletos para asistir a espectáculos con tarifas bajas consideradas de acceso popular, democratizando así el acceso a la cultura. Desde esta perspectiva puede justificarse una exoneración del impuesto a la renta como mecanismo de promoción en estas representaciones culturales.

Como queda en evidencia, las mencionadas exoneraciones cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico del país. Sin embargo, estas vencen el 31 de diciembre de 2023.

c.3. Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia tributaria puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para prorrogar por 3 años las exoneraciones tributarias contenidas en el artículo 19 de la LIR, lo que permitirá, por su vigencia temporal, una evaluación permanente de su impacto, con lo que se podrá apreciar si resultan o no el instrumento idóneo para la consecución de los fines por los que fueron otorgados.

d) Dictar medidas para implementar las exenciones y/o devoluciones y otros aspectos tributarios en el marco de la Copa Mundial Sub-17.

d.1. Objeto de facultad legislativa solicitada

El objeto de la facultad solicitada es dictar medidas para implementar las exenciones y/o devoluciones y otros aspectos tributarios en el marco de la copa mundial sub-17.

---

[50] https://www.mincetur.gob.pe/ministra-magali-silva-informo-que-lima-recibira-75-mil-turistas-durante-los-juegos-panamericanos-2019/

[51] Opinión contenida en el Informe N° 00457-2020-DGIA/MC remitido al Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 000683-2020-SG/MC

d.2. Análisis de la problemática y de la materia a legislar

Mediante carta, de fecha 28 de abril de 2022, cursada al Presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, el Señor Presidente de la República Pedro Castillo Terrones expresó la "Declaración Gubernamental" de colaborar con la FPF para la organización de la "Copa Mundial de Fútbol Sub-17- Perú 2023" y respaldar *"todas las garantías del gobierno ofrecidas en relación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2021; en especial, que están vinculadas a permisos de entrada y salida de delegaciones, permisos de trabajo, cambio de divisas, seguridad, marco jurídico y cuestiones legales, explotación y protección de derechos comerciales, telecomunicaciones, cuestiones informáticas y exención de impuestos), que aplicarán a la edición 20 de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA a desarrollarse en Perú en el año 2023"*.

Según lo informado en la exposición de motivos del proyecto de ley, *"En tal sentido, se emitirán la normativa para implementar las exenciones y/o devoluciones y otros aspectos tributarios solicitados en la Carta de Garantía N° 8 relativa a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, suscrita por el Gobierno del Perú."*

Al respecto, según la información proporcionada por el MEF a esta Comisión, mediante Oficio 1768 -2022-EF/13.01, adjuntando el Informe N°074-2022-EF/62.01, la Carta de Garantía N° 8, requerida por la FIFA para la realización de la Copa Mundial de Fútbol Sub17 – Perú 2023, establece que el país anfitrión garantiza a la FIFA, entre otros puntos, lo siguiente:

a) Exención de impuestos para la FIFA y las filiales de la FIFA (Sección B).

b) Exención de impuestos para la Asociación Anfitriona, Confederaciones de la FIFA y Asociaciones Miembro de la FIFA (Sección C):

c) Exención de derechos aduaneros e impuestos sobre la importación, la exportación y el transporte de mercancías o servicios

d) Indemnización (Sección D).

e) Escenario de Co-Anfitriones de la competencia (Sección E).

f) Garantizar que las disposiciones contenidas en la Garantía N° 8 son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de acuerdo con sus términos, y seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y totalmente exigibles, independientemente de cualquier cambio en el Gobierno de Perú, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos (Sección F).

De lo expuesto en el informe referido, acogiendo la explicación ofrecida por la Dirección General de Política de Ingresos públicos del MEF, es claro que la FIFA y las filiales de la FIFA, independientemente de que tengan o no su domicilio social en Perú, están totalmente exentas de cualquier impuesto y deben ser tratadas como entidades totalmente exentas de impuestos. La exención se aplicará, en particular y sin limitaciones respecto a cualquier impuesto a la renta y las ganancias o similares existentes en la actualidad o que se creen en el futuro.

Este beneficio se aplicará a:

- Todos los ingresos, beneficios, rentas, gastos, costos, inversiones y todo tipo de pagos, en efectivo o de otro modo, incluso a través de (i) la prestación de servicios y la entrega de bienes, (ii) los créditos contables, iii) otras entregas, (iv) las solicitudes, o (v) las remesas, realizadas por y/o a la FIFA y las filiales de la FIFA, siempre que estén directa o indirectamente relacionadas con cualquiera de los Eventos.
- Los ingresos, beneficios, rentas en efectivo o de otro tipo procedentes de (i) la titularidad y/o la explotación de cualquier Derecho de Comercialización y de los Derechos de los Medios de Comunicación y (ii) la venta o promoción de entradas relacionadas directa o indirectamente con cualquiera de los Eventos

El tratamiento preferencial se aplica considerando que la FIFA y las filiales de la FIFA establecidas, constituidas u organizadas en un país extranjero no configuran establecimientos permanentes en Perú, ni tienen derecho a cualquier otro tipo de residencia fiscal en Perú como resultado de cualquier actividad que esté directa o indirectamente relacionada con cualquiera de los Eventos deportivos.

d.3. Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia tributaria puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para dictar medidas para implementar las exenciones y/o devoluciones y otros aspectos tributarios en el marco de la copa mundial sub-17.

e) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo con la finalidad de considerar como exportación la venta de metal realizada por productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyería destinada a la exportación de joyería.

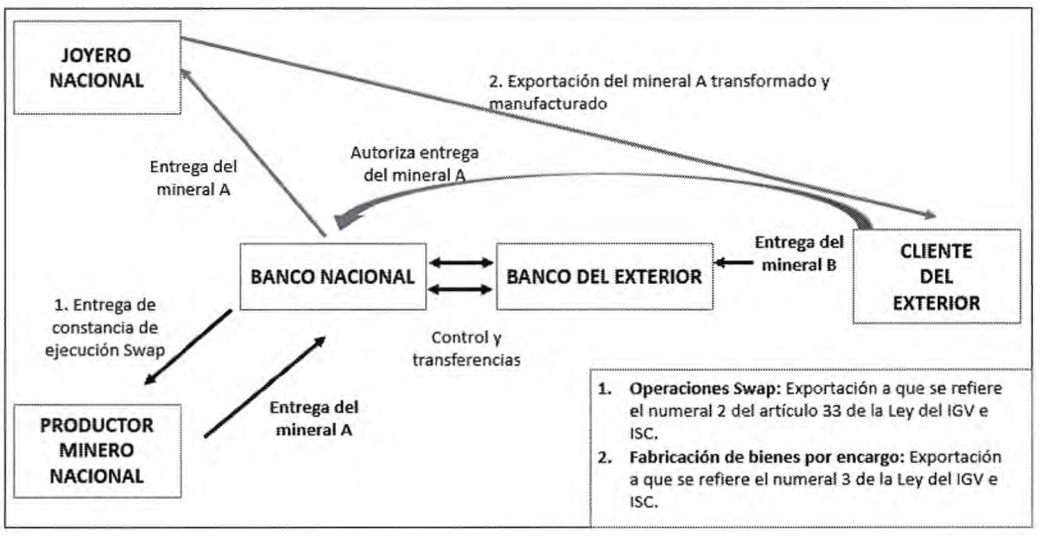
e.1.) Objeto de la facultad legislativa solicitada

El objeto de la facultad solicitada es modificar la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo con la finalidad de considerar como exportación la venta de metal realizada por productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyería destinada a la exportación de joyería.

e.2.) Análisis de la problemática y la materia a legislar

Según lo expuesto en la sección de exposición de motivos del proyecto de ley "*Desde el mes de junio de 2019 no se realizan las operaciones swap de oro en el Perú debido a que los bancos locales dejaron de certificar operaciones swap y los bancos del exterior están cerrando su división de metales. De acuerdo con la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo' (Ley del IGV), un productor minero, que tiene depositado mineral en un banco nacional, intercambia dicho bien, mediante un swap minero, por la cantidad de mineral que tiene un no domiciliado en un banco del exterior. Para constatar esta operación el banco nacional emite una constancia de ejecución, para que luego el productor minero le entregue el mineral al joyero nacional, a fin de que lo transforme en productos terminados por encargo del no domiciliado a quien finalmente se los exporta. Toda vez que los bancos no se están certificando operaciones swap, se requiere modificar la legislación del IGV para considerar como exportación la venta de metal realizada por los productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyería destinada a la exportación de joyería*".

OPERACIÓN SWAP (Sistema pre existente que se propone sustituir)



Al respecto, en la reunión conjunta de fecha 25 de enero en las instalaciones del Congreso de la República, sostenida entre el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesores de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, el MEF señaló que la propuesta está orientada a generar una normativa específica para establecer que la venta de los productores mineros a los joyeros, para los casos en la que joya va a ser destinada a exportación, se considere como exportación, como parte de la cadena de comercialización y no deba, por lo tanto, pagar IGV. Esta propuesta contó, asimismo, con la opinión favorable de los expertos en política económica y tributación que expusieron sus opiniones calificadas en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, realizada el 01 de febrero del presente año.

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, se concluye que la propuesta está orientada a diseñar un tratamiento tributario especial, análogo en sus efectos a los swaps de oro para los productores mineros que venden su oro a joyeros y estos, a su vez, producen y exportan sus joyas con dicho metal, exonerados del pago del IGV.

e.3.) Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia tributaria puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo con la finalidad de considerar como exportación la venta de metal realizada por productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyería destinada a la exportación de joyería.

f) Flexibilizar, de manera temporal, las condiciones para calificar como establecimientos cuyas adquisiciones dan derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas a favor de los turistas extranjeros.

f.1.) Objeto de la facultad legislativa solicitada

El objeto de la facultad legislativa solicitada es flexibilizar las condiciones para calificar como establecimientos cuyas adquisiciones dan derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas a favor de los turistas extranjeros.

f.2.) Análisis de la problemática y de la materia a legislar

De conformidad con lo expresado en la exposición de motivos de la propuesta legislativa, se busca flexibilizar temporalmente la norma que establece las

condiciones de calificación de los establecimientos autorizados a devolver el IGV a los turistas.

El artículo 76 de la Ley del Impuesto General a Ventas (IGV) referido a "devolución de impuestos a turistas", establece que la devolución del IGV que grava los bienes adquiridos por turistas extranjeros aplica respecto de los bienes que se adquieren en los locales calificados por la SUNAT como Establecimientos Autorizados; para lo cual, se debe cumplir con ciertas condiciones, tales como tener alguno de los 2 niveles más altos de cumplimiento del nuevo régimen de "Perfil de Cumplimiento" (antes requería que se encuentren en el Régimen de "Buenos Contribuyentes"). En ese sentido, en la actualidad, en tanto se implemente el procedimiento para de "Perfil de Cumplimiento", solo pueden calificar como Establecimientos Autorizados aquellos que ya tengan calidad de "Buenos Contribuyentes", régimen derogado por el Decreto Legislativo N°1535[52].

En razón de lo expuesto, a fin de impulsar a los establecimientos que expenden bienes que son adquiridos por turistas extranjeros, resulta pertinente flexibilizar las condiciones antes indicadas, a fin de ampliar el universo de establecimientos que podrán ofrecer este beneficio a los turistas, fomentando así la atracción del turismo receptivo.

f.3. Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia tributaria puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para flexibilizar las condiciones para calificar como establecimientos cuyas adquisiciones dan derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas a favor de los turistas extranjeros.

f) Flexibilizar, de manera temporal, las condiciones para calificar como establecimientos cuyas adquisiciones dan derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas a favor de los turistas extranjeros.

No obstante, durante el debate en la sesión conjunta, se acordó delegar dicha materia de manera permanente por lo que se retira la frase "de manera temporal".

g) Perfeccionar la regulación de la Ley N° 31335, Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en

[52] Decreto Legislativo N°1535, Decreto Legislativo que regula la calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones administradas y/o recaudadas por la SUNAT, conforme a un perfil de cumplimiento, así como los efectos de dicha calificación.

cooperativas agrarias, lo que incluye implementar el tratamiento del Impuesto General a las Ventas aplicable a las cooperativas agrarias.

g.1.) Objeto de la facultad legislativa solicitada

El objeto de la facultad legislativa solicitada es "**Perfeccionar la regulación de la Ley N°31335, Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, lo que incluye implementar el tratamiento del Impuesto General a las Ventas aplicable a las cooperativas agrarias".**

g.2.) Análisis de la problemática y de la materia a legislar

1. Mediante la Ley N° 31335 , Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias (en adelante, la Ley), se establecieron las normas que regulan a las cooperativas agrarias, con el objeto de desarrollar el marco normativo que permita el fortalecimiento organizacional, fomento y promoción de las cooperativas agrarias de usuarios y de sus organismos de integración, dotándolas a su vez de un régimen tributario que respondiese a su naturaleza y al tipo de actos ("actos cooperativos") que desarrollan con sus socios.

2. Respecto a la sustentación objeto de la facultad solicitada, el 25 de enero del presente año, en una "mesa técnica" realizada entre el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesores de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, el MEF explicó que la propuesta se basa en los siguientes criterios técnicos:

   i) El Título II de la Ley establece el Régimen Tributario de las cooperativas agrarias, regulando principalmente el Impuesto a la Renta para la cooperativa agraria de usuarios, el Impuesto General a las Ventas para la cooperativa agraria de usuarios, la responsabilidad de la cooperativa agraria de usuarios por el cumplimiento de obligaciones tributarias generadas por actos cooperativos con sus socios, otras disposiciones para las cooperativas agrarias de usuarios, el régimen tributario de los socios productores agrarios; así como las obligaciones formales a cargo de las cooperativas agrarias de usuarios y a cargo de los socios.
   ii) El MEF señala que luego de una evaluación efectuada en conjunto con la SUNAT, en lo que respecta a la implementación de las disposiciones de la Ley vinculadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, se han detectado imprecisiones, inconsistencias y vacíos en la Ley que impiden efectuar su reglamentación. Dichos aspectos se refieren a la definición del acto cooperativo e involucran elementos sustanciales de la determinación,

declaración y pago del IGV, sistema de detracciones, uso de medios de pago, entre otros.
iii) En ese sentido, resulta pertinente corregir las deficiencias detectadas incorporando las disposiciones que resulten necesarias para regular el tratamiento del IGV y las obligaciones tributarias formales a cargo de las cooperativas agrarias, para lo cual en el marco de lo regulado por el Código Tributario y respetando la técnica del IGV, dichas modificaciones deben realizarse sin afectar la naturaleza de las cooperativas y los actos que desarrollan con sus socios mencionados en la Ley.

3. Según especialistas como el economista Luis Alberto Arias Minaya[53], ex jefe de la SUNAT, el tratamiento del Impuesto General a las Ventas aplicable a las cooperativas agrarias es un problema serio para el desenvolvimiento de estas entidades, pues, las cooperativas agrarias tienen sus socios, sus productores agrarios; los productores agrarios venden sus productos a través de su asociación, a través de cooperativas y estos actos no están regulados de manera concreta y precisa, respecto a si están gravadas con IGV y en qué momento.

   La cooperativa agraria tiene contingencias tributarias enormes, porque en algunos casos han cobrado el IGV, en otros casos no los han cobrado, y allí hay un problema de vacío legal.

   Por otra parte, el 25 de enero del presente año, en una "mesa técnica" realizada entre el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesores de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, el MEF explicó que la propuesta se basa en los siguientes criterios técnicos:

   i) El Título II de la Ley establece el Régimen Tributario de las cooperativas agrarias, regulando principalmente el Impuesto a la Renta para la cooperativa agraria de usuarios, el Impuesto General a las Ventas para la cooperativa agraria de usuarios, la responsabilidad de la cooperativa agraria de usuarios por el cumplimiento de obligaciones tributarias generadas por actos cooperativos con sus socios, otras disposiciones para las cooperativas agrarias de usuarios, el régimen tributario de los socios productores agrarios; así como las obligaciones formales a cargo de las cooperativas agrarias de usuarios y a cargo de los socios.
   ii) En lo que respecta a las disposiciones de la Ley vinculadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, de la evaluación realizada junto con la SUNAT se han

[53] Texto extraído de la exposición del especialista Luis A. Arias Minaya en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, el 25 de enero del 2023.

detectado imprecisiones, inconsistencias y vacíos en la Ley que impiden efectuar su reglamentación. Dichos aspectos involucran elementos sustanciales de la determinación, declaración y pago del IGV, sistema de detracciones, uso de medios de pago, entre otros.

iii) En ese sentido, resulta pertinente superar la deficiencias y vacíos legales detectados, en el régimen tributario de las cooperativas agrarias, incorporando las disposiciones que resulten necesarias para regular el tratamiento del IGV y las obligaciones tributarias formales a cargo de las cooperativas agrarias, para lo cual en el marco de lo regulado por el Código Tributario y respetando la técnica del IGV, dichas modificaciones deben realizarse sin afectar la naturaleza de las cooperativas y los actos que desarrollan con sus socios mencionados en la Ley.

No obstante, pese a la identificación de los aspectos relevantes de la problemática existente en el tratamiento tributario de las cooperativas, en la exposición de motivos ni en información complementaria remitida por el MEF, se han expuesto los criterios o lineamientos básicos sobre cómo el Poder Ejecutivo propone regular las imprecisiones, inconsistencias y vacíos indicados, tanto a nivel del Impuesto a la Renta como del Impuesto General a las Ventas que afectan a las cooperativas.

g.3.) Conclusión y recomendación

En consecuencia, y en virtud del análisis desarrollado, se considera que **NO resulta viable** otorgar facultades legislativas para perfeccionar la regulación de la Ley N° 31335, Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, lo que incluye comprender a las centrales de cooperativas en la definición de acto cooperativo; implementar el tratamiento del Impuesto General a las Ventas aplicable a las cooperativas agrarias; sin que ello implique afectar la naturaleza de las cooperativas, los actos que desarrollan con sus socios y los beneficios de la mencionada Ley.

h) Exonerar de impuestos la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

h.1.) Objeto de la facultad legislativa solicitada

El objeto de la facultad legislativa solicitada se orienta a exonerar de impuestos la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

h.2.) Análisis de la problemática y la materia a legislar

En la exposición de motivos del proyecto de ley mediante el cual se solicita facultades delegadas se señala que "*a través del Decreto Supremo N° 059-2010-MTC y normas modificatorias, se aprobó la Red Básica del Metro de Lima - Sistema*

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, la misma que estará conformada sobre la base de seis (06) Líneas, cuyos trazos preliminares son:

Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacutec, Avenida Tomás Marsano, Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida Fernando Wiese.

Línea 2: Av. Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicolás Ayllón, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la República, Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germán Amézaga, Av. Oscar R. Benavides (Colonial), Av. Guardia Chalaca.

Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Laico, Avenida Arequipa, Avenida Garcilazo de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, Avenida Rosa de América, Avenida Universitaria.

Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión, Avenida Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de Zela, Avenida Canadá, Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado.

Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida República de Panamá, Avenida Miguel Grau.

Línea 6: Av. Túpac Amaru, Avenida Los Alisos, Avenida Universitaria, Avenida Bertolotto, Avenida Pérez Aranibar (Ex Avenida del Ejército), Avenida Angamos y Avenida Primavera. A la fecha sólo la Línea 1 se encuentra en operación, y la Línea 2 se encuentra en ejecución."

Asimismo, se señala que *"en proyectos de gran envergadura y con etapas preoperativas largas el IGV asociado a las adquisiciones de bienes destinados a la ejecución de la obra representa un costo financiero considerable. Mediante la Ley N° 28253 se declaró de necesidad pública la continuación de la ejecución del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao y se exoneró del IGV, IPM e ISC la importación de los bienes que se destinen directamente a la ejecución del referido proyecto; sin embargo, dicha exoneración estuvo en vigor hasta el 2013. A fin de asegurar la continuidad de la ejecución del proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en sus diversas Líneas y evitar el sobrecosto que representa para el inversionista el IGV, IPM e ISC asociado a los bienes que se importen que estén destinados directamente a la ejecución del proyecto se propone reestablecer la exoneración de impuestos que se dio con la Ley N°28253."*

Al respecto, cabe señalar que la ley 28253, Ley que declara de necesidad pública la continuación de la ejecución del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y

Callao, la cual se toma como antecedente para la regulación propuesta, estableció la siguiente normatividad sobre la materia:

> *"Artículo 1.- Objeto de la Ley*
> *Declárase de necesidad pública la continuación de la ejecución del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.*
> *Artículo 2.- Liberación de impuestos La importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, estará exonerada del Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto Selectivo al Consumo y derechos arancelarios, por el plazo de tres (3) años, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley."*

Esto es, ya existe un antecedente normativo que estuvo vigente para los mismos efectos que hoy se solicita.

Por otra parte, según especialistas como el economista Luis Alberto Arias[54], ex jefe de la SUNAT, la solicitud es pertinente, por cuanto se trata de *"una exoneración del IGV para las importaciones que realizan los megaproyectos, que son las líneas del Metro. En general, la técnica tributaria dice que cuando hablamos de inversiones enormes, te toma cinco, diez, quince años construirlas y que, al comprar equipos, al invertir en capital físico se paga IGV y eso no se recupera durante años, hasta que empieza a operar, en este caso el Metro, y entonces, este es un costo financiero enorme. La técnica tributaria dice que estas compras deben ser exceptuadas del IGV."*

h.3.) Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia tributaria puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para exonerar de impuestos la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

2.1.4 En materia de catastro fiscal: a fin de crear y establecer medidas para la conformación, consolidación y mantenimiento del Catastro Fiscal para ser puesto a disposición de las municipalidades; así como establecer el rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas y el uso fiscal de este instrumento en la gestión de los ingresos municipales.

[54] Texto extraído de la exposición del especialista Luis Alberto Arias Minaya en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, el 25 de enero del 2023.

a) Objeto de la facultad legislativa solicitada

El objeto de la facultad solicitada es crear y establecer medidas para la conformación, consolidación y mantenimiento del Catastro Fiscal para ser puesto a disposición de las municipalidades; así como establecer el rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas y el uso fiscal de este instrumento en la gestión de los ingresos municipales.

b) Análisis de la problemática y la materia a legislar

En la Exposición de Motivos del proyecto de ley, el Poder Legislativo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, conforme a lo siguiente:

> "(...) Una de las limitantes del recaudo municipal, es la ausencia de catastros fiscales que se debe construir y consolidar a partir de la información actualizada de predios y contribuyentes que constituyen la base fiscal de cada municipalidad. (...)
>
> El principal factor que incide en el limitado uso de los catastros para fines fiscales en el país es la ausencia de un marco legal que establezca su implementación, mantenimiento y rectoría de esta buena práctica internacional[55] muestra los beneficios de contar con este instrumento, como un paso previo a contar con catastros multifinalitarios.
>
> El catastro urbano nacional, establecido en el Decreto Legislativo N° 1365 se encarga de aspectos vinculados a la gestión urbana, llenando el vacío en temas como el equipamiento urbano, la gestión de riesgos, entre otros. El catastro municipal, por su parte, es casi inexistente, y en donde se ha desarrollado presenta enormes limitaciones de cobertura, articulación, actualización y, principalmente, es altamente costoso, sobre todo para su mantenimiento, lo que ha generado que las municipalidades que realizaron esfuerzos para levantar catastro en el pasado no hayan podido mantener actualizados sus registros; (...) sus capacidades humanas, técnicas y financieras no pueden enfrentar el desafío que implica implementar sus catastros, por la complejidad de estos y los altos costos de su administración (...).
>
> Precisamente, en este contexto, se ha establecido como una medida de política fiscal el Marco Macroeconómico Fiscal 2023-2026, fortalecer la gestión

[55] En Uruguay, el catastro fiscal está gestionado por su Ministerio de Economía y Finanzas, en Chile y España forman parte de sus ministerios de hacienda. En los países anglosajones, forman parte de los departamentos de finanzas, sea en el nivel metropolitano o nacional.

de los ingresos locales a través de los catastros fiscales en el MEF. (...) La centralización y estandarización de estos es necesaria para lograr economías de escala en su conformación, administración y actualización, así como para garantizar su sostenibilidad, de modo que esta información no esté sujeto a los cambios de gestión municipal. El catastro fiscal será consolidado en el Ministerio de Economía y Finanzas y puesto a disposición de las municipalidades en el momento que lo soliciten.

Dotar de este servicio a las municipalidades, especialmente las rurales y pobres urbanas, requiere de un marco legal que le permita al MEF, regular la naturaleza del instrumento, su constitución, los procedimientos para su mantenimiento y establecer los mecanismos de utilización para exclusivos fines fiscales.

El catastro fiscal es complementario al Catastro Urbano Nacional y, a los catastros municipales, cuando existan, pudiendo articularse a los mismos. Así, en municipios donde no exista catastro municipal (1,244 municipalidades según datos del INEI), podrán empezar usando el catastro fiscal del MEF y cuando posean recursos y capacidades, la implementación de su catastro multifinalitario (sea urbano o municipal) partirá de lo ya avanzado en el fiscal. (...)

El catastro fiscal, se concibe como un registro cartográfico estandarizado de predios que contiene únicamente información muy básica pero suficiente para exclusivos fines fiscales, lo que hace de este instrumento muy económico y fácil universalización en todo el país pudiéndose articular a otros catastros temáticos como el catastro registral, el catastro rural, el catastro urbano y otros. Esta situación no convierte al MEF en un ente generador de catastro, sino en un rector en materia de catastro fiscal y consolidador de la información secundaria existente que es generada por las mismas municipalidades y, otras entidades que gestionan datos prediales."

El artículo 2 numeral 2.1.4 del proyecto de ley 3941/2022-PE solicita la generación de una nueva Ley para el fortalecimiento de la gestión de los ingresos locales a través del uso de información de catastros con fines fiscales, como la modificación de la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios. En ese sentido, la mencionada ley no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

Sin perjuicio de ello, se observa en el texto legal propuesto que no se encuentra claramente delimitado los alcances de la **materia específica dado que**, si bien en

la exposición de motivos se describe sobre los potenciales usos del catastro fiscal y la necesidad de su regulación para ponerlo al servicio de las municipalidades a fin de fortalecer la gestión de los ingresos locales a través de los catastros fiscales, no especifica si se creará formalmente un catastro fiscal o si se implementará una plataforma en donde se integrará la información alcanzada por las entidades generadoras de catastro, para brindar a sus usuarios un uso fiscal. Ello, a pesar de que en la página web del MEF existe una sección denominada "Catastro Fiscal", creado como una herramienta del SIAF para gobiernos locales.

De igual manera, al establecer que el ente rector será el Ministerio de Economía y Finanzas no desarrolla cómo se vinculará con otras entidades rectoras en temas de catastro como lo es, a manera de ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Al respecto, en la reunión conjunta de fecha 1 de febrero en las instalaciones del Congreso de la República, sostenida entre el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y personal de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión de Estado; y de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, el MEF señaló que la propuesta normativa está orientada a establecer una normativa específica para implementar información catastral para usos fiscales en las municipalidades del país, a lo que denomina catastro fiscal, a fin de regular su implementación, integrando la información recogida por las entidades generadoras de catastro; además, determinar la entidad responsable de su diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valorización de los predios.

Ahora bien, se observa que a la fecha se encuentra vigente la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, que tienen como finalidad la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país; así como estandarizar la información catastral y demás características de los predios. Sin embargo, dicho Sistema está orientado a levantar la información catastral de predios y hacer un inventario físico de los mismos, vinculado a identificar los puntos geodésicos y linderos, identificar a los propietarios y/o poseedores, entre otros, por lo que está vinculado a mantener y administrar la información catastral respecto al espacio geográfico que ocupa y de los derechos registrados sobre un predio a fin de dar seguridad jurídica, en la medida que tiene interconexión con el registro de predios.

Es así como, de la revisión de la normativa vinculada a materia catastral no se ha encontrado referencia relacionada con el diseño e implementación de un catastro fiscal. En consecuencia, es preciso que se incorpore en la legislación nacional una norma que regule las características y usos del catastro con fines fiscales; sus

características; determine la entidad responsable del mismo, la cual, a su vez, sería la encargada del diseño, consolidación, mantenimiento, actualización y valorización de la información catastral fiscal; y, garantice su disponibilidad para el uso, principalmente, de las municipalidades. Más aun cuando se han evidenciado avances y pruebas en gobiernos locales a manera de piloto en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas[56].

Por lo tanto, corresponde legislar en esta materia con las siguientes modificaciones al texto presentado por el Poder Ejecutivo:

> *"En materia de catastro fiscal: a fin de establecer las características y los usos del Catastro Fiscal, y definir la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valuación fiscal de los predios, y su disponibilidad para el uso de las municipalidades"*

De otro lado, en el proyecto se propone "***establecer el rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas y el uso fiscal de este instrumento en la gestión de los ingresos municipales".*** Al respecto, de la revisión de la normativa en materia catastral, y en lo relativo al Catastro Urbano el ente rector es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento[57]; asimismo, el Catastro Rural está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego[58].

---

[56] Recuperado de:
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101910&lang=es-ES&view=article&id=7482https://www.mef.gob.pe/es/?id=3046&option=com_content&language=es-ES&Itemid=101910&lang=es-ES&view=article

[57] **Decreto Legislativo 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional**
Artículo 4.- Rectoría en materia de Catastro Urbano Nacional
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS es el ente rector en materia de Catastro Urbano Nacional, siendo responsable de dictar políticas, normas, lineamientos y especificaciones técnicas relacionadas con la información catastral urbano nacional en el marco de lo establecido por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y en concordancia con la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en su Reglamento; los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades involucradas en la materia

[58] **Ley 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**
Artículo 7. Funciones específicas
(...)
2. En el marco de sus competencias compartidas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de manera articulada con gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos y entidades del Poder Ejecutivo, según corresponda, tiene las siguientes funciones:
(...)
n. Dictar, respecto de las funciones transferidas en materia agraria y de riego, las normas y lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico-legal y formalización de la propiedad agraria, así como de las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas.

Resolución Ministerial 0332-2022-MIDAGRI, Autorizan funcionamiento del "Sistema Catastral Rural – SCR", aprueban su Manual de Uso, y establecen disposiciones para su implementación.
Artículo 1. Funcionamiento del "Sistema Catastral Rural - SCR"

En ese sentido, en la citada reunión conjunta con los representantes del MEF y la PCM del 1 de febrero, el MEF señaló que no ejercería rectoría en materia de catastro fiscal, sino que será la entidad encargada del diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valorización de los predios, así como poner la misma a disposición de las municipalidades, siendo que la información catastral será proporcionada por las entidades generadoras de catastro, respetando la rectoría del catastro urbano y rural en los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo Agrario y Riego, respectivamente.

c) Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia de catastro fiscal puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para establecer las características y los usos del Catastro Fiscal, y definir la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valuación fiscal de los predios, y su disponibilidad para el uso de las municipalidades con el siguiente texto sustitutorio:

> *"**Artículo 2. Materias de la delegación de facultades legislativas***
>
> ***En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes materias:***
>
> ***2.1 En materia de impulso económico para la reactivación económica:***
>
> ***(...)***
>
> ***2.1.4. En materia de catastro fiscal: a fin de establecer las características y los usos del Catastro Fiscal, y definir la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valuación fiscal de los predios, y su disponibilidad para el uso de las municipalidades."***

Autorizar el funcionamiento del "Sistema Catastral Rural-SCR", cuya administración a nivel nacional, se encuentra a cargo de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

2.1.5 En materia de Tesoro Público: a fin de precisar el destino de los recursos del Tesoro Público provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional.

a) Objeto de la facultad legislativa solicitada

Se propone precisar el destino de los recursos del tesoro público provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el gobierno nacional.

En ese sentido, según se precisa en la exposición de motivos del proyecto de ley, se plantea la necesidad de una normativa *"para redirigir el destino de los recursos provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional a favor del tesoro público, para uso efectivo de los mismos en las políticas de gobierno priorizadas; y en cumplimiento de las reglas fiscales."*

b) Análisis de la problemática y la materia a legislar

La distribución de los recursos provenientes de nuevos procesos de privatización y concesiones que realizó el Gobierno Nacional fue, inicialmente, establecida en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias, vigente desde el 20 de julio del 2002 hasta el 16 de noviembre del año 2020.

De conformidad con el literal b) de dicha disposición, el 30% de los recursos provenientes de nuevos procesos de privatización y concesiones realizados por el Gobierno Nacional, se destinaban al Fondo de Compensación Regional (FONCOR). Mediante la Ley N°31069, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos Regionales a través del FONCOR, en su artículo 3°, numeral 1, se estableció que el FONCOR se constituye con el rendimiento del 2% de las operaciones afectas al IGV. Asimismo, se derogó el literal b) de la antes citada Tercera Disposición Complementaria de la Ley N°27783, sin señalar el destino del mencionado 30% de los recursos obtenidos de los procesos de privatización y concesiones.

Según información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N°188-2023-EF/10.01 (Adjunta el Informe N°0005-2023-EF/52.06 de la Dirección General del Tesoro Público), de fecha 2 de febrero del 2023, con posterioridad a la referida derogatoria del literal b) de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 27783, PROINVERSION y el Gobierno Regional del Cusco han continuado transfiriendo los indicados fondos a la CUT, en concordancia con lo establecido por el Art. 19 del Decreto Legislativo N°1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, toda vez que en la CUT se comprende a todos los fondos públicos.

Dado que no existe un marco legal que disponga sobre el uso o destino de dichos recursos, a la fecha se ha acumulado en la CUT un total de S/ 19, 868' 770,75, que deberían poder ser asignados al financiamiento del gasto público.

En ese sentido, se verifica la necesidad de regular el vacío legal generado por la derogatoria del literal b) de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N°27783 generó un vacío legal, por cuanto no se estableció el destino del 30% de los recursos provenientes de nuevos procesos de privatización y concesiones realizados por el Gobierno Nacional, que constituían el FONCOR.

Al respecto, a efectos de superar la problemática identificada, en la exposición de motivos del proyecto de ley se concluye que *"La necesidad de esta medida se sustenta en los principios del Sistema Nacional de Tesoro Público, con énfasis en el principio de unidad de caja, el que consiste en la administración centralizada de los Fondos Públicos cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la titularidad y registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción"*. En consecuencia, se plantea la necesidad de una normativa *"para redirigir el destino de los recursos provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional a favor del tesoro público, para uso efectivo de los mismos en las políticas de gobierno priorizadas; y en cumplimiento de las reglas fiscales."*

c) Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia de Tesoro Público puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para precisar el destino de los recursos del Tesoro Público provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional

2.1.6 En materia de Contratación Pública:

a) Autorizar el uso del "fondo de garantía" como medio alternativo para garantizar los contratos; y, las modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obra, celebrados en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

a.1. Objeto de la facultad legislativa solicitada

La facultad legislativa solicitada plantea autorizar el uso del "fondo de garantía" como medio alternativo para garantizar los contratos; y, las modificaciones

contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obra, celebrados en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

a.2. Análisis de la problemática y de la materia a legislar

En la exposición de motivos del proyecto de ley se señala que la solicitud de delegación de facultades desde el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento tiene por objeto establecer las siguientes medidas:

"Modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, a fin de establecer disposiciones homogéneas que precisen los alcances y condiciones tanto para la autorización como para la celebración de los acuerdos de Estado a Estado; así como, disponer la obligatoriedad del control simultáneo por parte de la Contraloría General de la República en la ejecución de estos acuerdos. Cabe precisar que dicha medida será empleada por los ministerios, sus organismos públicos adscritos, programas o proyectos, siempre que se trate de proyectos de alta sofisticación, envergadura y complejidad respecto de los cuales dichas Entidades no tienen la expertise o la especialización técnica necesaria para desarrollarlas.

Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establezca que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la retención del monto total de la garantía correspondiente. Ello, con la finalidad de que el postor adjudicado cuente con mayores recursos para reducir cualquier riesgo que impida la celebración de los contratos.

Autorizar a las entidades de los tres niveles de gobierno a acordar con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones, en los contratos vigentes, de ejecución y de supervisión de obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Dichas modificaciones deben incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal correspondiente. Al respecto, dicha medida permitirá fortalecer el gasto público en materia de inversiones. En ese sentido, en el marco de los contratos públicos, el Estado puede establecer medidas que mejoren y propicien la actividad económica, por lo que es necesario dictar medidas que permitan garantizar el dinamismo económico en los tres niveles de Gobiemo."

Esta solicitud aborda un tema que no es nuevo en la legislación nacional, pues tiene como antecedentes Decreto de Urgencia N° 063-2021, denominado "*Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias, durante el Año Fiscal 2021, para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica y la ejecución del gasto público; así como asegurar la continuidad de los procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento*" (publicado el 12 de julio de 2021", mediante el cual se dispuso, entre otras medidas extraordinarias, complementarias y urgentes en materia económica y financiera, para el año 2021, el establecimiento del fondo de garantía como medio alternativo para garantizar el cumplimiento de los contratos, para ello se autorizó a las entidades públicas que en los documentos de los procedimientos de selección que se convocaran bajo los diferentes regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, concediéndole al postor adjudicado la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Esta norma de urgencia, surgió para asegurar la continuidad de los procesos de contratación de las entidades públicas en el contexto de la crisis económica post pandemia del COVID 19, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2021.

Por otra parte, concluido el período de vigencia del precitado D.U. 063-2021, el 31 de diciembre del año 2022, el Poder Ejecutivo, con fecha 12 de agosto del año 2022, emitió un nuevo D.U N°020-2022, "Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y complementarias, durante el año fiscal 2022, para la reactivación económica en el marco del sistema nacional de abastecimiento", mediante el cual se reestableció la normatividad referida a garantías contractuales contenidas en el D.U 063-2021. Ello se produjo teniendo como antecedente "que *con la dación del Decreto de Urgencia N° 063-2021, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, se permitió a las Entidades optar por la aplicación de la retención del monto equivalente al total de la garantía como mecanismo alternativo a la presentación de las garantías de fiel cumplimiento en las contrataciones que forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento*[59]".

La dación del D.U 20-2022 se sustentó en los resultados positivos de la norma antecedente. Se señaló que *"de acuerdo con la información registrada en el SEACE, se ha verificado que 356 Entidades han aplicado el referido Decreto de Urgencia; siendo utilizado mayormente por 280 gobiernos locales*[60]".

---

[59] En archivo digital del Decreto de Urgencia N°020-2022. p. 4
Disponible en: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Decretos/Urgencias/2022/DU-020-2022-OF.pdf

[60] Ibid, pág.6.

De otro lado, según el Ministerio de Economía y Finanzas, *"la falta de presentación de las garantías de fiel cumplimiento es una de las causas para la pérdida de buena pro. Sobre el particular, comparando los meses en que estuvo vigente el Decreto de Urgencia en el año 2021 (12 de julio al 31 de diciembre) con el año 2020 se evidencia la reducción del 40.6% de los ítems con pérdida de buena pro de 1 ,533 a 911*[61]*"*.

Decreto de Urgencia N°062-2021	Decreto de Urgencia N°020-2022
Artículo 8. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos 8.1. Autorízase a las Entidades para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente. 8.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente: (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la Entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro. (ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la Entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro. 8.3. Lo dispuesto en el numeral precedente es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (2) pagos a favor del contratista o dos (2)	**Artículo 2. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos** 2.1. Autorízase a las entidades para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente. 2.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente: (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro. (ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro. 2.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

[61] En archivo digital del Decreto de Urgencia N°020-2022. p. 7
Disponible en: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Decretos/Urgencias/2022/DU-020-2022-OF.pdf

valorizaciones periódicas en función del avance de obra. 8.4. La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato.	2.4. La retención indicada en el numeral 2.1 se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato.

Es decir, según la información sobre los resultados de la aplicación de la norma que establece el medio alternativo, a elección del proveedor, de retención de parte su pagos como medio de cumplir con garantizar sus obligaciones contractuales, dejando de lado la necesidad de presentar costosas cartas fianza como garantía de fiel cumplimiento han demostrado su efectividad en términos de resultados concretos, contribuyendo a una disminución de las pérdidas de buena pro por falta de presentación de las garantías convencionales, vigentes hasta antes de la nueva modalidad dispuesta en el D.U.N°063-2021.

a.3. Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia de contratación pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para autorizar el uso del "fondo de garantía" como medio alternativo para garantizar los contratos; y, las modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obra, celebrados en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

b) Modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de regular los alcances y requisitos de la modalidad "Contratación de Estado a Estado".

b.1. Objeto de la facultad legislativa solicitada

La facultad legislativa solicitada plantea modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de regular los alcances y requisitos de la modalidad "Contratación de Estado a Estado".

b.2. Análisis de la problemática y la materia a legislar

La norma cuya modificación se propone, tiene el siguiente texto siguiente:
"Decreto Legislativo N°1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

(...)

Cuarta. - Contratos de Estado a Estado
En las contrataciones que realice el Estado con otro Estado, la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras, la gestión, desarrollo u operación, pueden ser ejecutadas por el otro Estado a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras. La contratación de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional. La contratación de Estado a Estado debe autorizarse mediante Decreto Supremo refrendado por el titular del sector correspondiente, declarando de interés nacional el objeto de contratación, la cual debe cumplir con las siguientes condiciones:

(i) Indagación de mercado que permita identificar a los posibles Estados que puedan cumplir con lo requerido por el Estado peruano.
(ii) Informe técnico-económico que compare las condiciones ofrecidas por los Estados interesados y evidencie las ventajas para el Estado peruano de contratar con otro Estado.
(iii) Informe de la oficina de presupuesto o la que haga las veces del sector correspondiente, que señale que se cuenta con el financiamiento necesario para dicha contratación, salvo que, se requiera concertar una operación de endeudamiento, en cuyo caso, la misma debe estar contemplada en el Programa Anual de Endeudamiento del año respectivo.
(iv) Declaratoria de viabilidad y/o aprobación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuando corresponda.

Los contratos o convenios pueden incluir cláusulas que contemplen: i) plan de transferencia de conocimientos relacionados con el objeto del acuerdo; ii) plan para el legado del país; iii) compromiso de implementar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) cuando el objeto incluya la gestión de proyectos; y, iv) la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del contrato o convenio por parte del otro Estado. Esta información debe ser puesta en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de los órganos que conforman Sistema Nacional de Control, cuando estos lo soliciten.

Si la contratación tiene como objeto la adquisición de bienes, la entrega puede realizarse en zona primaria o en el lugar que los gobiernos contratantes

convengan. Si el objeto de contratación es un servicio este se realiza en el lugar donde las partes contratantes convengan."

Al respecto, el Ministro de Economía y Finanzas, en su exposición durante la sesión conjunta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, realizada el 27 de enero del 2023, sostuvo que lo que busca modificar en la normativa de los contratos de estado a Estado se orienta a "*permitir la realización de acuerdos de Estado a Estado con un procedimiento simplificado*".

De otro lado, en relación con el propósito del Poder Ejecutivo de reformar la normatividad relativa a las normas para las contrataciones de Estado a Estado, encontramos que con fecha 31 de diciembre de 2022, ya bajo la gestión del actual Ministro de Economía y Finanzas, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 318-2022-EF/54 por la cual se dispuso la publicación del "Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado" y su Exposición de Motivos en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas.

En dicho proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, se puede apreciar, en su Disposición Complementaria Final Octava, referida a los Contratos de Estado a Estado, que se propone establecer nuevas disposiciones referidas a este tipo especial de contratos, relativas a la ejecución contractual y la lucha contra la corrupción, así como a darle una participación más activa y directa al Sistema Nacional de Control durante la ejecución de estos. Entre dichas disposiciones cabe señalar las siguientes:

"6. El Acuerdo que se suscriba incluye necesariamente cláusulas que contemplen las siguientes obligaciones:
6.1 Por parte del otro Estado:
(...)
v) La terminación de pleno derecho de los contratos que se deriven de los Acuerdos, por actos de corrupción.
(...)
6.2 Por parte del Ministerio, Organismo Público adscrito, Programa o Proyecto, la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del Acuerdo y los contratos que se deriven de éste a los órganos que conforman Sistema Nacional de Control.

7. La Dirección General de Abastecimiento, mediante resolución directoral emite lineamientos para el desarrollo de lo dispuesto en los numerales precedentes.

8. La ejecución de las contrataciones que deriven de los Acuerdos se somete al control gubernamental. El control es simultáneo y está a cargo de la Contraloría General de la República."

Respecto a la normatividad citada, contenida en el proyecto de nueva Ley de Contrataciones del Estado, cabe destacar que ella propone modificar los preceptos vigentes, introduciendo como causal de resolución de este tipo de contratos, aquellos en los que se detecte prácticas corruptas, así como establecer que en los Acuerdos de Gobierno a Gobierno existirá un control concurrente (simultáneo), el cual debe cerrarse con un informe final del cual se debe desprender clara y precisamente qué puede ser objeto de control posterior.

b.3. Conclusión y recomendación

Según la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, la modificación de leyes relativas a materia de contratación pública puede ser delegable. En consecuencia, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta materia. Tomando en consideración argumentos técnicos y constitucionales, **resulta viable** otorgar facultades legislativas para para modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de regular los alcances y requisitos de la modalidad "Contratación de Estado a Estado".

2.2 En materia de modernización de la gestión del Estado:

En la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Esta se ha recibido formalmente los siguientes documentos de opinión, a la fecha de presentación del dictamen:

Organismo	Documento	Recibido
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros	Informe Complementario, Sustento de facultades en materia de modernización de la gestión del Estado,	31 de enero de 2023
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos	Of. 184-2022-2023/CODE-CR	07 febrero 2023
Comisión de la Mujer y Familia	Of. 308-2022-2023-CMF/CR	07 febrero 2023

INDECOPI	Of. 000012-2023-PRE/INDECOPI	08 febrero 2023
SUNASS	Of. 090-2023-SUNASS-GG	13 febrero 2023
OSINERGMIN	Of. 40-2023-OS/PRES	13 febrero de 2023
SINEACE	Of. 000072-2023-SINEACE/P	13 febrero de 2023
OSITRAN	Of. 0028-2023-PD-OSITRAN	14 febrero de 2023
OSIPTEL	C.00025-PE/2023	14 febrero de 2023

a) Actualizar la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, respecto de las materias comprendidas en el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública vinculadas con la estructura, organización y funcionamiento de las entidades públicas para el mejor cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como implementar medidas para ejecutar lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16 de la referida Ley, de modo tal que se disponga mecanismos permanentes de gobernanza y la revisión de las regulaciones emitidas por los entes rectores de los sistemas administrativos para su simplificación administrativa en aras a optimizar y dinamizar la gestión interna en las entidades públicas. No se incluye las regulaciones del Sistema Nacional de Control.

En la exposición de motivos de la proposición legislativa, se menciona lo siguiente:

> *"Se advierte que en esta Ley se utiliza el término "Organismo Público Descentralizado", siendo el término adecuado bajo las normas de organización del Estado el de "Organismo Público", esta situación está generando que varios gobiernos subnacionales utilicen el término "Organismo Público Descentralizado" proponiendo atribuciones y autonomías relacionadas a personas jurídicas, respecto a lo cual la Secretaría de Gestión de la PCM ha emitido opiniones contrarias a lo antes señalado. Por ello, se propone adecuar al término "Organismo Público".*
> *Igualmente, el artículo 6-A desarrolla la figura de la Declaratoria de Fortalecimiento Organizacional como un instrumento excepcional de modernización, cuyo objetivo fue agilizar el proceso de aprobación de documentos de gestión organizacional, a fin de que las entidades públicas puedan probar modelos de estructura que se ajusten a sus necesidades; sin embargo, los procesos de aprobación de los Documentos de Organización y Funciones Organizacional (DOFP) han sido similares o incluso mayores a los plazos de modificación del ROF. Además, para aprobar el DOFP no se requiere la opinión del Ministerio (en caso se proponga aprobar el DOFP de un Organismo Público que está adscrito a este Ministerio), pero al pasar del DOFP al ROF se presenta el riesgo que el Ministerio no esté de acuerdo con las modificaciones realizadas y puede observar este proyecto de ROF.*

En adición a lo antes señalado, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM viene desarrollando la Plataforma de Gestión Organizacional (PGO), mediante la cual se agilizará la aprobación y modificación de los ROF de las entidades públicas. Por ello, se propone derogar el artículo 6-A y hacer una revisión integral de la Ley 27658 a fin de proponer los cambios que se considere necesarios para que las entidades públicas tengan una organización más eficiente y brinde mejores servicios a la población. De otro lado, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo 103-2022-PCM, señala que uno de los puntos críticos que sigue debilitando la operación de las entidades públicas es el limitado funcionamiento de los sistemas administrativos, los cuales — muchas veces — terminan siendo los principales obstáculos para la provisión de bienes y servicios óptimos en el territorio, agregando que resulta fundamental mejorar el funcionamiento y articulación de los sistemas administrativos para facilitar la labor que realizan los servidores civiles en cada una de las entidades públicas, así como generar condiciones adecuadas para poder implementar intervenciones que respondan a lo que las personas necesitan y esperan en el territorio.

De manera adicional, relacionado a la limitación expuesta sobre la desarticulación de los sistemas administrativos, así como las cargas innecesarias generadas por estos, la encuesta nacional para mejorar la gestión pública realizada en el año 2020 por la Secretaría de Gestión Pública, identificó las trabas administrativas que tienen los servidores públicos de los tres niveles de gobierno en la gestión interna. En ese sentido, es prioritario reducir las cargas administrativas de gestión interna en relación a los sistemas administrativos, con el objetivo de mejorar los procesos de administración interna y promover un uso más eficiente de los recursos públicos, para lo cual los entes rectores de los sistemas administrativos revisaran la necesidad y efectividad de su marco legal vigente bajo los lineamientos de mejora regulatoria."

Puntualizando sobre la solicitud de delegación, a partir de la proposición legislativa, de la exposición de motivos y la información aportada en las reuniones complementarias, se identifican los siguientes temas que en conjunto suponen actualizaciones de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado:

- Corrección del término "organismo público descentralizado" (en desuso) por el de "organismo público".

- Derogatoria del artículo 6-A acerca de la figura de "declaratoria de fortalecimiento organizacional" como instrumentos de modernización y la finalidad de agilizar el proceso de aprobación de documentos de gestión organizacional.

- Implementar medidas para que se ejecute lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16 de la referida Ley, que dispone la revisión periódica de las

regulaciones emitidas por los entes rectores de los sistemas administrativos considerando la heterogeneidad institucional del Estado; que permita superar el limitado funcionamiento de los sistemas administrativos, así como reducir cargas administrativas de gestión que generan.

Asimismo, mediante correo institucional de fecha 31 de enero, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió un Informe Complementario a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado, en adelante "Informe Complementario SGP-PCM", en el que se precisan dos nuevos asuntos, en la misma línea de actualización:

- Modificar el artículo 12 de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, "incluyendo a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública como el principal instrumento articulador de este proceso bajo el liderazgo de la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública, la cual se encarga de su propuesta, articulación, seguimiento y evaluación. Actualmente, la citada ley solo regula como estrategia del proceso de modernización a la suscripción de Convenios de Gestión y la implementación de Programas Pilotos de Modernización".

- Disponer que toda habilitación o facultad que se pretende dar a una entidad para exceptuarse de alguna disposición o normativa que rige un sistema administrativo bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, requiere contar con la opinión técnica previa favorable del rector de dicho sistema administrativo a fin de evaluar si realmente se justifica tal exoneración de manera excepcional.

La solicitud de delegación de facultades en esta materia está circunscrita a modificaciones de actualización y eficacia de cumplimiento en la Ley 27865, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, norma que también determina la rectoría de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Sistema Administrativo de Modernización de la gestión pública, con arreglo a la Ley 29158, Ley Orgánica de Poder Ejecutivo; así como responsable de la Política Nacional sobre Modernización de la Gestión del Estado.

En ese sentido, el asunto de la delegación implica modificaciones y actualizaciones a una ley ordinaria, no implica materias de ley orgánica, ni tampoco supone asuntos propios de la Ley de Presupuesto; por lo que es factible cumplir con las delegaciones solicitadas en el periodo que plantea la proposición del Poder Ejecutivo, lo cual permite señalar que la delegación en esta materia es constitucionalmente factible.

Sobre materia específica, se puede señalar que la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado, es una ley ordinaria aprobada por el Congreso y promulgada el 29 de enero de 2002. En ese sentido, es anterior a la ley de reforma constitucional acerca de la descentralización y la organización de tres niveles de gobierno y en especial anterior a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (2007), que regula aspectos y criterios de organización no sólo válidos para el Poder Ejecutivo, sino también para todas las entidades del Estado, tales como una tipología de organismos públicos, la forma de aprobación de las normas de organización y funciones, el papel de los sistemas administrativos y funcionales, entre otros aspectos relevantes.

Por ello, la Ley 27658 ha sido modificada/actualizada en distintas oportunidades siendo pertinente mencionar las siguientes:

Norma	Contenidos
Ley 30039 de 2013	Art 12 convenios de gestión y programas piloto que implican reorganización integral de entidades, definidos como estrategia del proceso de modernización. Art 14 posibilidad de celebrar convenios de gestión con gobiernos regionales y gobiernos locales.
D.Leg. 1446 de 2018	Art. 5 literales a) d) y h), acerca de prioridad de acciones, eficacia y eficiencia en el Estado; y mejora de la calidad de regulaciones. Art 5-A referida a la finalidad del Sistema Administrativo y el ejercicio de su rectoría a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de PCM. Art 6-A declaratoria de fortalecimiento organizacional, como instrumento de mejoramiento de diseño y estructura de una entidad Art 13 Normas de organización de entidades y dependencias del Estado. At 16 sobre la armonización de los sistemas administrativos

Elaboración propia

Luego de sucesivas modificaciones, la Ley sigue considerando disposiciones sobre aspectos de diverso nivel: normas y criterios generales, procedimientos, instrumentos y prácticas. Por ejemplo, la norma habilitante de programas piloto de modernización en dos ministerios (cfr. primera disposición final). Quizá por esa razón requiere actualización constante.

Finalmente, conviene precisar que mediante Decreto Supremo 103-2022-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, con arreglo al artículo 4 de la Ley 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y cuya conducción es

del órgano rector del sistema administrativo correspondiente la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

En ese sentido, la política nacional define objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de esta política pública (cfr. LOPE 4) y en su estructura, siguiendo la metodología validada por CEPLAN, precisa una estrategia de intervención en relación al problema público anotado (cfr. DS 103).

> "(...) la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se constituye en el principal instrumento estratégico de nuestro ordenamiento a través del cual se orienta el proceso de modernización de la gestión pública y desarrolla los objetivos y lineamientos de política pública en la materia (...)"[62]

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, es un instrumento crucial para la gobernanza de un proceso que requiere consistencia en el tiempo y para ello necesita guardar tanto la generalidad suficiente respecto del proceso como la precisión necesaria para su cumplimiento.

En tanto instrumento para la gobernanza de la modernización del Estado, requiere una puesta al día constante respecto de marcos normativos legales vigentes y que les sean complementarios como las normas constitucionales sobre organización del Estado, en especial la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como las leyes orgánicas que corresponden a los gobiernos regionales y las municipalidades. También debe considerar la experiencia de lo avanzado, a fin de realizar las correcciones necesarias, para respaldar las normas menores para mejorar su implementación y eficacia.

En ese sentido, y dada la información recibida, se encuentra como razonable, una autorización sobre la actualización de la Ley 27658, en lo siguiente:

- Cambios de terminología organizacional en uso en la ley (v.gr. sustituir organismo público descentralizado por organismo público);
- Descartar la declaratoria de fortalecimiento organizacional como instrumento útil para modernización de entidades y para la agilidad del proceso de aprobación de documentos de gestión, pues su implementación no ha logrado los objetivos esperados y ya no es consistente con la política nacional aprobada (v.gr. derogar el artículo 6-A)
- Precisar que la política nacional es el instrumento que define la estrategia de modernización del Estado, por el tiempo en que haya

[62] Informe Complementario SGP-PCM p. 2.

sido definido, derogando las normas referidas a instrumentos o procedimientos contingentes (v.gr. modificar el artículo 12).

Finalmente, se entiende que cuando en el texto de solicitud de facultades se habla de una "revisión integral" hace referencia a la implementación de este tipo de actualización, y no a la promulgación de un nuevo marco legal, el cual debiera ser objeto de trámite regular ante el Congreso.

Por todo lo dicho la norma autoritativa debe permitir:

Actualizar la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado respecto a:
i) estrategia para modernización del Estado, instrumentos en uso y terminología organizacional;

En línea con lo anterior, el artículo 16, introducido por la Ley 30039 modificatoria (2013) de la Ley Marco, introduce la necesidad que los sistemas administrativos sean espacios de armonización a fin de articular, simplificar y actualizar sus procedimientos.

Por lo señalado, es de necesidad que los entes rectores implementen acciones que contribuyan a la eficiencia y fiscalización de los sistemas bajo su competencia, para lo cual revisan periódicamente sus regulaciones, para establecer efectos y costos de aplicación considerando la heterogeneidad institucional del Estado.

Sin embargo, esto no ha sucedido; pues la Primera Encuesta Nacional para mejorar la Gestión Pública (2020) y de la Evaluación de Resultados de la PNMGP (2020) se menciona problemas tales como:

- *"Desarticulación entre el sistema de planeamiento y presupuesto: las entidades públicas elaboran el presupuesto no considerando de forma diligente los registros ingresados al POI a través del aplicativo del CEPLAN, lo que provoca que existan actividades que no son ejecutadas por falta de presupuesto, pero también que aparezcan actividades no consignadas que son ejecutadas.*
- *Descoordinación entre el sistema de abastecimiento y el sistema de presupuesto, a nivel de la certificación presupuestal o en los procesos de pago; 3. Métodos distintos para evaluar la acción estatal entre entidades rectoras de sistemas administrativos: los métodos para realizar el seguimiento y la evaluación empleados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN son distintos de los empleados en el marco de la reforma del presupuesto por resultados, entre otros.*
- *Complicaciones en la ejecución del gasto público, debido a la descoordinación de los planes y los programas presupuestales, generándose retrasos, principalmente, a nivel de certificación presupuestal.*

- *Problemas relacionados principalmente con los procesos presupuestarios, sobre todo a nivel de la certificación presupuestal dentro de la cadena logística de recursos humanos.*
- *Demora en la trazabilidad de la información al interior de las entidades públicas y en el envío de información de una entidad a otra, lo cual genera, entre otras dificultades, desfases de tiempo para realizar algún requerimiento de abastecimiento o algún trámite administrativo."*[63]

Por todo lo dicho, se requiere en la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, que el cumplimiento del mandato de revisión, evaluación y simplificación, sea responsabilidad de los entes rectores de los sistemas administrativos y de sus funcionarios a cargo en los siguientes términos:

Actualizar la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado respecto a:

ii) establecer la responsabilidad de cumplimiento de la revisión periódica de las regulaciones emitidas por los entes rectores de sistemas administrativos.

Finalmente, se han identificado problemas de incumplimiento de procedimientos para la aprobación de normas de organización y funciones. De ello, se encuentra que existen disposiciones legales que exoneran de la dación de la respectiva ley de organización y funciones e incluso autorizan que los documentos de gestión de nivel reglamentario sean dados y aprobados por la propia entidad, lo cual no se condice con la legislación orgánica vigente, tampoco con las normas de procedimiento, y se concreta a través de una ley del tipo presupuestario. En todo caso, tales entidades carecen de una ley de organización y funciones que haya pasado por el Congreso o por facultades delegadas.

En tal sentido, se debe normar sobre la necesidad de una opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM), en la aprobación de normas de Organización y Funciones, descartando el procedimiento derogatorio de esas disposiciones en anteriores leyes de presupuesto por temporalidad dada su vigencia anual; así como considerando que una delegación de facultades no debiera ocurrir sobre normas incluidas en la Ley de Presupuesto, aunque sea discutible que constituye norma presupuestal.

Así, se requiere actualizar la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, respecto a:

[63] cfr. Informe Complementario SGP-PCM.

iii) la necesidad de opinión favorable del ente rector del Sistema de Modernización del Estado para tramitar excepciones de procedimientos normados de organización y funciones, y documentos de gestión.

En atención a lo indicado, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:**

"Actualizar la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado respecto a: i) estrategia para modernización del Estado, instrumentos en uso y terminología organizacional; ii) establecer la responsabilidad de cumplimiento de la revisión periódica de las regulaciones emitidas por los entes rectores de sistemas administrativos; y, iii) la necesidad de opinión favorable del ente rector del Sistema de Modernización del Estado para tramitar excepciones de procedimientos normados de organización y funciones, y documentos de gestión".

b) Modificar el Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas, a fin de que se derogue la distribución de los costos y gastos comunes derivados de la operación de los Centros MAC entre las entidades administradoras y entidades participantes y, que las entidades no conformantes del Poder Ejecutivo participen de manera obligatoria en los Centros MAC.

Sobre el particular, el Pleno del Congreso de la República, con fecha 16 de enero de 2022, aprobó la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos; que norma sobre las materias solicitadas. A la fecha el expediente se encuentra como autógrafa alcanzada para su promulgación por el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, **se configura una situación de sustracción de la materia.**

c) Mejorar el marco legal que regula los procedimientos administrativos estandarizados de aplicación obligatoria en toda la Administración Pública, así como otras dirigidas a precisar las competencias y principales actividades para el proceso de ratificación de tasas de las municipalidades distritales, dirigido a promover y fomentar la inversión de las personas naturales y/o jurídicas.

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, se sustenta lo siguiente:

"Existe gran variación en los procedimientos que se realizan en las diferentes municipalidades del país, no solo en los máximos y mínimos de tasas, plazos y requisitos, sino también existe una gran variación en las denominaciones y modalidades de cada procedimiento. En este sentido, mediante el Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se asigna la competencia a la PCM para aprobar procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las cuales no están facultadas para modificarlos o alterarlos.

A la fecha la PCM ha estandarizado 218 procedimientos administrativos estandarizados (PAF), no obstante, se evidencia trabas para el diseño e implementación, siendo que solo 2 gobiernos regionales de 25 (es decir, el 8%) han implementado el 100% de los PAE de su competencia, y solo 90 municipales de 378 (es decir, el 24%) han implementado el 100% de los PAF de su competencia. En tal sentido, atendiendo a dicha problemática, se propone mejorar el marco legal vigente otorgando seguridad jurídica a los administrados, pues tendrán la certeza de que los procedimientos que siguen se ajustan a lo dispuesto por la normativa y les permitirá exigir la aplicación de la norma que les ofrezca mejores condiciones al interior del procedimiento administrativo, sobre todo en el ámbito de los gobiernos locales y regionales."

A fin de contar mayor especificidad en la materia en el "Informe Complementario SGP-PCM" se precisa que se desea modificar el marco normativo, en lo referente a los procedimientos administrativos estandarizados y los servicios prestados en exclusividad, respecto de lo siguiente:

- Incluir y precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para promover y desarrollar la estandarización de trámites, así como también para proponer de oficio a las entidades involucradas en las materias de los trámites a estandarizar.

- Incluir una definición del concepto de "estandarización".

- Incluir la competencia de la Secretaría de Gestión Pública para eliminar procedimientos administrativos estandarizados, sus requisitos u otras medidas de simplificación, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública.

- Incluir la facultad de las entidades para establecer condiciones más favorables a las establecidas en los decretos supremos estandarizados para la atención de los trámites.

Un segundo aspecto que se incluye en el mencionado Informe es referente a la legalidad de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, respecto de lo cual detallan que se pretende:

- Precisar que no solo los procedimientos administrativos deben establecerse en una disposición sustantiva, sino también los servicios prestados en exclusividad y sus respectivos requisitos.

- Establecer que los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad deben compendiar y sistematizar en el TUPA.

- Precisar que las entidades solo pueden exigir a los administrados el cumplimiento de procedimientos y servicios si cumplen las dos primeras condiciones antes descritas, caso contrario incurren en responsabilidad administrativa.

- Precisar que las disposiciones de eliminación o simplificación no solo aplican para los procedimientos administrativos, sino también para los servicios prestados en exclusividad, según la disposición normativa que corresponda.

Un tercer aspecto incluido también en el referido Informe es referente al contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos, respecto de lo cual detallan que se pretende:

- Incluir la competencia para que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública, en un plazo de 45 días hábiles apruebe los criterios que regulan el proceso de ratificación de tasas o derechos de tramitación.

- Precisar que para los procedimientos administrativos especiales que no se aprueben con tasas, las entidades deben seguir el proceso establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario.

- Precisar que el proceso de publicación del Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos debe concordar con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

En tal sentido, se realizan las siguientes observaciones sobre los siguientes aspectos:

a) Incluir y precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para promover y desarrollar la estandarización de trámites, así como también para proponer de oficio a las entidades involucradas en las materias de los trámites a estandarizar.

De conformidad con el literal o) del artículo 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial Nº 156-2021-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros también puede ejercer otras funciones que son establecidas por Ley.

En este sentido, es legalmente posible que se le asignen competencias adicionales a las previstas en su Reglamento de Organización y Funciones, mediante una norma de rango legal.

Por otro lado, en lo que respecta a los procedimientos administrativos estandarizados y la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, el numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS establece lo siguiente:

> "Artículo 41.- Procedimientos Administrativos estandarizados obligatorios.
>
> 41.1 Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.".

Conforme se observa, la normatividad vigente ya establece que la Presidencia del Consejo de Ministros es competente para aprobar los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados y que son de aplicación obligatoria por las entidades competentes para su tramitación; no obstante, no establece expresamente su competencia para promover, eliminar o simplificar los procedimientos estandarizados ya existentes o que fueran a ser estandarizados, así como también en relación al establecimiento de las entidades involucradas en la atención de tales trámites, lo cual redundará en una mejora en la prestación de los servicios al ciudadano.

Es importante que dichas competencias sean establecidas expresamente en la Ley, como es en este caso la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, toda vez que debe cumplirse con lo previsto en el principio de legalidad.

Siendo ello así, considera procedente otorgar las facultades legislativas para "precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para la promoción, eliminación, simplificación, y estandarización de trámites, así como para la determinación de las entidades involucradas".

b) Incluir una definición del concepto de "estandarización".

La Ley del Procedimiento Administrativo General, a diferencia de algunos otros marcos normativos, no establece un artículo concreto donde se consigne una serie de definiciones para orientar al aplicador de la norma. No obstante, en determinados artículos incluye ciertas definiciones, tal y como se puede apreciar de los artículos 29 y 239 de su Texto Único Ordenado.

Ahora bien, de la revisión de los artículos de dicho cuerpo normativo, no se observa una definición del concepto de "estandarización", lo cual resulta importante para orientar tanto a la administración como también a los administrados.

En este sentido, se considera favorable otorgar facultades legislativas para incluir una definición de "estandarización" en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

c) Incluir la competencia de la Secretaría de Gestión Pública para eliminar procedimientos administrativos estandarizados, sus requisitos u otras medidas de simplificación, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública.

Conforme a lo señalado precedentemente, es jurídicamente viable que las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros se establezcan en una norma diferente a su Reglamento de Organización y Funciones, como puede ser una norma de rango legal.

Asimismo, en consideración al principio de legalidad mencionado, es importante que la Ley del Procedimiento Administrativo General establezca expresamente que la Presidencia del Consejo de Ministros es competente para eliminar los procedimientos administrativos estandarizados, sus requisitos o establecer otras medidas de simplificación administrativa.

Por ello, se considera viable otorgar facultades a la Presidencia del Consejo de Ministros para la eliminación y simplificación de los procedimientos administrativos estandarizados, y ya será dicha entidad, mediante su normativa

interna, la que determinará su órgano que ejercerá dicha competencia y mediante qué norma jurídica.

d) Incluir la facultad de las entidades para establecer condiciones más favorables a las establecidas en los decretos supremos estandarizados para la atención de los trámites.

Es importante traer nuevamente a colación lo señalado en el numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, el cual establece lo siguiente:

> *"Artículo 41.- Procedimientos Administrativos estandarizados obligatorios.*
>
> *41.1 Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos,* ***las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos****. (...)". (énfasis agregado)*

Es cierto que, por principio, la normativa de la Ley del Procedimiento Administrativo General permite que las entidades puedan establecer disposiciones más favorables a los administrados, toda vez que estamos ante una norma de carácter garantista. No obstante, dado que el referido artículo contiene una prohibición expresa, es posible que una lectura literal lleve a la conclusión de que las entidades no pueden aprobar medidas más favorables al administrado en caso estemos ante un procedimiento administrativo estandarizado.

Por ello, a fin de evitar diferentes interpretaciones, se considera pertinente otorgar facultades legislativas para establecer expresamente que las entidades involucradas en tales procedimientos administrativos puedan aprobar disposiciones más favorables para el administrado.

e) Precisar que no solo los procedimientos administrativos deben establecerse en una disposición sustantiva, sino también los servicios prestados en exclusividad y sus respectivos requisitos.

El numeral 40.1 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece lo siguiente:

> *"Artículo 40.- Legalidad del procedimiento*

> *40.1* ***Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva*** *aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, por Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos. (...)" (Énfasis agregado).*

Como se observa, en atención a la literalidad de la norma, se puede colegir que solo los procedimientos administrativos deben estar contenidos en una norma sustantiva para ser exigibles a los administrados. No obstante, estos procedimientos pueden establecer también el cumplimiento previo o la comisión de determinados servicios cuyos requisitos, atendiendo a la literalidad de la norma, podrían no tener que ser aprobados por una Ordenanza Regional, Ordenanza Municipal o Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos.

Esta situación podría afectar la predictibilidad que requiere todo administrado para tener certeza jurídica sobre los requisitos que debe cumplir para obtener algún título habilitante en el marco de un procedimiento administrativo.

Siendo ello así, se considera procedente delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo a fin de precisar que los servicios y sus requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva, tal y como ya se establece propiamente para los procedimientos administrativos y sus requisitos.

f) Establecer que los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad deben compendiarse y sistematizarse en el TUPA.

El numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, el cual establece lo siguiente:

> *"Artículo 41.- Procedimientos Administrativos estandarizados obligatorios.*
>
> *41.1* ***Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad*** *estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos.* ***Las entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos*** *sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece, y la autoridad*

competente que resuelve los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente." (énfasis agregado)

Conforme se observa, la redacción vigente del citado cuerpo normativo ya establece la obligatoriedad de incorporar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos no solo los procedimientos administrativos, sino también los servicios prestados en exclusividad.

En este sentido, otorgar facultades legislativas en este extremo resulta redundante con la legislación vigente, por lo que no resulta procedente otorgarlas.

g) Precisar que las entidades solo pueden exigir a los administrados el cumplimiento de procedimientos y servicios si cumplen las dos primeras condiciones antes descritas, caso contrario incurren en responsabilidad administrativa.

El numeral 44.8 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 44.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(...)
44.8 ***Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario*** *que:*
a) ***Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA*** *o que, estando en el TUPA, no han sido establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados.* (...)". (énfasis agregado)

Conforme se observa, como primera premisa, notamos que el funcionario que exige el cumplimiento de requisitos no previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos incurre en responsabilidad administrativa.

Ahora bien, debe observarse que el citado numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que los procedimientos administrativos y los servicios prestados en exclusividad deben estar contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Por ello, se puede concluir que el funcionario que exige algún requisito, sea de un procedimiento administrativo o de un servicio prestado en exclusividad, no provisto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos incurre ya en responsabilidad.

Siendo ello así, no es procedente otorgar las facultades legislativas en el presente extremo, toda vez que la normativa vigente ya regula la materia en el mismo sentido.

h) Precisar que las disposiciones de eliminación o simplificación no solo aplican para los procedimientos administrativos, sino también para los servicios prestados en exclusividad, según la disposición normativa que corresponda.

Conforme a lo señalado en los puntos anteriores, en atención al principio de legalidad, la normativa vigente debe establecer expresamente las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros para regular los procedimientos administrativos estandarizados, así como también respecto de los servicios prestados en exclusividad.

Por ello, se considera procedente otorgar facultades legislativas para precisar que la Presidencia del Consejo de Ministros tiene competencias, en lo referente a los procedimientos administrativos estandarizados, los servicios prestados en exclusividad y los requisitos de ambos, para su eliminación y simplificación.

i) Incluir la competencia para que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública, en un plazo de 45 días hábiles apruebe los criterios que regulan el proceso de ratificación de tasas o derechos de tramitación.

Conforme a lo expuesto en el Informe remitido por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la revisión del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Resolución Ministerial 301-2019-EF/41, el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene competencia expresa para establecer los criterios que regulan el proceso para el establecimiento o la ratificación de las tasas o derecho de tramitación, pudiendo cada entidad adoptar diferentes criterios.

Por ello, ante esta situación, los administrados pueden afrontar importantes diferencias de costos de tasas entre una entidad u otra pese a que la naturaleza de los procedimientos puede resultar muy similares.

En este sentido, se considera importante que exista cierto nivel de estandarización que garantice que los administrados pagan en las tasas administrativas los costos que resultan correspondientes.

Siendo ello así, se considera procedente otorgar facultades legislativas para precisar el procedimiento para la ratificación de tasas o derechos de tramitación, así como la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas,

en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, para establecer los criterios que regulan dicho procedimiento.

j) Precisar que para los procedimientos administrativos especiales que no se aprueben con tasas, las entidades deben seguir el proceso establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Los artículos 44 y 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General regulan los criterios para el establecimiento de los derechos de tramitación y los límites generales para el establecimiento de los respectivos montos. En este sentido, sería contrario a la naturaleza de dicha regulación que ella fuera aplicable para los procedimientos administrativos que no contienen tasas administrativas.

En este sentido, se considera que no corresponde otorgar facultades legislativas en cuanto al presente extremo.

k) Precisar que el proceso de publicación del Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos debe concordar con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El artículo 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES*
>
> *Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados:*
>
> 1. *En el Diario Oficial El Peruano en el caso de todas las municipalidades de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.*
> 2. *En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad.*
> 3. *En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.*
> 4. *En los portales electrónicos, en los lugares en que existan.*
>
> *Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su vigencia.*

No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión."

Conforme se observa, este procedimiento tiene que ser cumplido por toda norma jurídica aprobada por una municipalidad, siempre que sea una ordenanza, decreto de alcaldía o también los acuerdos sobre remuneración del alcalde y la dieta de los regidores.

Ahora bien, en relación a la publicidad del Texto Único de Procedimientos Administrativos, el artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, establece lo siguiente:

"Artículo 44.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

44.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

*44.2. **La norma que aprueba el TUPA se publica en el diario oficial El Peruano**.*

*44.3 **El TUPA y la disposición legal de aprobación o modificación se publica obligatoriamente en el portal del diario oficial El Peruano**. Adicionalmente se difunde a través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal Institucional de la entidad. La publicación en los medios previstos en el presente numeral se realiza de forma gratuita.*

44.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad. (...)" (énfasis agregado)

Conforme se observa, existe una disposición general para la publicidad de toda norma jurídica, pero existe una disposición especial para la publicidad de la norma jurídica que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Si bien por principios generales del derecho la norma especial prima sobre la norma general, es importante que exista uniformidad en los criterios de publicidad, a fin de que los administrados tengan la certeza de la existencia de un único mecanismo de publicidad para toda norma jurídica de índole municipal.

En este sentido, se considera pertinente dar facultades legislativas al Poder Ejecutivo a fin de regular los mecanismos para la publicidad del Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Finalmente, considerando lo expuesto, se considera pertinente delegar facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo mediante el siguiente texto sustitutorio:

> ***"Modificar la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en lo referente a los procedimientos administrativos estandarizados, los servicios prestados en exclusividad y los requisitos de ambos a fin de (i) precisar que los servicios y sus requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva, (ii) incluir una definición de estandarización; iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para la promoción, eliminación, simplificación y estandarización de trámites, así como para la determinación de las entidades involucradas y la posibilidad de que éstas aprueben disposiciones más favorables al administrado; iv) precisar el procedimiento para la ratificación de tasas o derechos de tramitación, así como la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, para establecer los criterios que regulan dicho procedimiento; y, (v) regular los mecanismos para la publicidad del Texto Único de Procedimientos Administrativos."***

d) Fortalecer los instrumentos y efectos del análisis de impacto regulatorio en la etapa previa a la formulación de propuestas normativas de alcance general en el Poder Ejecutivo y, progresivamente, los demás instrumentos de calidad regulatoria, establecidos en el Decreto Legislativo N° 1448, en los tres niveles de gobierno.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, señalando lo siguiente:

> *"En términos de medición de la calidad regulatoria, The Global Economy posee como medidor al índice de calidad regulatoria que evidencia la habilidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promocionen el desarrollo del sector privado. Perú se encuentra por encima de México, Colombia y Brasil, sin embargo, existe una amplia brecha respecto a países como Estados Unidos y Reino Unido. Una calificación de 2.5 en el índice representa un sistema de calidad regulatoria fuerte y Perú se encuentra en 0.5.*
>
> *A pesar de los avances dados sobre nuestro marco legal en materia de análisis de impacto regulatorio, lo cual tiene una gran incidencia en la generación de condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo, es necesario incorporar dicho análisis la etapa previa a la formulación de propuestas normativas*

de alcance general en el Poder Ejecutivo y, progresivamente, los demás instrumentos de calidad regulatoria, establecidos en el Decreto Legislativo N° 1448, en los tres niveles de gobierno. Para ello se requiere impulsar la reforma, fortaleciendo sus instrumentos y efectos. Se precisa que ello contribuirá a la adopción de medidas dentro del proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con ello se propician mejores condiciones para las empresas y ciudadanos, incidiendo en la reactivación económica al asegurar que las regulaciones y trámites sean costo-efectivas y generen predictibilidad, logrando destrabar inversiones y mejorar la relación entre estado y empresa - ciudadano." (énfasis agregado)

Asimismo, mediante correo institucional de fecha 31 de enero, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió el Informe Complementario SGP-PCM a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado. En el mismo señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal d) lo siguiente:

"Problemática identificada
(...) se han identificado importantes problemas que inciden en la calidad de las regulaciones y su implementación, entre los que destacan:

- *Limitado enfoque de calidad regulatoria, el que se centra principalmente en la reducción de cargas administrativas que generan los procedimientos administrativos y la simplificación administrativa.*
- *Altas cargas regulatorias y administrativas y alta complejidad en la comprensión y procedimientos regulatorios que inhiben el desarrollo y la inversión.*
- *Falta de mecanismos de control de la calidad de las regulaciones (...)*
- *Falta de mecanismos de implementación y seguimiento de la norma, falta de mecanismos de transparencia en todo el proceso de formulación regulatoria), falta de mecanismos para el control de la coherencia y consistencia de la regulación.*

(...) se emiten más de 17 mil normas de manera anual, solo en el Poder Ejecutivo, y solo 369 de ellas han cumplido con realizar la pre publicación y registrarlo en el SPIJ:
(...)
(...) en los gobiernos regionales y locales, también se aprecia una elevada producción normativa:

Total de disposiciones emitidas del año 2002-julio 2022 (Normas emitidas por los Gobiernos Locales y Regionales)	
Gobiernos Locales	***Gobiernos Regionales***
55,877	***14,616***

Fuente: MINJUSDH

(...)

- ***Atención de la problemática identificada***

A fin de contar con marco normativo con rango de ley articulado, se considera necesario unificar el marco legal vigente de calidad regulatoria, estableciendo el marco de gobernanza regulatoria en el Perú para todas las entidades públicas a nivel nacional, ***promoviendo una cultura de regular bajo criterios de racionalidad centrado en el ciudadano.***

Asimismo, dicho marco legal debe fortalecer los instrumentos de calidad regulatoria vigentes, resaltar a la calidad regulatoria como un componente de la modernización de la gestión pública y medio del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, así como el rol de sus principales actores (…). Finalmente, se debe precisar que ello, además de responder a las políticas nacionales en materia de modernización de la gestión pública y competitividad nacional, atiende a las recomendaciones de la OCE (...)."

- ***Propuesta (preliminar)***

Se deroga el artículo 2 del del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa y; el Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria; a fin de unificar ambas normas en una única ley de calidad regulatoria. Para dicho fin el decreto legislativo aprobaría la Ley de mejora de calidad (…)." (énfasis agregado)

A partir de lo expuesto se puede determinar que la materia solicitada versa sobre la regulación de mejora de calidad regulatoria, lo cual no comprende materias que sean indelegables a la Comisión Permanente, por no tratarse de reforma constitucional, ni aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto o Ley de la Cuenta General de la República.

En relación a la fórmula legal presentada en el proyecto de ley en análisis, se considera que, si bien el texto propuesto no es específico en todos sus extremos, este contiene aspectos que son viables de delegar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 - PNMGP[64], expresa el problema público en los siguientes términos: "*bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público*". Para afrontar este problema público la PNMGP establece como uno de sus objetivos prioritarios, garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio", siendo uno

[64] Aprobada con el Decreto Supremo 103-2022-PCM.

de sus lineamientos *"Implementar la Gobernanza regulatoria en entidades públicas"*.

- Asimismo, el primer componente de la PNMGP, "*política pública y regulación*", está orientado a la solución de los problemas públicos; para lo cual requiere, entre otros aspectos, la formulación de normas basadas en el análisis de impacto regulatorio; en el que la evidencia debe estar sustentada en datos ciertos, en donde la primera fuente de información es la persona misma y las brechas por cubrir.

- Por su parte la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública[65] tiene entre su finalidad, mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; asimismo, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública[66], identifica como uno de los medios del sistema, la calidad en las regulaciones[67].

- La normativa específica en la materia, establece que *"la mejora de la calidad regulatoria es un proceso ordenado, integral, coordinado, gradual y continúo orientado a promover la eficiencia, eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función normativa del Estado. Fomenta una cultura de gestión gubernamental centrada en el ciudadano, por la cual la Administración Pública decide usar la regulación como un instrumento para alcanzar un objetivo de política pública, adoptando la decisión de regular basado en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y cargas administrativas con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social."*[68]

---

[65] Ley 27658, Ley marco de modernización de la gestión del Estado; artículo 5-A.
[66] Aprobado con el Decreto Supremo 123-2018-PCM.
[67] Tiene como propósito que la regulación sea un instrumento para alcanzar un objetivo de política pública, adoptando la decisión de regular basada en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y cargas administrativas, con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social. Las entidades públicas utilizan el análisis de calidad regulatoria, el análisis de impacto regulatorio y otros instrumentos que se adopten en el marco del proceso de calidad regulatoria con la finalidad de evaluar y medir impactos, así como de reducir las cargas administrativas y costos que se generen de los procedimientos administrativos, propuestas regulatorias o disposiciones normativas vigentes. Asimismo, la evaluación de las regulaciones incluye la revisión de las directivas de gestión interna y la eliminación de procedimientos de gestión administrativa que hagan menos eficiente a la entidad.
[68] Decreto Legislativo 1448, que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria; artículo 4.

Ahora bien, de acuerdo a la propuesta preliminar expuesta en el Informe Complementario SGP-PCM, el Poder Ejecutivo unifica la normativa en materia de mejora de calidad de regulatoria que, actualmente se encuentra contenida en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa y; el Decreto Legislativo 1448, Decreto Legislativo que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria.

En este contexto, es coherente el fortalecimiento del marco normativo para la mejora de calidad regulatoria en la formulación de propuestas normativas a cargo del Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo señalado, el texto de la fórmula legal de la facultad solicitada, incluye el fortalecimiento progresivo de los demás instrumentos de calidad regulatoria, establecidos en el Decreto Legislativo 1448, en los **tres niveles de gobierno.** Al respecto, debe considerarse que el artículo 5 del decreto legislativo en mención, lista de manera enunciativa más no limitativa los siguientes instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria:

a) La simplificación administrativa.
b) El Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos.
c) El análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post.
d) La consulta a través de sus diversas modalidades.
e) El coste de la regulación y de trámites.
f) Las revisiones y derogaciones del ordenamiento jurídico.
g) Otros que se establezcan por decreto supremo.

Sin embargo, en la exposición de motivos y el Informe Complementario SGP-PCM, no se identifica o sustenta cuales serían los instrumentos de calidad regulatoria aplicables en los gobiernos regionales y gobiernos locales, ni los criterios de progresividad, por lo que, no es posible otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en este extremo. Esto en la medida que no se cumple con el requisito de materia específica establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú.

En consecuencia, se considera viable otorgar la facultad legislativa solicitada, acotando su aplicación al ámbito del Poder Ejecutivo.

En tal sentido, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:**

"Establecer el marco normativo para el fortalecimiento de la mejora de la calidad regulatoria aplicable a las propuestas normativas del Poder Ejecutivo."

e) Crear el "Fondo concursable inclúyeme soy capaz: Emprendimientos con capital semilla", a fin de fortalecer las capacidades emprendedoras de las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones sociales de las personas con discapacidad.

En su exposición de motivos, el Poder Ejecutivo justifica la necesidad de legislar en esta materia específica, señalando lo siguiente:

> *"En el Perú, el 10.3% del total de la población nacional son personas con discapacidad, INEI (2019). De ese total, solo el 42.9% en edad de trabajar se encuentran ocupadas (INEI, 2020). El 16.9% no cuenta con seguro de salud (INEI, 2020), y el 65.3% alcanza máximo un nivel de educación secundaria (INEI). La percepción de los y las peruanas en un 61% considera que las personas con discapacidad son discriminadas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020). Adicionalmente, a su condición de persona con discapacidad se añade la discriminación étnica — cultural, su condición de género, económica, de accesibilidad y desplazamiento, y en los últimos años se ha exacerbado las inequidades por la pandemia por COVID-19 y la crisis económica.*
>
> *(...)*
>
> *El CONADIS Perú, frente al desempleo laboral de las Personas con Discapacidad (PcD), desde el 2015 viene implementando la Estrategia Nacional "Inclúyeme soy capaz"; la cual promueve oportunidades laborales y emprendimientos de las personas con discapacidad con el apoyo de diversas instituciones, empresas, gremios y otros. Asimismo, realiza trabajo de campo en zonas de intervención, ejecuta acciones de promoción y difusión, sensibiliza a las empresas para preparar los perfiles laborales para PcD ofertados, también se proporciona cursos para la Inserción Laboral o Capacitación para el autoempleo, marketing digital, uso de redes sociales, emprendedurismo entre otros. El CETPRO "Alcides Salomón Zorrilla" a partir del 02 de marzo de 2008, brinda un servicio educativo en la modalidad técnica productiva a las personas con discapacidad física, visual, auditiva, mental, sorda ceguera, intelectual; y, excepcionalmente, a familiares de alguna persona con discapacidad severa.*
>
> *Dicha Estrategia Nacional "Inclúyeme soy capaz" cuenta con recursos muy limitados para acompañar y promover el crecimiento, formalización y sostenibilidad de los emprendimientos de las personas con discapacidad que son formados en el CETPRO, así como aquellos emprendedores que solicitan de manera individual o a través de sus organizaciones apoyo del CONADIS. En ese sentido, con la propuesta legislativa, se espera contribuir con la mejora de las iniciativas de 200 familias de personas con discapacidad que beneficiará de manera indirecta a aproximadamente a mil personas favoreciendo su independencia económica,*

autonomía y por ende a la mejora de calidad de vida, así como a la reactivación económica." (énfasis agregado)

Asimismo, mediante Informe Complementario SGP-PCM, a modo de sustento adicional, de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado. En el mismo señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal e) lo siguiente:

"Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fomentar los emprendimientos e impulsar el desarrollo técnico-productivo y empresarial de la micro y pequeña empresa de personas con discapacidad, sus familiares u organizaciones que las representan, a través del "Fondo Concursable Inclúyeme soy capaz: Emprendimientos con capital semilla" para el financiamiento, otorgamiento de garantías y similares, y otros productos financieros y no financieros.

Instrumentos Financieros

El fondo plantea el desarrollo e implementación de los siguientes instrumentos financieros a través de empresas supervisadas y/o autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o la Superintendencia del Mercado de Valores, según corresponda:

- *El otorgamiento de créditos para la adquisición de activo fijo y/o capital de trabajo.*
- *El otorgamiento de garantías y/o coberturas en respaldo de créditos otorgados por las empresas del sistema financiero, incluso cuando dichos créditos hayan sido transferidos bajo cualquier modalidad a patrimonios autónomos.*
- *El otorgamiento de créditos, garantías y/o coberturas para operaciones de factoring o descuento de instrumentos de contenido crediticio.*
- *La inversión en patrimonios autónomos administrados por sociedades administradoras, cuyos certificados de participación se coloquen mediante oferta pública; así como el otorgamiento de garantías y coberturas a favor de dichos patrimonios. Excepcionalmente, se pueden considerar otros mecanismos de colocación en el Reglamento, previa sustentación por parte de la entidad proponente.*
- *Otros instrumentos financieros establecidos en el Reglamento del Fondo Concursable Inclúyeme soy capaz: Emprendimientos con capital semilla.*

(...)

Tabla 2. Distribución de los fondos según tipo de gasto administrativo y año

Concepto de Gasto	Cantidad	Remuneración	Essalud	Aguinaldo	Costo Mensual	Proyección de ejecución del Gasto				
						AÑO 1 (may-dic)	AÑO 2 (ene-dic)	AÑO 3 (ene-dic)	AÑO 4 (ene-dic)	AÑO 5 (ene-dic)
Personal CAS	4	4500	186.3	600	4,686	154,762	232,142.40	232,142.40	232,142.40	232,142.40
Útiles y materiales	4				400	1,6	1,6	1,600.00	1,6	1,6
Pasajes	3				800	2,4	2,4	2,400.00	2,4	2,4
viáticos	3				450	1,35	1,35	1,350.00	1,35	1,35
Equipamiento (Laptop y proyector)	4				7	28				
Servicios especializados y otros gastos por taller	160				1	160	160	160	160	160
Desarrollo de plataforma web	1				6	6	6	6,000.00	6	6
Total						**354,112**	**403,492**	**403,492**	**403,492**	**403,492**

Elaboración: Presidencia del Consejo de Ministros

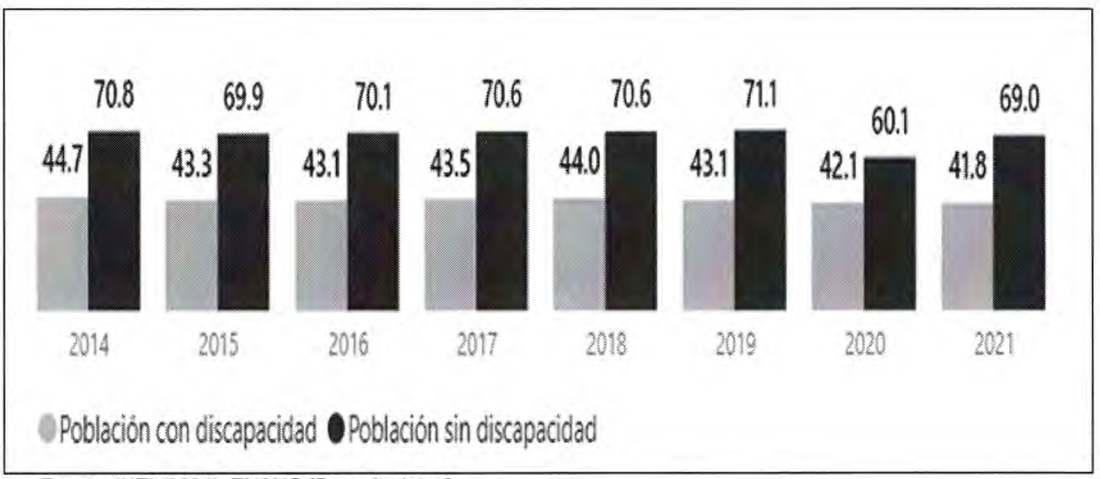
No obstante lo expuesto, el Proyecto de Ley 3941/2022-PE sostiene que la Estrategia Nacional "Inclúyeme soy capaz" cuenta con recursos muy limitados para acompañar y promover el crecimiento, formalización y sostenibilidad de los emprendimientos de las personas con discapacidad que son formados en el CETPRO; de la misma manera como el CONADIS tiene limitaciones para brindar apoyo a aquellos emprendedores que se lo soliciten de manera individual o a través de sus organizaciones.

En tal sentido, la iniciativa legislativa sostiene que, a través de la delegación de facultades propuesta, se espera contribuir con la mejora de las iniciativas de 200 familias de personas con discapacidad que beneficiará de manera indirecta aproximadamente a mil personas favoreciendo su independencia económica, autonomía y por ende a la mejora de su calidad de vida, así como a la reactivación económica.

Sobre el particular, la Comisión coincide con lo manifestado por el Poder Ejecutivo respecto a la difícil condición que, en aspectos de empleabilidad e ingresos, enfrenta la población con discapacidad en el Perú.

Conforme lo señala el Informe Complementario SGP-PCM, según cifras de INEI, entre los años 2014 al 2021 el promedio de personas con discapacidad en edad de trabajar que se encontraban laborando se situó en un 43.2%, mientras que, en el mismo periodo, el promedio de las personas sin discapacidad que se encontraban laborando fue 70.3% (en realidad el promedio baja a 69.02%, pero ello sucede por la abrupta caída del empleo en general en el 2020 a consecuencia de la COVID-19, año en el que el porcentaje de población sin discapacidad que se mantuvo empleada bajó a 60.1%)

Distribución porcentual de la población con y sin discapacidad en edad de trabajar que se encontraba laborando



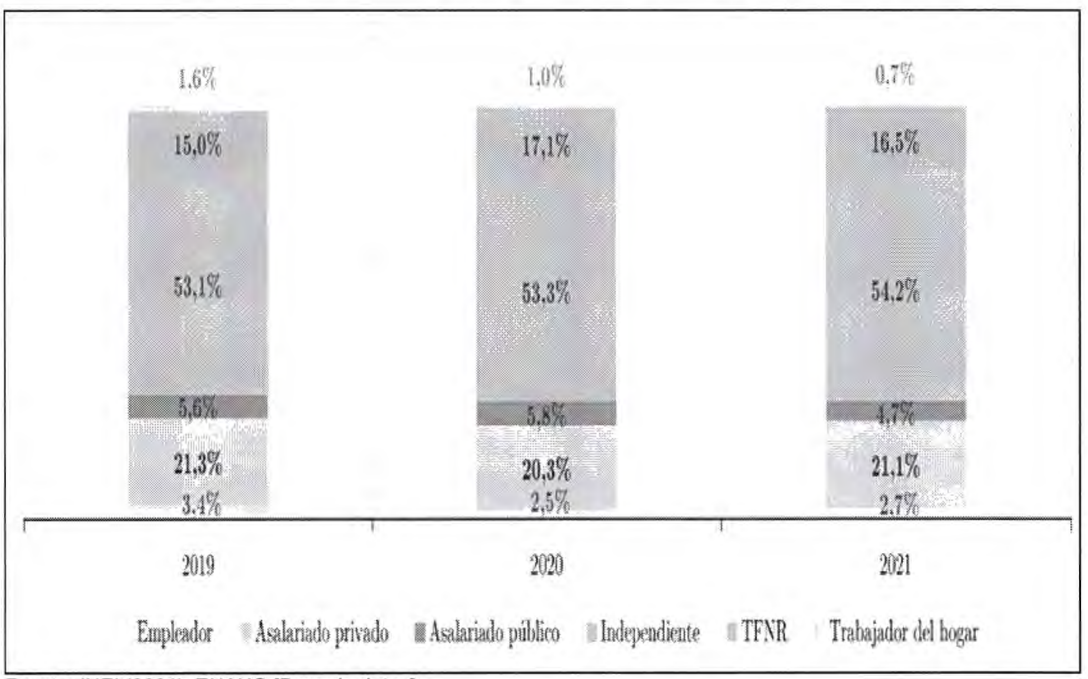
Fuente: INEI (2021). ENAHO [Base de datos]

De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo consignadas en el Reporte del mercado laboral de las personas con discapacidad en el Perú, en el año 2021 el segmento de trabajadores con discapacidad presentaba una tasa de subempleo del 67.3%, mientras que la tasa correspondiente a la de los trabajadores sin discapacidad llegaba al 46.8%. Estas cifras muestran que los trabajadores con discapacidad tienen una mayor probabilidad de tener un empleo en el que laboren menos de 35 horas a la semana a pesar de tener la voluntad y disponibilidad de hacerlo, o, por el contrario, de laborar en un empleo más de 35 horas a la semana percibiendo un ingreso mensual menor al ingreso mínimo de referencia.

En esta misma línea, el Informe Complementario SGP-PCM, referido a la categoría ocupacional, traslada información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que señala que, entre los años 2019 al 2021, las 3 categorías más grandes que agrupaban a los trabajadores con discapacidad estaban constituidas por los independientes, llegando al 53.5%; los asalariados privados con el 20.9%, mientras

que 16.2% correspondía a los que se ubicaban en el rubro de Trabajador Familiar No Remunerado.

Personas con discapacidad ocupadas, según categoría ocupacional



Fuente: INEI (2021). ENAHO [Base de datos]
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

Los resultados antes mencionados indicarían que, la necesidad de trabajo que tienen las personas con discapacidad las llevaría a aceptar condiciones laborales poco favorables.

Por otro lado, en el Reporte de la dinámica del trabajador independiente en el Perú 2016-2021 elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2022, se ha identificado que las personas con discapacidad encontrarían menos barreras de acceso para desempeñarse como trabajadores independientes en comparación con intentar asalariarse; situación que explicaría el alto porcentaje que se desempeña como autoempleado.

En este contexto, y tras habérsele requerido al Poder Ejecutivo sobre mayores detalles de la propuesta, este, a través del Informe Complementario brindado por el Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la

Gestión del Estado el pasado martes 31 de enero, así como de la reunión efectuada el 1 de febrero en las instalaciones del Congreso de la República con presencia de los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, precisó que el "Fondo Concursable Inclúyeme soy capaz: Emprendimientos con capital semilla" que se pretende crear mediante Decreto Legislativo tendrá por objeto fomentar los emprendimientos e impulsar el desarrollo técnico-productivo y empresarial de la micro y pequeña empresa de personas con discapacidad, sus familiares u organizaciones que las representan.

El fondo plantearía brindar una subvención escalonada según el tipo de beneficiario, pudiendo comprender ideas de negocio, negocios en marcha en proceso de formalización, y negocios formalizados. Asimismo, la priorización territorial del fondo focalizaría la atención en cuatro (4) regiones. Los montos y número de beneficiarios serían transversales para todos los años previstos de la intervención.

Tabla 1. Distribución de los recursos del fondo, según departamento y tipos de beneficiarios

Departamento	Fondo total	Número total de beneficiarios	Tipo de beneficiario					
			Idea de negocio		Negocio por formalizar		Negocio formalizado	
			Monto por beneficiario	Número de beneficiarios	Monto por beneficiario	Número de beneficiarios	Monto por beneficiario	Número de beneficiarios
La Libertad	S/.250.000	40	S/.5.000	20	S/.6.250	12	S/.9.375	8
Piura	S/.250.000	40	S/.5.000	20	S/.6.250	12	S/.9.375	8
Arequipa	S/.250.0000	40	S/.5.000	20	S/.6.250	12	S/.9.375	8
Lima	S/.500.000	80	S/.5.000	40	S/.6.250	24	S/.9.375	16

Fuente: Informe Complementario SGP-PCM

La propuesta define un personal CAS fijo en cada una de las ciudades donde se realizarán las convocatorias, así como otros gastos en bienes y servicios necesarios para las diferentes etapas de la intervención. Asimismo, dado que el primer año se tendrá menor tiempo para el inicio de la implementación, los montos serían menores respecto a los años siguientes.

Tabla 2. Distribución de los fondos según tipo de gasto administrativo y año

Concepto de Gasto	Cantidad	Remuneración	Essalud	Aguinaldo	Costo Mensual	Proyección de ejecución del Gasto				
						AÑO 1 (may-dic)	AÑO 2 (ene-dic)	AÑO 3 (ene-dic)	AÑO 4 (ene-dic)	AÑO 5 (ene-dic)
Personal CAS	4	4500	186.3	600	4,686	154,762	232,142.40	232,142.40	232,142.40	232,142.40
Útiles y materiales	4				400	1,6	1,6	1,600.00	1,6	1,6
Pasajes	3				800	2,4	2,4	2,400.00	2,4	2,4
viáticos	3				450	1,35	1,35	1,350.00	1,35	1,35
Equipamiento (Laptop y proyector)	4				7	28				
Servicios especializados y otros gastos por taller	160				1	160	160	160	160	160
Desarrollo de plataforma web	1				6	6	6	6,000.00	6	6
Total						**354,112**	**403,492**	**403,492**	**403,492**	**403,492**

Fuente: Informe Complementario SGP-PCM

Así pues, sumando los montos necesarios para gestión del fondo (Gastos Administrativos) y del fondo concursable (Recursos del Fondo), para el primer año la propuesta estima su costo en S/1,604,112, y, para los años siguientes, el monto ascendería a la suma de S/1,653,492.

Tabla 3. Distribución de los fondos según tipo de gasto administrativo y de recursos del fondo por año

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Recursos del Fondo	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
Gastos Administrativos	354,112	403,492	403,492	403,492	403,492
TOTAL	**1,604,112**	**1,653,492**	**1,653,492**	**1,653,492**	**1,653,492**

Fuente: Informe Complementario SGP-PCM

La propuesta concluye que la estrategia tendría un alcance esperado de hasta 200 emprendimientos de personas con discapacidad anual, lo cual beneficiaría de manera directa e indirecta a 1000 personas aproximadamente.

Para efectos de la evaluación de la delegación de facultades legislativas solicitada, la Comisión debe tomar en consideración que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 101 y 104 de la Constitución Política del Perú, así como los requisitos establecidos en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República.

La Comisión observa que, la propuesta inicial contenida en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE ha podido ser afinada para lograr un mayor nivel de detalle, al haberse efectuado precisiones y brindado mayor detalle sobre los alcances del pedido de delegación de facultades, incluyendo el objeto del fondo (financiamiento, otorgamiento de garantías y similares, y otros productos financieros y no financieros) así como la proyección de distribución del presupuesto requerido para su operación.

Así pues, del análisis de la información proporcionada, es evidente la necesidad de asignación presupuestaria para la creación y operación de la propuesta; asignación presupuestaria que no estaban contemplada originalmente en el presupuesto aprobado para el año 2023 y contenido en la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023,

Como se ha mencionado líneas arriba del presente análisis, la creación del "Fondo concursable Inclúyeme soy capaz. Emprendimientos con capital semilla" supone una proyección de recursos requeridos de S/1,604,112 para el primer año y en

promedio S/1,653,492 para los tres años posteriores, lo cual demandaría una modificación a la actual Ley de Presupuesto.

Cabe señalar que durante la reunión técnica sostenida el miércoles 01 de febrero entre los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión de Estado; y de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, los representantes del MEF acotaron que no es viable la creación de fondos como los específicamente los contenidos en los literales e) y g) del numeral 2.2 del proyecto materia de análisis, sin afectar y/o realizar modificaciones a la Ley de Presupuesto.

En adición a lo señalado, los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas hicieron énfasis en la necesidad de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el mismo que señala lo siguiente:

> ***"Artículo 74. Prohibición de Fondos o similares***
> *74.1 Queda prohibida la creación de fondos u otros que conlleven gastos que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones del presente Decreto Legislativo.*
> *74.2 No se encuentran dentro de los alcances de lo dispuesto en el presente artículo los fondos para pagos en efectivo o de similar naturaleza que establece las normas del Sistema Nacional de Tesorería."*

A razón de ello, si bien se coincide con el Poder Ejecutivo en la necesidad de *"(...) promover el crecimiento, formalización y sostenibilidad de los emprendimientos de las personas con discapacidad (...), así como aquellos emprendedores que solicitan de manera individual o a través de sus organizaciones apoyo del CONADIS."*; y a pesar de que la solicitud de delegación sobre esta materia se encuentra adecuadamente justificada y delimitada, no es posible otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo sobre la materia en los términos previstos en el literal e) del numeral 2.2 del artículo 2 del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, debido a que la creación de fondos contraviene los límites establecidos en los artículos 104 y 101 de la Constitución Política del Perú al afectar la Ley de Presupuesto.

No obstante, en atención a la urgencia de fortalecer las capacidades emprendedoras de las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones sociales de las personas con discapacidad, permitiendo con ello generar nuevos y eficientes mecanismos para propiciar la independencia económica de este sector vulnerable de la población, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:**

"Autorizar el financiamiento de medidas relacionadas con el emprendimiento de ciudadanos en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales de personas con discapacidad."

f) Modificar la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; además de la Ley N° 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para incorporar un proceso de registro de Hogares de Refugio Temporal identificados.

En su Exposición de Motivos, el Poder Ejecutivo justifica la necesidad de legislar en esta materia específica, señalando lo siguiente:

> *"Los Gobiernos Regionales y Locales no diseñan proyectos de inversión pública para la creación de Hogares de Refugio Temporal, puesto que no cuentan con las especificaciones técnicas para la creación de los mismos, por lo que se plantea aprobar modificaciones a la Ley N° 30364, incorporando un proceso de registro de Hogares de Refugio Temporal identificados, que cumplan con estándares de calidad en la prestación de los servicios, y se obliga al órgano rector implementar diversas supervisiones para garantizar la correcta prestación de los servicios; esto permitirá facilitar la implementación de los Hogares de Refugio Temporal y destrabar la inversión en las regiones, garantizando la protección de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad.*
>
> *Hecho que permitirá el desbloqueo de las iniciativas de inversiones a nivel de Gobiernos Regionales y Locales. Además, esta medida permitirá que más mujeres que son víctimas de violencia de género cuenten con servicios de protección idóneos, en sus departamentos y provincias. De otro lado, se permitirá la mejora del sistema nacional especializado de justicia pues se contará con los hogares de refugio temporal para proteger a las mujeres sobrevivientes de feminicidio.*
>
> *Asimismo, también se perfecciona la normativa para ampliar el ámbito de protección de las mujeres a través de servicios de protección que permitan implementar las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial, así como se plantea la incorporación del término de "Mujeres en su diversidad" con el objetivo de ampliar el ámbito de protección a todas mujeres y reconociendo su diversidad y promoviendo la no tolerancia institucional a prácticas de discriminación y violencia de género. Esto permitirá implementar acciones centradas en la víctima."*

Asimismo, mediante Informe Complementario SGP-PCM, a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado se señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal f) lo siguiente:

> *"A la fecha se han identificado 45 hogares de refugio temporal, (...).*

Para ofrecer condiciones óptimas, corresponde que estos servicios de acogida pasen por un proceso de acreditación que permita verificar el cumplimiento de determinados estándares que se regularán vía reglamento; por ello se considera pertinente modificar el artículo 29 de la Ley N° 30364 para señalar que el MIMP está a cargo de la acreditación de los hogares de refugio temporal, lo cual es técnicamente pertinente a diferencia del acto de registro que no necesariamente implica el cumplimiento de los mencionados estándares.

En la línea de lo mencionado, también corresponde derogar la Ley N° 28236, Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar que data del año 2004, porque se encuentra desactualizada y, además, toda la regulación en materia de hogares de refugio temporal se desarrolla en la Ley N° 30364 y su Reglamento.

Por otro lado, con la finalidad de dar coherencia normativa respecto la oportunidad de presentación de los informes anuales del avance en la implementación de la Ley N° 30364 ante el Congreso de la República, se propone la modificación de la sexta Disposición Complementaria Final de la referida Ley para establecer una única oportunidad. Y es que a través del artículo 2 de la Ley N° 30862, Ley que Fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar", se incorporó en la Ley N° 30364, la Sexta Disposición Complementaria Final, estableciendo un mecanismo de rendición de cuentas de la Ley 30364 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero, posteriormente se aprobó la "Ley N° 31621, Ley que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual", que estableció otro mecanismo de rendición de cuentas de la Ley N° 30364, ante la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, en el mes de marzo." (énfasis agregado)

De igual manera, la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, mediante oficio N 0308-2022-2023-CMF/CR de fecha 7 de febrero, señaló sobre la materia contenida en el literal f), la cual es la única vinculada directamente a la especialidad de dicha comisión, que;

"La propuesta legislativa del Poder Ejecutivo para modificar la Ley N° 30364 y la N° 30862, constituyen medidas legislativas necesarias que tienen como finalidad y objetivo brindar y garantizar protección integral a las mujeres víctimas de toda expresión de violencia física, psicológica y sexual.

En este sentido, con la creación e implementación del registro de Hogares de Refugio Temporal Identificados, los Gobiernos Regionales y Locales tendrán la capacidad para ofrecer servicios en beneficio de las víctimas de la violencia de género."

A partir de lo indicado es posible determinar que la materia solicitada recae en tres leyes ordinarias, la primera siendo la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; la

segunda, la Ley 28236, Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar; y finalmente la Ley 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Tanto la modificación y/o la derogación de dichas leyes no comprende materias que sean indelegables a la Comisión Permanente, por no tratarse de reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto o Ley de la Cuenta General de la República, por lo cual son factibles de otorgar. Asimismo, en relación a la fórmula legal presentada en el proyecto de ley en análisis, se considera que, si bien el texto propuesto no es específico en todos sus extremos, este contiene aspectos que son viables de delegar, teniendo en cuenta ciertas consideraciones.

Al respecto, la exposición de motivos, así como el documento de información complementaria, permiten concluir que los cambios normativos específicos que busca realizar el Poder Ejecutivo en relación a este punto en concreto son los siguientes:

i. Modificar el artículo 29 de la Ley 30364 para establecer la competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de que este acredite los hogares de refugio temporal y no solo administre el registro de los mismos, asegurando así el cumplimiento de los estándares de calidad para la prestación de servicios.
ii. Derogar Ley 28236, Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar, la cual antecede a la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para evitar duplicidad de legislación sobre la misma materia.
iii. Modificar la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 30364 a fin de optimizar la labor de rendición de cuentas concentrándose en un solo momento del año.
iv. Modificar la normativa a fin de incorporar el término de "Mujeres en su diversidad".

Sobre el primer punto, a la fecha el artículo 29 de la Ley 30364 establece lo siguiente:

> ***"Artículo 29.- Implementación y registro de hogares de refugio temporal***
> *Es política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal. Las entidades de la administración pública que administran predios e inmuebles estatales, priorizan el otorgamiento de dichos bienes para la implementación de hogares de refugio, de acuerdo a sus competencias."*
> *El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementa y administra el registro de hogares de refugio temporal que cumpla con los estándares de calidad*

en la prestación de servicio. La información de este registro es confidencial y será utilizada para los procesos de articulación, protección y asistencia técnica.

Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales e instituciones privadas que gestionen y administren hogares de refugio temporal facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueba los requisitos mínimos para crear y operar los hogares de refugio temporal, así como los estándares mínimos de calidad de prestación del servicio." (énfasis agregado)

Dicho artículo, modificado a partir de la Ley 31613 la cual fue publicada el 11 de noviembre de 2022 como resultado del debate y votación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1359/2021-CR, representó una mejora considerable frente a la redacción original del artículo 29 que únicamente indicaba: "Es política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal."

Sin embargo, a fin de asegurar condiciones óptimas para brindar el servicio de hogares refugio, y a su vez evitar cualquier situación que pueda afectar los derechos de la población en estado de vulnerabilidad beneficiaria, el fraseo actual de la norma requiere de una modificación para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no sólo apruebe los requisitos mínimos para crear y operar los hogares de refugio temporal, sino que sobre todo acredite que estos cumplan con requisitos establecidos.

A razón de ello se considera pertinente delegar facultades sobre este punto modificando el texto propuesto por el Poder Ejecutivo a fin de precisarlo.

En relación al segundo punto, la derogación de la Ley 28236, Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar[69], es necesario indicar que dicha ley, anterior a la entrada en vigencia de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, solo cuenta con seis artículos que versan sobre la creación de hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar y su implementación[70], los

[69] Publicada el 29 de mayo de 2004.

[70] **"Artículo 4.- Implementación**
Los Hogares de Refugio Temporal se implementan sobre la parte de los bienes inmuebles materia de asignación, a cargo de la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados - COMABID, como lo prescribe el Decreto Supremo N° 029-2001-JUS y con apoyo de la Cooperación Técnica Internacional, captada conforme lo estipula el inciso j) del artículo 24-B del Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH.
Las entidades de la administración pública que administran predios e inmuebles estatales, priorizan el otorgamiento de dichos bienes para la implementación de hogares de refugio, de acuerdo a sus competencias.

cuales ya se encuentran regulados por la Ley 30364. A razón de ello, y a fin de evitar duplicidad en la regulación de la materia, se considera pertinente delegar facultades sobre este punto modificando el texto propuesto por el Poder Ejecutivo a fin de acotarlo.

En lo referido a la modificación de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 30364, esta indica lo siguiente:

> ***"SEXTA. Informes***
> *La Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del "25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", presenta un informe respecto al avance en el cumplimiento de la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, con especial énfasis en la implementación del Sistema Nacional previsto en dicha norma.*
>
> *Para dar cumplimiento a ello, los ministerios y demás entidades integrantes del Sistema remiten la información correspondiente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, bajo responsabilidad del titular del pliego."(énfasis agregado)*

Sin embargo, como se ha indicado previamente, la Ley 31621, Ley que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual[71], aprobada con posterioridad, en su artículo 5[72], establece otro mecanismo de rendición de cuentas de la Ley 30364 ante la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República en el mes de marzo, por lo cual, a fin de evitar duplicidad se considera pertinente su modificación para optimizar el mecanismo de rendición de cuentas.

Finalmente, respecto al cuarto punto, modificar la normativa a fin de incorporar el término de "Mujeres en su diversidad", el Poder Ejecutivo no ha brindado información detallada, ni en la exposición de motivos ni en la documentación adicional entregada, respecto al contenido que este término abarca y cómo o por

---

Los gobiernos locales se encargan de coordinar con los Colegios Profesionales a fin de que los abogados, médicos, psicólogos, asistentes sociales brindan servicios gratuitos permanentes a los beneficiarios de los Hogares de Refugio Temporal para víctimas de violencia familiar".

[71] Publicada el 15 de noviembre de 2022.

[72] **"Artículo 5. Informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables**
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su titular de pliego, informa en el mes de marzo de cada año ante la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, sobre los avances a nivel nacional del cumplimiento de la Ley 30364, con énfasis en los nuevos servicios que se implementan como los hogares de refugio temporal públicos, privados o mixtos, y sobre los centros de emergencia mujer, a cargo del Programa Nacional Aurora. Este informe se realiza conforme a los criterios establecidos en el reglamento de la presente ley."

qué ello ampliaría el ámbito de protección a "todas las mujeres", o sustentado porqué el término "mujer" no es lo suficientemente amplio. A razón de ello, en este extremo no solo no se estaría cumpliendo con el criterio de especificidad comprendido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, sino que tampoco se ha brindado la información suficiente para poder cumplir este requisito mediante un texto sustitutorio, por lo cual no resulta posible delegar facultades sobre este punto.

En atención a lo indicado, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:**

"Modificar la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para: i) incorporar un proceso a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el registro y acreditación de Hogares de Refugio Temporal identificados; ii) optimizar sus mecanismos de rendición de cuentas sobre la materia; y, iii) derogar la normativa referida a refugios temporales que a la fecha ha perdido vigencia."

g) Crear fondos concursables para la implementación de iniciativas de voluntariado dirigidas a poblaciones vulnerables en zonas de conflicto social y/o crisis humanitaria en regiones priorizadas.

En su Exposición de Motivos, el Poder Ejecutivo justifica la necesidad de legislar en esta materia específica, señalando lo siguiente:

> *"La situación de conflicto social ha generado nuevas poblaciones vulnerables o ha agudizado la situación de las ya existentes (personas varadas en la carretera o albergadas en ciudades principales o intermedias, población afectada por el limitado acceso a alimentos de primera necesidad por bloqueos de carreteras, comerciantes y trabajadores/as de centros de acopio y comercialización de alimentos que ven impactados sus ingresos, personas enfermas que deben ser trasladadas para su atención, entre otros), en particular en las regiones del sur (Apurímac, Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua) en lasmo que el conflicto social es mayor.*
>
> *Esta situación genera una mayor demanda de atención de los servicios del Estado, así como una respuesta activa de las organizaciones de voluntariado en dichas regiones. Sin embargo, el 77% de las organizaciones de voluntariado señala que su principal problema es la escasez de recursos para implementar sus iniciativas y el 61% de ellas se autofinancian, tal como lo expresa el diagnóstico situacional de organizaciones de voluntariado realizado por la Dirección de Voluntariado. Este hecho no les permite una intervención sostenible y de mayor impacto en la atención de poblaciones vulnerables articuladas a los programas y servicios implementados por el Estado en los territorios.*

En ese sentido, a fin de dar atención a dicha problemática es que se pretende crear fondos concursables para la implementación de iniciativas de voluntariado que contribuirán a mitigar el impacto del conflicto social y acelerar el proceso de recuperación, así como permitirá mostrar un Estado que articula con la población organizada para el ejercicio de una ciudadanía activa a través del voluntariado." (énfasis agregado)

Asimismo, mediante Informe Complementario SGP-PCM, a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado, señala respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal g) lo siguiente:

"(...) Para atender este incremento en la demanda de atención a poblaciones vulnerables, el Estado Peruano se organiza en un aparato estatal conformado por distintos sectores y niveles de gobierno que administran el presupuesto anual asignado para atender los distintos problemas públicos. Sin embargo, en muchas ocasiones, por falta de capacidades técnicas, falta de personal o por falta de una ruta estratégica debidamente planificada y ejecutada, las grandes necesidades y problemas públicos no son atendidos adecuadamente.

En esas circunstancias se aprecia el valor e importancia del voluntariado, labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidades contractuales, que comprende actividades de interés general para la población, tendientes al bien común, por el cual no media forma alguna de contraprestación y que, en ningún caso es realizada en forma remunerada, ni sustituye al trabajo que se realiza en forma remunerada. (...)

Pero en ese esfuerzo por contribuir, desde el ejercicio de una ciudadanía activa, en la atención a poblaciones vulnerables, el voluntariado se ve limitado por dos grandes problemas: la falta de financiamiento para sus iniciativas y su débil articulación a los programas y/o servicios sociales que implementa el Estado para actuar en las situaciones anteriormente descritas.

(...)

- *Propuesta (preliminar)*

(...)

"Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear el "Fondo concursable no reembolsable para la implementación de iniciativas de voluntariado dirigidas a poblaciones vulnerables en zonas de conflicto social y/o crisis humanitaria en regiones priorizadas", en adelante Fondo Sinavol Perú, a fin de promover y fomentar las iniciativas de voluntariado dirigidas a atender temas prioritarios en zonas afectadas por conflictos sociales, emergencias sanitarias y/o alimentarias; desastres naturales y/o cualquier otra situación económica y/o social que afecte o agrave la situación de las poblaciones vulnerables en todo el territorio nacional, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y Directivas

establecidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mediante Resolución Ministerial."

Es decir, la creación del Fondo Sinavol Perú cuenta con las siguientes características:

- *Es un fondo concursable, es decir, no está direccionado, sino que muchas organizaciones de voluntariado compiten para obtenerlo.*
- *Es un fondo no reembolsable, es decir, la organización de voluntariado no está en la obligación de devolver el fondo recibido.*
- *Debe estar dirigido a implementar iniciativas de voluntariado, desde el proceso de planificación, pasando por la ejecución y la culminación de la iniciativa.*

(...)

Otro aspecto que establece parámetros para la viabilidad del otorgamiento del Fondo es lo señalado en el artículo 6 del proyecto:

"Artículo 6. Beneficiarios del Fondo Sinavol Perú
(...)
6.4 Las iniciativas de voluntariado que se postulan deberán contar con la conformidad de la viabilidad de las Gerencias de Desarrollo Social del gobierno subnacional cuyos programas y servicios sociales sean fortalecidos, o la que haga sus veces."

En tal sentido, los gobiernos subnacionales mediante sus gerencias de desarrollo social o la que haga sus veces, determinan la viabilidad de las iniciativas que se postulan, evaluando si estas fortalecen o coadyuvan los programas o servicios sociales que brindan para que no quede sólo en un proyecto de voluntariado, sino que sea ejecutable impactando en los que más lo necesiten.

Y así como los gobiernos subnacionales brindan la conformidad de viabilidad, también son responsables de monitorear a las iniciativas ganadoras, a fin de lograr que se cumpla con el fortalecimiento y apoyo a los programas y servicios sociales que estos brindan, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del proyecto:

"Artículo 7. Del monitoreo de las iniciativas ganadoras
7.1 Las gerencias de desarrollo social del gobierno subnacional cuyos programas y servicios sociales sean fortalecidos, o la que haga sus veces, serán responsables de monitorear el cumplimiento de las iniciativas ganadoras, dentro del marco de sus competencias y funciones.
(...)."

Sobre el particular, la Comisión coincide con lo manifestado por el Poder Ejecutivo en el sentido que las emergencias sanitarias y alimentarias, los desastres naturales, entre otras situaciones no predecibles, generan un incremento en la demanda de atención de la población en general, y de las poblaciones vulnerables, en particular.

Para citar ejemplos, la pandemia de la COVID-19 que ha afectado recientemente al Perú y al mundo entero es uno de los más claros casos que muestran el grado de afectación que pueden padecer las poblaciones más vulnerables.

En efecto, y en línea con lo indicado en el Informe Complementario SGP-PCM, durante la primera etapa de la pandemia, en el periodo comprendido entre marzo del 2020 y enero del 2021, la población adulta mayor alcanzó una tasa de mortalidad de 816 muertes por cada 100,000 personas. A esta situación se le sumó la cuarentena obligatoria decretada para este grupo etario[73] por un periodo de 6 meses; hecho que les generó un prolongado aislamiento y, como consecuencia de ello, numerosos problemas de resquebrajando de su salud mental.

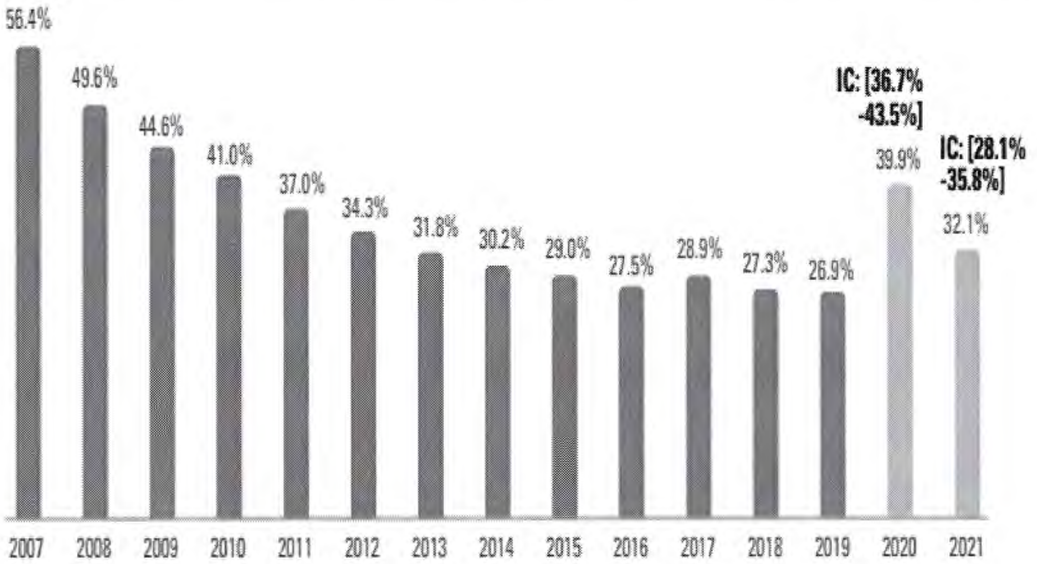
Otro grupo etario vulnerable que también se vio afectado por la pandemia de la COVID-19 fue el de los niños y adolescentes. Este grupo poblacional fue, sin lugar a dudas, uno de más afectados por la pandemia de la COVID–19, especialmente porque ya se encontraban, desde antes de la pandemia, en mayor proporción que la población adulta, en situación de pobreza monetaria y pobreza extrema.

De acuerdo a las estimaciones realizadas en un informe "COVID-19: Impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú - Estimaciones 2020-2021" de UNICEF[74], la pobreza monetaria se incrementaría de 20.2% en el 2019 a 30.3% en el 2020. Esto significaba que 3,3 millones personas caerían en la pobreza como consecuencia directa de la pandemia. Igualmente, se proyectaba que la pobreza se reduciría a 25.8% en el 2021 como consecuencia de la reactivación económica esperada para el próximo año.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes el informe estimaba que la pobreza monetaria se incrementaría de 26.9% en el 2019 a 39.9% en el 2020, cifra que resultaba superior en 9.6 puntos porcentuales a la pobreza estimada para la población en general. Así pues, en términos absolutos, esto significaba que el número de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza monetaria se incrementaría aproximadamente de 2.9 millones en el 2019 a 4.1 millones en el 2020, esto es, 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes caerían en la pobreza.

[73] En concreto, para las personas adultas mayores de más de 75 años.
[74] https://www.unicef.org/peru/media/9031/file/Policy%20brief.pdf

Estimación de la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes (2020-2021)



Nota: Estimaciones consideran el intervalo de confianza al 95%.
Fuente: ENAHO (2007-2019).

Las emergencias climatológicas, recurrentes cada cierto tiempo en nuestro país, también causan efectos nocivos para las poblaciones vulnerables. El Fenómeno del Niño Costero ocurrido en 2017 dejó 101 fallecidos, más de 140 mil damnificados y casi un millón de afectados en el Perú, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional[75].

En materia de infraestructura, el Fenómeno del Niño Costero significó daños, entre moderados y graves, en 1,618 locales escolares, en 13 departamentos del país; 940 establecimientos de salud afectados en 9 departamentos del país; 48,731 viviendas afectadas en 13 departamentos, de las que el 70% colapsaron y el 30% quedaron inhabitables[76]:

[75] https://rpp.pe/peru/actualidad/peru-tras-casi-cinco-anos-del-fenomeno-del-nino-costero-2017-que-avances-tiene-la-reconstruccion-con-cambios-informe-noticia-1376480

[76] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Informe-de-Adjuntia-005-2018-DP-AAE.pdf

El Poder Ejecutivo sostiene que, para atender este incremento en la demanda de atención a poblaciones vulnerables, el Estado Peruano se organiza en un aparato estatal conformado por distintos sectores y niveles de gobierno que administran el presupuesto anual asignado para atender los distintos problemas públicos. Sin embargo, en muchas ocasiones, por falta de capacidades técnicas, falta de personal o por falta de una ruta estratégica debidamente planificada y ejecutada, las grandes necesidades y problemas públicos no son atendidos adecuadamente.

Es por ello por lo que adquiere particular importancia el voluntariado.

Conforme a la Ley 28238, Ley del Voluntariado, este es definido de la siguiente manera:

> *"**VOLUNTARIADO***
> *Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidades contractuales. El voluntariado comprende actividades de interés general para la población, como: actividades asistenciales, sanitarias, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de saneamiento, vivienda, urbanismo, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado entre otras de naturaleza análoga, tendientes al bien común.*
> *Es prestado por una persona natural, peruana o extranjera, u organización de voluntariado. En ningún caso dicha actividad es realizada en forma remunerada ni sustituye al trabajo que se realiza en forma remunerada."*

Asimismo, la ley antes mencionada define al voluntario como:

> *"**VOLUNTARIA/O***
>
> *Persona natural, peruana o extranjera, que promueve y realiza acciones de voluntariado en entidades públicas o privadas, zonas urbanas de poblaciones vulnerables, comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, centros asistenciales de salud pública, entre otras."*

A su vez, las organizaciones del voluntariado se clasifican como sigue:

> *"**ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO***
> *Pueden clasificarse de la siguiente manera:*
> *a) Organizaciones basadas en voluntarias/os: organizaciones sin fines de lucro gestionadas por voluntarias/os y que convocan a voluntarias/os para acciones de proyección social a favor de poblaciones vulnerables.*

b) Entidades con apoyo de voluntarias/os: entidades públicas, privadas legalmente constituidas u organizaciones sociales de base que convocan voluntarias/os para fortalecer sus objetivos sociales.
c) Agencias de voluntariado: organizaciones sin fines de lucro legamente constituidas que articulan la participación de voluntarias/os en objetivos sociales.
d) Otras organizaciones con programas o proyectos de voluntariado: entidades públicas, privadas, o de perfil académico, que implementan acciones de voluntariado convocando a los integrantes de su entidad para el apoyo a poblaciones vulnerables en el marco de un programa o proyecto."

Así también, conforme la información brindada mediante Informe Complementario SGP-PCM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su calidad de ente rector, administra el Registro de Voluntariado y, conforme a la información proporcionada por esta, a la fecha, se encuentran inscritas 302 organizaciones de voluntariado de 23 regiones del país, que movilizan alrededor de 11 mil voluntarios.

En cuanto a la actividad de estas y a manera de ejemplo, durante la pandemia, se implementaron 781 iniciativas de voluntariado en 17 regiones del país que movilizaron 9,444 voluntarios.

Lamentablemente, el esfuerzo de las organizaciones de voluntariado por contribuir en la atención a poblaciones vulnerables se ve limitado por dos grandes problemas:

- La falta de financiamiento para sus iniciativas

- Su débil articulación a los programas y/o servicios sociales que implementa el Estado para actuar en las situaciones anteriormente descritas.

El Diagnóstico Situacional de Organizaciones de Voluntariado realizado por la Dirección de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2019, revela que 7 de cada 10 organizaciones de voluntariado no cuenta con financiamiento para implementar sus iniciativas de voluntariado y que, 3 de cada 5 de ellas se autofinancian; mientras que solo 1 de cada 5 articula sus acciones con los gobiernos subnacionales.

En este contexto, y tras habérsele requerido al Poder Ejecutivo mayores detalles de la propuesta cuya delegación de facultades legislativas se solicita, así como el marco legal a ser afectado, a través del Informe Complementario SGP-PCM, así como la reunión efectuada el 1 de febrero en las instalaciones del Congreso de la República con presencia de los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, se precisó que el "Fondo concursable no reembolsable para la implementación de iniciativas de voluntariado

dirigidas a poblaciones vulnerables en zonas de conflicto social y/o crisis humanitaria en regiones priorizadas", en adelante Fondo Sinavol Perú, tendría las siguientes características:

- Serian concursables, es decir que muchas organizaciones de voluntariado competirían para obtenerlo.

- Seria no reembolsable, es decir, la organización de voluntariado no está en la obligación de devolver el fondo recibido.

- Estaría dirigido a implementar iniciativas de voluntariado, desde el proceso de planificación, pasando por la ejecución y la culminación de la iniciativa.

- Estaría dirigidos a atender a las poblaciones vulnerables en zonas afectadas por conflictos sociales, emergencias sanitarias y/o alimentarias, desastres naturales y/o cualquier otra situación económica y/o social que afecte o agrave la situación de las poblaciones vulnerables.

- Tendría impacto descentralizado, dirigido a regiones priorizadas del territorio nacional.

- Los parámetros para su otorgamiento serían establecidos vía Reglamento y Directivas establecidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

- Los gobiernos subnacionales brindarían la conformidad de viabilidad de las iniciativas que se postulen, así como harían monitoreo a las iniciativas ganadoras.

La Comisión observa que, al igual que el supuesto analizado en el apartado referido a la facultad solicitada en el literal e) "Fondo concursable inclúyeme soy capaz[77]", la facultad solicitada en el presente literal g) involucra la creación de un fondo que no estaba contemplado originalmente en el presupuesto aprobado para el año 2023 y contenido en la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

La situación antes mencionada supondría por ello, una modificación a la Ley de Presupuesto, por lo que no sería posible otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en relación a la materia en referencia.

[77] Artículo 2, numeral 2.2, literal e) del proyecto de ley materia de análisis.

Ello sin perjuicio de la inviabilidad para la creación de fondos, también manifestada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en atención lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público[78].

No obstante, en atención a la importancia de promover iniciativas de voluntariado para atender el incremento en la demanda de atención a poblaciones vulnerables, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:**

> ***"Autorizar el financiamiento de medidas relacionadas con la implementación de iniciativas de voluntariado dirigidas a poblaciones vulnerables en zonas de crisis humanitaria en regiones priorizadas."***

h) Establecer obligaciones, atribuciones y responsabilidades para la gestión integral de sustancias químicas dirigidas a entidades públicas y usuarios/as de sustancias químicas, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente a través de la adopción de mecanismos para la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de sustancias químicas a lo largo de su ciclo de vida.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, señalando lo siguiente:

> *"(...)*
> *La problemática que justifica la emisión de la norma radica en la dispersión normativa de la Gestión de Sustancias Químicas en el país, lo cual no contribuye a la predictibilidad y el conocimiento de las normas y al manejo adecuado de estas sustancias; asimismo la existencia de un inadecuado transporte de sustancias químicas (...) el inadecuado manejo de sustancias químicas que produce contaminación y afectación a la salud de la población (...)*
>
> *(...) la medida (...) se sustenta en las recomendaciones realizadas por organismos internacionales que forman parte de las Naciones Unidades, así como la existencia de casos de afectación a la salud a las personas por metales pesados y sustancias químicas que es una de las causas de conflictividad socioambiental en el Perú. En ese sentido, la regulación de la gestión integral de sustancias químicas constituye un camino dirigido hacia la elaboración e implementación de una Ley marco, a fin de integrar todas las disposiciones en dicha materia."* *(Énfasis propio)*

---

[78] **Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público**
Artículo 74. Prohibición de Fondos o similares
74.1 Queda prohibida la creación de fondos u otros que conlleven gastos que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones del presente Decreto Legislativo.
74.2 No se encuentran dentro de los alcances de lo dispuesto en el presente artículo los fondos para pagos en efectivo o de similar naturaleza que establece las normas del Sistema Nacional de Tesorería.

Asimismo, mediante Informe Complementario SGP-PCM a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado se señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal h) lo siguiente:

> ***"Problemática identificada***
> *(...) la gestión sostenible de los productos químicos, a lo largo de su ciclo de vida, debe contemplar la protección del ambiente, la salud humana, así como la prevención y control de los accidentes laborales asociados a actividades productivas.*
>
> ***Situación del país: Falta de información para el manejo de sustancias químicas con un enfoque de riesgos***
>
> *En Perú (...) no se cuenta con información de exactitud suficiente para abordar un manejo con un enfoque de riesgos a la salud humana y/o el ambiente de la totalidad de sustancias químicas que se importan y fabrican en el país. (...) contar con información sobre las sustancias químicas fabricadas a nivel nacional resulta un reto, ya que las instituciones ligadas a la gestión de las mismas carecen de un registro integral o inventario. (...) la información sobre la fabricación o producción de sustancias químicas no presenta una base de datos nacional, pudiendo obtenerse dicha información a través de fuentes sectorizadas (con diferentes grados de precisión según el tipo de estudio realizado).*
>
> ***Regulación sectorial de sustancias químicas sin un enfoque integral***
>
> *(...) la regulación de las sustancias químicas en el ámbito nacional, responde a un ordenamiento netamente sectorial, encontrándose normativa nacional específica, normativa supranacional como el caso de las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones, así como aquellas vinculadas a convenios internacionales en materia de sustancias químicas aprobadas por el país.*
> *(...)*
>
> ***Comunicación de peligros no estandarizado***
>
> *La comunicación de peligros es un componente principal para la gestión de los riesgos a la salud humana y el ambiente asociados a las sustancias químicas, en ese sentido, dos de las herramientas más importantes para la comunicación de dichos peligros son el etiquetado y fichas de datos de seguridad (FDS) respectivamente.*
>
> *(...) tomando en cuenta la normativa sectorial en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se puede apreciar que (...) esta no precisa la forma y/o información mínima que deben contar dichas FDS al ser presentadas, por lo que es común encontrar diferentes niveles de precisión en las mismas.*

(...) no existe un dispositivo legal que disponga la aplicación obligatoria del SGA de forma integral en el país (...) ya que si bien, el Perú cuenta con la Ley General de Salud, la Ley General del Ambiente, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno u otras normativas sectoriales (como es el caso de la iniciativa regional establecida por la Resolución 2075 de la CAN)(...) ninguna de estas leyes o normativas sectoriales lo permite completamente, puesto que las mismas, no pueden ser usadas como eje principal para establecer un reglamento, que haga el SGA mandatorio en los diferentes módulos indicados en el mismo.
(...)

- ***Atención de la problemática identificada***

(...) alinear la gestión de las sustancias químicas desde un enfoque integral, considerando lo dispuesto por el Enfoque estratégico para la gestión internacional de productos químicos (en adelante, SAICM por sus siglas en inglés), las recomendaciones de la OCDE y CEPAL, la Agenda de Desarrollo Sostenible, los instrumentos legales de la OCDE en materia de 0productos químicos, así como otros acuerdos multilaterales relevantes." (énfasis agregado)

A partir de lo expuesto se puede determinar que la materia solicitada versa sobre la regulación de la gestión integral de sustancias químicas; lo cual no comprende materias que sean indelegables a la Comisión Permanente, por no tratarse de reforma constitucional, ni aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto o Ley de la Cuenta General de la República.

En relación a la fórmula legal presentada en el proyecto de ley en análisis, se considera que, si bien el texto propuesto no es específico en todos sus extremos, este contiene aspectos que son viables de delegar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se coincide con el sustento presentado por el Poder Ejecutivo, respecto a que es necesario contar con una regulación de la gestión integral de las sustancias químicas, con la finalidad proteger la salud de las personas y el ambiente. No obstante, considerando la especialidad de la materia, magnitud y diversidad de los aspectos que se pretende abordar bajo un enfoque integral (obligaciones, atribuciones, responsabilidades, disposiciones sobre etiquetado, transporte, clasificación, instrumentos de información, entre otros), es pertinente que la facultad a delegar sea expresada con un tenor global, siempre que esté condicionada al logro de un fin específico y delimitado.

Es importante resaltar que la elaboración de la regulación de la gestión integral de sustancias químicas, debe contar con la participación de los actores involucrados, entidades públicas y organizaciones vinculadas, entre otros.

En tal sentido, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:

> ***"Establecer el marco normativo que regule la Gestión Integral de Sustancias Químicas, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente".***

i) Modificar las normas sobre descentralización fiscal y administrativa para facilitar la inversión descentralizada, posibilitar la declaratoria de necesidades pública de proyectos de gran interés nacional; además de establecer incentivos para la integración y gestión de mancomunidades regionales y municipales y el fortalecimiento del proceso de descentralización.

La exposición de motivos del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, señala que el marco normativo actual:

> *"(...)no permite un adecuado dinamismo en la gestión pública regional y local, así como dificulta la inversión pública de impacto y cobertura con enfoque territorial; además existen barreras burocráticas que impiden el cierre de brechas."*

En tal sentido, propone modificar la normatividad sobre descentralización fiscal y administrativa a fin de que las nuevas autoridades regionales y locales, así como las mancomunidades regionales y municipales cuenten con nuevas reglas normativas que les permitan realizar mejores y más eficientes inversiones en los territorios y medidas que promuevan una mejor articulación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este contexto, y tras habérsele requerido al Poder Ejecutivo sobre mayores detalles de la propuesta a fin de establecer la especificidad de la materia cuya delegación de facultades legislativas se solicita, así como el marco legal a ser afectado, a través del Informe Complementario brindado por el Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado el pasado martes 31 de enero, así como la reunión efectuada el 1 de febrero en las instalaciones del Congreso de la República con presencia de los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, se precisó que las facultades legislativas solicitadas tenían por fin el realizar los siguientes cambios normativos:

a) Modificación del Decreto Legislativo 955, a fin de asignar recursos por recaudación de determinados impuestos nacionales a los gobiernos

regionales, incorporando el impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a las personas jurídicas.

b) Modificación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Ello a fin de evitar sanciones a las municipalidades o gobiernos regionales en el caso que sus titulares se relacionen en actos contra el orden público, negándosele la transferencia de recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) y de fondos concursables.

c) En Materia de Incentivos a la generación de proyectos a través de mancomunidades:

- Modificación de la Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, para establecer la posibilidad de transferencia directa de recursos desde los sectores o fondos de inversión a una mancomunidad municipal.

- Modificar el Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para que la programación multianual de inversiones también deban realizarla las mancomunidades regionales y mancomunidades municipales.

- Modificar la Ley 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, para incorporar como objetivo del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, el de fomentar la gestión de mancomunidades municipales.

Sobre el punto a), Modificación del Decreto Legislativo 955

El Poder Ejecutivo argumenta que, desde su publicación, el 5 de febrero de 2004, el Decreto Legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal, esta no ha podido ser aplicable y no cubre las expectativas para dotar de facultades de recaudación y responsabilidad de gasto.

Sostiene para ello, entre otros aspectos, que la norma condiciona su vigencia a la creación de regiones[79]; que el incentivo solo sería una devolución para el gobierno

[79] **Decreto Legislativo 955, Descentralización Fiscal**
Artículo 15.- Segunda Etapa

regional de un 50 por ciento[80] de la recaudación de los impuestos nacionales de renta de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, del impuesto selectivo al consumo y del impuesto general a las ventas, excluyendo por el contrario; al impuesto por tercera categoría, el mismo que representa la mayor magnitud de los recursos relacionados a la actividad de las empresas.

Por ello, de incorporarse el impuesto antes mencionado se obtendrían mayores recursos por recaudación en beneficio de los gobiernos regionales.

Sobre el particular, se encuentra que, en principio, la modificación del Decreto Legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal, no comprendería materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

Sin embargo, al momento de analizar si la propuesta es específica, el Ministerio de Economía y Finanzas, en la reunión conjunta sostenida entre su equipo técnico y los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión de Estado; y de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, señaló que la propuesta requiere mayor análisis de impacto económico y de costo-beneficio, en relación a las reglas de distribución de los tributos según domicilio fiscal a nivel nacional, así como el impacto de la incorporación de los impuestos de tercera categoría para financiar a los gobiernos regionales, lo que a la fecha no permite delimitar de forma suficiente el texto legal para cumplir a cabalidad el requisito mencionado.

En tal sentido, dado que se abordan temas de carácter tributario y de asignación de recursos y, **ante la ausencia de análisis de impacto económico suficiente para especificar el texto legal**, se concluye que **no es posible otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar sobre este punto.**

15.1. Para ingresar a esta Etapa deben encontrarse vigentes las leyes del Sistema Nacional de Acreditación y de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones y sus respectivos reglamentos, así como haberse conformado las Regiones, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley de Bases de la Descentralización. El ingreso a y la evaluación de la Segunda Etapa será competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Consejo Nacional de Descentralización.
(...)

[80] **Decreto Legislativo 955, Descentralización Fiscal**
Artículo 18.- Asignación de la recaudación a las Regiones
Las Regiones, conformadas de acuerdo con un proceso de integración, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley de Bases de la Descentralización, tendrán una asignación del 50 por ciento de la recaudación de los impuestos internos nacionales señalados en el Inciso 16.2.

Sobre el punto b), Modificación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014

El Poder Ejecutivo sostiene que la disposición legal antes mencionada restringe la transferencia de recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del Presupuesto por Resultados y a fondos concursables, creados o por crearse a los gobiernos regionales y locales que se encuentren incursos en los siguientes supuestos:

- En estado de emergencia declarados mediante decreto supremo, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, como consecuencia de actos de violencia y/o alteración del orden público, con exclusión de actos terroristas y/o del narcotráfico, en tanto dure dicha situación

- En aquellos casos en los que el Ministerio Público haya formulado denuncia penal contra el titular de los pliegos de los gobiernos regionales o locales por estar involucrados en actos contra el orden público, considerando la exclusión antes señalada; y/o

- En actos que alteren el orden público, determinado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras dure dicha situación

En el contexto antes mencionado, sostiene que la normativa vigente colisiona con el principio constitucional de presunción de inocencia[81], pues la restricción va más allá de los casos en los que ya se haya determinado la responsabilidad penal en dichos actos mediante una sentencia firme por el Poder Judicial; motivo por el cual no debería sancionarse a la municipalidad o gobierno regional negándosele la transferencia de recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del Presupuesto por Resultados y de fondos concursables.

---

[81] **Constitución Política del Perú**
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
(...)
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
(...)
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
(...)

Sobre el particular, se observa que, la propuesta inicial contenida en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE ha podido ser afinada para lograr un mayor nivel de detalle de la misma, al haberse precisado la materia específica de la delegación.

Sin embargo, aun cuando se comparte la necesidad de eliminar las barreras al acceso a fondos o transferencias a gobiernos locales y regionales, dentro del marco de presunción de inocencia de sus titulares, a fin de evitar una sanción indirecta a la población circunscrita, pero sin descuidar los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes a denuncias por violación del orden interno, esta considera que el fin de esta modificación es de carácter presupuestal, dado que afecta a un instrumento como el Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal.

En tal sentido, la propuesta **contraviene lo dispuesto en los artículos 101 y 104 de la Constitución Política de 1993, así como el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República y, en consecuencia, se encontraría fuera de los alcances de la delegación de facultades**; motivo por el cual **se concluye que el otorgamiento de facultades sobre el particular no resulta viable.**

Sobre el punto c), Incentivos a la generación de proyectos a través de mancomunidades

El Poder Ejecutivo argumenta que La mancomunidad municipal tiene autonomía administrativa y en la disposición de sus recursos, en el marco de las competencias y funciones que le sean delegadas para la prestación de servicios y la ejecución de inversiones públicas, según se establece en el numeral 3.5 del Artículo 3 del Reglamento de la Ley de la Mancomunidad Municipal, aprobado por Decreto Supremo 021-2020-PCM[82].

En el mismo sentido, señala que la mancomunidad regional, como una persona jurídica de derecho público y con la condición de pliego presupuestal, conforme a lo establecido en el 3 de la Ley 29768, Ley de Mancomunidad Regional.[83], orienta su

---

[82] **Decreto Supremo 021-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal**
Artículo 3. Alcances complementarios para la aplicación de los principios
Los principios de la mancomunidad municipal se aplican con sujeción a los alcances complementarios descritos a continuación:
(...)
3.5. Autonomía: La mancomunidad municipal tiene autonomía administrativa y en la disposición de sus recursos, en el marco de las competencias y funciones que le sean delegadas para la prestación de servicios y la ejecución de inversiones públicas. Para estos fines emiten actos administrativos y de administración, de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.
(...)

[83] **Ley 29768, Ley de Mancomunidad Regional**

gestión a la ejecución de inversiones de alto impacto y prestación de servicios de competencia regional.

Sin embargo, manifiesta que, actualmente, la programación multianual de inversiones se hace en una de las municipalidades que conforman la mancomunidad municipal, o uno de los gobiernos regionales en caso de una mancomunidad regional; hecho que desnaturaliza la condición de entidad pública y la autonomía administrativa de las mancomunidades municipales y mancomunidades regionales.

Además, señala que, aun cuando hay 209 mancomunidades municipales inscritas en el Registro de Mancomunidades Municipales que administra la Secretaría de Descentralización, en el año 2022 solo 22 mancomunidades han realizado movimiento financiero por un monto total de 5.3 millones de soles; observándose que a pesar de la vigencia de la Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 021-2020-PCM, está ausente un incentivo fuerte que garantice la sostenibilidad de este modelo de gestión municipal.

En el sentido antes expuesto, consideran necesario:

- Establecer en la Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, la posibilidad de transferencia directa de recursos desde los sectores o fondos de inversión a una mancomunidad municipal.

- Incorporar de manera expresa en Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que la programación multianual de inversiones también deben realizarla las mancomunidades regionales y mancomunidades municipales.

- Adicionar en la Ley 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, como objetivo del mismo, el de fomentar la gestión de mancomunidades municipales.

Sobre el particular, se encuentra que la propuesta inicial contenida en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE ha podido ser materia de detalle en cuanto los cambios normativos que se desea implementar y, en ese sentido, considera que esta no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados

---

Artículo 3. Naturaleza jurídica de la mancomunidad regional
La mancomunidad regional es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Las mancomunidades regionales no son un nivel de gobierno.

internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

Sin embargo, luego de la reunión conjunta entre los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión de Estado, y de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, se concluyó que, si bien a través de esta delegación se busca el fortalecimiento de la gestión de las mancomunidades para la ejecución de inversiones, deben generarse previamente las condiciones para que las inversiones en el marco de las mancomunidades puedan ejecutarse precisando responsabilidades de sus integrantes.

En el mismo sentido, se encontró necesario que, previamente, deberían especificarse los diversos tipos de inversión en el marco legal vigente de las mancomunidades, aspectos que aún no están establecidos en el marco de Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal y en la Ley 29768, Ley de la Mancomunidad Regional.

En tal sentido, dado que la propuesta requiere incorporar aspectos específicos previos en el marco legal de las mancomunidades regionales y locales, a fin de generar incentivos a la ejecución de inversiones a través de la transferencia de recursos o la programación multianual de las mismas, **no es posible acotar el texto a fin de cumplir con requisito de especificidad establecido en el marco constitucional actual;** por lo que se concluye que **NO resulta viable la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre este punto**.

j) Establecer la condición de los miembros de los órganos colegiados de los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo, precisando la naturaleza del cargo y el procedimiento para su designación y remoción.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, señalando lo siguiente:

> *"Los Organismos Técnicos Especializados del Poder Ejecutivo están dirigidos por un Consejo Directivo, estableciendo en su ley de creación el procedimiento para la designación y remoción de sus miembros. Con la Ley N° 31419 (...) se establecen determinados requisitos mínimos e impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción (...).*
>
> *Dicha Ley N° 31419, no es aplicable a funcionarios y directivos públicos de designación o remoción regulada. Siendo ello así se evidencia que, en algunos casos, la Ley N° 31419 no resulta aplicable a los miembros de algunos órganos colegiados de los Organismos Técnicos Especializados del Poder Ejecutivo, debido a que, si bien son cargos de libre designación, su remoción es regulada por norma*

con rango de ley; desnaturalizando el espíritu de la norma, dado que es justamente en las designaciones por confianza, donde se requiere verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos dispuestos por la acotada Ley N° 31419, en aras que las entidades públicas descritas cuenten con personal idóneo y capacitado para la función pública (...)

(...) es necesario precisar en las leyes de creación de los Organismos Técnicos Especializados que correspondan, la naturaleza del cargo y el procedimiento de designación y remoción de los miembros de los órganos colegiados, con la finalidad de aplicar lo dispuesto en la Ley N° 31419, en los casos en que su designación está basada en la confianza del funcionario que los designa; lo que permitirá contar con personal idóneo al servicio del Estado (...)" (énfasis agregado)

Asimismo, mediante correo institucional de fecha 31 de enero, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió un Informe Complementario a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado. En el mismo señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal j) lo siguiente:

"Problemática identificada

(...)

Mediante el Decreto Supremo N° 097-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la actualización de la calificación y relación de los Organismos Públicos, identifica a 71 organismos públicos (...). De la referida lista, si bien se advierte que existen titulares de dichos organismos públicos que cuentan con requisitos para su designación en sus correspondientes normas de creación (leyes), también se verifica que algunos de ellos no cuentan con dichos requisitos, pero sí cuentan con causales de remoción, lo cual genera una incongruencia al momento de su clasificación como funcionarios de designación y remoción regulada, pues si bien serían funcionarios de libre designación su remoción si se encuentra regulada.

Dicha situación impide aplicar la Ley N° 31419 (...) los cuales únicamente aplican para los funcionarios de libre designación y remoción (...)"

A partir de lo expuesto se puede determinar que la materia solicitada versa sobre la aplicación de la Ley 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, a los miembros de los órganos colegiados de los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo; lo cual no comprende materias que sean indelegables a la Comisión Permanente, por no tratarse de reforma constitucional, ni aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto o Ley de la Cuenta General de la República.

En relación a la fórmula legal presentada en el proyecto de ley en análisis, se considera que, si bien el texto propuesto no es específico en todos sus extremos,

este contiene aspectos que son viables de delegar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Ley 30057, Ley del Servicio Civil (LSC), establece el régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, aquellas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. La LSC es aplicable, entre otras entidades públicas, a los organismos públicos del Poder Ejecutivo.[84]

En el artículo 52 de la ley en mención, se establece que los funcionarios públicos se clasifican según el siguiente detalle:

> *"**Artículo 52. Clasificación de los funcionarios públicos***
> *Los funcionarios públicos se clasifican en:*
> *(...)*
> *b) **Funcionario público de designación o remoción regulada**. Es aquel cuyos requisitos, proceso de acceso, período de vigencia o causales de remoción están regulados en norma especial con rango de ley.*
>
> > *Son funcionarios públicos de designación y remoción regulados:*
> > *(...)*
> > *13)Titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los organismos técnicos especializados y reguladores y tribunales administrativos.*
> > *(...)*
>
> *c) **Funcionario público de libre designación y remoción**. Es aquel cuyo acceso al Servicio Civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa.*
>
> > *Son funcionarios públicos de libre designación y remoción:*
> > *(...)*
> > *4)Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción."*

Como puede advertirse, la LSC expresamente ha establecido que los titulares, adjuntos, presidentes y miembros del consejo directivo de los organismos técnicos especializados, son funcionarios públicos de designación y remoción regulada; por lo que la Ley 31419 - Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, no podría ser aplicable a los consejos directivos de los organismos técnicos especializados.

[84] Ley 30057, Ley del Servicio Civil, artículo 1.

Ahora bien, el Poder Ejecutivo argumenta que en los Organismos Técnicos Especializados (OTE), existen cargos de libre designación, pero con causales de remoción regulada, lo cual considera que genera una incongruencia al momento de su clasificación como funcionarios de designación y remoción regulada; e impide la aplicación de la Ley 31419. Por ello plantea precisar en las leyes de creación de los OTE que correspondan, la naturaleza del cargo y el procedimiento de designación y remoción de los miembros de los órganos colegiados, con la finalidad de aplicar lo dispuesto en la Ley 31419, para los casos en que su designación está basada en la confianza del funcionario que los designa.

Al respecto, es necesario resaltar que la existencia de cargos de libre designación para titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los OTE, podría contravenir la LSC, dado que, tal como se ha señalado, estos son funcionarios de designación y remoción regulada; por lo que corresponde que, en sus leyes de creación o norma especial con rango de ley, sean regulados los requisitos e impedimentos para su designación, así como las causales de remoción.

No obstante, se coincide en el extremo referido a que en las designaciones por confianza se cumpla con requisitos mínimos, como los establecidos en la Ley 31419, a fin que los OTE cuenten con personal idóneo y capacitado para ejercer la función Pública; por lo que, ante la falta de designación regulada, se considera viable otorgar la facultad legislativa solicitada, acotando que la extensión de la aplicación de la Ley 31419, que el Poder Ejecutivo plantea, sea supletoria y únicamente para aquellos OTE que no cumplan con tener la designación regulada de los miembros de sus órganos colegiados.

En tal sentido, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:

> ***"Establecer: i) la condición de los miembros de los órganos colegiados de los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo; y, ii) la aplicación supletoria de la Ley 31419, "Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción", para los organismos técnicos especializados que no cuenten con normativa para la designación regulada de sus funcionarios"***

k) Fortalecer el marco normativo aplicable a los organismos reguladores de la inversión privada, garantizando la independencia funcional, autonomía y transparencia en el ejercicio de sus funciones, en beneficio y salvaguarda de los intereses de los usuarios, inversionistas y Estado, incluyendo la revisión de las disposiciones que rigen su estructura orgánica.

En la Exposición de Motivos del proyecto de ley, el Poder Legislativo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, conforme a lo siguiente:

> *"La actuación de los organismos reguladores impacta no solo en los consumidores, sino también en los inversionistas, siendo fundamental seguir fortaleciendo las reglas claras y transparentes que les aplican y que garanticen su labor sin injerencia política o de grupos de interés en el ejercicio de sus funciones, además, que les permitan contar con una organización que se adecue a sus necesidades en beneficio de la ciudadanía, lo cual conlleva a revisar las disposiciones que rigen su estructura orgánica, incluyendo la de los órganos resolutivos, en concordancia con los principios y criterios en materia de organización. En razón de ello se emitirá un Decreto Legislativo con el enfoque antes referido."*

Asimismo, mediante Informe Complementario SGP-PCM, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal k) se señala que:

> *"El artículo 9 de la Ley N° 27332 establece que los Organismos Reguladores cuentan con el Tribunal de Solución de Controversias, sin embargo, vía ley se han creado otros tribunales (...), asimismo, otros tribunales como el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento se crearon vía Reglamento de Organización y Funciones de SUNASS.*
>
> *Se advierte la existencia de una multiplicidad de órganos que tendrían la naturaleza de resolutivos; por ello, con la finalidad de estandarizar la actual situación y guardar concordancia con la definición de Órgano Resolutivo establecida en el inciso b) del artículo 15 de los Lineamientos de Organización del Estado, se propone regular bajo un solo artículo a los Órganos Resolutivos que cuentan los Organismos Reguladores dentro del cual calzan todos aquellos, sin importar su denominación, que están conformados por miembros que se encargan de resolver materias de competencia de la entidad.*
>
> *(...)*
>
> *Se propone modificar el artículo 9 de la Ley N° 27332, regulándolo bajo la denominación de órganos resolutivos y eliminando el término "Tribunal de Solución de Controversias" y cambiarlo por el término genérico de "Tribunales Administrativos", además de precisar que los miembros de los Tribunales sean elegidos por concurso público y se deja la facultad que los Organismos Reguladores puedan optar por designar como miembros para dichos Tribunales a trabajadores de la entidad, previo concurso interno."*

Adicionalmente, mediante Oficio 184-2022-2023/CODECO-CR, de fecha 6 de febrero de 2023, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos remitió el Informe 001-2023-ST/CODECO, a través del cual emite opinión respecto al proyecto de ley 3941/2022-PE en lo que concierne a los organismos reguladores recomendando que:

- *"Todos los miembros de los tribunales de solución de controversias de los Organismos Reguladores sean elegidos por concurso público y que debe haber responsabilidad funcional contra aquel funcionario que no convoque el concurso público en su tiempo, a fin de no dejar acéfalas dichos tribunales.*
- *Lo resuelto por los tribunales administrativos es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia administrativa, cuando así lo señalen en sus resoluciones.*
- *La creación, conformación y funcionamiento de los tribunales administrativos de los organismos reguladores, así como la designación de sus miembros, que debe efectuarse previo concurso público de méritos, es determinado mediante resolución del consejo directivo (...)*
- *Los tribunales son órganos con autonomía técnica y funcional y cuentan con el apoyo de secretarías técnicas, según lo acuerde el consejo directivo, de acuerdo con las necesidades institucionales (...)*
- *Se uniformice la nomenclatura de todos los tribunales de solución de controversias de los Organismos Reguladores a un nombre común como podría ser Tribunales Administrativos."*

Cabe señalar que, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, también emitió opinión sobre la delegación de facultades mediante Oficio 000012-2023-PRE/INDECOPI, de fecha 7 de febrero de 2023, al cual se adjunta el Informe 000095-2023-OAJ/INDECOPI. Es así que, sobre el extremo del literal k) del numeral 2.2. del artículo 2 del proyecto de ley 3941-2022/PE, el INDECOPI sostiene lo siguiente:

"37. Con relación a estas propuestas normativas, si bien las acciones que realiza el INDECOPI tienen un impacto directo en los intereses de los ciudadanos, empresas y del Estado en su conjunto, debemos tener en cuenta que nuestra actual estructura orgánica fue aprobada con el propósito de adecuar la misma a los compromisos asumidos por el Estado peruano mediante el TLC con los Estados Unidos de América y, de este modo, facilitar el cumplimiento de aquellos relacionados con las materias de nuestra competencia. En este sentido, somos de la opinión que, en el caso del INDECOPI, no es necesaria la aprobación de normas sobre esta materia, siendo necesario, en todo caso, un mayor estudio y discusión, a fin de asegurar la marcha normal de la entidad y garantizar el cumplimiento de nuestro mandato normativo.

(...)

III. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

A partir de lo señalado en el punto precedente, esta Oficina considera que, al momento de emitirse las normas que estén relacionadas con las materias de la delegación de facultades legislativas, debe preservarse el régimen del Decreto Legislativo N° 1033, manteniéndose las disposiciones que regulan las competencias del INDECOPI.

(...)"

Por último, en la reunión virtual sostenida con personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) el día 7 de febrero de 2023, el OSINERGMIN sostuvo, en la misma línea que la PCM, la importancia que el artículo 9 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, comprenda tanto a los Tribunales de Solución de Controversias como a todos los órganos resolutivos de los organismos reguladores. De igual forma, resaltó la importancia de establecer un mecanismo para la incorporación de los miembros del Tribunal a fin de evitar la excesiva demora en la designación de los mismos, e incluso la imposibilidad de sesionar por falta de quórum. Sin perjuicio de lo cual, recomendó tener en cuenta las particularidades y necesidades de cada organismo regulador al momento de realizar las modificaciones en la normativa correspondiente.

El artículo 2 numeral 2.2 literal k) del proyecto de ley 3941/2022-PE solicita la autorización para modificar el marco normativo aplicable a los organismos reguladores, específicamente la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, con la finalidad de estandarizar la denominación de los órganos resolutivos; así como precisar el mecanismo de incorporación de los miembros de los actuales Tribunales de los Organismos Reguladores. En ese sentido, la mencionada ley no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

Sin perjuicio de ello, se observa en el texto legal que no se encuentra claramente delimitado los alcances de la materia específica, dado que, si bien la exposición de motivos explica que es necesario revisar las disposiciones que rigen la estructura orgánica (incluyendo a los órganos resolutivos) de los Organismos Reguladores y fortalecer las reglas aplicables, no indica expresamente cómo se fortalecerán estas reglas y en qué consistirá la revisión de las disposiciones, siendo que incluso no precisa cuál es la norma que debe modificarse y/o actualizarse.

Al respecto, de la revisión del Informe Complementario SGP-PCM y de lo expuesto en la reunión de fecha 26 de enero en las instalaciones del Congreso de la República, sostenida entre representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y equipos técnicos de otras entidades del Poder Ejecutivo, se tiene que la solicitud para la delegación de facultades en este extremo está relacionada a mejorar la regulación de los órganos resolutivos de los Organismos Reguladores en cuanto a su denominación y elección de miembros.

Sobre el particular, a la fecha se encuentra vigente la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que tiene como finalidad establecer el marco normativo general aplicable a los

organismos reguladores[85], los cuales están adscritos a la PCM[86]. Es así que, en el artículo 9 de la citada ley se desarrolla lo referente al Tribunal de Solución de Controversia, señalando que son la última instancia administrativa, siendo que sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento y constituyen precedente vinculante en materia administrativa[87].

Aunado a ello, el mencionado artículo contempla que cada Organismo Regulador estará conformado por 5 (cinco) miembros designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que pertenece la actividad económica regulada[88].

En ese contexto, el Informe Complementario SGP-PCM expone que, en la actualidad, además del Tribunal de Solución de Controversias, existen otros

---

[85] **Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos**
Artículo 1.- Ámbito de aplicación y denominación
La presente Ley es de aplicación a los siguientes Organismos a los que en adelante y para efectos de la presente Ley se denominará Organismos Reguladores:
(...)

[86] **Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos**
Artículo 2.- Naturaleza de los Organismos Reguladores
Los Organismos Reguladores a que se refiere el artículo precedente son organismos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional técnica, económica y financiera.

[87] **Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos**
Artículo 9.- Del Tribunal de Solución de Controversias
9.1 Los Organismos Reguladores contarán con un Tribunal de Solución de Controversias como última instancia administrativa. Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia administrativa. El Tribunal de cada Organismo Regulador estará conformado por 5 (cinco) miembros designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que pertenece la actividad económica regulada.

[88] **Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos**
Artículo 9.- Del Tribunal de Solución de Controversias
(...)
9.2 El Tribunal de Solución de Controversias estará compuesto de la siguiente manera:
a) Dos miembros a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales será el representante de la sociedad civil. Uno de los miembros propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros preside el Tribunal y tiene voto dirimente."
b) Un miembro a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas;
c) Un miembro a propuesta del sector al que pertenece la actividad económica regulada; y
d) Un miembro a propuesta del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

tribunales creados por ley, los mismos que también tienen naturaleza de órganos resolutivos. Debido a ello, y a fin de estandarizar la regulación aplicable a estos tribunales, para que sea conforme a la definición de órgano resolutivo, es de importancia unificar la denominación de estos órganos bajo el término de "Tribunales Administrativos". Esto permitirá que la norma comprenda expresamente a todos los tribunales que tienen a su cargo resolver materias de sus respectivas entidades.

Por último, se ha identificado una problemática en la designación de los miembros de estos tribunales, por lo que plantea que sean nombrados y seleccionados a través de un concurso público, que garantice la meritocracia, a diferencia de la actual designación, que es a propuesta de diversas entidades que están detalladas en el artículo 9 de la Ley 27332. Asimismo, el nombramiento por medio de un concurso público contribuirá a evitar que haya demora en la designación de los miembros de los tribunales o que no se logré el quórum requerido, lo cual afecta directamente en los ciudadanos que no ven atendidas sus pretensiones. En ese sentido, la PCM propone que el artículo 9 de la Ley 27332, quede redactado de la siguiente forma:

> "***Artículo 9.- Órganos Resolutivos***
> *9.1 Los Organismos Reguladores cuentan con Tribunales Administrativos que son órganos Resolutivos que forman parte de su estructura organizacional. Estos Tribunales Administrativos constituyen última instancia administrativa y lo resuelto por ellos son de obligatorio cumplimiento y constituyen precedente vinculante en materia administrativa.*
> *9.2 Los Tribunales Administrativos están conformados por un mínimo de tres (3) y máximo de cinco (5) miembros, los cuales son elegidos por concurso público, salvo que los Organismos Reguladores opten por designar a trabajadores en este Tribunal, previo concurso interno.*
>
> *9.3 Lo normado en los numeral 6.4, 6.5 y 6.6 del artículo 6, así como los artículos 7 y 8 de la presente ley, les es aplicable a miembros de los Tribunales Administrativos. Los miembros de los Tribunales Administrativos no pueden ser, simultáneamente, miembros del Consejo Directivo de la entidad.*"

Cabe señalar que, respecto al literal k) en el Informe Complementario SGP-PCM también se solicita la derogación de "*la habilitación que se da al OSINERMING para que mediante Resolución de Consejo Directivo o norma reglamentaria regule la creación de órganos resolutivos*"; puesto que, no sería concordante con las normas de organización del Estado en cuanto a la regulación de la estructura orgánica de las entidades. No obstante, de la revisión del artículo 6 de la Ley 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía[89] (el cual se pretende modificar), se observa que la creación

[89] **Ley 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)**

de organismos adicionales está referida a aquellos que se encontrarían dentro de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, es decir, no serían nuevos órganos resolutivos, sino organismos de apoyo necesarios para que la mencionada Junta pueda resolver las controversias que se origen, ya que el citado artículo 6 está orientado a regular la conformación y funcionamiento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios. Por lo tanto, no corresponde otorgar facultades sobre este extremo del literal k) en lo que respecta a la modificación del artículo 6 de la Ley 27699, dado que, no regula, en la práctica, la creación de nuevos órganos resolutivos dentro del OSINERGMIN.

En consecuencia, se considera que aun cuando ya se encuentre regulado lo referente a los órganos resolutivos de los Organismos Reguladores, resulta viable otorgar facultades al Poder Ejecutivo para mejorar la norma vigente, a fin de unificar la denominación de los órganos resolutivos y precisar el proceso de incorporación de los miembros de estos órganos. Con ello, también se busca garantizar una organización que se adecúe a las necesidades de los consumidores, los inversionistas, y la ciudadanía en general; y, que, a su vez, garantice seguridad jurídica al tener reglas claras y transparentes aplicables a los órganos resolutivos.

Sin embargo, del análisis efectuado a la delegación de facultades sobre este punto, se considera oportuno precisar en la fórmula legal el tema específico que se pretende modificar en la 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Por consiguiente, es factible otorgar facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre esta materia con el siguiente texto sustitutorio:

> ***"Modificar la normativa relativa a la denominación y conformación de los tribunales administrativos de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, considerando las competencias y características de cada organismo regulador."***

l) Actualizar el marco normativo referido al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común regulado por el Título III de la Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común a fin de adecuarlo a las nuevas necesidades de las viviendas multifamiliares y en general de las edificaciones.

Artículo 6.- Junta de Apelaciones de reclamos de usuarios
El OSINERG contará con una Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios que conocerá y resolverá, en segunda y última instancia administrativa, los reclamos de los usuarios de los servicios públicos bajo el ámbito de su competencia. Su conformación y funcionamiento, así como la creación de los organismos adicionales que sean necesarios para resolver, en segunda instancia las controversias que se susciten, serán aprobadas en la vía reglamentaria o por el Consejo Directivo del OSINERG, de ser el caso.

En la Exposición de Motivos del proyecto de ley, el Poder Legislativo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, conforme a lo siguiente:

> *"En los últimos años las normas técnicas han permitido la construcción de edificaciones multifamiliares en las cuales los propietarios de unidades inmobiliarias privadas comparten bienes y servicios comunes, lo cual genera una convivencia obligatoria supeditada a las condiciones, horarios, pagos, limitaciones al derecho de propiedad predial, entre otros aspectos, pero esto genera problemas sociales resultantes de diferencias, conflictos entre vecinos.*
>
> *Por ello, se propone el Decreto Legislativo que tiene por objeto regular el régimen de la propiedad horizontal en la que existen unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que se caracteriza por compartir bienes y servicios comunes, con la finalidad de fomentar una adecuada convivencia entre los propietarios de las unidades inmobiliarias que conforman este tipo de edificaciones."*

Asimismo, el Informe Complementario SGP-PCM se señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal l) lo siguiente:

> *"**Proponente**: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento*
>
> - ***Problemática identificada***
>
> ***Problema:** Los conflictos de convivencia que se generan entre propietarios y/o poseedores de los edificios o condominios que comparten bienes y/o servicios comunes, afectando la convivencia, organización y administración de los mismos, los cuales causan perjuicios económicos.*
>
> ***Causas:***
>
> • *Incremento de edificaciones, principalmente multifamiliares, que no cuentan con reglas mínimas de convivencia.*
> • *Falta de mecanismos adecuados para incentivar el cumplimiento de obligaciones económicas para el sostenimiento de los bienes y servicios comunes.*
> • *Limitadas funciones de las Juntas de Propietarios para lograr el cumplimiento de las obligaciones de los condóminos.*
>
> *(...)*
>
> - ***Atención de la problemática identificada***
>
> ✓ ***Fomentar una adecuada convivencia** entre los propietarios de este tipo de edificaciones.*

- ✓ ***Garantizar un adecuado uso y disfrute*** *de los bienes y servicios comunes.*
- ✓ ***Mejora la gestión, recaudación, sostenibilidad y el aprovechamiento*** *de la edificación en su conjunto.*

  - ***Propuesta (preliminar)***

Nueva Ley del Régimen de Propiedad Horizontal, derogación del Título III de la Ley N° 27157."

El artículo 2 numeral 2.2 literal l) del proyecto de ley 3941/2022-PE solicita la autorización para actualizar el marco normativo aplicable a las propiedades que se encuentran dentro del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, recogido en la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, con la finalidad de mejorar la convivencia entre los residentes de estas unidades inmobiliarias en la medida que comparten bienes y/o servicios. En ese sentido, la mencionada ley no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

Sin perjuicio de ello, se observa en el texto legal que no se encuentra claramente delimitado los alcances de la materia específica, puesto que, si bien la exposición de motivos identifica la problemática actual en las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, y acota – en el literal l) del numeral 2.2 del artículo 2 del proyecto de ley – la delegación de facultades en este ámbito; sin embargo, no indica expresamente qué implicaría la actualización de la normativa de este régimen.

Al respecto, de la revisión del Informe Complementario SGP-PCM y de lo expuesto en la reunión de fecha 26 de enero en las instalaciones del Congreso de la República, sostenida entre representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y equipos técnicos de otras entidades del Poder Ejecutivo, se tiene que la solicitud para la delegación de facultades en este extremo está relacionada a una actualización normativa a través de una nueva ley que contemple al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, y la derogación del actual Título III de la Ley 27157.

Sobre el particular, se observa que a la fecha se encuentra vigente la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, que tiene como finalidad, entre otros aspectos, establecer el

régimen de unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común[90], lo cual está desarrollado en el Título III de la citada norma.

Asimismo, se advierte que la citada ley data del año 1999 y ha tenido algunas modificaciones a través de la Ley 31264, Ley que modifica la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, para responder ante emergencias sanitarias y similares.

No obstante, la Ley 27157 no ha tenido mayores modificaciones, por lo que se coincide con la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la necesidad de mejorar la normativa que regula las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Ello porque se ha observado el incremento de edificaciones, principalmente multifamiliares, los mismos que por sus innovaciones en la construcción, como lo es el aumento de las áreas comunes, y el incremento de la cantidad de departamentos disponibles para vivienda, requiere reformar la normativa para adecuarlas a estas nuevas tendencias de construcción. De igual manera, conforme a cifras del INEI, también habría un ascenso en la cantidad de viviendas ubicadas en quintas[91].

Por otro lado, en lo que concierne a las Juntas de Propietarios, estas tendrían limitaciones para incentivar el cumplimiento de obligaciones por parte de los propietarios de los edificios y/o condominios, por lo que resultaría necesario adecuar la normativa de la materia al contexto actual para facilitar la convivencia dentro las unidades inmobiliarias, asegurando que se cumplan tanto las reglas mínimas de convivencia como las obligaciones económicas que permite el mantenimiento de las áreas comunes y, en general, de las unidades inmobiliarias antes señaladas.

Por ello, se considera oportuno actualizar la normativa aplicable al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común para que

---

[90] **Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común**
Artículo 1.- Del objeto de la Ley
La presente Ley establece los procedimientos para el saneamiento de la titulación y de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales como departamentos en edificios, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes y construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, así como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria de fábrica y el régimen legal de las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común.

[91] **Informe Complementario de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros**
"Evidencia:
El INEI señala que los **departamentos en edificios** (donde se aprecia el Régimen de la Propiedad Horizontal), sufrieron un crecimiento constante desde el año 2007 **(5.5 %)** al 2017 **(7.3%)** y 2018 **(7.0%)**.
Del mismo modo, se observa que las viviendas ubicadas en quintas ascendieron desde el año 2007 (1.6%) y 2018 (1.9%).
(...)"

responda a las necesidades actuales de las viviendas multifamiliares y edificaciones, cuya construcción es cada vez más frecuente. Más aún cuando la Ley 27157 es del año 1999, resultando evidente que el incremento de la población en las ciudades ha conllevado a nuevos paradigmas en el sector vivienda, con nuevas tendencias de construcción e incorporando a más propietarios, siendo que una norma vigente desde hace 24 años ya no respondería a estos cambios.

En consecuencia, es factible otorgar facultades para legislar manteniendo el texto legal propuesto por el Poder Ejecutivo:

> ***"Actualizar el marco normativo referido al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común regulado por el Título III de la Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliaria de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, a fin de adecuarlo a las nuevas necesidades de las viviendas multifamiliares y en general de las edificaciones."***

m) Establecer la regulación jurídica para la emisión de licencias de habilitación urbana, de edificación y de todos los actos administrativos que las complementen; así como para la ejecución, supervisión y fiscalización de las obras autorizadas.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, señalando lo siguiente:

> *"Existen estudios que pueden advertir que, una de las principales trabas en el sector construcción inmobiliaria en el Perú, entre otras, consiste en la "lentitud del trámite para la obtención de licencias de edificación, que se debe principalmente a que las municipalidades exigen más requisitos que los contemplados en la Ley N° 29090 (...) y sus reglamentos, que precisamente establecen procedimientos únicos a nivel nacional con el objetivo de simplificar los procesos de otorgamiento de licencias de habilitación urbana y edificación". (...)*
> *De esta manera, se observa que algunas municipalidades, en ejercicio de sus atribuciones, crean procedimientos administrativos distintos a los vigentes, establecen requisitos adicionales, permiten la participación de actores ajenos a las materias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, dilatan plazos y determinan derechos de trámite a través de Ordenanzas Municipales o Decretos de Alcaldía, ocasionando trabas innecesarias (...)*
>
> *(...) es necesario mejorar el marco regulatorio existente de forma tal que se establezcan medidas a favor de los promotores inmobiliarios, y en general, a favor de los agentes económicos que participan en el sector constructivo inmobiliario, que garanticen efectivamente sus derechos e intereses, permitiendo desarrollar procedimientos administrativos para autorizar la ejecución de habilitaciones urbanas y/o de edificaciones simples, ágiles, eficaces y eficientes, así como evitar la dilación*

en la emisión de licencias de habilitaciones urbanas y/o de edificaciones (...)."(Énfasis propio)

Asimismo, mediante el Informe Complementario SGP-PCM se señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal m) lo siguiente:

"(...)
***Problema:** La demora en el desarrollo de procedimientos administrativos para la emisión de licencias de habilitación urbana y de edificación.*
(...)
La demora del trámite para la obtención de licencias de edificación afecta:
- *La elaboración y diseño de proyectos*
- *La ejecución de los mismos, la supervisión de las obras por empresas privadas, a los contratistas, proveedores.*
- *Ofertas de compra, ventas, alquileres, materiales y componentes*

Afectando al sector construcción, que en el primer trimestre del 2022 disminuyó en un -0,5% según INEI.

- ***Atención de la problemática identificada***

✓ *Optimizar el desarrollo de los procedimientos administrativos para la emisión de licencias de habilitación urbana, de edificación.*
✓ *Dinamizar la ejecución, supervisión y fiscalización de las obras autorizadas.*
✓ *Garantizar las condiciones para el crecimiento de las inversiones del sector inmobiliario en el país.*

- ***Propuesta (preliminar)***

Nueva Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, derogación de la Ley N° 29090 y sus modificatorias." *(Énfasis propio)*

A partir de lo expuesto, se puede determinar que la materia solicitada implica la emisión de una nueva ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones; así como la derogación de la Ley 29090; lo cual no comprende materias que sean indelegables a la Comisión Permanente, por no tratarse de reforma constitucional, ni aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto o Ley de la Cuenta General de la República.

Sin embargo, la fórmula legal presentada en el proyecto de ley en análisis, no es específica, toda vez que plantea establecer, además de la regulación para la emisión de licencias de habilitación urbana y de edificación, la regulación de todos los actos administrativos que las complementen; con lo cual no es posible acotar el texto a fin de cumplir con el requisito de materia específica establecido en el marco constitucional, para efectos de otorgar facultad legislativa.

Asimismo, es pertinente señalar que la solución propuesta para la problemática identificada, preliminarmente implicaría la derogación de la Ley 29090; este escenario no se condice con la facultad solicitada en materia de inversión pública en el numeral 2.1.1 literal a) del proyecto de ley en mención, en el que plantean *"Establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación o aprobación de procedimientos vinculados con licencias, autorizaciones, en especial en temas de habilitación urbana (...)"*; asimismo, en la exposición de motivos sobre este último punto, indican lo siguiente:

> *"(...) se propone establecer como una medida permanente para que las entidades públicas inicien la ejecución de las obras, que cuenten solamente con el cargo de recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación, debidamente firmado y sellado por la unidad de recepción documental bajo la* ***modalidad A establecida en la Ley N° 29090 (...)"***

En tal sentido, tampoco corresponde otorgar facultad legislativa para la derogación de una ley que contiene la regulación que se plantea aplicar como solución de otra problemática identificada sobre la misma materia, es decir habilitación urbana; cuyo sustento y fórmula legal han sido analizados en el acápite correspondiente al numeral 2.1.1 literal a).

Por los argumentos expuestos, **NO resulta viable otorgar facultad para legislar al Poder Ejecutivo en los términos solicitados. Esto en la medida que no se cumple con el requisito de materia específica establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú.**

n) Ampliar el plazo con el que cuentan los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyen instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado.

En la Exposición de Motivos del proyecto de ley, el Poder Legislativo sustenta la necesidad de legislar en esta materia, conforme a lo siguiente:

> *"Los Consejos Directivos y/u órganos colegiados constituyen órganos que sesionan periódicamente, y para la realización de sus sesiones se ejecutan actos preparatorios y sus acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros asistentes; dichos aspectos determinan que el plazo de 15 días hábiles que poseen para conocer y resolver determinado asunto sea insuficiente, más aún si se tiene en cuenta que, su funcionamiento se apoya en opiniones técnicas, las cuales requieren la actuación coordinada de los órganos de línea y/o asesoramiento, entre otros, lo que implica tomar en consideración el plazo para las actuaciones y coordinaciones propias de dichos órganos.*

Por lo tanto, teniendo en cuenta la especial naturaleza y funcionamiento de los Consejos Directivos y/u órganos colegiados, resulta necesario que el plazo de 15 días establecido para la atención del recurso de reconsideración de los procedimientos que éste conoce y resuelve, sea ampliado a 30 días hábiles. Con base en lo expuesto, existen procedimientos, cuya impugnación mediante recurso de reconsideración son conocidos por Consejos Directivos y/u órganos colegiados, siendo que su plazo de atención se sujeta a lo dispuesto por el TUO de la LPAG. Sin embargo, la modificatoria del artículo 207 de la LPAG efectuada por la Ley N° 31603 desemboca en una problemática de plazo insuficiente para el ejercicio de las funciones de los Consejos Directivos, toda vez que no se está tomando en cuenta que, a diferencia de otros órganos, estos sesionan periódicamente, requieren la ejecución de actos preparatorios para la realización de las referidas sesiones y adoptan sus acuerdos por mayoría de los miembros asistentes."

Asimismo, el Informe Complementario SGP-PCM señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal n) lo siguiente:

- ***"Problemática identificada***

La Ley N° 31603 de noviembre de 2022, redujo el plazo para resolver los recursos de reconsideración presentados por los administrados por parte de los mismos órganos que emitieron las decisiones objeto de los referidos recursos, de los 30 días previstos originalmente en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a únicamente 15 días.

En el caso del OSITRAN, el Consejo Directivo resuelve temas relacionados a: i) tarifas (fijación, revisión, desregulación tarifaria, calificación de servicios portuarios especiales); ii) establecimiento de mandatos de acceso y aprobación de reglamentos de acceso; iii) interpretación de contratos de concesión; entre otras materias, cuyas decisiones tienen significativo impacto en la explotación de las diversas infraestructuras de transporte como en los usuarios que las utilizan.

Asimismo, previamente los órganos de línea y de asesoramiento deben evaluar y emitir opinión técnica, económica-financiera y/o legal que servirá de sustento a la decisión final a adoptar por el Consejo Directivo, el cual de acuerdo con la normativa sectorial se reúne dos (2) veces al mes con el respectivo pago de dieta.

Consecuentemente, el plazo de 15 días resulta materialmente casi imposible de cumplir.

(...)

- ***Atención de la problemática identificada***

Con la finalidad de atender el problema expuesto resulta necesario ampliar el plazo con el que cuentan los consejos directivos y órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver recursos de reconsideración a 30 días.

(...)[92]"

Mediante el artículo 2 numeral 2.2 literal n) del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, se solicita la modificación del artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), respecto al plazo que tienen las entidades para resolver los recursos de reconsideración presentados por los administrados. En ese sentido, la mencionada ley no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

De la revisión del Informe Complementario SGP-PCM y de lo expuesto en la reunión de fecha 26 de enero de 2023 en las instalaciones del Congreso de la República, sostenida entre representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y equipos técnicos de otras entidades del Poder Ejecutivo, entre ellos OSITRAN, se tiene que la solicitud para la delegación de facultades en este extremo está relacionada a la modificación del plazo que tienen los Consejos Directivos y/u órganos colegiados que constituyen instancias únicas en sus respectivas entidades para resolver los recursos de reconsideración presentados por los administrados. Por ello, proponen que el numeral 2 del artículo 207 de la Ley 27444, quede redactado de la siguiente forma:

"207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días, sin embargo, para el caso de los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única, el referido recurso de reconsideración se resuelve en el plazo de treinta (30) días." (énfasis agregado)

Al respecto, se advierte que mediante Ley 31603, Ley que modifica el artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó el artículo 207 de la LPAG, acortando el plazo de treinta (30) a quince (15) días hábiles[93] para que las entidades de la administración pública[94] resuelvan los

[92] Informe Complementario SGP-PCM. p. 58.

[93] **Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**
Artículo 134.- Transcurso del plazo
131.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.
(...)

[94] **Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**
Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

recursos de reconsideración interpuestos por los administrados a fin de obtener un nuevo pronunciamiento del mismo órgano que dictó el acto administrativo que se impugna, estableciendo la siguiente redacción:

> *"**Artículo 207. Recursos administrativos***
>
> *207.1 Los recursos administrativos son:*
> *a) Recurso de reconsideración*
> *b) Recurso de apelación*
>
> *Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.*
> *207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días". (énfasis agregado)*

En este contexto, el Informe Complementario SGP-PCM señala que, en algunos casos, como sucede con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), el Consejo Directivo resuelve diversos temas, entre los que se puede identificar lo concerniente a las tarifas por los servicios; establecimiento de mandatos de acceso y aprobación de acceso de aprobación de reglamentos de acceso; e, interpretación de contratos de concesión.

Adicionalmente se explica que el Consejo Directivo sólo se reúne dos (2) veces al mes, y que, previo al pronunciamiento que resuelve el recurso de reconsideración, se necesita la opinión de los órganos de línea y/o de asesoramiento, opinión que sirve de sustento del citado pronunciamiento. Por lo tanto, en el Informe Complementario se concluye que el Consejo Directivo no podría cumplir el plazo de quince (15) días para resolver dichos recursos.

Sobre el particular, de la lectura de la exposición de motivos como del Informe Complementario SGP-PCM, no se evidencia el sustento que acredite que el plazo de treinta días (30) es el óptimo para resolver los recursos de reconsideración, aun cuando, como señala OSITRAN, su Consejo Directivo sólo se reúna dos (2) veces al mes.

En efecto, no se han indicado los criterios que se deben observar para la resolución de los recursos, así como la cantidad de resoluciones que se podrían emitir por día y la carga procedimental que tendrían, factores que sí influyen en el análisis de proyección del tiempo necesario en el que es posible emitir un pronunciamiento. Sin embargo, esto no ha sido considerado ni en la exposición de motivos ni en el Informe Complementario SGP-PCM.

(...)

De igual manera, no se fundamenta la necesidad de la medida, en cuanto si un plazo mayor va a acorde a garantizar los derechos de los administrados en virtud a los principios de debido procedimiento y celeridad[95], entre otros que resulten aplicables en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido, no se advierten argumentos jurídicos que permitan concluir fehacientemente que el plazo de treinta (30) días resulta más favorable al administrado.

Asimismo, las razones que se desarrollan para fundamentar la modificación del plazo en el Informe Complementario SGP-PCM, se respaldan únicamente en un problema de la gestión del procedimiento a través de los órganos de la entidad proponente, por lo que las dificultades encontradas para la resolución de los recursos estarían vinculadas a la organización y estructura de la misma entidad, así como de las competencias asignadas a cada uno de sus órganos.

Finalmente, corresponde señalar que la Autógrafa de la Ley 31603 fue recibida por el Despacho Presidencial el día 19 de octubre de 2022, y promulgada con fecha 4 de noviembre de 2022, sin observaciones por parte del Poder Ejecutivo. En esa línea, se observa que la oportunidad para realizar las observaciones pertinentes en relación a la modificatoria del artículo 207 de la LPAG, fue el momento en que el Poder Ejecutivo recibió la Autógrafa de la Ley 31603. Aunado a ello, debe resaltarse la proximidad de la publicación de la Ley 31603 en el Diario Oficial El Peruano, de fecha 4 de noviembre de 2022, con la solicitud de delegación de facultades, evidenciándose de que la argumentación no se podría reconducir a la antigüedad de la norma.

En consecuencia, **NO resulta viable otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo sobre la materia. Esto en la medida que no se ha justificado adecuadamente la necesidad de modificar el plazo establecido por el artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.**

o) Simplificar las reglas para que la entidad que cuente con disponibilidad tecnológica establezca la obligatoriedad de la notificación vía casilla

---

[95] **Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser (...) a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
(...)
1.9. Principio de celeridad. - Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

electrónica, sin previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sobre este punto, mediante correo institucional de fecha 31 de enero de 2023, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió un Informe Complementario a modo de sustento adicional de las facultades delegadas en materia de Modernización de la Gestión del Estado, el cual señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal o) lo siguiente:

> *"De la revisión del sustento de la propuesta, se evidencia que el problema puede ser resuelto sin que se requiera la emisión de una ley, en ese sentido,* ***se solicita la exclusión de esta medida."***[96]

En consideración a lo expuesto, **NO resulta viable** otorgar facultades legislativas para simplificar las reglas para que la entidad que cuente con disponibilidad tecnológica establezca la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica, sin previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

p) Aprobar un marco regulatorio para la puesta en valor del sector Cultura, a fin de generar servicios eficientes dirigidos al ciudadano, operando con pertinencia cultural, poniendo en relevancia la investigación, puesta en valor, restauración y preservación del patrimonio cultural de la Nación, así como la promoción de las industrias culturales y artes, y el reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural y lucha contra la discriminación étnica y racial.

En su Exposición de Motivos, el Poder Ejecutivo justifica la necesidad de legislar en esta materia específica, señalando lo siguiente:

> *"A la fecha, no existe regulación que permita la ejecución de obras públicas o privadas de ineludible desarrollo en bienes inmuebles prehispánicos, por ello se plantea una propuesta normativa que permita su ejecución acompañada de medidas de mitigación y/o compensación. Asimismo, tampoco existe el marco legal que permita articular las acciones entre gobierno nacional y regional para la elaboración y desarrollo de planes específicos de Zonas Monumentales o Centros Históricos.*
>
> *De otro lado existe la necesidad de facilitar la presentación del sustento de los proyectos de inversión destinados a cerrar brechas de infraestructura y servicios culturales, así como se requiere precisar que la transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación inmueble no es nula. Además, se requiere una normativa que recoja las definiciones del trabajador del arte considerando la forma de su prestación y que precise que su tipo de contratación puede ser laboral, civil y de asociación artística.*

[96] Informe Complementario SGP-PCM. p. 59.

Por su parte, también se requiere modernizar la gestión del sistema nacional del archivo general de la nación a partir de la gestión digital y la preservación digital, asimismo, a la fecha, existe una falta de priorización de la certificación de competencias laborales y profesionales del público objetivo del sector Cultura, por ello se requiere que se institucionalice su priorización, en especial, para el caso de los servidores públicos bilingües. En razón a todo ello es que se requiere la habilitación legal para poder llevar a cabo la emisión de un marco regulatorio que atención a la problemática descrita."

Asimismo, mediante el Informe Complementario SGP-PCM se señala, respecto del artículo 2, numeral 2.2, literal p) lo siguiente:

- ***"Problemática identificada***

Problema 01: *Limitaciones al derecho de uso y disfrute de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Inmueble para la ciudadanía ante insuficientes criterios técnicos objetivos para la elaboración y/o propuesta de intervención de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.*

Problema 02: *Limitaciones en los gobiernos regionales y locales, no cuentan con una gestión idónea del Patrimonio Cultural, afectando la interrelación de éste con el desarrollo de su comunidad.*

Problema 03: *Alto riesgo de pérdida de bienes culturales muebles e inmuebles de la época prehispánica y colonial debido a las constantes afectaciones causadas por factores antrópicos tales como invasiones, acciones de destrucción de los bienes culturales, construcciones no autorizadas, tráfico ilícito de bienes culturales muebles, entre otros.*

Problema 04: *Alto número de Bienes Inmuebles Prehispánicos - BIP pendientes de concluir su saneamiento físico legal, lo que impide realizar inversiones en ellos para su puesta en valor y uso social en beneficio de la comunidad, además de otorgarle seguridad jurídica al monumento.*

Problema 05: *Alto número de artistas no cuentan con un trabajo formal.*

- ***Atención de la problemática identificada***

Sustento 1.1: *La Ley General de Patrimonio Cultural no prevé la realización de una obra que sea de realización ineludible y que a la vez produzca algún riesgo o impacto negativo en un bien cultural inmueble.*
Sustento 1.2: *La Ley General de Patrimonio Cultural no prevé la emisión de una normativa previa a la realización de Proyectos de Inversión y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición destinados a cerrar brechas en infraestructura y acceso a servicios culturales.*
Sustento 2.1: *La Ley General del Patrimonio Cultural no prevé que se deben promover la gestión del Patrimonio Cultural en Zonas Monumentales o Centro Históricos.*

Sustento 2.2: *La Ley General del Patrimonio Cultural no prevé que los propietarios de bienes que tengan condición de Patrimonio cultural de la nación, lo puedan usar para fines comerciales o como componentes de una cadena de valor para su desarrollo social.*
Sustento 3.1: *La Ley General del Patrimonio Cultural no regula la posibilidad de restaurar bienes inmuebles en condiciones o metodologías que no fueron las originales para su construcción, aunque la destrucción del bien coloque en peligro de la vida de las personas que los habitan.*
Sustento 4.1: *La Ley General del Patrimonio Cultural no contiene reglas especiales para declarar como Patrimonio Cultural un bien inmueble en la que se desarrollan pueblos indígenas u originarios.*
Sustento 5.1: *La Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante no contiene reglas especiales para promover el trabajo formal del trabajador del arte.*
(...)

- ***De la precisión a las facultades delegadas***

Considerando lo consignado en el numeral precedente, se solicite se considere como facultad delegada al Sector Cultura, lo siguiente:

"Modificar la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural a fin de aprobar medidas para dotar de eficiencia y proporcionalidad al régimen legal de las funciones del Ministerio de Cultura en materia de protección, gestión, administración, promoción y preservación del Patrimonio Cultural, haciéndolas compatibles con otras exigencias del interés general, en beneficio de los ciudadanos; lo cual incluye, entre otros: i) Establecer niveles de protección y gestión diferenciados y razonables en función de la singular relevancia del bien; ii) Regular mecanismos de mitigación o compensación, y modificar las medidas generales de protección y las restricciones a la propiedad con base en el principio de proporcionalidad, en especial aquellas vinculadas a servicios públicos como salud, educación, transporte, vivienda y saneamiento; iii) Establecer las medidas correctivas como una alternativa a la imposición de sanciones iv) Regular la participación de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras en la promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio; v) Regular los incentivos y otras medidas de promoción o fomento para la puesta en valor y uso social del Patrimonio y que su protección se adecúe al interés general, así como habilitar el uso del bien para diversos fines; vi) Establecer la priorización de la certificación de competencias culturales; vii) autorizar la eliminación de unidades ejecutoras dependientes del Ministerio de Cultura así como aprobar medidas para de gestión digital y preservación de los documentos en el ámbito del Archivo General de la Nación.

Modificar la Ley N° 28131, ley del Artista Intérprete y Ejecutante con la finalidad de establecer medidas de identificación y regulación para mejorar las condiciones y desarrollo del trabajador del arte; entre ellas, actualizar la definición y clasificación de los sectores artísticos, modalidades de contratación en favor de los artistas".

Del análisis preliminar la solicitud de delegación de facultades en esta materia, se encuentra que está circunscrita a modificaciones a la Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural; y a la Ley 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante. En ese

sentido, la solicitud de delegación implica modificaciones a dos leyes ordinarias, y no involucra afectación a leyes orgánicas, modificaciones de carácter constitucional o que materias versen sobre la Ley de Presupuesto, por lo cual es factible la delegación.

Asimismo, en relación a la fórmula legal presentada en el proyecto de ley en análisis, se considera que, si bien el texto propuesto no es específico en todos sus extremos, este contiene aspectos que son viables de delegar, teniendo en cuenta ciertas consideraciones.

De la revisión del Informe Complementario SGP-PCM, se advierte que se presenta una nueva propuesta de texto legal la cual se puede separar en las siguientes secciones:

- *"Modificar la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural para:*
  - *Aprobar medidas para dotar de eficiencia y proporcionalidad al régimen legal de las funciones del Ministerio de Cultura en materia de protección, gestión, administración, promoción y preservación del Patrimonio Cultural, haciéndolas compatibles con otras exigencias del interés general, en beneficio de los ciudadanos:*
    - *i) Establecer niveles de protección y gestión diferenciados y razonables en función de la singular relevancia del bien;*
    - *ii) Regular mecanismos de mitigación o compensación, y modificar las medidas generales de protección y las restricciones a la propiedad con base en el principio de proporcionalidad, en especial aquellas vinculadas a servicios públicos como salud, educación, transporte, vivienda y saneamiento;*
    - *iii) Establecer las medidas correctivas como una alternativa a la imposición de sanciones;*
    - *iv) Regular la participación de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras en la promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio;*
    - *v) Regular los incentivos y otras medidas de promoción o fomento para la puesta en valor y uso social del Patrimonio y que su protección se adecúe al interés general, así como habilitar el uso del bien para diversos fines;*
    - *vi) Establecer la priorización de la certificación de competencias culturales;*
    - *vii) autorizar la eliminación de unidades ejecutoras dependientes del Ministerio de Cultura, así como aprobar medidas para la gestión digital y preservación de los documentos en el ámbito del Archivo General de la Nación.*

- *Modificar la Ley 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante para:*
  - *Establecer medidas de identificación y regulación para mejorar las condiciones y desarrollo del trabajador del arte:*
    - *Actualizar la definición y clasificación de los sectores artísticos,*

- *Modalidades de contratación en favor de los artistas".*

En lo referido a la modificación de la Ley 28296, para "i) Establecer niveles de protección y gestión diferenciados y razonables en función de la singular relevancia del bien", no se identifica en el sustento presentado por el Poder Ejecutivo los criterios que se emplearán para la determinación de dichos niveles, ni la manera en la cual se va a establecer la "relevancia del bien".

Asimismo, de una lectura conjunta de este punto específico de la propuesta con lo indicado en la exposición de motivos, se podría inferir que esta versará sobre bienes inmuebles prehispánicos (primer párrafo de la exposición de motivos, art. 7 de la Ley 28296), lo que incrementa aún más la necesidad de información específica sobre la materia por tratarse de bienes cuya afectación sería irreparable e invaluable. Es así que, en atención a la falta de especificidad del inciso en análisis y su sustento, no es posible delegar facultades en los términos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de ello, mediante reunión técnica llevada a cabo el 7 de febrero con representantes del Ministerio de Cultura, se tomó conocimiento de la necesidad de contar con una normativa ordenada y diferenciada en atención a las necesidades particulares de cada tipo o clase de bienes integrantes del Patrimonio Cultural basados en su importancia, impacto y magnitud (ej. Bienes que a su vez cuentan con la clasificación de Patrimonio Cultural de la humanidad) para su protección y gestión, siendo el primer paso de este proceso la creación de un sistema o metodología de categorización de los bienes que conforman el Patrimonio y su posterior clasificación dentro de los niveles del mismo. Ello de manera complementaria a la clasificación contenida en el artículo 1 de la Ley 28296, referida a la naturaleza del bien (material, inmaterial, mueble, inmueble).

A razón de ello, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada para este fin, bajo los siguientes términos:

> ***"i) establecer los criterios técnicos para la clasificación de los bienes pertenecientes al Patrimonio cultural, y las medidas que garanticen su protección y sostenibilidad"***

Respecto al punto "ii) Regular mecanismos de mitigación o compensación, y modificar las medidas generales de protección y las restricciones a la propiedad con base en el principio de proporcionalidad, en especial aquellas vinculadas a servicios públicos como salud, educación, transporte, vivienda y saneamiento", cabe mencionar que en la reunión técnica anteriormente referida, los representantes del Ministerio de Cultura, indicaron que a la fecha existen diversas trabas e impedimentos para realizar proyectos relacionados a servicios públicos en áreas donde se encuentre Patrimonio Cultural.

Un ejemplo de ello son los casos de hospitales que requieren de intervenciones para la ampliación de su capacidad pero que se ven limitadas por su condición de Patrimonio Cultural como sucede con el Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima, o de inversiones en educación como es el caso del Colegio Guadalupe. Esta situación requiere de atención inmediata, más aún al considerar que de acuerdo al Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud (2022) el 97.57% de los hospitales a nivel nacional tienen una capacidad instalada inadecuada[97]. Situación similar se presenta en el sector educación, donde el 94.03% de los locales educativos de educación primaria cuentan con una capacidad instalada inadecuada, lo que se replica en el 88.88% en el caso de educación inicial, y 87.83% en el caso de educación secundaria[98].

A razón de ello, y a fin de viabilizar las inversiones relacionadas a servicios públicos sin colocar en riesgo el Patrimonio Cultural; y en cumplimiento del requisito de especificidad contenido en los artículos 104 y 101 de la Constitución Política, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada para este fin, bajo los siguientes términos:

> ***"ii) regular en base a los principios de proporcionalidad y razonabilidad los mecanismos de mitigación y compensación; así como, las restricciones a la propiedad de los inmuebles vinculados a los servicios públicos de salud, educación, transporte, vivienda y saneamiento, garantizando su protección y conservación."***

En relación al punto "iii) establecer las medidas correctivas como una alternativa a la imposición de sanciones", se debe señalar que, la Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural, faculta al Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, a imponer sanciones administrativas, tales como, multas, incautación o decomiso, según corresponda[99]. Asimismo, el artículo 50 de la ley en mención, establece que los criterios y procedimientos para la imposición de la multa, son normados por el organismo competente; así también, delimita el rango de la multa a imponer, siendo el mínimo de 0.25 de la UIT y máximo 1000 UIT.

---

[97] Ministerio de Salud, Disponible en:
https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2022/diagnostico-brechas-infraestrucctura-sector-salud-2022.pdf

[98] Ministerio de Educación, Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del sector educación para el PMI 2022-2024. Disponible en:
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/pdf/2021/diagnostico-de-brechas-de-infraestructura-de-acceso-a-servicios-del-sector-educacion-pmi-2022-2024.pdf

[99] Artículo 49 de la Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural.

De lo señalado puede advertirse que la ley específica en materia de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación[100], ha establecido las sanciones que corresponden a las conductas contrarias a la ley, el rango de la multa a imponer, y la competencia para normar los criterios y procedimientos para su imposición.

Sin perjuicio de lo expuesto, las disposiciones contenidas en el Capítulo II – Procedimiento Sancionador, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - LPAG, son aplicables con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales[101]. En este marco el numeral 232.1 del artículo 232 de la referida ley, establece que:

> ***"Artículo 232. Determinación de la responsabilidad***
>
> *232.1* ***Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior****, incluyendo la de los bienes afectados, (...). Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto." (énfasis agregado)*

Asimismo, el artículo 236-A de la LPAG ha previsto condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones, las que incluyen el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, entre otros.

En tal sentido, no corresponde establecer medidas correctivas como alternativas a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural, puesto que, en caso se determine responsabilidad y no sea aplicable alguna condición eximente, corresponderá la imposición de la sanción correspondiente, sin perjuicio que se dicten medidas correctivas, orientadas a la reposición o reparación de los bienes del Patrimonio Cultural, que hubiesen sido afectados.

Por lo expuesto, **no es viable otorgar la facultad solicitada, en este extremo.**

Respecto al punto "iv) regular la participación de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras en la promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio", en el Informe Complementario SGP-PCM se indica que uno de los

[100] Artículo 1 de la Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural.
[101] Artículo 229.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

problemas que se busca solucionar está referido a las "*Limitaciones en los gobiernos regionales y locales,* [ya que] *no cuentan con una gestión idónea del Patrimonio cultural, afectando la interrelación de éste con el desarrollo de su comunidad.*"

Sobre ello es necesario enfatizar que la regulación referida a las competencias de los gobiernos locales y regionales se encuentran en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respectivamente, por lo cual establecer cualquier competencia nueva, más allá de las ya contempladas en ambas leyes[102y103] implicaría exceder los límites colocados por los artículos 104 y 101 de la Constitución Política.

Sin embargo, durante la reunión técnica indicada se señaló por parte del Ministerio de Cultura la necesidad de contar con instrumentos legales que permitan y faciliten el trabajo en conjunto del sector privado, tanto nacional como extranjero, con el aparato público para su participación conjunta en iniciativas y acciones de promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio Cultural, lo cual tendría un impacto positivo en la conservación, difusión y acceso de la población al Patrimonio.

A razón de ello, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada para este fin, bajo los siguientes términos:

> ***"Regular la participación de entidades privadas, nacionales o extranjeras en la promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio Cultural junto al ente rector."***

En lo referido al punto "v) Regular los incentivos y otras medidas de promoción o fomento para la puesta en valor y uso social del Patrimonio y que su protección se adecúe al interés general, así como habilitar el uso del bien para diversos fines", el Informe Complementario SGP-PCM señala que a la fecha, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, no prevé que los propietarios de bienes que tengan condición de Patrimonio Cultural de la Nación lo puedan usar para fines comerciales o como componentes de una cadena de valor para su desarrollo social.

---

[102] Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Capítulo II, Competencias y Funciones Específicas, Artículo 82, numeral 12. Promover la protección y difusión del Patrimonio Cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración.

[103] Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 47, literal l) Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región

En efecto, si bien el artículo 5 del Reglamento[104] de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece que los entes rectores de la gestión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural tienen como una de sus atribuciones dictar normas referidas a la gestión y uso sostenible del patrimonio cultural; la normativa en la materia no especifica los usos de carácter comercial o de desarrollo social que permiten la puesta en valor de dichos bienes.

Debe tenerse en consideración que la puesta en valor parte de la voluntad de proteger un bien para que esté disponible y en buenas condiciones a fin de ser valorado por la sociedad, y a su vez promover su difusión, protección y sostenibilidad. En tal sentido, es oportuno establecer la regulación sobre el uso de los bienes del patrimonio cultural sin que ello implique el desmedro de su protección y conservación.

A razón de ello, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada para este fin, bajo los siguientes términos:

> ***"Establecer los usos permitidos para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en armonía con su protección, conservación y puesta en valor"***

Respecto al punto "vi) Establecer la priorización de la certificación de competencias culturales", se debe señalar que este hace referencia a los procesos de certificación de personas que no pudieron acceder a una educación formal pero que demuestran competencias en áreas específicas. En el caso del sector cultura a modo de ejemplo, se encuentran los servidores públicos bilingües de lenguas nativas, o artesanos especializados.

A la fecha, el Ministerio de Cultura ha podido realizar este tipo de certificaciones por un periodo de tiempo determinado al ser una institución debidamente acreditada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). El SINEACE es una entidad adscrita al Ministerio de Educación que se encarga de garantizar que las instituciones educativas, públicas y

---

[104] Decreto Supremo 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 5.- Entes rectores
El INC, la BNP y el AGN constituyen los entes rectores de la gestión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, y en consecuencia les corresponde, dentro de los ámbitos de su competencia, las siguientes atribuciones:
(...)
2. Dictar las normas que sean necesarias para la gestión y uso sostenible del patrimonio cultural y en consecuencia para el registro, declaración, protección, identificación, inventario, inscripción, investigación, conservación, difusión, puesta en valor, promoción y restitución en los casos que corresponda, dentro del marco de la Ley y el presente reglamento; y aprobar las normas administrativas necesarias para ello.

privadas, ofrezcan un servicio de calidad, y de certificar las competencias de las personas en los sectores priorizados a nivel nacional.

Para ello tienen a cargo dos procesos: a) Acreditación de la calidad educativa: reconocimiento que entrega el Estado, a quienes cumplen con estándares de calidad y, por tanto, aseguran excelencia educativa; y b) Certificación de competencias: reconocimiento público que otorga el Estado por haber demostrado en una evaluación de competencias que una persona cumple con buenas prácticas en el desempeño de tu profesión u ocupación, de acuerdo a lo establecido en un estándar o norma de competencia.

En este sentido, la priorización de los sectores a certificar no recae en el sector cultura, ya que el SINEACE es el encargado de gestionar todos los procesos de acreditación y certificación, y de ser el caso, la priorización de un determinado sector se establece en conformidad a las disposiciones que emite como entidad competente, para lo cual no es necesario una norma con rango de ley. En consecuencia, no es viable otorgar facultades sobre este extremo.

El punto "vii) autorizar la eliminación de unidades ejecutoras dependientes del Ministerio de Cultura, así como aprobar medidas para de gestión digital y preservación de los documentos en el ámbito del Archivo General de la Nación", contiene dos materias distintas, por lo cual es necesario dividirlo en los siguientes supuestos; a) eliminación de unidades ejecutoras; y, b) medidas para la gestión digital de documentos del archivo.

Respecto al punto a), cabe precisar que las unidades ejecutoras se encuentran contempladas en la Ley de Presupuesto, por lo cual su eliminación implica la modificación de esta última. Al tratarse esto de una materia indelegable no es posible otorgar facultades sobre este extremo.

Sobre el punto b), referido a la gestión digital de documentos de archivo, es necesario indicar que no se trataría de una modificación a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultura, sino una modificación a la Ley 25323 "Crean el Sistema Nacional de Archivos".

A la fecha la normativa de la materia se centra en la Directiva Nº 001-2019-AGN/DC "Norma para la Conservación de Documentos Archivísticos en la Entidad Pública", vigente para el ámbito del Sistema Nacional de Archivos, la cual solo dedica un numeral a definir conceptualmente qué es la preservación digital y qué es lo que ella implica, a pesar del uso y creación masivo de documentación digital en el sector público.

Es a razón de ello que existe la necesidad de regular desde un punto de vista técnico la materia de preservación digital, incluyendo tanto la conservación del

material nacido digital (con o sin firma digital) como del material digitalizado (escaneado o microformas) que en los últimos años ha tenido una producción exponencial en comparación con el documento físico en el sector público y privado a nivel nacional. Es decir, resulta necesario regular el marco normativo propio del documento digital, su tratamiento y preservación digital, de manera que se desarrolle normativamente la naturaleza distinta del documento digital respecto del documento en físico (papel).

Sobre este punto es importante señalar que, a través del Informe de Opinión Consultiva 001-2022-2023-CCYPC-P, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, señaló que "es absolutamente necesario legislar sobre dicha materia".

En ese sentido, y al cumplir con el criterio de especificidad, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada para este fin, en los siguientes términos:

> ***"Modificar la Ley 25323, Crean el Sistema Nacional de Archivos a fin de regular el tratamiento y preservación de la documentación digital."***

Finalmente, respecto a la solicitud de facultades a fin de Modificar la Ley N 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante con la finalidad de establecer medidas de identificación y regulación para mejorar las condiciones y desarrollo del trabajador del arte; entre ellas, i) actualizar la definición y clasificación de los sectores artísticos, y ii) modalidades de contratación en favor de los artistas, es pertinente señalar que en la exposición de motivos del proyecto de ley no se brinda información sobre la materia. Asimismo, en el Informe Complementario SGP-PCM sólo se indica lo siguiente: "Problema 05 Alto número de artistas no cuentan con un trabajo formal", y "Sustento 5.1: La Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante no contiene reglas especiales para promover el trabajo formal del trabajador del arte."

En línea con el análisis realizado, para poder otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo al amparo de los artículos 104 y 101 de la Constitución Política, la materia solicitada debe ser específica.

Al respecto, durante reunión técnica llevada a cabo el 7 de febrero con representantes del Ministerio de Cultura, se indicó que se buscaba modificar el artículo 4 de la Ley 28131, en el cual se regula los artistas y trabajadores técnicos comprendidos en la Ley en mención, a fin de incluir a otros que en la práctica no se les aplica. Sin embargo, la modificación realizada en el año 2018 a dicho artículo y al artículo 2 mediante el Decreto Legislativo 1391 amplió el ámbito de aplicación de la ley, considerando como artista a:

"(...) a toda persona natural que representa o realiza una obra literaria o artística o expresión del folclore, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse.[105]"

De igual manera, el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 28131, que indica a qué trabajadores es aplicable la ley, es un artículo de cláusula abierta: *"4.2 La presente Ley es aplicable a los trabajadores que a continuación se señalan en forma enunciativa más no limitativa (...)"* por lo cual su aplicación no se restringe únicamente a aquellos enunciados de manera expresa.

Ello permite concluir que la inaplicación de la ley a personas vinculadas al sector no es un problema derivado de la literalidad de la norma sino de su aplicación. Es así que, de la revisión del sustento de la propuesta, se evidencia que el problema puede ser resuelto sin que se requiera la emisión de una norma con rango de ley.

Situación similar es la aplicable al caso ii) modalidades de contratación en favor de los artistas. Sobre este punto es pertinente señalar que, el Título III de la Ley 28131 versa sobre el régimen laboral e incluye diversas especificaciones para la participación de artistas nacionales y extranjeros en espectáculos, como por ejemplo los porcentajes de participación que estos deben tener en las producciones (ej. En el caso de producciones audiovisuales 80% nacionales como mínimo). Asimismo, el capítulo II de dicho título abarca aspectos relacionados a la jornada, remuneración y otros beneficios laborales, y el capítulo III se centra en el contenido de los contratos.

En tal sentido, la Ley 28131 establece disposiciones que regulan los contratos laborales aplicables en el marco de dicha ley; asimismo, es pertinente señalar que no se advierte que esta ley establezca impedimento alguno para otra modalidad de contratación establecida en la legislación vigente[106], siempre que no se desnaturalice la normativa específica en la materia en análisis. Por lo que, no corresponde otorgar facultades para legislar en este extremo.

En atención a lo indicado, es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:

> ***"Modificar la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural a fin de; i) establecer los criterios técnicos para la clasificación de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, y las medidas que garanticen su protección y sostenibilidad; ii) regular en base a los principios de proporcionalidad y razonabilidad los mecanismos de mitigación y***

[105] Artículo 2, Ley N 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante.
[106] Por ejemplo, Código Civil.

compensación; así como, las restricciones a la propiedad de los inmuebles vinculados a los servicios públicos de salud, educación, transporte, vivienda y saneamiento, garantizando su protección y conservación; iii) regular la participación de entidades privadas, nacionales o extranjeras en la promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio Cultural junto al ente rector; iv) establecer los usos permitidos para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la nación, en armonía con su protección, conservación y puesta en valor; y, v) modificar la Ley 23523, Crean el Sistema Nacional de Archivos, a fin de regular el tratamiento y preservación de la documentación digital."

q) Establecer que las Áreas Técnicas Municipales (ATM) sean quienes resuelven los conflictos por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales.

Al respecto, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, señala que:

"En el ámbito rural se identifican características que pueden afectar la conducción adecuada del procedimiento administrativo de solución de reclamos entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales, entre estas identificamos: i) la atomización de prestadores (al 2021 se identificaron 25,087 organizaciones comunales), ii) complejidades en materia de acceso a los centros poblados del ámbito rural y iii) bajos niveles de conectividad geográfica y comunicacional, lo que requiere de un sistema eficaz y eficiente de resolución de conflictos por la prestación de los servicios de saneamiento, que asegure el ejercicio adecuado de los derechos de defensa y debido procedimiento de los usuarios del ámbito rural."

Por su parte, las municipalidades, quienes prestan los servicios de saneamiento de forma indirecta a través de las organizaciones comunales, cuentan con un órgano Área Técnica Municipal (ATM), quienes brindan asistencia técnica a las organizaciones comunales, habiéndose identificado 1074 en el territorio nacional. Considerando lo anterior, las ATM estarían en mejor capacidad para resolver los conflictos por la prestación de los servicios de saneamiento, en tanto resulta ser la autoridad en saneamiento más cercana geográficamente, conocedora de las dinámicas de las organizaciones comunales de su jurisdicción y que, adicionalmente, tiene mayor alcance de los problemas que se presentan en sus respectivos ámbitos, razón por el cual se propone asignarles la competencia resuelven los conflictos por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural." (énfasis agregado)

A fin de establecer especificidad de la materia sobre el marco legal a ser afectado, y en línea con el argumento señalado, a través del Informe Complementario SGP-PCM, se detalla lo siguiente:

> *"(...) el problema público se identifica en la baja efectividad del sistema de solución de reclamos por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, siendo que el problema se debe a una falla en la regulación al establecer que la segunda instancia del procedimiento administrativo de solución de reclamos es la Sunass. Ello en la medida que no resulta eficiente para las organizaciones comunales conducir un procedimiento de reclamos con la Sunass pues para que sea efectivo se requiere de la comunicación oportuna entre el usuario y la segunda instancia para generar actos y actuaciones que aporten información relevante para resolver el reclamo, y en tanto la ATM de su localidad cuenta con conocimientos sobre la prestación de los servicios de saneamiento, además sobre los accesos y comunicaciones con la comunidad[107]". (énfasis agregado)*

Para la atención de la problemática identificada se argumenta que *"(...) las ATM estarían en mejor capacidad para resolver los reclamos por la prestación de los servicios de saneamiento, en tanto resulta ser la autoridad en saneamiento más cercana geográficamente, conocedora de las dinámicas de las organizaciones comunales de su jurisdicción y que, adicionalmente, tiene mayor alcance de la prestación de los servicios de los servicios de saneamiento y por tanto de los reclamos que se presentan en sus respectivos ámbitos".*

Para este propósito, se plantea la modificación del artículo 7, "Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos", y del Artículo 10, "Funciones de los Gobiernos Locales", del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Sobre esta materia, se encuentra que el marco normativo a modificar no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República por lo cual no contraviene lo establecido en los artículos 104 y 101 de la Constitución Política.

En materia de especificidad, a través de reunión conjunta con los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) sostenida el 26 de enero de 2023, se precisó que la terminología "conflictos" hacía referencia a "reclamos de los usuarios de las organizaciones comunales por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural", y que resultaba necesario que la atención de estos en primera instancia administrativa sea realizada por el prestador de los servicios de

[107] Informe Complementario SGP-PCM. p. 61.

saneamiento (organización comunal) y la segunda instancia sea realizada por la ATM, en lugar de la SUNASS. De esta aclaración, a través del informe antes mencionado, se propone como fórmula legal:

> *"Establecer que las Áreas Técnicas Municipales (ATM) sean quienes resuelven los reclamos, en segunda instancia administrativa, por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales."*[108]

Respecto a esta última fórmula legal, y considerando el marco normativo a modificar, se realizan las siguientes observaciones derivadas del informe complementario remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros:

- Se debe preservar la competencia en regulación de saneamiento rural de la SUNASS, toda vez que la cobertura de las ATM sobre ello no cubre la totalidad de los centros poblados rurales. Al respecto, las ATM presentan una cobertura promedio del 85% de los centros poblados rurales bajo su jurisdicción, no considerándose alrededor de 10,635 centros poblados. Por otro lado, es necesario contar con un ente que no sólo ayude a complementar la falta de cobertura a través de estrategias a nivel nacional, sino que permita transmitir y articular con otros actores las directrices a nivel nacional sobre gestión y tratamiento de reclamos de los usuarios de zonas rurales.

- En este sentido, **no se faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones sobre competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos si esta modificación tiende a suprimir materias de regulación que actualmente realiza la entidad sobre saneamiento rural.**

- Si bien el criterio de eficiencia en torno a la cercanía y los canales comunicacionales existentes entre las ATM y los centros poblados, son argumentos relevantes para el análisis, debe considerarse que aún se requiere implementar medidas que permitan asegurar que las ATM brinden, dentro de su cobertura, la atención necesaria para la gestión de reclamos. En ese sentido se encuentra que *"(...) en el marco de la aprobación del Reglamento de Reclamos de los Usuarios de las Organizaciones Comunales por la Prestación de los Servicios de Saneamiento en el Ámbito Rural en el año 2022, las ATM han venido implementando el cuaderno de reclamos y a la fecha se tiene un nivel de implementación progresivo del 22%"*[109].

[108] Informe complementario. Página 63.
[109] Informe Complementario SGP-PCM. p. 62.

- Así también, el ámbito de los casos de resolución de reclamos requiere especialización. Al respecto el Informe Complementario SGP-PCM señala que *"(...) en el marco de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se pueden presentar reclamos vinculados a la facturación (monto a pagar, categoría aplicada a los usuarios, volumen facturado, costos del cierre y reapertura del servicio), acceso a los servicios de saneamiento, así como reclamos vinculados a temas operativos (filtraciones, fugas en la conexión domiciliaria, entre otros). A efectos de dar solución a dichos reclamos, corresponde que se tramite un procedimiento administrativo."*[110]

De los puntos anteriores, la solicitud materia de delegación no especifica en qué medida se van a fortalecer las capacidades de las ATM o mejorar la coordinación entre las instituciones del sector saneamiento para la gestión de reclamos y cómo se justifica la transición de esta competencia, considerando que es posible que no todas las ATM, tanto distritales, como provinciales, tengan las condiciones para poder ejecutarla a cabalidad. En este sentido, la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1280, señala que:

> *"La falta de coordinación entre el Ente rector, GR y GL con los demás actores sectoriales e intersectoriales ocasiona prestadores de servicios débiles, sin capacidad para formular proyectos, sostener la calidad de los servicios, anticipar la expansión de las ciudades y generar la satisfacción de los usuarios. Actualmente, son escasos los mecanismos para brindar soporte a los prestadores de los servicios, sobre todo en el ámbito rural y en pequeñas ciudades no administradas por la EPS." [énfasis añadido]*

Finalmente, es de considerar que, según los numerales 2.3 y 4.2 del artículo 80 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la provisión de servicios de saneamiento rural es una función específica compartida, tanto para municipalidades provinciales como para municipalidades distritales, como se muestra a continuación:

> ***"2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:***
> *(...)*
> *2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal.*
> *(...)*
> ***"4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:***
> *[...]*

[110] Informe Complementario SGP-PCM. p. 61.

4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal."

Por lo expuesto, es factible, al ser proveedor de servicios, que se pueda brindar una función de gestión de reclamos; sin embargo, considerando la ausencia de un análisis de condiciones para la resolución de segunda instancia de los reclamos, debe reforzarse el criterio de que esta acción responda a una complementariedad y coordinación entre los diferentes entes responsables de saneamiento.

En ese sentido, considerando el mantenimiento de la rectoría por parte de la SUNASS; la necesidad de aprovechar la cercanía de las municipalidades para atender los reclamos en segunda instancia sin afectar sus competencias; y, la necesidad de mejorar la cobertura calidad de la atención de los reclamos en un escenario de coordinación intersectorial, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos**:

> ***"Establecer la normativa necesaria para que progresivamente las Áreas Técnicas Municipales (ATM) resuelvan, en segunda instancia administrativa, los reclamos entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural."***

r) Establecer de manera expresa la competencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento sobre la realización del análisis de condiciones de competencia en los mercados de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento.

Al respecto la exposición de motivos del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, señala que:

> *"De acuerdo con el párrafo 68.1. del artículo 68 y el párrafo 69.1. del artículo 69 del TUO de la Ley Marco, en concordancia con el párrafo 135.6. del artículo 135 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento están sujetos a la regulación económica de la SUNASS, siempre que no sean prestados en condiciones de competencia y sean proporcionados por prestadores de servicios de saneamiento.*
>
> *Para determinar si los servicios y productos derivados son prestados en condiciones de competencia se debe realizar un estudio que analice dichas condiciones; sin embargo, no está establecido de manera expresa qué entidad es la encargada de realizarlo. En ese sentido, resulta necesario establecer de manera expresa la entidad competente para realizar dicho análisis, el cual tendrá como consecuencia la intervención o no del regulador en dicho ámbito.*

Al respecto, se considera que la SUNASS debe realizar el análisis de condiciones de competencia, dado que ello está vinculado con su función de regulación económica, la cual es amplia y no se limita a la fijación de tarifas, sino que abarca diversos conceptos, tales como la desregulación en donde la SUNASS realiza previamente un análisis del mercado a fin de determinar la existencia de condiciones de competencia, de acuerdo con el párrafo 186.2. del artículo 186 del TUO del Reglamento de la Ley Marco.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que resulta necesario señalar expresamente que la SUNASS es competente para realizar el análisis de condiciones de competencia en los mercados de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento.
Dicha incorporación debería realizarse en los artículos 68 y 69 del TUO de la Ley Marco, tal como se propone en el presente caso."

A fin de especificar la materia sobre el marco legal a ser afectado, y en línea con el argumento señalado, a través del Informe Complementario SGP-PCM, se detalla lo siguiente:

"De acuerdo con el artículo 26 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, TUO de la Ley Marco), los prestadores de servicios de saneamiento están facultados para brindar a terceros, con la correspondiente contraprestación, actividades vinculadas a la comercialización de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento[111], obtenidos como resultado del uso de la infraestructura destinada a brindar los servicios de saneamiento (servicio de agua potable, servicio de alcantarillado sanitario, servicio de tratamiento de aguas residuales y servicio de disposición sanitarias de excretas).

Dichas actividades comprenden:

- *Comercializar el agua residual tratada, residuos sólidos y subproductos; generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales, con fines de reúso.*
- *Brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales, para fines de reúso.*
- *Comercializar el agua residual sin tratamiento, para fines de reúso.*

La comercialización de productos y servicios derivados de la prestación de los servicios de saneamiento por parte de las empresas prestadoras o cualquier otro tipo de prestador es consistente con el nuevo paradigma de la economía circular, que tiene por finalidad promover la reutilización de todo tipo de recursos, entre ellos las aguas residuales domésticas.

[...]

[111] Por ejemplo, aguas residuales con o sin tratamiento, lodos.

La definición del ente competente para efectuar el análisis de competencia en un mercado de productos y servicios derivados y definir si existen o no condiciones de competencia permitirá que dicho ente determine las reglas aplicables para su realización. Asimismo, la precisión del tipo de regulación que debe aplicar la SUNASS para regular los productos y servicios derivados permitirá tener la certeza para el diseño de la normativa que emita este organismo regulador para tal efecto.

Cabe indicar que dicha definición y precisión resultan urgentes para iniciar con el establecimiento de medidas que promuevan el incremento de la comercialización de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento con fines de reúso.

(...)[112]"

Para la atención de la problemática identificada se argumenta que *"(...) la Sunass debe ser la entidad competente para efectuar dicho análisis de las condiciones de competencia, dado que ello está vinculado con su función de regulación económica, la cual es amplia y abarca diversos conceptos, tales como la desregulación en donde el organismo regulador realiza previamente un análisis del mercado a fin de determinar la existencia de condiciones de competencia" (énfasis agregado).* Asimismo, el proponente considera incorporar en el marco legal a modificar *"(...) la precisión sobre el tipo de regulación bajo el cual la Sunass regularía los servicios y productos derivados de los servicios de saneamiento, cuando se determine la inexistencia de condiciones de competencias en dichos mercados, en cuyo caso sería la regulación de acceso" (énfasis agregado).*

Para este propósito, se proponen modificar el artículo 68, "Alcances de la regulación económica"; y, el artículo 69, "Objetivos y principios para la regulación económica", del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Al respecto se encuentra que el marco normativo a modificar no comprende materias indelegables a la Comisión Permanente, dado que no versa sobre materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto, ni a la Ley de la Cuenta General de la República.

En materia de especificidad, a través de reunión conjunta con los equipos técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) llevada a cabo el 26 de enero de 2023, se coincidió en la necesidad de precisar en el marco legal vigente la competencia de la SUNASS sobre el análisis de las condiciones de competencia en los mercados de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento. Esto a fin de

[112] Informe Complementario SGP-PCM. p. 63-64.

que, mediante la regulación económica, se puedan generar incentivos para incrementar su comercialización cuando estos no sean prestados en condiciones de competencia, aplicando mejores reglas para su realización.

Para esta última finalidad, la SUNASS requiere que se precise, dentro del marco normativo señalado, su competencia para la adopción del tipo de regulación a ser aplicada según la problemática identificada en dichos mercados, que en este caso sería la regulación de acceso, así como las medidas idóneas para su aplicación. En tal sentido, a través del Informe Complementario la SUNASS señala que:

> *"Corresponde indicar que la regulación de acceso es una herramienta regulatoria usualmente aplicada en industrias de red reguladas (p.e. infraestructura de transporte de uso público, telecomunicaciones, servicios de saneamiento etc.), debido a que éstas se caracterizan por la existencia de una relación vertical entre segmentos de mercado y el control de una facilidad esencial brindada por una sola empresa (Estache A., Valletti T., 1999), características que se presentan en la comercialización de servicios y productos derivados de los servicios de saneamiento, pues existe una estructura de mercado vertical."*

En este sentido, se encuentra especificidad en la materia de delegación, en tanto la misma va dirigida a mejorar el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales domésticas, especialmente en su uso en actividades como industria, agricultura, forestación, generación de electricidad, mitigando de manera complementaria los efectos de la contaminación ambiental. Con la facultad solicitada la regulación de SUNASS ganará eficiencia en tanto se realicen los análisis adecuados de condiciones de competencia en los mercados de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento, así como la determinación del tipo de regulación a emplear, en caso sea necesario.

Finalmente, atención a lo indicado, **es viable otorgar la facultad legislativa solicitada, bajo los siguientes términos:**

> ***"Establecer de manera expresa la competencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento sobre la realización del análisis de condiciones de competencia para regular los mercados de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento; así como para determinar el tipo de regulación aplicable en los casos en que se advierta la no existencia de condiciones de competencia en dichos mercados."***

Las normas emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás,

concordantes del texto constitucional y la jurisprudencia que, al respecto, ha emitido el Tribunal Constitucional.

VI. COSTO-BENEFICIO

Tras el análisis presentado, se ha determinado otorgar parcialmente las facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de inversión pública, gestión económica, tributaria y modernización de la gestión del Estado, en ese sentido podemos indicar que:

Si bien en los últimos años se han registrado niveles récord de gasto en inversión pública acelerando el cierre de brechas[113], corresponde ahora desarrollar esfuerzos para que los proyectos de inversión cumplan con los objetivos de tiempo, costo, alcance, calidad e involucrados previamente definidos, es decir, mejorar la gestión de las inversiones para equiparar la cantidad con la calidad de ejecución.

Al respecto, se coincide con las conclusiones del estudio de *Gartner Industry Research*, en el sentido que "*las organizaciones que establezcan estándares para la gestión* (dirección) *de proyectos con una gobernanza adecuada experimentarán la mitad de los mayores sobrecostos, retrasos y cancelaciones que aquellas que no lo hagan*"[114].

En consecuencia, una manera de mejorar la gestión de las inversiones públicas es mediante la introducción de estándares de dirección de proyectos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), esto es, desarrollar un cuerpo de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que permitan establecer un modelo general de desarrollo de proyectos, predecible, escalable y con una adecuada gobernanza.

Actualmente, el SNPMGI no cuenta con estándares de dirección de proyectos. Así, no se tiene sistematizada la información relativa al desarrollo de las inversiones, particularmente de las experiencias exitosas, para su aplicación en la gestión de las fases del Ciclo del Inversión. Lo anterior, conlleva a su vez a que no se haya generado conocimiento en dicha materia que pueda ser transferido a las entidades del Estado.

Se aprecia entonces la urgente necesidad que el SNPMGI genere de manera progresiva y adaptativa su propio cuerpo de conocimientos en dirección de

---

[113] Así, por ejemplo, la ejecución de la inversión pública de enero a diciembre de 2022 alcanzó S/ 46,592 millones, una nueva cifra récord que supera en 20% al mismo periodo de 2021 (última marca histórica de S/ 38,785 millones).
[114] Citado en el documento "*Asesoría en Modelos de Oficina de Gerencia de Proyectos (PMO) para la Gestión de Programas de Infraestructura Pública en Perú*" de la Embajada británica en Lima.

proyectos y lo ponga a disposición de las entidades para su aplicación, contribuyendo así al cumplimiento de las metas de costos, tiempos, alcance y calidad de la inversión pública[115].

Lo señalado en el párrafo precedente es consistente con los resultados del Programa Multianual de Inversiones 2019-2021, entre los cuales, se observa que, más del 50% de los locales escolares y establecimientos de salud del primer nivel presentan inadecuada capacidad instalada, asimismo más del 50% de la infraestructura vial vecinal no está pavimentada, igual que el acceso a servicios de movilidad urbana. Similar situación presenta la red departamental, el acceso al servicio de drenaje pluvial, entre otros.

Cuadro N° 1: Indicadores de Brechas (PMI 2019-2021)

Indicador de brecha	Línea Base
EDUCACIÓN	**2018**
% de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada (2018)	89.73%
% de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada (2018)	94.92%
% de locales educativos con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada (2018)	89.87%
% de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada inadecuada (2018)	87.03%
% de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada inadecuada (2018)	91.64%
SALUD	**2018**
% de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	55.0%
% de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de atención (nuevos)	20.7%
% de hospitales con capacidad instalada inadecuada	78.9%
% de nuevos hospitales requeridos	56.8%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2017**
% de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública	6%

[115] Sobre el particular, diversos organismos internacionales especializados en la materia como el *Project Management Institute* o el *Association for Project Management* han creado sus estándares como el PMBOK o el PRINCE2, respectivamente, que funcionan como directrices, guías y buenas prácticas que permiten a las empresas y organizaciones controlar exitosamente las variables propias de sus proyectos.
Si bien dichos estándares internacionales se enfocan principalmente en industrias y sectores ajenos a la Administración Pública peruana, así como cuentan con una terminología, actores y ciclo de vida de proyectos distintos, pueden servir como referencia al SNPMGI para el objetivo propuesto por lo que se propone su adaptación.

Indicador de brecha	Línea Base
% de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas	11%
% de volumen de aguas residuales no tratadas	21%
%de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red o pileta públicas	28%
% de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	76%
PISTAS Y VEREDAS	**2018**
% de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas	52%
% de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial	98%
TRANSPORTE	
% de la Red Vial Nacional por Pavimentar (2018)	21%
% de la Red Vial Departamental por Pavimentar (2019)	82%
% de la Red Vial Vecinal por Pavimentar (2019)	50%

Fuente: MEF-DGPMI-PMI 2019-2021

La importancia que tiene la inversión de un proyecto de infraestructura sobre el crecimiento económico es generada por el efecto multiplicador de la demanda de las industrias de bienes y servicios. Asimismo, la ejecución de un proyecto publico genera una demanda de empleo temporal durante el tiempo de construcción del proyecto, y a su vez dinamiza el empleo en las industrias relacionadas a esta actividad económica.

En esa línea, de acuerdo con lo señalado en el PNIC *"La competitividad de un país depende, en gran medida, del acceso a la infraestructura y de la calidad de esta. Mejorar estos factores no solo incrementa la conectividad con los mercados domésticos e internacionales, sino también impulsa el desarrollo del capital humano del país que deviene en un crecimiento económico".*

Asimismo, el PNIC en el 2019 priorizo una cartera de 52 proyectos por un **monto total, de S/ 116,979 millones**[116]**,** estos proyectos cuentan con una visión sectorial y territorial, los cuales incluyen puertos, aeropuertos, metros, carreteras, bandas anchas, líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas, sistemas de agua y saneamiento, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.

Por su parte, el PNISC aprobado para el periodo 2022-2025 busca convertirse en una herramienta que permita impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad, contribuir al cierre de la brecha de infraestructura y brindar acceso a

[116] Información actualizada a julio 2022.

servicios públicos, mejorando la calidad de vida de las personas que utilizan diariamente la infraestructura pública. Sin embargo, además del énfasis en mejorar la competitividad y productividad del país, en esta oportunidad, los esfuerzos públicos se enfocan con especial atención en situar al ciudadano en el centro de las prioridades del Estado[117].

En ese sentido, el PNISC adopta un enfoque basado en el desarrollo de infraestructura sostenible, es decir, en proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados de manera que garanticen la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluida la resiliencia climática) e institucional durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Asimismo, el PNISC prioriza una cartera de setenta y dos proyectos (72) que cumplen con la evaluación de infraestructura sostenible, con un **monto de inversión de S/146,622 millones,** la cual incluye a los sectores de Transportes, Comunicaciones, Agua y Saneamiento, Hidrocarburos, Electricidad, Agricultura y Riego, Ambiente, Producción, Educación y Salud.

Bajo este contexto, se advierte la importancia que representa para la economía peruana el desarrollo de los proyectos priorizados en el PNISC, teniendo en cuenta que el monto de inversión por ejecutar de su cartera es de S/ 127,662 millones, lo cual representa el 15% del PBI[118].

VIII. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, recomiendan de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **APROBACIÓN** del Proyecto de Ley 3941/2022-PE, con el siguiente Texto Sustitutorio:

---

[117] El documento que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se denomina "Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", que se encuentra contenido en la Resolución A/RES/70/1, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible, realizada en Nueva York, en el año 2015.

[118] Según el BCRP, el PBI para el año 2021 es de *S/* 876,686 millones. Asimismo, el PNIC indica que realizar inversiones de aproximadamente 0,1% del PBI implicarla la generación de 12 a 13 mil puestos de trabajo.

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

Artículo 1.- Objeto de la Ley

Delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de noventa (90) días calendario en materia de impulso económico para la reactivación económica y modernización de la gestión del Estado, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos a que se hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 2.- Materias de la delegación de facultades legislativas

En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes materias:

2.1 En materia de impulso económico para la reactivación económica:

2.1.1 En materia de inversión pública:

a) Establecer disposiciones especiales hasta diciembre del 2024 para: i) autorizar disposiciones sobre licencias de habilitación urbana y edificación; ii) autorizar medidas relativas a la certificación ambiental e información para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública; iii) autorizar la ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM.
b) Autorizar la aprobación de metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de diciembre de 2024.
c) Autorizar el desarrollo de acciones para brindar acompañamiento especializado y permanente en gestión de inversiones con estándares internacionales de dirección de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
d) Modificar el Decreto Legislativo 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial — FIDT, con la finalidad que la Secretaría Técnica brinde asistencia

técnica a los gobiernos regionales y locales beneficiarios de los concursos en el marco del FIDT destinando hasta el 5% de los recursos asignados al FIDT para dicho fin, así como modificar la finalidad de los recursos de dicho Fondo.

e) Modificar el Decreto de Urgencia 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, a fin de habilitar a los gobiernos locales para que suscriban convenios con los PEIP para la ejecución de sus inversiones.
f) Modificar el artículo 8 de la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres naturales y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de flexibilizar los plazos dispuestos en la normativa vigente para la expropiación de bienes inmuebles y liberación de interferencias necesarias para la ejecución de intervenciones que se encuentren en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

2.1.2 En materia de gestión económica:

a) Establecer medidas especiales para facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 — 2025, aprobado mediante Decreto Supremo 242-2022-EF, y otros proyectos de inversión pública, privada y publico privada necesarios para promover la reactivación económica y el cierre de brechas en infraestructura.
b) Modificar el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, con la finalidad de optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para el desarrollo de proyectos.
c) Modificar el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, así como la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; con la finalidad de agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias e imposición de servidumbres para el desarrollo de proyectos de inversión pública, privada y público privada; a través del establecimiento de mejoras en el incentivo pagado para obtener la posesión anticipada de inmuebles, estableciendo disposiciones especiales para la contratación de servicios, consultorías y obras requeridos en el marco del citado Decreto Legislativo 1192 así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.

d) Establecer medidas para la implementación de actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura desarrollada en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en sectores sociales; incluyendo la identificación de los sectores y/o ejecutoras competentes que serán responsables de estas, modalidades de contratación, así como reglas y procesos aplicables.

Las medidas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente sección no deberán afectar el principio de transparencia, ni vulnerar el derecho de propiedad, ni el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, ni restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica.

2.1.3 En materia tributaria:

a) Modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF, sobre rentas por intereses presuntos.
b) Prorrogar la vigencia de las exoneraciones previstas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF, sobre exoneraciones al Impuesto la Renta.
c) Dictar medidas para implementar las exenciones y/o devoluciones y otros aspectos tributarios en el marco de la Copa Mundial Sub-17.
d) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 055-99-EF, con la finalidad de considerar como exportación la venta de metal realizada por productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyería destinada a la exportación de joyería.
e) Flexibilizar las condiciones para calificar como establecimientos cuyas adquisiciones dan derecho a la devolución del Impuesto General a las Ventas a favor de los turistas extranjeros.
f) Exonerar de impuestos la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

2.1.4 En materia de catastro fiscal: a fin de establecer las características y los usos del Catastro Fiscal, y definir la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valuación fiscal de los predios, y su disponibilidad para el uso de las municipalidades.

2.1.5 En materia de Tesoro Público: a fin de precisar el destino de los recursos del Tesoro Público provenientes de los procesos de privatización y concesiones que realice el Gobierno Nacional, como consecuencia de las

modificaciones de la Ley 31369, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos Regionales.

2.1.6 En materia de Contratación Pública:

a) Autorizar el uso del "fondo de garantía" como medio alternativo para garantizar los contratos; y, las modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obra, celebrados en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
b) Modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de regular los alcances y requisitos de la modalidad "Contratación de Estado a Estado".

2.2 En materia de modernización de la gestión del Estado:

a) Actualizar la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado respecto a: i) estrategia para modernización del Estado, instrumentos en uso y terminología organizacional; ii) establecer la responsabilidad de cumplimiento de la revisión periódica de las regulaciones emitidas por los entes rectores de sistemas administrativos; y, iii) la necesidad de opinión favorable del ente rector del Sistema de Modernización del Estado para tramitar excepciones de procedimientos normados de organización y funciones, y documentos de gestión.
b) Modificar la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo referente a los procedimientos administrativos estandarizados, los servicios prestados en exclusividad y los requisitos de ambos a fin de i) precisar que los servicios y sus requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva, ii) incluir una definición de estandarización; iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para la promoción, eliminación, simplificación y estandarización de trámites, así como para la determinación de las entidades involucradas y la posibilidad de que éstas aprueben disposiciones más favorables al administrado; iv) precisar el procedimiento para la ratificación de tasas o derechos de tramitación, así como la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, para establecer los criterios que regulan dicho procedimiento; y, v) regular los mecanismos para la publicidad del Texto Único de Procedimientos Administrativos.
c) Establecer el marco normativo para el fortalecimiento de la mejora de la calidad regulatoria aplicable a las propuestas normativas del Poder Ejecutivo.

d) Autorizar el financiamiento de medidas relacionadas con el emprendimiento de ciudadanos en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales de personas con discapacidad.
e) Modificar la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para: i) incorporar un proceso a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el registro y acreditación de Hogares de Refugio Temporal identificados; ii) optimizar sus mecanismos de rendición de cuentas sobre la materia; y, iii) derogar la normativa referida a refugios temporales que a la fecha ha perdido vigencia.
f) Autorizar el financiamiento de medidas relacionadas con la implementación de iniciativas de voluntariado dirigidas a poblaciones vulnerables en zonas de crisis humanitaria en regiones priorizadas.
g) Establecer el marco normativo que regule la Gestión Integral de Sustancias Químicas, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente.
h) Establecer: i) la condición de los miembros de los órganos colegiados de los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo; y, ii) la aplicación supletoria de la Ley 31419, "Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción", para los organismos técnicos especializados que no cuenten con normativa para la designación regulada de sus funcionarios.
i) Modificar la normativa relativa a la denominación y conformación de los tribunales administrativos de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, considerando las competencias y características de cada organismo regulador.
j) Actualizar el marco normativo referido al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común regulado por el Título III de la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliaria de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, a fin de adecuarlo a las nuevas necesidades de las viviendas multifamiliares y en general de las edificaciones.
k) Modificar la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, a fin de: i) establecer los criterios técnicos para la clasificación de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, y las medidas que garanticen su protección y sostenibilidad; ii) regular en base a los principios de proporcionalidad y razonabilidad los mecanismos de mitigación y compensación; así como, las restricciones a la propiedad de los inmuebles vinculados a los servicios públicos de salud, educación, transporte, vivienda y saneamiento, garantizando su protección y conservación; iii) regular la participación de entidades privadas, nacionales o extranjeras en la promoción, gestión, administración y protección del Patrimonio Cultural junto

al ente rector; iv) establecer los usos permitidos para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en armonía con su protección, conservación y puesta en valor; y, v) modificar la Ley 23523, Crean el Sistema Nacional de Archivos, a fin de regular el tratamiento y preservación de la documentación digital.

l) Establecer la normativa necesaria para que progresivamente las Áreas Técnicas Municipales (ATM) resuelvan, en segunda instancia administrativa, los reclamos entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales por la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.

m) Establecer de manera expresa la competencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento sobre la realización del análisis de condiciones de competencia para regular los mercados de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento; así como para determinar el tipo de regulación aplicable en los casos en que se advierta la no existencia de condiciones de competencia en dichos mercados.

Las normas emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás, concordantes del texto constitucional y la jurisprudencia que, al respecto, ha emitido el Tribunal Constitucional.

Salvo mejor parecer.
Dése cuenta.
Sala de la Comisión

Lima, 15 de febrero de 2023

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 17:05:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 11:59:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TORRES SALINAS Rosio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 20:30:36-0500

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 18:52:19-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 09:46:43-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 18:52:43-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZALES DELGADO Diana Carolina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 15:02:16-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 22:47:48-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO FIR 16655831 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 09:01:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 19:06:41-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORTEZ AGUIRRE Isabel FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/02/2023 20:48:25-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ANDERSON RAMIREZ Carlos Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 21:01:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 09:39:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 09:19:16-0500

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CASTILLO RIVAS Eduardo Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 14:51:36-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OBANDO MORGAN Auristela Ana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 12:45:50-0500

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3941/2022-PE que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado"

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HUAMAN CORONADO Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 16:37:58-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 09:58:17-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 15:12:16-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Maria Del Pilar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 15:32:14-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 18:46:38-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: YARROW LUMBRERAS Norma Martina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 15:51:03-0500

Firmado digitalmente por: RUIZ RODRIGUEZ Magaly Rosmery FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 15:22:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RUIZ RODRIGUEZ Magaly Rosmery FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 15:22:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAZO NUNURA JOSE BERNARDO FIR 02743658 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 18:15:50-0500